

NEGOCIOS *de* FAMILIA

Biografía no autorizada de
ENRIQUE PEÑA NIETO y
el GRUPO ATLACOMULCO



Francisco Cruz / Jorge Toribio Montiel

temas de hoy.

NEGOCIOS
de **FAMILIA**

NEGOCIOS *de* FAMILIA

Francisco Cruz / Jorge Toribio Montiel

temas de hoy.

Diseño de portada: Miguel Ángel Chávez Villalpando y
Alma Julieta Núñez Cruz

© 2009, Francisco Cruz Jiménez
© 2009, Jorge Toribio Cruz Montiel

Derechos reservados

© 2009, Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V.
Bajo el sello editorial TEMAS DE HOY_{MR}
Avenida Presidente Masarik núm. 111, 2o. piso
Colonia Chapultepec Morales
C.P. 11570 México, D.F.
www.editorialplaneta.com.mx

Primera edición: junio de 2009
Cuarta reimpresión: noviembre de 2009
ISBN: 978-607-07-0172-6

El contenido de este libro es responsabilidad exclusiva de los **autores**
y no refleja necesariamente la opinión de los **editores**.

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada,
puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna
ni por ningún medio, sin permiso previo del editor.

Impreso en los talleres de Litográfica Cozuga, S.A. de C.V.
Av. Tlatilco núm. 78, colonia Tlatilco, México, D.F.
Impreso y hecho en México -- *Printed and made in Mexico*

Índice

	INTRODUCCIÓN	II
<i>Capítulo I</i>	FUNDACIÓN DEL IMPERIO	15
<i>Capítulo II</i>	LA FUERZA DE LA COSTUMBRE	46
<i>Capítulo III</i>	SECRETO DE ESTADO	71
<i>Capítulo IV</i>	ADIÓS A LOS PINOS	100
<i>Capítulo V</i>	HISTORIA DE UNA CONSPIRACIÓN	120
<i>Capítulo VI</i>	EL MANTO DEL OPUS DEI	145
<i>Capítulo VII</i>	ALIANZA PECAMINOSA	172
<i>Capítulo VIII</i>	LA IMPOSICIÓN	183
<i>Capítulo IX</i>	ASALTO EN ATENCO	205
<i>Capítulo X</i>	LAS CARAS OCULTAS DE HANK	232
<i>Capítulo XI</i>	LAZOS DE FAMILIA	250
<i>Capítulo XII</i>	LA VIDA DESPUÉS DE MÓNICA	269
	BIBLIOGRAFÍA	292
	AGRADECIMIENTOS	295

A manera de dedicatoria

A Carolina Pavón, Alejandra Bordon, Ana Ávila y Mauricio Mejía.

A Jorge Toribio, mi coautor, por su eterna paciencia, sus archivos de *Grupo Atlacomulco: Revelaciones 1915-2006*, la correspondencia personal de su abuelo Maximino Montiel Olmos, el buen humor, los óleos sacros de José Vicente Montiel Rodríguez, la presentación de otros Montiel, los viajes a El Oro y Atlacomulco, y los días enteros de charlas bañadas de anécdotas sobre sus primos, los hijos de Arturo Montiel Rojas, y todo lo demás.

A Diana Margarita, Yazmín Alicia y Omar.

A Sarita Cruz González, la razón de ser de Jorge Toribio.

A mi hermano Fernando; lo mismo que a José Luis Herrera, José Luis Cardona y Marco Antonio Durán, mis otros hermanos.

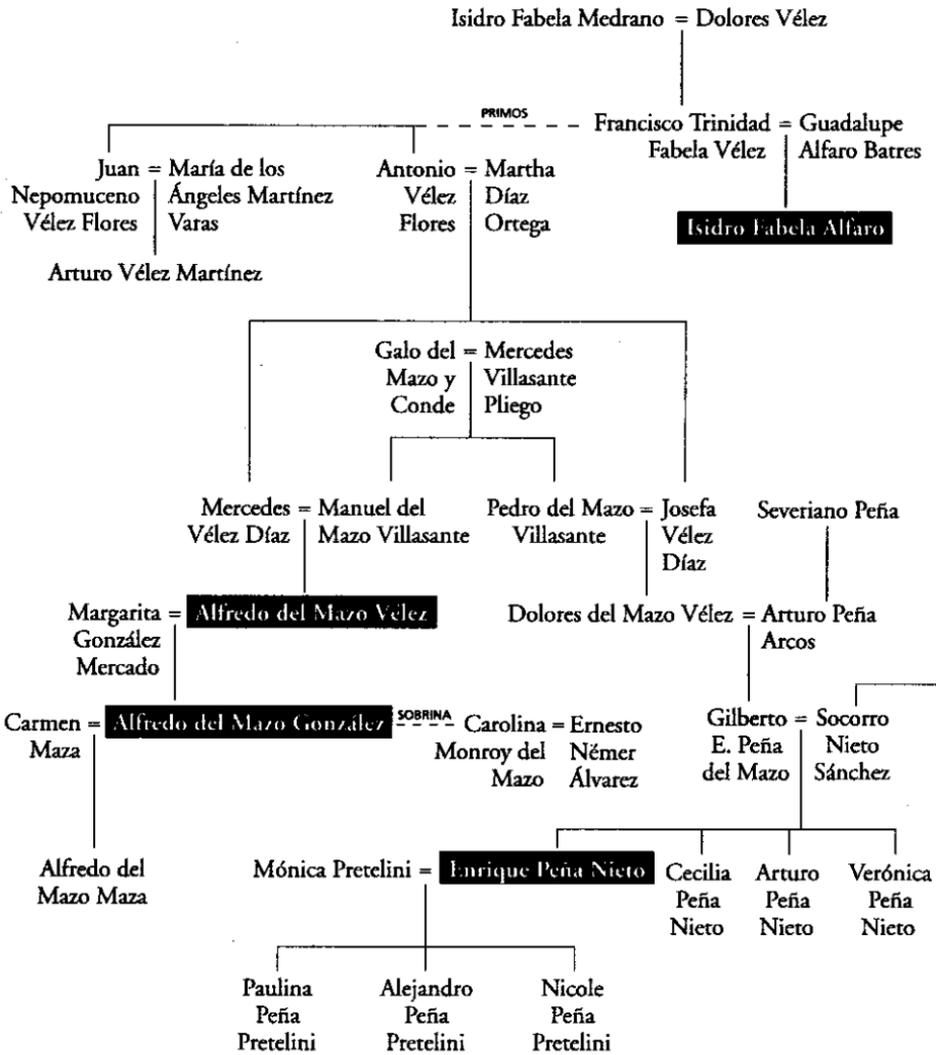
Sobre todo, a Beatriz Díaz-Corona y a Miguel Castillo, por la amistad de siempre y porque les debo este libro desde *El Cártel de Juárez*.

Para Haydee Noemí, dondequiera que esté, con mi gratitud eterna.

FRANCISCO CRUZ JIMÉNEZ

Junio de 2009

LAZOS DE



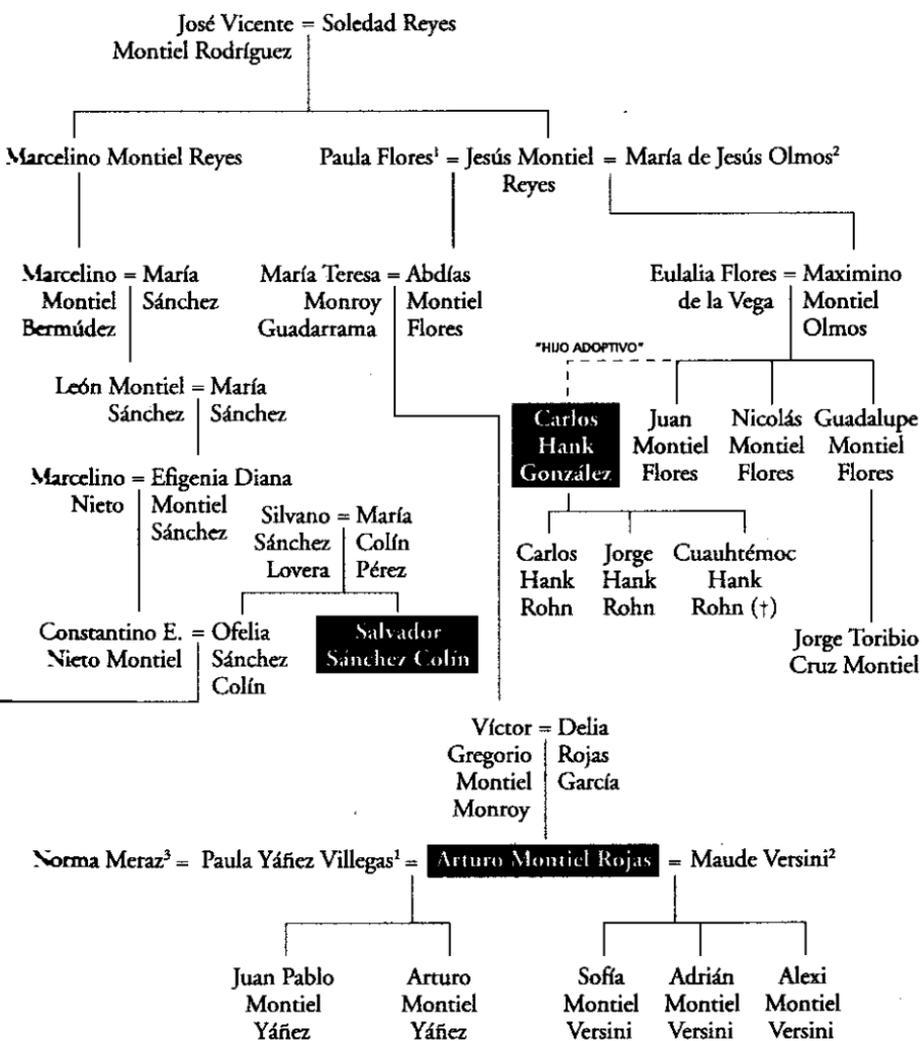
GOBERNADORES DE ATLACOMULCO

**Isidro Fabela
Alfaro**
(1942-1945)

**Alfredo del Mazo
Vélez**
(1945-1951)

**Salvador Sánchez
Colín**
(1951-1957)

FAMILIA



"HIJO ADOPTIVO"

Carlos Hank González
(1969-1975)

Alfredo del Mazo González
(1981-1986)

Arturo Montiel Rojas
(1999-2005)

Enrique Peña Nieto
(2005-)

Introducción

LA RADIANTE IMAGEN de Peña Nieto se exhibe sin cesar por todos los medios posibles y las encuestas de opinión lo señalan como eventual candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012. El mexiquense aspira a erigirse en sucesor natural del panista Felipe Calderón y llegar a gobernar el país con las doctrinas cristianas del Opus Dei.

Educado con esmero en el seno de un hogar muy católico y conservador en Atlacomulco, militante priista de cuarenta y dos años de edad, uno de cuatro hermanos, con sus 1.72 metros de estatura, sesenta y nueve kilogramos de peso y conocido como “el más guapo de los políticos” de México, Enrique Peña Nieto es *dueño* de la mayor plaza política del país. El Estado de México cuenta con ocho millones de electores, un presupuesto sexenal cercano a setecientos mil millones de pesos y un producto interno bruto (PIB) anual de setenta mil millones de dólares, una economía superior a la de algunos países centroamericanos.

Cuando Peña Nieto termine su periodo como gobernador, el 15 de septiembre de 2011, una misma familia de Atlacomulco habrá controlado y manejado por seis décadas la política y los recursos del Estado de México. Los apellidos Peña, Montiel, Nieto, Del Mazo, Fabela, González, Vélez, Sánchez y Colín han dado al estado seis gobernadores; siete, si se toma en cuenta al *hijo adoptivo* Carlos Hank González.

El actual gobernador del Estado de México comparte con cinco familiares directos y antecesores en el cargo —en diversas épocas desde 1942— no sólo los lazos de sangre sino una vieja predicción.

Como salida de una fábula infantil, la anécdota cuenta que en

1940 doña Francisca Castro Montiel, vidente del pueblo, reunió a los notables del municipio para profetizarles con voz de arcano mayor: “Seis gobernadores saldrán de este pueblo. Y de este grupo compacto uno llegará a la Presidencia de la República”.

Aquella mujer de palabra fácil asombró al grupo al describir con minuciosidad la abrupta llegada de un atlacomulquense a la gubernatura. Los convenció de que, transcurridos los años, formarían una dinastía, les forjó una identidad colectiva. La predicción de aquella vidente anima desde entonces las pasiones y los engaños de esa *familia*.

Por eso resultó natural el esfuerzo de Arturo Montiel para buscar la candidatura presidencial por el PRI en 2006, hasta que la información sobre actos de corrupción familiar y enriquecimiento ilícito lo obligaron a esconder la cara y renunciar a sus pretensiones.

Muchos años antes, también Alfredo del Mazo Vélez se afanó en el mismo objetivo, desde su despacho en la Secretaría de Recursos Hidráulicos se sentía depositario de la profecía y, desde ahí, alistaba su campaña presidencial. Estaba convencido y confiaba en su amigo el presidente Adolfo López Mateos. A sus amistades les transmitía esa certidumbre. No contó con que López Mateos consultaría al viejo diplomático carrancista Isidro Fabela Alfaro, que le aconsejaría buscar a un político con preparación universitaria, capacitado para enfrentar y entender la problemática del país. Fabela descartaba así a Del Mazo Vélez y le cobraba sus deslealtades por haberse negado a impulsar la candidatura a gobernador del joven Carlos Hank González y, en contraste, apoyar ambiciones de viejos enemigos fabelistas como el zapatista Gustavo Baz Prada en 1957 y Juan Fernández Albarrán en 1963. En la línea sucesoria del presidente López Mateos se abrió paso al poblano Gustavo Díaz Ordaz quien, a la muerte de Fabela en 1964, se encargaría del apoyo efectivo para llevar a Hank a la gubernatura en septiembre de 1969.

La familia tuvo que esperar veintidós años para recuperar la esperanza de cumplir la predicción. Alfredo del Mazo González, hijo de aquel Del Mazo Vélez, fue impuesto en la gubernatura en 1981 a pesar de la oposición de su predecesor, Jorge Jiménez Cantú, que no lo consideraba un político “de pantalones largos”; además, Jiménez Can-

tú —junto con Hank— ya le tenía prometido el puesto a Juan Monroy Pérez, su secretario general de Gobierno. Pero la decisión estaba tomada y el presidente José López Portillo, Miguel de la Madrid, secretario de Programación y Presupuesto, y Fidel Velázquez Sánchez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), no se echarían para atrás.

Del Mazo González esperaba hacerse de la candidatura presidencial en 1987, pero De la Madrid tenía decidida la sucesión a favor de Carlos Salinas de Gortari. Se deshizo con facilidad de Del Mazo (después de utilizarlo para debilitar a Manuel Bartlett Díaz) y de Jesús Silva Herzog. Del Mazo intentó conspirar contra la decisión e intentando un madrugete envió la cargada priista a las puertas de su rival Sergio García Ramírez. Una inesperada declaración lo haría pasar como un fantasma de lo que quiso ser: “Creo que es un acierto el que nuestro partido se haya fijado en las múltiples cualidades de un servidor público limpio y brillante, talentoso, como es el caso del doctor Sergio García Ramírez. Estoy convencido —dijo en una amplia declaración a la prensa— de que es una magnífica decisión de nuestro partido”, pero el doctor, menos candoroso, no se prestó al juego ni escuchó el canto adormecedor de las sirenas: De la Madrid hizo pública la candidatura de Carlos Salinas esa noche, el 4 de octubre de 1987.

Para cobrarse el agravio, llegando a Palacio Nacional Salinas lo borró del mapa. Lo desterró como embajador a Bélgica. En el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León lo rescataron a medias, lo nombraron director del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pero nunca regresó a una secretaría de Estado, ni siquiera a una subsecretaría. En 1997 le dieron otra oportunidad de recuperar el orgullo perdido al designarlo candidato del PRI a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Perdió las elecciones de manera bochornosa frente a Cuauhtémoc Cárdenas y terminó refugiado en el Estado de México.

Desde entonces todo mundo conoce, sin ambages, la cuita Del Mazo. *Está salado*. Es *El Mala Suerte* y quien lo toca es víctima de su *mal-dición* personal. Si un político mexiquense cae en desgracia, si es derrotado o castigado por el partido, se afirma, con certeza, que hizo un *Del*

Mazo. En 1999 Arturo Montiel —paisano y amigo de la infancia—, convertido en gobernador, lo rescató y lo nombró presidente de los mantos acuíferos de la entidad, un cargo *honorífico*, pero bien remunerado y con buenas perspectivas para desarrollos inmobiliarios. A la mitad de su administración, Montiel le concedió el regalo de una diputación federal, pero, por si las cábalas, las dudas y las intrigas, ordenó inscribirlo en las listas de representación proporcional. La mala estrella se apagó todavía más: Del Mazo abandonó su curul porque no lo tomaban en cuenta. Otra vez se refugió en la entidad.

Hoy, Del Mazo González goza de toda la confianza de su sobrino Enrique Peña, quien lo designó cabeza del organismo público para el desarrollo de la infraestructura mexiquense.

Por disparatado y absurdo que parezca, en cada sexenio ninguno ha resistido el impulso de convertirse en el gobernador de la profecía. Y eso no excluye a Enrique Peña Nieto. Su llegada a la gubernatura del Estado de México está lejos de ser una obra del azar o una maniobra caprichosa de su antecesor Arturo Montiel. La figura de Peña tiene antecedentes cruciales en la búsqueda familiar de la Presidencia de la República.

Desde 1942, con la imposición como gobernador del atlatomulquense Isidro Fabela, cambió para siempre el destino del Estado de México, consolidó en el ejercicio del poder a los notables de un opaco pueblo, quienes se repartían cargos municipales desde finales del siglo XIX, y arraigó lo que más tarde sería conocido como el Grupo Atlacomulco, que ha controlado, a pesar de algunos intervalos, el destino de la entidad más poblada y rica de México.

Este libro desentraña el ascenso de Peña Nieto al poder y para ello es necesario revisar pasajes sombríos de la vida pública de personajes como Isidro Fabela y Carlos Hank o Emilio Chuayffet, quien se encargó de tejer los hilos finos para imponer a Montiel como gobernador. Al margen de los desaseos electorales, históricos y la permanente guerra sucia para aplastar a sus rivales, además de las intermitentes acusaciones públicas de desvío de recursos, el ascenso de Peña fue labrado escrupulosamente y debe entenderse en el contexto de las realidades más profundas y oscuras de la historia mexiquense.

Fundación del imperio

HOMBRE CULTO y de gustos exquisitos, Isidro Fabela fue el padre de la diplomacia moderna mexicana. Respetado por su conocido humanismo y honestidad, manchó con toques de ilegalidad y corrupción su llegada al gobierno del Estado de México en marzo de 1942.

A partir de entonces surgió en esta entidad una época de odios elegantes, enquistando el nepotismo y el compadrazgo en el PRI. Llegaron el recuento amañado de votos, manipulación de listas de electores, votación de muertos, invención de actas, relleno de urnas, reparto de prebendas, compra de legisladores, de periodistas, sumisión al poder y políticos priistas millonarios. Fabela abrió las puertas mexiquenses a la simulación democrática, afianzó puentes de la imposición familiar y transformó la entidad en una corte real moderna.

A pesar de su intachable hoja diplomática, de su sensibilidad estética, por muy caballero que haya sido y por más políticos bandoleros que haya llegado a combatir, no dejan de resaltar las prácticas de corrupción del tío *Chilo* Fabela, como lo llamaban los niños de los años cuarenta en las dos larguísimas, torcidas y terrosas calles de Atlacomulco.

Su inicio en la vida política del Estado de México comenzó el 13 de marzo de 1942, cuando recibió a un enviado del presidente Manuel Ávila Camacho en su casa de El Risco, en la Plaza de San Jacinto de San Ángel, en el Distrito Federal. El mensajero le participó una importante solicitud de su amigo, el "caballeroso" jefe del Poder Ejecutivo; la petición estaba relacionada con los trágicos eventos ocurridos el 5 de marzo en el Centro Charro de Toluca.

Ese día, el gobernador del Estado de México, Alfredo Zárate Albarrán, había sido herido por ocho balas —aunque hay versiones de siete (pero de tres diferentes calibres), otra de cinco y una de tres— y trasladado al hospital.

En las declaraciones médicas del día siguiente circuló la versión de cinco heridas de bala de una pistola calibre .45. La más grave lesionó los intestinos y un riñón. Las cuatro restantes: una en el antebrazo izquierdo, otra en la mano —de ese mismo lado— y dos cerca de las ingles. El gobernador finalmente murió tres días después.

Las primeras voces hablaban de que el trágico destino del gobernador Zárate Albarrán, de cuarenta años de edad, había sido en represalia por rebelde o traidor: había tenido la osadía de enviarle una carta pública y abierta al presidente Ávila Camacho para negar sus ambiciones políticas federales, cuando en realidad controlaba a un grupo de gobernadores.

Zárate Albarrán se había unido a otros mandatarios estatales y había dado nueva vida a una organización nacional de gobernadores —primer antecedente real de la actual Confederación Nacional de Gobernadores (Conago)— en la que fungía como vicepresidente. Con una oficina establecida en la Ciudad de México, el grupo de gobernadores había nacido en 1938 para ofrecer apoyo efectivo al presidente Lázaro Cárdenas del Río en los momentos más oscuros y difíciles por las presiones de Estados Unidos y Gran Bretaña derivadas de la nacionalización de la industria petrolera. Luego, el organismo se prolongó tras la llegada de Manuel Ávila Camacho en 1940 y se consolidó cuando éste dirigió las acciones de su gobierno hacia la extrema derecha hasta enfrentarse con los trabajadores petroleros y ferrocarrileros.

Ávila Camacho tuvo razones para sentirse ofendido y traicionado después de que él mismo había palomeado el nombre de Zárate Albarrán (en aquel entonces senador y secretario de Estadística del PNR) para convertirlo en gobernador y permitir a su Grupo Toluca mantener el poder de la entidad como lo hacía desde 1921.

Pero desde los pasillos gubernamentales se dio paso a otra versión, a la de una lucha personal abierta y de traición fraternal entre políticos del “Viejo Oeste”; el magnicidio se atribuyó a una banda de

tahúres temerarios, arrojados por las altas esferas de la política, así como a una escaramuza amorosa por doña Herlinda Barbabosa, la joven hacendada que enfrentó a su esposo Zárate Albarrán con el diputado local Fernando Ortiz Rubio.

Calumniosa o no, aquella versión de los políticos incivilizados sobrevivió al tiempo mientras en el despacho principal de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Maximino, el hermano mayor del presidente y brazo ejecutor, soñaba y trabajaba para imponer su derecho sucesorio presidencial en 1946.

CRÓNICA DE UN CRIMEN

Cincuenta y dos años más tarde y basado en testimonios de quienes se encontraban en el lugar del crimen, el político y periodista mexiquense Edmundo Jardón Arzate —autor de *De la Ciudadela a Tlatelolco* y en coautoría con Arnaldo Córdoba de *Las tendencias de la Constitución de 1916-1917*— levantaría en catorce páginas parte de ese drama en *La Hoja Murmurante*, de la editorial La Tinta de Alcatraz:

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México extendió una invitación para ofrecer un banquete a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El convite contó con la aprobación entusiasta del gobernador Zárate Albarrán, deseoso de acabar con la idea —compartida por algunos empresarios e intelectuales de Toluca y uno que otro destacado político de su partido— de que era un cacique rodeado de caciques.

Era cierto que él y varios de los miembros de su grupo habían conseguido salir de la pobreza, pero no eran realmente ricos. Tenían modestas casas y algunas propiedades en tierras de cultivo o en pequeños negocios, además de los ingresos que percibían como funcionarios. Les decían caciques porque a lo largo de los años veinte y treinta encabezaron la lucha por el reparto de las tierras, por la reforma agraria y la creación de ejidos en los alrededores de los pueblos donde habían nacido; algunos llegaron a presidentes municipales, otros a diputados locales o federales, siguiendo los pasos de los her-

manos Abundio, de Filiberto Gómez [Díaz], y luego de Wenceslao Labra, quienes llegaron a ser gobernadores, como lo era ahora Alfredo Zárate Albarrán.

Era un grupo unido y combativo que no se arredraba, si era necesario, ante la eliminación violenta de sus adversarios, aunque, en verdad, eran exageradas las versiones que corrían al respecto.

Algunas diferencias tenían con el gobierno federal presidido por el general Manuel Ávila Camacho, pero se mantenían soterradas. Entre ellas, por ejemplo, las insinuaciones para dejar de impulsar la reforma agraria, o la política de "Unidad Nacional" que al grupo le despertaba resquemores porque ninguna confianza sentía en andar del brazo y por la calle con los adversarios de la Revolución, así fuera en aras de la lucha contra el nazi-fascismo.

Y el 5 de marzo de 1942 estaban todos allí, en el Centro Charro de la ciudad de Toluca, convocados por su jefe el señor gobernador Alfredo Zárate Albarrán. Contra su costumbre y por instrucciones del señor gobernador, ninguno iba armado. Las .38 y las .45 se habían quedado en casa, se sentían incómodos, intranquilos, algo les faltaba. Allí estaban los temibles Mozo, de Tlalnepantla; Mancilla, el de Zumpango; Choperena, el de Chalco; Cardoso, el de Ixtlahuaca; Rojas, el de El Oro; Nava, el de Valle de Bravo; Jaramillo, el de Zacualpan; Bustamante, el de Sultepec; Estrada, el de Mexicaltzingo; Hernández Mota, el de Tenancingo y, desde luego, el señor gobernador Zárate Albarrán, el de Tejupilco, distribuidos en las mesas y alternando con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con los senadores, con los diputados, con los presidentes municipales y con los funcionarios del gobierno de la entidad.

Antes de servir la comida, empezaron a beber. Unos cerveza, otros mezcal, tequila o aguardiente de caña del sur del estado; o los licores de fruta de Tenango del Valle o los más afamados de Tenancingo. Tampoco faltaba el coñac. Y, por supuesto, el pulque blanco y los curados de fruta.

Se siguió bebiendo entre platillo y platillo y después de los postres, pero como si nada, porque casi todos eran de carrera larga. En

tanto, la orquesta de los hermanos Ávila amenizaba el ambiente con melodías como *La barca de oro*, la favorita de Zárate Albarrán.

Cuando ya los meseros se ocupaban de retirar las primeras botellas vacías, de colocar sobre las mesas vasos y copas limpias llevándose los sucios, y atendiendo nuevos pedidos de una u otra bebida, en nombre del señor gobernador habló el diputado por Tlalnepantla, Juan N. García, orador elocuente y culto, para mostrar a los invitados que quienes gobernaban y representaban al Estado de México no eran lo que se pensaba y se decía de ellos.

Después del discurso, poco a poco los ministros de la Suprema Corte se fueron despidiendo y a eso de las nueve de la noche ya no quedaba ninguno. Todos habían regresado a la Ciudad de México y en el amplio salón para banquetes del Centro Charro quedaron algunos magistrados del Tribunal Superior y todos los hombres del señor gobernador.

Zárate Albarrán estaba satisfecho. De pie, según era su costumbre cuando bebía, recargado el brazo izquierdo sobre el mostrador de la cantina situada al fondo del espacioso salón, con el "caballo" de tequila en la mano derecha, escuchaba los comentarios de quienes estaban cerca de él o aceptaba los brindis que le proponían.

Cerca de la medianoche el cansancio y lo mucho bebido hicieron que la charla se dispersara y que por momentos decayera. Que se formaran pequeños grupos en donde salían de vez en cuando estrepitosas carcajadas provocadas quién sabe por qué ocurrencia o qué chiste, espantando las ganas de dormir que ya sentían algunos. O de no dormir de otros.

A esa hora la letra y la música de *La barca de oro* como que sacaba hasta lo último de la melancolía de cada uno: "Yo ya me voy al puerto donde se halla / la barca de oro, que debe conducirme".

Sólo Juan N. García permanecía al lado de Zárate Albarrán.

Bebían pausadamente, saboreaban botanas, como para alargar su aguante, y hablaban en voz baja, fuera de la fatiga o porque no querían que lo que se estaba diciendo lo escucharan los demás.

Repentina, inesperada, enérgica, la voz de Zárate Albarrán retumbó en todo el salón:

—¡No me estés chingando!

Esas palabras sonaron como chasquido de látigo que fue de un lado a otro imponiendo un sensible silencio.

Todos volvieron la vista hacia la cantina, y quienes estaban sentados se levantaron bruscamente, como asustados. Los que estaban de pie se quedaron inmóviles por algunos segundos, desconcertados.

Después, sin comprender lo que ocurría, todos se acercaron hasta donde se encontraban el señor gobernador y el diputado Juan N. García. Algunos, sobreponiéndose a la sorpresa, preguntaron qué pasaba, sin dirigirse específicamente ni a Zárate ni a García. El diputado guardó silencio y el gobernador, por más que en su rostro se denotaba todavía el enojo, respondió tranquilo:

—Nada, cosas de Juanito —y, en seguida, volviéndose al cantinero, agregó—: ya no le sirvas, porque se me puede emborrachar.

El jefe de Tránsito, Fernando Ortiz Rubio, tomó del brazo a García y se lo llevó a la mesa donde antes había estado bebiendo y platicando con otros de sus compañeros.

Nadie más se aproximó a ellos y tres o cuatro se quedaron con el señor gobernador, entre ellos su joven secretario particular, Carlos Mercado [Tovar], quien, al parecer, era el único que se mantenía completamente sobrio. Los demás volvieron a los sitios que ocupaban antes del latigazo y de vez en cuando volteaban a mirar a García y al jefe de Tránsito, que hablaban quedamente.

El distanciamiento provocado por el grito de Zárate Albarrán se disipó poco a poco y como que todos agarraron su "segundo aire", porque los meseros eran requeridos con tanta frecuencia como si aquello apenas comenzara.

A eso de las dos de la madrugada, Juan N. García dejó de platicar con el jefe de Tránsito y se dirigió nuevamente hacia Zárate Albarrán, que permanecía de pie, recargado en el mostrador de la cantina. Los que estaban cerca se alejaron al mismo tiempo como si alguien les hubiera ordenado; como si hubieran pensado lo mismo: que el diputado iba a disculparse con el señor gobernador.

—¿Ya se te bajó? —preguntó Zárate Albarrán.

Y sin esperar respuesta ordenó al cantinero:

—Sírvanle un coñac al diputado.

Los demás los vieron a brazo cruzado y se relajaron sintiendo que, en efecto, allí no había pasado nada grave.

Se reanimaron.

Durante cerca de media hora, el señor gobernador y el diputado volvieron a conversar en voz baja sin que nadie observara ningún indicio de contrariedad ni en los tonos de las voces ni con las manos. Pero ahora, tan sorpresivamente como la primera vez, retumbó el grito del señor gobernador:

—¡Ya te dije que no me estés chingando! —acompañado de un gran golpe que dio de lleno en el rostro de Juan N. García.

Zárate Albarrán era un hombre alto y corpulento, y Juan N. García era un hombre bajito de estatura.

El impacto, la fuerza del golpe, lo inesperado del mismo, hizo perder el equilibrio al diputado, que trastabilló dos o tres metros hasta que rodó por el suelo inconsciente. Sangrando de nariz y boca.

Como en la primera ocasión, todos rodearon al señor gobernador, mientras que el jefe de cantina, llevando hielo en una bandeja de vidrio, se arrodilló junto a Juan N. García tratando de hacerlo recuperar el sentido y de contener la hemorragia.

—Qué carajos te ha dicho —preguntó alguien.

—Nada —respondió Zárate Albarrán—. Sáquenlo de aquí y que lo lleven a su casa.

El jefe de Tránsito [Ortiz Rubio] se abrió paso y quedó frente a Zárate Albarrán, apenas a unos dos metros de distancia. Nadie, por la excitación de lo ocurrido, se percató de que ya llevaba la pistola en la mano derecha. Nadie, excepto el mismo Zárate Albarrán, que, sin perder el aplomo, dijo:

—No vayas a hacer una pendejada.

El jefe de Tránsito apenas si levantó el arma a la altura de su cintura y disparó en cuatro ocasiones.

Todo fue tan inesperado, que ninguno atinó a moverse, salvo Zárate Albarrán, que trató de avanzar para golpear al jefe de Tránsito. Otros tres disparos lo detuvieron en seco.

Las balas habían penetrado en la región abdominal y la sangre bro-

taba a borbotones escurriendo por las piernas del señor gobernador para extenderse en hilitos de sangre sobre todo el piso.

El jefe de Tránsito retrocedió sin volver la espalda, con la pistola lista para detener a quien tratara de impedir que llegara a la puerta de salida del salón. Nadie hizo el intento, quizá no por miedo, sino porque todos estaban pasmados, anonadados ante lo insólito, ante lo que ninguno imaginó que pudiera ocurrir.

Las siete balas no fueron suficientes para derribar a Zárate Albarrán. Se recargó en la barra e inclinó la cabeza mirando la sangre que se le escapaba del abdomen y que ya hacía un charco en el piso.

Sin palabra alguna, Mozo y Bustamante le ayudaron a sentarse en una silla, mientras el secretario particular llamaba por teléfono al hospital y Juan N. García, ya recuperado, hacía lo propio dando indicaciones para que se cerraran las salidas por carretera, a fin de impedir que el agresor pudiera salir de la ciudad de Toluca.

En pocos minutos llegaron las ambulancias al Centro Charro y el herido fue trasladado al hospital. Allí, el doctor Mondragón, habilísimo cirujano, extrajo las balas, pero no pudo suturar todas las perforaciones en el estómago y en los intestinos. Al amanecer llegó de la Ciudad de México el doctor Gustavo Baz Prada. Examinó al herido y opinó que nada más de lo que se había hecho se podía hacer.

NADIE VIO NADA

Las crónicas de *Excélsior* y *El Universal*, además de la versión contada por el maestro Jardón, señalan que aquella noche del jueves 5 de marzo de 1942 (porque la agresión fue reportada entre las nueve y media y las diez y media de la noche) el ingeniero Fernando Ortiz Rubio —presidente de la Gran Comisión de la XXXV Legislatura local y jefe de Tránsito de Toluca, a quien la mayoría de los periodistas y escritores atribuye un parentesco cercano (de hijo a sobrino) con el ex presidente Pascual Ortiz Rubio, pero jamás probado ni reconocido— salió armado de la nada, sin una provocación, para herir de gravedad a Zárate.

Lo hizo a un par de metros, de frente, pero en forma artera, porque el gobernador estaba desarmado. Le descargó la recámara completa, siete u ocho balazos, casi al término del convivio para agasajar al cuerpo entero de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Territorios Federales.

El caso por homicidio fue asignado al Juzgado Primero de lo Penal a cargo de Enrique V. Garrido, amigo íntimo de Zárate Albarrán.

El crimen causó espanto como forma de intimidación y cambiaría la historia mexicana además de imponer nuevos ritos de sumisión en los casi setenta años siguientes. Su primera secuela ocurrió en la Ciudad de México. Los ministros de la Suprema Corte confrontaron el potencial del escándalo y se resguardaron de miradas indiscretas. A las once de la mañana del 6 de marzo, sumisos, acataron órdenes superiores para evitar cruzamiento de información: cancelaron todas sus audiencias ordinarias y convocaron a una asamblea plenaria, de carácter extraordinario y secreto, con visos conspirativos.

Lo que hubieran imaginado de los acontecimientos se quedaba corto y esperaban lo peor, dada la gravedad del asunto. ¿Qué trataron? Nunca nadie lo supo, pero desde la Suprema Corte se hizo circular la versión de que ninguno de ellos había acompañado a Zárate Albarrán al fatídico banquete. Éste y otros episodios generaron suspicacia sobre los ministros, su credibilidad e integridad moral, ya de por sí maltrechas, quedaron aún más percutidas, se trataba de una corte entregada a la Presidencia de la República.

Los ministros Antonio Islas Bravo, Hilario Medina, Fernando de la Fuente y Alfonso Francisco Ramírez intentaron lavar sus nombres. "Todos los políticos de la rama judicial escurren el bulto para no hundirse en el desprestigio como togados. Con que resulta que magistrados fantasma son los que aparecen ahora en una orgiástica cuchipanda que remató en un crimen, pero no hay mejor detector de mentiras y de verdades que el tiempo", escribió un reportero de *Excélsior* en una nota publicada el sábado 7 de marzo.

El crimen también cambió el aspecto triste y burocrático de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia. Como sus pares de la

Suprema Corte, ante la amenaza y en asambleas confidenciales, alcanzaron acuerdos para desligarse del agasajo sangriento y de cualquier relación con el vicepresidente del bloque de gobernadores.

Mientras la vida de Zárate pendía de un delgadísimo hilo, en aquellos encuentros privados se dio forma a la versión de que su ataque había sido obra del alcohol y de políticos. Desmemoriados, muchos "olvidaron" que el 5 de marzo asistieron al Centro Charro unas ochenta personas: diputados locales y federales, senadores, ministros, magistrados y funcionarios estatales, además de la víctima que los agasajaba y buscaba un acercamiento con ellos. Se dijo que nadie vio directamente la agresión, que todos habían abandonado el lugar o que, de plano, nunca estuvieron allí. Tampoco nadie leyó ni por curiosidad la carta que el día 4 la víctima había enviado al presidente y que se publicó en periódicos de la Ciudad de México.

El diputado Ortiz Rubio se declaró inocente y sostuvo su versión inicial de que se enteró del crimen cuando Antonio Mancilla soltó un grito estremecedor en medio de la noche: "¡Ya mataron a mi tío!" Después se oyeron voces desesperadas, hubo pánico y Ortiz salió del lugar para perseguir, en su flamante Packard negro, acompañado por su ayudante y chofer, el teniente de Tránsito Vicente Navarro Mena, al invisible pistolero homicida. Armado con una ametralladora Thompson, una escuadra calibre .45 y otra pistola reglamentaria, Ortiz Rubio se enfiló hacia la carretera México-Toluca, donde fue detenido poco antes de las once de la noche.

En las semanas siguientes, convertidas en meses y luego en años, el rompecabezas oficial de los hechos se fue armando despacio, con paciencia, de la mano de la justicia mexiquense. Quizá nunca se esclarezca del todo porque ya no viven quienes asistieron a él y porque sólo unos cuantos se quedaron al final, o porque legisladores pasivos como José Trinidad Rojas, amigo de Zárate y en ese momento presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, optaron por declarar: "Por breves momentos me desaparecí. [...] Y el diputado Rojas también declaró que [...] escuchó dos detonaciones e instantes después otras seis. [...] En eso observó que caía el gobernador Zárate, así como el arquitecto [Manuel] Barbabosa [López], [Nicolás] Ca-

rrasco y Juvencio Maza [Benhumea]”. Nadie vio el momento final. Todos optaron por cerrar la boca.

En las declaraciones no se habló de algún enfrentamiento verbal con Ortiz Rubio, quien al parecer salió de la nada. Fue un asesinato tranquilo. Nadie habló del primero ni del último proyectil, aunque se le vio a Ortiz desenfundar, cortar cartucho, encañonar y disparar con alevosía, ventaja y todas las agravantes de ley. Ni siquiera disparó en defensa del diputado García, quien pidió cerrar las salidas carreteras para evitar su huida. ¿Por qué disparó Ortiz Rubio? Eso se lo guardó él.

Después fueron sembradas más dudas. El senador Augusto Hinojosa, quien asumió el escaño cuando Zárate solicitó licencia para tomar posesión como gobernador, también descartó los tintes violentos y recordó: “El gobernador quería a Ortiz Rubio como a un hermano menor. Lo trataba con verdadero cariño y, con mano pródiga, le dispensaba favores y privilegios. Para aumentarle los ingresos de diputado lo nombró jefe del Departamento de Tránsito, y hace algunos meses, cuando hizo un viaje a Estados Unidos, [todos supusieron que fue el de la luna de miel cuando Zárate se casó con Herlinda] lo llevó de paseo y sufragó todos los gastos”. Sin embargo, el legislador tampoco atestiguó el crimen porque abandonó el lugar “como a las nueve de la noche. Y a esa hora había armonía y cordialidad. No [había] muestras de excitación, mucho menos había indicios de que breves momentos después iba a convertirse en una fiera sedienta de sangre”.

Versiones y contradicciones sobre los hechos hubo por docenas; ni siquiera se pudo sostener lo de la hora. Si algunos testigos señalaron las nueve y media, el secretario particular de Zárate, Carlos Mercado Tovar, afirmó que el ataque ocurrió a las diez y media, a pesar de que a esa hora ya estaba detenido Ortiz Rubio.

La consigna del silencio llevó el caso del gobernador Zárate Albarrán a un callejón sin salida. Cuando se supo que no había sobrevivido a sus heridas, que finalmente había muerto, se respiró un aire de apático alivio en los círculos políticos y judiciales. Aunque los médicos le alargaron la vida con media docena de transfusiones, Zárate

murió el 8 de marzo y fue sepultado al otro día en el panteón municipal de Toluca.

A pesar de que Ortiz Rubio fue declarado culpable, al final del juicio en Toluca estaba listo un amparo federal. El 1 de noviembre de 1944, el ministro Fernando de la Fuente fundamentó la resolución contra la sentencia condenatoria y apoyó —a pesar de sus dudas, porque el inculpado previó la agresión y pudo evitarla— la legítima defensa que sustentó el ministro Carlos Ángeles e hizo lo mismo con la posición del ministro José Ortiz Tirado. De la Fuente justificó el extrañísimo amparo federal bajo el pretexto de que “los asistentes habían consumido más de doscientas botellas de coñac, amén de otras bebidas, incluso pulque en abundancia”.

Si De la Fuente contó bien y uno se atiene al número de ochenta comensales, cada uno bebió al menos dos botellas de coñac y una más de tequila, sin incluir pulque, cerveza ni los fuertísimos mosquitos o licores afrutados. Pero, si los ministros y los magistrados jamás estuvieron en Toluca, ¿de dónde salió la cuenta de las doscientas botellas? Los números nunca cuadrarían. Zárate tenía fama de violento, de maltratar a sus colaboradores cercanos y de gustar de las bebidas alcohólicas. Amigo de Ortiz Rubio, lo hizo a un lado en su campaña. De eso se habló mucho, pero al final lo premió con una diputación local, la presidencia de esa legislatura y la jefatura de Tránsito. Enemigos no eran, aunque público fuera su desencuentro.

Aquel día Ortiz Rubio pareció obedecer a una consigna. Para calmar las versiones conspirativas, de inmediato se hicieron públicos los enfrentamientos entre ambos, así como los rumores de que sus enojos habían comenzado cuando enamoraron a la misma mujer. Zárate ganó la partida, pues se casó con la Barbabosa.

Sin embargo, aun cuando se acepten estas versiones, la crónica de Jardón abre interrogantes y uno regresa al punto de partida, porque esa noche Zárate y Ortiz no tuvieron un altercado, acaso un intercambio medido de palabras sin trascendencia. Y en el aire quedará para siempre la cuestión de por qué no se investigó la presunta existencia de

otros dos calibres de las siete u ocho balas. Si éstas se alojaron en el cuerpo de Zárate, entonces ¿quién disparó contra los otros tres heridos que hubo?

La defensa puso el destino del inculpado Ortiz Rubio en manos de la Suprema Corte, los ministros intercederían por él, le otorgarían un amparo y lo dejarían purgar su crimen en libertad. Durante el régimen autoritario unipartidista consolidado en la década de 1940, el Poder Judicial tenía una estructura de recompensas y compromisos que lo convirtieron en un albergue político con ministros designados por el presidente. Una atmósfera de sumisión revestía a la Suprema Corte y los ministros aceptaban el papel de jueces mecánicos, fieles interlocutores del presidente de la República.

“Aunque el crimen se cometió al calor del alcohol y se difundió como un pleito de cantina, nunca se logró eliminar la versión de un asesinato político, porque la víctima encabezaba un bloque de gobernadores que, en la visión de Maximino Ávila Camacho, representaba una oposición a la política de Unidad Nacional proclamada por su consanguíneo”, el presidente Manuel Ávila Camacho, refiere Jesús Delgado Guerrero en *La historia del PAN del Estado de México, la pasión de seguir continuando*, publicado en 2005.

LA UNIDAD NACIONAL

En 1940 Manuel Ávila Camacho había sido impuesto en la Presidencia a través de un ordinario fraude electoral con el que “venció” a Juan Andreu Almazán. Los disturbios posteriores y sus muertos manchaban la llegada del presidente que intentaba en forma infructuosa arraigar la Unidad Nacional. Su hermano Maximino le ayudaría en la tarea.

En su despacho de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Maximino Ávila Camacho, considerado por sus biógrafos como “furiosamente antiizquierdista” y vengativo, dio continuidad a la mano dura y autoritaria que ejerció como gobernador del estado de Puebla, donde formó un sólido grupo de políticos de derecha, cuyo

alumno más sobresaliente fue nada menos que el luego presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien pareciera que utilizó las enseñanzas de Maximino cuando ocurrió la matanza de estudiantes en 1968, y en la represión y persecución a intelectuales.

El ministerio que dirigía el hermano mayor del presidente parecía camuflar una oficina de combate contra radicales de izquierda y comunistas mexicanos. Desde allí, se hizo enemigo de los sindicalistas, de los ejidatarios y de los campesinos. La expansión del comunismo y del socialismo, una izquierda muy genérica, espoleaba sus ánimos.

Lleno de oscuros presagios, Maximino se preparaba para dirigir al país en el futuro cercano. Quería ser presidente, se creía con derecho. Empeñoso y terco, quería ocupar el lugar del hermano en la siguiente sucesión. Sentado en su despacho de la gubernatura y luego en el de Comunicaciones y Obras Públicas, vio señales equivocadas cuando el presidente viró todas las acciones gubernamentales a la derecha y a la extrema derecha.

En su paranoia anticomunista, este hermano incómodo del presidente no distinguía ni entendía concepciones amplias de izquierda. No aceptaba a los gobernadores que habían formado su propia organización. En su léxico no cabían las palabras *libertad* e *igualdad*. No estaba para entender que los políticos mexiquenses formados en el Partido Socialista del Trabajo (PST), pieza angular para la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en el estado, con todo y su círculo rojinegro, estaban bien arraigados y comulgaban con las ideas del partido en el gobierno. Eran tan priistas como cualquiera, con todas sus mañas, defectos y abusos.

La expansión de su poder lo hacía más peligroso. En alguna ocasión amenazó de muerte al secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, quien con pasos tímidos caminaba directo a despachar en la Presidencia de la República.

Algunos miembros del Bloque de Gobernadores —Salinas, Fernández, Zárate, Jiménez y López Padilla— conocían las grandes ambiciones de Maximino, quien desde finales de la década de 1930 formaba alianzas futuristas con militares como el gobernador poblano Gonzalo Bautista o el general chihuahuense Rodrigo M. Quevedo, a

quien protegieron y pagaron una alta fianza después de que asesinó, en el vestíbulo de un hotel fronterizo en 1938, al senador Ángel Posadas.

En dichas alianzas, Maximino también logró el apoyo del gobernador veracruzano Jorge Serdán, el sonorenses Anselmo Macías, el queretano Nurandino Rubio y el guerrerense Catalán Calvo. Más tarde se-
dujo y convenció al potosino Ramón Jiménez. También formaba su grupo con diputados federales de Puebla y Veracruz. Las alianzas del hermano del presidente se interpretaban como símbolo genuino de sucesión adelantada.

Desde 1941, Maximino ya tenía su guerra propia contra el Bloque de Gobernadores: consideraba que el bloque podía hacerse de recursos, además de capacidad de movilización, por encima de la Unidad Nacional.

En los primeros meses de 1942, el Bloque de Gobernadores habría podido terminar como una gran estopa para propagar las llamas de la rebeldía. Cinco de ellos —Estado de México (Zárate), Guanajuato (Enrique Fernández Martínez), Nuevo León (Bonifacio Salinas Leal), Coahuila (Benecio López Padilla) y San Luis Potosí (Ramón Jiménez Delgado), agrupados en la Oficina de Información de Asuntos Económicos de los Gobiernos de los Estados— sobrecogieron el ánimo porque amenazaban con “envenenar” al empresariado y cuestionaban, no seguían a ciegas las órdenes de reconciliación del general que tenía en sus manos el destino de la República.

El Bloque de Gobernadores mostró su fuerza y alcance cuando el miércoles 18 de febrero de 1942, se reunieron en el Ayuntamiento de Mazatlán representantes de ocho de los nueve estados de la costa del Pacífico para analizar la situación del país. Les preocupaba la cada vez más inminente entrada a la Segunda Guerra Mundial y el errático comportamiento de la economía nacional. El gobierno federal se veía incapaz para controlar la inflación y estimular la producción. A la reunión, incluso, estuvo invitado el jefe del Comando de la Zona del Pacífico de las fuerzas armadas, el general y ex presidente Cárdenas.

En el encuentro se alcanzaron dos acuerdos fundamentales que sa-

cuadrirían a la Presidencia y a la República. El primero consistía en diecisiete medidas económicas para reactivar al alicaído país. A decir verdad, desplazaban algunas tareas presidenciales. El segundo contenía una serie de disposiciones para hacer frente, en caso necesario, a combates de la Segunda Guerra Mundial. Y ésta fue otra clara intromisión en los asuntos federales. Era demasiado. Aquello fue como una amenaza agravada para la Presidencia de la República.

El viernes 20 de febrero, Manuel Ávila Camacho dio una de sus respuestas más contundentes a los acuerdos del bloque de gobernadores reunidos en Mazatlán. Dos días después de pactar éstos la militarización de las escuelas públicas en sus estados y empezar a tomar otras medidas relacionadas con la guerra, como la defensa civil estatal y la creación de escuelas de aviación civil, el presidente se les adelantó y, sin tomarlos en cuenta, hizo público un decreto de ocho artículos para establecer la educación pública militar obligatoria a cargo de "la Secretaría de Educación Pública, con la colaboración del Estado Mayor Presidencial y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina".

Bajo el ambiente bélico mundial y la presión a la que Estados Unidos sometía a Ávila Camacho, el presidente mexicano intentaba cerrar un flanco interno cuando estaba por declarar la guerra formal a las potencias del Eje —anuncio que se daría el 22 de mayo de 1942—. No quería dar la impresión de ser un gobernante débil, de regateos o, en el peor de los casos, de guiar una nación dividida que apenas dos décadas atrás se había pacificado y había puesto a resguardo el millón de muertos que había arrojado la Revolución.

El asunto del bloque de los gobernadores rebeldes, que ya había convocado para el 17 de marzo de 1942 a un encuentro formal con delegados de cámaras de comercio en el estado de Coahuila, cobró visos de insubordinación.

Aunque en público celebraban y respaldaban las reuniones, los Ávila Camacho enviaron señales inequívocas e incuestionables sobre su verdadero parecer. En pocas palabras, conminaban a los gobernadores a desistir de los encuentros y dejar trabajar al jefe del Poder Ejecutivo federal. Una de las advertencias menos sutiles llegó antes de que se realizara la reunión en Mazatlán, el martes 10 de febrero, cuan-

do un grupo de senadores envió a las redacciones de algunos diarios un estudio para advertir “una indebida injerencia” en los asuntos del presidente, porque a él le competían los asuntos de naturaleza militar y de política exterior. “En la Cámara de Senadores no hay ambiente favorable para la próxima reunión de los gobernadores de los estados del Pacífico. [...] Se considera que cualquier acuerdo que adopten en forma colectiva, en relación con las obras que deben emprenderse para proteger a México de cualquier emergencia militar, es competencia exclusiva del Primer Magistrado de la República, sobre quien recae la responsabilidad de la dirección de la política internacional”.

Preparado por veintiséis legisladores, el documento alertaba: “Cualquier contribución a esos temas, por bien intencionada que fuere, representaría una injerencia indebida en asuntos delicados que requieren unidad absoluta de mando y afectará de manera directa a México”. Y deslizaba las sospechas sobre los gobernadores agrupados, su despacho en la capital del país y “las finalidades imprecisas” de éste, agregando: “son aprovechadas por políticos profesionales para fraguar en los estados el entronizamiento de camarillas políticas y de cacicazgos en los municipios”.

Por si no lo había entendido el mexiquense Zárate Albarrán, un segundo aviso se publicó en la edición del 3 de marzo de *El Universal*. Los mismos senadores se adhirieron a las declaraciones del secretario de Comunicaciones, Maximino: “Cualquier coalición de gobernadores debe ser considerada desde su origen ilícita y que, por lo mismo, no tiene razón de existir una oficina de gobernadores que desde hace algún tiempo funciona aquí y de donde ha partido precisamente la idea de formar bloques y subbloques de gobernadores, sin más resultados que, como lo ha dicho el general Manuel Ávila Camacho, produzcan estados de intranquilidad social. [...] Sabemos que hay otros senadores que no juzgan, como los anteriores, indebidas esas reuniones si en ellas sólo se tratan asuntos meramente de carácter administrativo y que esos representantes interpretan el sentir de los señores Silvano Barba González, Alfredo Zárate Albarrán, Félix Irete, Rodolfo T. Loaiza, Fernando Martínez y Pedro Torres Ortiz, gobernadores de los estados de Jalisco, México, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y Colima”.

Zárate no era de lento entendimiento, pero cometió varios errores. Sin ambages, se brincó a Maximino y se atrevió a responderle directamente al presidente Ávila Camacho, a través de un mensaje enviado a *El Universal*, publicado en primera plana el miércoles 4 de marzo de 1942. Interpretada años después, responder abiertamente al presidente fue un suicidio.

El gobernador se dijo ajeno al movimiento político "que se me atribuye. En mi carácter de vicepresidente del Bloque Permanente de Gobernadores, traté de convocar una reunión del mismo, a fin de discutir el temario de la junta y aprobarlo o adicionarlo. [...] Estimo primordial deber de los gobernantes mantener la tranquilidad de las entidades que dirigen y debido a la amistad con que me honra el señor Presidente de la República y mi propia manera de pensar, así como consciente de la responsabilidad que tengo como primer mandatario del estado, he dedicado todos mis esfuerzos al trabajo, por todos los medios la incrementación de la producción, así como fomentar la construcción de nuevas carreteras, dedicando especial atención al problema educativo. Creo que ésta es la mejor manera de corresponder a la confianza que el pueblo ha depositado en mí, así como cooperar en la obra del señor Presidente siendo al mismo tiempo, en mi concepto, el camino indicado para hacer frente a la situación que actualmente atraviesa el país". Al otro día cayó herido, tres días después murió y el 9 de marzo fue sepultado.

A los Ávila Camacho los atormentó el posible regreso de gobiernos sindicalistas y procampesinos, la retórica socialista o los políticos emanados de la pobreza. Y éste era el caso del mexiquense Alfredo Zárate Albarrán, un maestro masón de formación zapatista y, en su momento, empleado meritorio en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Temascaltepec, donde, autodidacta, se encaramó a la titularidad de una agencia del Ministerio Público. Este hombre, a quien antes de ser baleado se le atribuían dotes de buen orador, excelente político y gran sentido del humor, tenía cualidades para escandalizar a los Ávila Camacho: era ambicioso, audaz y, casado con una millonaria, tendría recursos para propulsar su meteórica carrera política.

Por sus ambiciones de comandar al bloque de gobernadores y en

cierta forma aclarar sus metas políticas, Zárate Albarrán se convirtió en una figura muy peligrosa.

En la zozobra de la guerra mundial, el mismo día del atentado que dejó mal herido a Zárate, los otros gobernadores fueron renunciando al bloque "rebelde", se replegaron bien firmes al llamado presidencial de Unidad Nacional y, también de inmediato, se anunció la cancelación del encuentro de Coahuila para aplacar los ánimos de Maximino. Y luego se cancelarían otros más, como el convocado para el 18 de junio de 1943 en Monterrey, para analizar y buscar soluciones al encarecimiento de la vida. La oficina abierta en plena expropiación petrolera languidecería y los gobernadores se plegarían al general Ávila Camacho.

En *La sucesión en la gubernatura del Estado de México: el vaivén de la pluralidad y el unipartidismo 1917-1993*, editado por El Colegio Mexiquense, el investigador Álvaro Arreola Ayala observa que la convocatoria del bloque de los gobiernos estatales al encuentro de Coahuila recibió una respuesta más allá de las declaraciones políticas porque el grupo en la Presidencia de la República creó una organización paralela, encabezada por el poblano Bautista. El objetivo era descarrilar el encuentro de Coahuila. Quizá lo que más alarmaba a los dos Ávila Camacho era que una ruptura con esos gobernadores "conspiradores" habría sido funesta para la economía nacional y, lo más importante, para el liderazgo de los hermanos.

Por su parte, Maximino se escandalizó y se asustó porque intuyó que creyó ser el blanco del movimiento de los gobernadores, lo que habría sido una amenaza contra su posible candidatura presidencial. Ignoraba que su hermano no lo tomaría en cuenta. Y no por temor a recibir acusaciones de nepotismo, sino por la mostrada incapacidad del ex gobernador poblano, su desmedida ambición por el dinero público, su crueldad, porque nunca cambió de actitud y porque de imponerlo como sucesor el país se habría incendiado; todavía hay quienes están convencidos de que, en 1945, Manuel concibió la muerte, por envenenamiento, del ambicioso e intrigante Maximino.

Entre los hermanos incómodos en la Presidencia de la República, como en su momento fueron Raúl Salinas de Gortari, Margarita López Portillo o Mariano López Mateos, Maximino supera a todos por-

que no llegó con propósitos ocultos, sino con las pasiones desbordadas y la espada de su generalato desenvainada. Llena de vanidad y desprecio, su sonrisa lánguida se ensañó en la Guerra de los Cristeros. Maximino mostró siempre el talante brutal de su verdadero rostro e impuso un régimen de violencia desesperada.

EL FUTURO GOBERNADOR

El día en que Fabela recibió al enviado presidencial la orden fue determinante: debía presentarse ante el presidente, de quien en persona recibiría la encomienda de atender el caso Zárate, gobernador constitucional del Estado de México, herido la noche del 5 de marzo de 1942.

Para entonces, Fabela cumplía tres décadas en retiro de toda actividad pública, empresarial y política de la entidad —en 1912 había regresado al estado como diputado federal por el distrito de Ixtlahuaca, para después volver a irse—.

A su regreso de Europa, en 1940, Fabela había quedado en el desempleo cuando Ávila Camacho lo hizo renunciar como delegado de México ante la Liga de Naciones y lo excluyó de su equipo de trabajo del Poder Ejecutivo central. En cambio, el mandatario llamó a otros mexiquenses a ocupar buenas carteras. Al doctor Gustavo Baz Prada lo nombró secretario de Salud, y a Francisco Javier Gaxiola, titular de Economía. Fabela quedó relegado; ni siquiera consiguió alguna encomienda a través de la cancillería, donde había servido siempre.

Había trabajado en otros estados, como en la Chihuahua de Abraham González, aunque —de acuerdo con la correspondencia que se conoce— algunos notables de Atlacomulco lo mantenían al tanto de la problemática estatal y no pocas veces le ofrecieron la oportunidad de regresar e integrarse al grupo, pero siempre rechazó volver a su tierra. La última oportunidad de regresar a la vida política le llegó con el crimen, a tres meses de cumplir sesenta años y con el agobio de las enfermedades de su esposa Josefina Eisseman, *Finita*, una alemana adusta, hija de Carlos Eisseman, activo promotor y accionista minero en el municipio de Temascaltepec.

Finita y *Fabela* contrajeron matrimonio el 13 de julio de 1920 en Berlín, antes de que él renunciara a la embajada de México en aquel país, en protesta por el magnicidio de su jefe Carranza. Las desgracias le llegaron pronto. Uno de los dos era estéril y luego vinieron dramas con sus hijos adoptivos, huérfanos de la Guerra Civil española.

A principios de 1951, en uno de sus periodos vacacionales de The Bryan Texas Military Academy, Daniel —el hijo mayor— se enamoró de la joven *Etelvina Monroy Vélez*, una de las hijas de los atacomulquenses *Isaías Monroy Cruz* y *Lucía Vélez*. A pesar de la férrea oposición de *Fabela* y de doña *Josefina*, la pareja contrajo nupcias el 9 de septiembre de aquel año. Doña *Herlinda Barbabosa* viuda de *Zárate* asistió a la ceremonia religiosa y la recepción en *Atacomulco*. Más adelante, el joven esposo *Daniel Fabela Eisseman* sufrió un accidente automovilístico. Quedó paralítico y “en la silla de ruedas peleaba por los contratos gubernamentales” que, con sus influencias, terminaba por conseguirle su padre. La pena y el sufrimiento dieron paso a más dolor cuando la familia recibió otra terrible noticia: su hijo menor, *Germán*, se había suicidado.

Según sus biógrafos y panegíricos, *Fabela* era dueño de dos virtudes: pureza de intenciones y rectitud de aspiraciones. Así se sumó a las fuerzas revolucionarias y éstas templaron su carácter. Se puso a las órdenes de *Francisco I. Madero* y luchó a plenitud contra el traidor *Victoriano Huerta*. Y por él se vio obligado a huir, andar a salto de mata y exiliarse en *La Habana* y *Nueva York*. Como secretario de Relaciones Exteriores, *Carranza* le encomendó aplacar a *Estados Unidos* cuando inició aquella invasión en *Veracruz*, calmar los ánimos beligerantes por la incursión de *Pancho Villa* a *Columbus*. Aún recordaba su papel como agente confidencial para reanudar relaciones con *Francia* y *Gran Bretaña*.

Si bien sobresalió como funcionario público, *Fabela* nunca tuvo buena fama en los distintos despachos jurídicos en los que trabajó y de los cuales fue socio. No tenía cabeza para litigar y casi nunca ganó juicio.

Cuando recibió la solicitud del presidente, *Fabela* estaba reticente por lo delicado de la misión que se le encomendaba, tan alejada de la

diplomacia, de las batallas revolucionarias, del humanismo, de la democracia y de Francia, el país de las libertades, “el jardín de la civilización europea” al que anhelaba regresar para “recibir la gracia de su gracia, la armonía de su alma [...], a sentir de cerca la inteligencia francesa, la más fina del género humano”.

Ávila Camacho porfió y Fabela debió de entender que la muerte de Zárate constituía un aviso contundente. Ésos eran tiempos en los que un político cualquiera o funcionario de gobierno atendía como orden terminante un deseo, una sugerencia o un capricho de la casa presidencial.

Sus amigos españoles que lo acompañaban cuando recibió al enviado del presidente le pedían que aceptara el encargo, y lo mismo hacían sus paisanos, personajes notables quienes desde 1915 tenían Atlacomulco bajo control —entre ellos Javier Vélez, Maximino Montiel Olmos, Rafael y Leopoldo Suárez Ocaña, Ernesto González Ocaña y Juan Montiel Flores— y habían llegado para tratar de convencerlo de que éste era su momento, a pesar de la edad y de que estaba constitucionalmente impedido para ocupar el interinato de la gubernatura mexicana: necesitaba ser secretario general de Gobierno o legislador; tampoco tenía residencia en el Estado de México. No cumplía con ningún requisito.

CAÑONAZOS DE DIEZ MIL PESOS

Manuel Ávila Camacho estaba atrapado entre la guerra, los gobernadores rebeldes a los que podrían sumarse comerciantes y empresarios, y los deseos desbocados de su hermano. Los problemas le cayeron en tumulto. Parecía una barbaridad atribuirle, además, un crimen de Estado. Recurrir al diplomático Fabela no era un capricho ni la gubernatura un regalo de amistad: al llegar Isidro Fabela al Estado de México, nadie se atrevió a dar un carácter conspirativo al asesinato de Zárate. Nadie cuestionó al nuevo gobernador, su imagen permanecía inmaculada.

A unas horas del crimen, el presidente había enviado a otro revolucionario prestigioso, al médico cirujano Gustavo Baz Prada con la

encomienda de colaborar con sus colegas e incluso de operar con sus propias manos al gobernador Zárate en la madrugada del 6 de marzo.

Institucionales y temerosos de que cualquier asomo de inestabilidad interna afectara la posición de México ante la inminente declaración de guerra a las potencias del Eje, los caballerosos Fabela y Baz (quienes nunca se llevaron porque llegaban de grupos contrarios desde la Revolución: el primero carrancista y el otro zapatista) callarían, apostarían por la paz sin sobresaltos del régimen, harían a un lado escrúpulos y expondrían su prestigio por el bien de la nación.

El presidente los buscó porque ambos tenían credibilidad, en contraste con la imagen de bohemio, borracho y pendenciero que le crearon a Zárate, quien hasta entonces era el único de los gobernantes mexicanos sin grado militar ni título. La intervención de esas poderosas figuras convencería a los mansos políticos mexicanos de que el homicidio se había derivado de un pleito de borrachos.

Y así, por imposición, el 16 de marzo, a los sesenta años de edad, Estro Fabela llegó a la gubernatura del Estado de México. Arropado por el poder presidencial —manifestado de vez en vez con la aparición en Toluca de Fernando Casas Alemán, subsecretario de Gobernación, en las sesiones de la Cámara de Diputados—, nadie se habría atrevido a hacer notar las violaciones a las leyes locales. El diplomático comenzó por dar los puestos del Poder Ejecutivo a sus aliados. A su familiar Alfredo del Mazo Vélez lo designó tesorero general. En la Secretaría de Gobierno impuso a Arturo García Torres, su viejo amigo y socio en un bufete jurídico. A partir de entonces, Fabela hizo como el Grupo Toluca —referido luego como una gavilla formada por letrados, políticos advenedizos, emanados de la Revolución— y como todas las demás cofradías políticas: unirse para protegerse, repartirse el botín para perdurar hasta donde las circunstancias lo permitieran.

Secretario particular: Gabriel Alfaro; adjunto: José Torres Talavera; jefe de Seguridad del gobernador: Aniano Guadarrama; jefe de la Policía del estado: Ignacio Suárez; asesor: Maximino Montiel Olmos. Para legitimarse también usó a la Iglesia católica a través del obispo auxiliar de México, el atacomulquense Maximino Ruiz y Flores. Al Partido de la Revolución Mexicana (PRM) llevó a su amigo Ramón Blan-

carte, más tarde sustituido por otro atacomulquense, Rafael Suárez Ocaña, y terminó controlando la legislatura a través de Federico Nieto, pariente de Enrique Peña Nieto, gobernador actual del estado.

Antes de administrar el dinero mexiquense, Alfredo del Mazo Vélez se había desempeñado como jefe de almacenes en la Comisión Nacional de Irrigación, encomienda de la que fue cesado a finales de 1940. A partir de esa fecha se encontraba a la caza de una nueva oportunidad. Cuando Fabela lo rescató, tenía más de un año desempleado. En el gobierno de los Ávila Camacho nadie quiso darle acomodo. Se había visto obligado a regresar a su antiguo oficio de chofer del servicio público. Por su lado, los intereses del diplomático Fabela estaban más cerca de Chihuahua y Sonora, gobiernos locales en los que sirvió como secretario general de Gobierno.

Fabela y Del Mazo entendieron que ése era su momento y que no había marcha atrás. Hay quien sostiene que la carrera definitiva de Del Mazo Vélez despegó mucho antes de que Fabela llegara a la gubernatura, cuando durante una crecida del río Lerma llevó en hombros a Fabela para que éste pudiera cruzar el tormentoso e incontrolable río.

El objetivo de llevar a Del Mazo Vélez fue claro: desde la tesorería mexiquense salieron cañonazos de diez mil pesos entregados a los diputados locales y de tres mil a cada uno de los ciento diecinueve alcaldes, a fin de que aceptaran a Fabela como interino, aprobaran una reforma exprés a la Constitución y lo juramentaran como sustituto. Sus decisiones estuvieron determinadas por una corrupción "refinada" bajo la tutela de Fernando Casas Alemán. La entrega del dinero, al menos parte de éste, fue documentada y publicada en el ensayo *La revolución comienza a los cuarenta*, publicado en los primeros años de la década de 1950.

Concluido el año de 1942, con las acusaciones de corrupción, la compra de diputados y pendiente una parte del pago del soborno —porque las arcas públicas estaban vacías—, 1943 fue una pesadilla para aquel Fabela confiado en la irreversible reforma constitucional, porque aparentemente se había "enfriado" el asunto de los cañonazos y porque estaba bien sentado en su silla del Palacio de Gobierno. En secreto elaboró sus primeras listas para la renovación del Congreso lo-

cal, además de las diputaciones federales y los escaños en el Senado, y dejó fuera a legisladores que recibieron dinero y esperaban el otro cincuenta por ciento del pago.

Los diputados Jiménez, Choperena, Vera, Sánchez, Reyes, Velázquez y Bautista presionaron para hacer efectivo el cobro de favores y reclamar la palabra de Fabela, para entonces ya muy devaluada. La situación se calentó y, en secreto, Fabela elaboró una iniciativa para quitar el fuero a seis legisladores e hizo la que fue considerada su mejor jugada: removió de la Secretaría General de Gobierno a García Torres e impuso a su sobrino Del Mazo para enfriar a los alebrestados diputados. Del Mazo sabía quién había recibido dinero, y cuánto. Fidel Montiel Saldívar fue enviado a la procuraduría para lidiar con los legisladores “insurrectos” y darle salida al caso Zárate Albarrán. A la tesorería llegó Alberto Vélez Martínez, primo hermano de Del Mazo y hermano del que en el futuro sería el primer obispo de Toluca: Arturo Vélez Martínez.

Nadie supo de dónde salió el aviso filtrado sobre un posible juicio político a Fabela, aunque las baterías apuntaron a una traición de Gregorio Velázquez Sánchez (hermano de Fidel Velázquez quien desde 1941 controlaba para el gobierno federal el movimiento obrero), que luego llegó al Congreso de la Unión, y de Bartolomé Bautista, a quien le prometieron hacerlo alcalde ese mismo 1943, en la renovación de ayuntamientos.

Con la amarga experiencia de los primeros sobornos, ahora no hubo filtraciones sobre los arreglos que encabezó Del Mazo, pero más tarde Fidel Velázquez se hizo su gran compadre y en la década de 1980 llevó a su ahijado Alfredo del Mazo González a la gubernatura del Estado de México, contra los deseos de Carlos Hank González y pese a los férreos cuestionamientos del gobernador Jorge Jiménez Cantú.

En las semanas siguientes, Fabela y Del Mazo pactaron oscuros acuerdos, hasta que en junio de 1943 el tema llegó al Congreso de la Unión, por un desplegado publicado en *La Prensa* y en *El Universal*. Además, los diputados federales mexiquenses y la Federación Socialista elevaron quejas públicas sobre los “entres” fabelistas: sobornos, complicidad y corrupción de legisladores locales.

La particular rumorología sobre la compraventa de conciencias en la legislatura hizo partícipe al gobierno federal cuando, el lunes 14 de junio de 1943, la Federación Socialista pagó la publicación de un desplegado de media plana en la página 13 de *El Universal*. En él denunciaba: "La situación política que prevalece en la mencionada entidad desde que ocurrió la muerte del gobernador Alfredo Zárate Albarrán es anticonstitucional porque habiendo nombrar, para suplir la falta del gobernador constitucional, un gobernador interino electo entre sus miembros [de la Cámara de Diputados] y que fuera, además de diputado local, ciudadano del Estado de México y vecino de él con vecindad de cinco años anteriores a la fecha de la elección [...], nombraron como gobernador interino al señor Isidro Fabela Alfaro, que no era ciudadano del estado, ni tenía ninguna vecindad. Al proceder en tal forma violaron la Constitución".

Lo firmaban los diputados federales Ignacio Gómez, Porfirio Ramírez, Juan N. García, José Hernández Mota y Antonio Mancilla. El documento precisaba también que los legisladores locales se habían saltado la Constitución federal y recordaba que en la última de las tramposas interpretaciones de la ley cedieron el control del Poder Legislativo para que Fabela pudiera convocar a elecciones locales al cabo de un año, a través de la Comisión Permanente, cuando esa tarea correspondía a la Cámara en pleno.

El 17 de junio de 1943, José Jiménez, presidente de la Comisión Permanente de la legislatura mexiquense, se vio obligado a convocar a una sesión de urgencia para tratar asuntos de vital importancia. La sesión se abrió "a las trece horas con cuarenta y cinco minutos, con la asistencia de los ciudadanos diputados Jiménez, Sánchez y Vera". Léida el acta anterior y aprobada sin observaciones, la secretaría dio paso al tema central: "El ciudadano presidente de la Permanente presenta un ejemplar de los periódicos *La Prensa* y *El Universal* de fecha 14 de los corrientes, en los que aparece una carta abierta dirigida a la Trigésima Quinta Legislatura y a la opinión pública del Estado de México, suscrita por el comité directivo de la Federación Socialista del mismo estado, en la que se hace a la propia Legislatura el cargo de haber cometido violaciones a la Constitución Política local. [...] Agrega el

ciudadano presidente que, en su concepto, debe hacerse un estudio minucioso de este asunto y tomar alguna resolución, ya que hasta hoy el ciudadano gobernador no ha llamado ni a la Permanente ni a la Cámara para cambiar impresiones y resolver lo conducente. Agrega que como quiera que esa carta abierta ha sido publicada en periódicos serios como es *El Universal*, y ha circulado en todo el país, y comprendiendo a la vez que el silencio de la Cámara equivaldría a aceptar los cargos que se le hacen, y no queriendo el que habla tener ninguna responsabilidad por ser presidente de la honorable Comisión Permanente, sino creyendo que debe ser toda la Legislatura la que responda a tales cargos, propone que se tome alguna resolución, la que mejor convenga a la dignidad del Poder Legislativo”.

La respuesta nunca llegó. “No habiendo más asuntos con que dar cuenta, se levanta la sesión a las catorce horas veinticinco minutos.”

La única consecuencia de la reunión fue el encargo de un estudio jurídico a un grupo de especialistas en derecho constitucional —Enrique García Campos, Eduardo Pallares y Germán Fernández del Castillo—, algunos diputados redescubrieron la magnitud de la corrupción, regularon y amenazaron con deshacer acuerdos de la imposición. Pero era tarde. Otros, como Daniel Hernández, Antonio Sánchez, Gregorio Velázquez y Joaquín González Aragón no sólo no devolvieron el dinero sino que se convirtieron en espías del grupo recién llegado de Atlacomulco. Fabela terminó por maquinarse y encabezar el desafuero de los rebeldes que no respetaron su palabra.

Sidronio Choperena, Juan Sánchez, José Jiménez, José Trinidad Rojas, Isidro Sánchez, Aurelio Vera y Andrés Francés, identificados como “agitadores”, fueron “secuestrados” en sus casas y, en una sesión clandestina el 19 de junio de 1943 convocada por el nuevo gobernador, los despojaron del fuero. El senador Alfonso Flores, otro de los opositores, fue obligado a solicitar licencia y abandonar su escaño por las buenas y para siempre. Se les acusó de desobediencia a la autoridad civil instituida, actuar en forma premeditada “con fines aviesos” y sembrar obstáculos en su órbita de acción.

Isidro Fabela, el conocedor del Derecho, el amante de hacer valer y respetar las leyes, el hombre parco y honesto, un buen día decidió

traicionar sus ideales por afianzar su resurgimiento en la política de México al llegar a gobernador de un territorio que por derecho no le correspondía.

En el mencionado estudio jurídico, de treinta y seis páginas, Pallares hizo suyas doctrinas y razonamientos del jurista Enrique García Campos, dados a conocer el 17 de diciembre de 1943, y añadió un nuevo argumento: "Los gobernadores no pueden ser nombrados por medio de decretos ni menos por medio de una disposición transitoria a un decreto", y le recordó al diplomático: es principio esencial de un régimen democrático que "los poderes públicos sean nombrados por el pueblo", a través de elecciones. "La integración de los poderes públicos no constituye nunca una cuestión legislativa."

GOBIERNO A LARGA DISTANCIA

El escándalo que estalló durante 1943 tuvo su origen en los hechos ocurridos un mes después de la llegada de Fabela a la gubernatura. El 18 de abril de 1942 el presidente de la Gran Comisión de la legislatura, Sidronio Choperena, hizo buenos comentarios, porque vislumbraba la posibilidad de que (aun ante la ilegal primera designación) el gobernador interino convocara a elecciones: "Desde el momento que supimos la designación que muy acertadamente hizo el presidente de la República, todos los diputados la vimos con agrado, porque sabemos los antecedentes de usted, su honorabilidad y cultura; porque sabemos que es una persona que viene a garantizar la paz [...]. Aprovecho esta oportunidad para que, a nombre de mis compañeros, sepa usted que no ha habido disidentes en ningún momento. Por lo que respecta al señor gobernador del estado. Se lo he expresado a usted varias veces en privado y ahora públicamente se lo expreso".

Fabela escondió la verdad en su respuesta: "En estos momentos, señores diputados, no debe haber agitaciones ni diferencias, porque eso sería antipatriótico. Las disensiones de los diputados entre sí y entre los diputados y el gobernador serían antipatrióticas, serían contrarias a los intereses generales de la República, serían contrarias a los in-

tereses del señor Presidente, a quien todos estimamos, respetamos y admiramos. [Exijo a los diputados que] ratifiquen con hechos las palabras que me han dado de respaldo absoluto a mi persona, como Ejecutivo de este gobierno”.

Diez días después se conoció la verdad: no habría convocatoria a elecciones. Comenzó la guerra. La lucha por hacerse del poder entre el antiguo y el nuevo clan sería atroz. El Grupo Toluca no se iría con facilidad, y menos por Fabela, cuyo refinamiento francés detestaban. Surgió una guerra encarnizada entre ambos bandos, la cual se prolongó durante un par de años.

Así que, después de aceptar sobornos, el 4 de julio de 1942, aniversario de la proclamación de los Derechos del Hombre, la H. XXXV Legislatura del Estado Libre y Soberano de México decretó: “El gobernador designado por esta Legislatura con el carácter de interino, con fecha del 15 de marzo de 1942, continuará con el desempeño de su cargo con el carácter de sustituto hasta la terminación del periodo 1941-1945”.

En su estudio jurídico, Enrique García Campos advirtió: “Anticonstitucional de origen es el régimen político que prevalece en el Estado de México desde que ocurrió la falta absoluta del gobernador constitucional con el fallecimiento del C. Alfredo Zárate Albarrán”. De dicho estudio elaborado también con las conclusiones de Pallares y Germán Fernández del Castillo circularon ejemplares encuadernados, pero las oficinas de Fabela y Del Mazo ordenaron desaparecerlos. Entre todas las violaciones a la Constitución local, también se encontró que, por segunda vez en la historia y también en forma ilegal, un gobernador en funciones no residía en la entidad. Las oficinas del responsable del Poder Ejecutivo estaban vacías.

Luego se alzaron voces de protesta porque el gobernador tenía su residencia en el estado de Morelos. Gobernaba a larga distancia, por teléfono, desde la comodidad en su despacho de Cuernavaca, alejado de los dolores de cabeza al lidiar con una legislatura leal a Zárate. Descubierta esta otra ilegalidad, la Cámara de Diputados fabelista convocó a una sesión de carácter urgente en diciembre de 1942 con la única finalidad de autorizarlo a residir fuera de la entidad, a través del

decreto I06 del día 23, para que pudiera pasar Navidad en casa con su enferma esposa doña *Finita*.

En semejante marea de ilegalidades, los estudiantes críticos de Fabela por la burda imposición fueron encarcelados y fichados. Y en 1943, el mismo Fabela ordenó comprar el periódico *El Demócrata*. Él aprobó la contratación de los periodistas o sugirió los nombres de quienes escribirían. Nadie podía tocar temas políticos del estado.

Fabela aprendió el juego de los Ávila Camacho. Se convirtió en el gran legislador mexiquense. Años más tarde, en su libro *¡Pueblecito mío!*, hizo un acto de contrición e indicó que, si hizo algo malo, fue atribuible al presidente Manuel Ávila Camacho, porque él, y nadie más, le pidió violentar la Constitución estatal después del asesinato del gobernador "don Alfredo Zárate Albarrán", aprovechando las facultades especiales que le concedió la legislatura. En ese descargo de culpas, también afirmó que Ávila Camacho lo convenció de que era el único capaz de salvar a su provincia, amándola, como la amaba, entrañablemente. "Investido de mi flamante cargo, tomé posesión del gobierno, llevando una recomendación y un deseo del Primer Mandatario. La recomendación era la siguiente: que gobernara hasta donde fuera posible con los colaboradores del difunto ex mandatario Zárate Albarrán; y un deseo estrictamente confidencial, de que yo continuara en el gobierno hasta completar los cuatro años de gobierno que correspondían a mi antecesor. Esto, cuando la Constitución del estado ordenaba que el mandatario interino debería convocar inmediatamente a nuevas elecciones."

El escándalo político y los cambios de gabinete pasaron a un segundo plano cuando en 1943 se dio a conocer la lista de la nueva legislatura local. Fabela colocó en nueve de los doce distritos a candidatos incondicionales: Rafael Suárez Ocaña, Enrique González Mercado, Roberto Barrios Castro, Federico Nieto, Abel Huitrón y Aguado, Eulalio Núñez Alonso, Ernesto González Aragón, Tito Ortega y Mucio Cardoso, la mayoría de Atlacomulco. Hasta los suplentes fueron amigos o familiares, como Antonio del Mazo Vélez, hermano del ya secretario

de Gobierno; Silvano Sánchez Colín, hermano de Salvador (quien en el futuro llegaría a la gubernatura desde los jardines de las residencias de Miguel Alemán Valdés), o Jorge Izquierdo; los otros tres eran del Grupo Toluca que habían decidido venderse para seguir en el poder, como Jorge Urquiza y Vicente Flores Mancilla.

De no haber muerto el gobernador Zárate y de haber prevalecido la Constitución, la historia habría sido distinta, tal vez Fabela, quien en los primeros seis meses del gobierno avilacamachista parecía tener los días contados en el servicio público, jamás habría regresado, se habría refugiado en su añorada Francia. Pero las cosas no fueron así y su establecimiento en la gubernatura dio paso a una nueva clase que controlaría, bajo el nombre de Atlacomulco, parte de la política nacional. A partir de entonces, la imagen de Fabela se volvió la columna vertebral de los tiempos por venir.

Capítulo II

La fuerza de la costumbre

ENRIQUE PEÑA NIETO cumplió en enero de 2005 con el ritual de presentar su solicitud formal a la candidatura para gobernador del Estado de México. Lo hizo con la naturalidad y la certidumbre de los herederos surgidos de la nada pero acostumbrados, a pesar de las historias oscuras o descalabros familiares, a manejar los hilos del poder, transmitirlo y recibirlo sin cuestionamientos, con la seguridad única de los priistas mexiquenses de que a partir de ese momento su imagen cambiaría para siempre. Sería éste el comienzo para buscar la otra candidatura, la presidencial.

Aquel lunes 31 enero de 2005, luego de que Peña Nieto presentó la solicitud de su registro como candidato único, desaparecieron los nubarrones formados el 15 de noviembre de 2004 en Ecatepec, cuando, en la primera conferencia de prensa de los ocho precandidatos, Isidro Pastor Medrano acusó al PRI de cargar los dados para favorecer a un candidato y de violentar sus derechos constitucionales; demandó una elección interna universal y abierta a todos los priistas del Estado de México; exigió —en alusión a Peña Nieto— aclarar en qué consistía la unidad y cómo se daría. Abandonó en forma abrupta su participación cuando le confirmaron que la contienda estaba decidida a favor del sobrino del gobernador, y huyó por la puerta trasera en una camioneta blanca.

Aquel día, a los priistas no les preocuparon esas amenazas, previsibles y ciertas, ni los persistentes señalamientos de corrupción y otros escándalos de Arturo Montiel; ni el apoyo perredista de López Obrador a la empresaria Yeidckol Polevnsky —personaje de la dinastía de

los generales poblanos Ávila Camacho—, ni la fuerza electoral de Rubén Mendoza Ayala, el rival panista de Peña Nieto que encarnaba el más firme prospecto del Partido Acción Nacional (PAN).

Las encuestas más confiables aseguraban que Mendoza Ayala tomaría posesión en Toluca y gobernaría a casi dieciséis millones de habitantes. Impulsado desde su populosa Tlalnepantla, Rubén Mendoza parecía capaz de articular un movimiento territorial para desplazar a los políticos de Atlacomulco, representados por Peña Nieto y Montiel. Además, tenía deseos de cobrar facturas a viejos y humillantes agravios atribuidos al ex secretario de Gobernación y ex gobernador Emilio Chuayffet, motivo de su salida del PRI. En efecto, Mendoza Ayala había sido alumno privilegiado del ex líder estatal priista Cuauh-témoc Sánchez Barrales; más tarde discípulo, camarada y protegido del hankista Abraham Talavera López —ex embajador, ex jefe de la policía política nacional, varias veces ex diputado federal, asesor presidencial y siempre funcionario del PRI— y todavía un poco después, compañero inseparable de políticos priistas cercanísimos a Montiel, entre ellos Carlos Iriarte Mercado.

Pero Peña Nieto siempre se mostró seguro de su triunfo. Parecía sentir la fuerza del antiguo derecho sucesorio que le correspondía por ser beneficiario de la herencia genética de cinco gobernadores surgidos de Atlacomulco —Isidro Fabela Alfaro, Alfredo del Mazo Vélez, Salvador Sánchez Colín, Alfredo del Mazo González y Arturo Montiel Rojas—, una casta comprometida desde 1942 en llevar a un político de ese pueblo a instalarse como presidente de la República; además, contaba también con las generosas bendiciones de la primera dama estatal Maude Versini de Montiel. No había inquietud ni inseguridad que mostrar.

Nadie sabe con certeza cuándo operó el cambio, pero la imagen de este diputado local con licencia se transfiguró durante la anticipada precampaña presidencial montielista porque, a pesar de todo, muy pocos priistas mexiquenses se veían en diciembre de 2006 despachando desde Los Pinos con su jefe Arturo. Con esa incertidumbre, la continua y espléndida inyección de recursos para promover a Montiel y a Peña Nieto en las pantallas de televisión reveló la avasalladora lle-

gada de un candidato joven que tuvo la capacidad individual, el margen de operación, la estrategia y el equipo político para derrotar al magnate Carlos Hank Rhon en el proceso interno de selección del candidato a gobernador. Y aunque su imposición era la muestra de un PRI lleno de viejos vicios, sorprendió a los incautos y los priistas de siempre se dejaron llevar por la costumbre.

Mantener la gubernatura era un riesgo que había que correr a pesar de las acusaciones de nepotismo; había que arriesgarse en aras de mantener viva la profecía de los seis gobernadores. Con toda la parafernalia mexiquense —la segunda entidad más poblada del país, con más electores efectivos (cerca de ocho millones) y más acaudalada, apenas atrás del Distrito Federal—, Peña Nieto se encumbraría para empezar la lucha. A la distancia, da la impresión de que, al imponer a su sobrino y hacerlo ganar a cualquier costo, Arturo también se aferró a un poder desvanecido desde 2001, cuando fracasaron sus planes de hacerse del control de los gobernadores priistas de todo el país.

Nada parecía ensombrecer el semblante de Enrique Peña Nieto, ni su cada día más endeble matrimonio con Mónica Pretelini Sáenz ni el estado lamentable del priismo nacional ni los señalamientos de un apetito incontrolable de corrupción, poder y riquezas que recaían entonces sobre las dos familias de Arturo Montiel: la de su primer matrimonio, con la reina de belleza aguascalentense Paula Yáñez Villegas (con quien tuvo a Arturo y Juan Pablo Montiel Yáñez), y la Montiel Versini, que formó tras casarse en segundas nupcias con la francesa Maude.

Acusado de despilfarros en su campaña y ante la reiterada negación de sus lazos familiares de sangre para evitar que se le vinculara con Montiel, el martes 1 de febrero de 2005 Peña Nieto señaló: “Mi abuelo se llama Enrique Nieto Montiel, y eso los hace suponer. En Atlacomulco, como ocurre en muchos lados, los apellidos se repiten, y eso los hace suponer. Esto no se gana con apellidos, no soy pariente del gobernador”. Arrinconado por el enviado del periódico *Reforma*, olvidó a los integrantes de su árbol genealógico: “Yo mismo no lo conozco. Me parece que es un tema de comprobarse. Fíjate que mi bisabuelo... realmente no sé cómo se llama mi bisabuelo. Efigenia creo que se llamaba mi abuelita. Habría que buscarle, yo no lo identifico

más allá de mis abuelos, quiénes son, pero tampoco me opondré a que alguien hiciera la investigación, que la trabaje y diga quiénes son”.

Y tenía razón en lo de Efigenia, pero no como su abuela, sino bisabuela, y sí, se llamó Efigenia Montiel Sánchez (casada con Marcelino Nieto Jiménez), de la rama de los mismos Montiel antepasados del entonces gobernador Arturo. De acuerdo con el acta de nacimiento de su mamá, la 947 asentada en la foja 79 del libro 03 de 1942 del Registro Civil en Atlacomulco, Enrique Peña Nieto también es familiar del extinto gobernador Salvador Sánchez Colín, a través de Silvano Sánchez y María Colín viuda de Sánchez.

Desde el primer día que se instaló en el gobierno estatal, Peña Nieto se enfrentó a la pérdida de legitimidad (lavada de inmediato con millonarios contratos en publicidad de imagen en televisión, radio y prensa), además de una falta de compromiso con la transparencia en las investigaciones contra su antecesor y la familia de éste.

Esa falta de compromiso le generó problemas como mandatario, pues al mostrar indiferencia ante los escándalos que involucraron a colaboradores del régimen montielista —amigos suyos—, la percepción de la ciudadanía respecto a su gestión propició una mayor crítica a sus actividades. Los reproches ciudadanos afectaron la batalla electoral e hicieron perder al PRI en sus primeros comicios de julio de 2006. Entonces, Peña Nieto era cabeza de ese grupo llamado Atlacomulco, muy presente desde 1942 en notas periodísticas, ensayos, libros o comentarios de café, aunque investigadores como Rogelio Hernández Rodríguez pretendan demostrar por qué no existe y otros, como Jorge Toribio, muestren a un grupo vivo, protagonista y antiguo.

¿Cómo podía Peña Nieto consolidar el “borrón y cuenta nueva” y el perdón sin cortapisas a Arturo Montiel? Aquel 31 de enero de 2005, nadie vio a Peña Nieto envuelto en las acusaciones judiciales contra su antecesor, pero poco a poco lo acecharon las fotografías del rey Arturo, que tomaba baños de sol con su princesa gala en la piscina de una de sus fastuosas residencias. Estas imágenes serían las que en los tiempos electorales de 2006 le harían perder a Peña Nieto las tres senadurías y casi todas las cuarenta y cinco diputaciones federales.

Las maniobras presidenciales le torcieron el destino a Montiel,

pero la justicia estatal no dudó en concederle cuatro absoluciones porque él, nadie más, posee en sus archivos el manejo del dinero que hizo su sobrino Peña Nieto en la Secretaría de Administración, en la presidencia de la legislatura y en la campaña de 2005. Arturo puede respirar en paz mientras esté en sus manos languidecer la cada vez más sólida carrera de Peña Nieto hacia la elección presidencial de 2012. Olvida que los expedientes de las demandas contra el clan montielista se acumulan desde 2004 en los archivos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

LAS DENUNCIAS

El gobierno de Peña Nieto ha estado bajo sospecha por las denuncias en su contra a causa de los excesivos gastos de campaña, primero, y luego por negarse a juzgar a su pariente, el ex gobernador.

La percepción de impunidad en el seno de su naciente gobierno le restó credibilidad cuando la policía estatal recibió órdenes de reprimir con violencia a los activistas del movimiento de San Salvador Atenco. Allí, el ex gobernador Montiel buscaba hacer jugosos negocios con la compra de terrenos ejidales a precios de risa, para revenderlos en sumas abultadas e invitar a constructoras “amigas” a fincar en zonas alejadas al nuevo aeropuerto. Pero los presos políticos y los dos jóvenes muertos impidieron el diálogo.

Por otro lado, en plena campaña por la gubernatura del Estado de México, Ricardo Monreal Ávila, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), presentó una denuncia contra Peña Nieto por rebasar el tope de gastos en treinta por ciento, pues desembolsó doscientos ochenta y dos millones trescientos setenta y dos mil quinientos setenta y cuatro pesos, cantidad superior a los doscientos dieciséis millones setecientos sesenta mil setecientos pesos aprobados por el IEEM. La denuncia se quedó corta, posteriormente se habló de excesos hasta por tres mil millones de pesos. Pero esto fue opacado por el

escándalo por acusaciones de corrupción en el organismo electoral: los sobornos relacionados con la licitación de la empresa fabricante del material electoral, conocido como el “caso de la Cartonera Plástica”.

Dicho escándalo provocó que la noche del jueves 19 de mayo de 2005 renunciaran en pleno los árbitros de la contienda —José Juan Gómez Urbina, Andrés Torres Scott, Isael Montoya, Alfredo Sánchez, Bernardo García Cisneros, Julio Olvera y Manuel Silva—. El escándalo disimuló incluso las señales que se enviaron el candidato Peña Nieto y Arturo Ugalde, nuevo presidente del PRI estatal, sobre las diferencias en más de veinticinco millones de pesos sobre los primeros gastos de campaña y dejó en el olvido cualquier indagación seria.

En su edición del sábado 21 de mayo de 2005, *Reforma Estado* asentó en una de sus notas de primera plana: “Mientras el Estado de México vive una de sus crisis políticas más graves, Montiel estuvo desde el 11 de mayo en una gira por Europa que lo llevó a un foro en Alemania, a una subasta de flores en los Países Bajos y a reuniones con empresarios de Polonia”, así como con dirigentes y políticos de Austria. En el viaje eludió las preguntas sobre las acusaciones de desvío de fondos públicos a la campaña de Peña Nieto y las exigencias para renunciarlo como candidato. ¿Cuánto costó en realidad la campaña priista de 2005? El secreto lo tiene Montiel, pero los señalamientos más recientes sugieren que tres mil millones de pesos.

En los códigos no escritos, pero ampliamente conocidos, la contienda que reciben los priistas cuando ocupan un puesto de elección popular es la de entregarlo a otro priista, así sea un familiar. Arturo Montiel lo hizo. Las acusaciones de corrupción, sus divorcios, sus matrimonios, su desprestigio y el de su familia, los cuestionamientos, las escapadas para correr detrás de Maude y algunas decisiones que tomó como gobernador se pueden discutir, pero logró mantener el estado para un partido de capa caída.

El alboroto por los señalamientos de soborno y la renuncia de los consejeros del IEEM se dispersó cuando éstos solicitaron y autorización, antes de irse, un finiquito de tres millones trescientos mil pesos para cinco de los siete ex funcionarios. Otro recibió un millón doscientos mil pesos y uno más, aparte, hacía un año y medio se había he-

cho acreedor a un bono superior a tres millones trescientos mil pesos por el proceso electoral local de marzo de 2003.

El entonces naciente gobierno mexicano de Peña Nieto fue cuestionado desde dentro: el comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México (ITAIPEM), Horacio Aguilar, lo denunció por no cumplir a cabalidad con la resolución de ese organismo de dar a conocer gastos del ex gobernador. En la historia reciente, del extinto Hank a Montiel, ningún inicio de gobierno —ni el de Mario Ramón Beteta Monsalve en 1988, recordado por su eterna apatía, incapacidad y desdén para conocer la realidad, o Del Mazo González— fue tan cuestionado como el de la noche del 15 de septiembre de 2005.

Las imputaciones también golpearon desde fuera. A un mes de comenzado el sexenio de Peña Nieto, un regidor de Tlalnepantla —José Luis Cortés Trejo— interpuso una denuncia penal contra el candidato presidencial Arturo Montiel Rojas, sus hijos Arturo y Juan Pablo Montiel Yáñez, y su esposa Maude, por uso indebido de atribuciones y facultades, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, inadvertidos para las autoridades estatales. “Existen delitos del orden federal, ya que se trata de operaciones de compraventa y depósitos bancarios hechos por dichas personas, tales como depósitos hasta por treinta y cinco millones de pesos en la cuenta de Juan Pablo Montiel Yáñez, sin que hasta el momento se haya acreditado su legal procedencia, así como la compra de tres inmuebles en Valle de Bravo, hecha por la señora Maude Versini, sin que se acredite legalmente la procedencia de los recursos con que cuenta dicha señora, y tampoco se acredite si tiene alguna actividad económica que le permita efectuar dichas adquisiciones.”

Ése fue apenas el hilo conductor que llevó a otra demanda, por parte de Rubén Islas Ramos, representante del PRD ante las autoridades electorales, para exigir la apertura de los contratos de publicidad política otorgados durante el gobierno de Montiel y triangulados con el propósito de beneficiar a Peña. El asunto fue un poco más allá, porque el mismo regidor, por su lado, solicitó investigar “la compra de un terreno de aproximadamente veintiún millones de pesos a favor de Ar-

uro Montiel Yáñez”, sin que tampoco “se acreditara legalmente” ninguna actividad económica.

El procurador Alfonso Navarrete Prida intentó buscar una salida en esos vericuetos de poder tras la denuncia presentada ante la PGR por el perredista José Luis Cortés Trejo y adelantó que la dependencia la rechazaría, aunque, a decir verdad, esa fortuna montielista estaba apuntalada por bienes inmuebles de Versini en Acapulco, Careyes en Jalisco y Francia. Una extraña prosperidad de la esposa del gobernante.

Navarrete intentaba ganar tiempo para defender a su ex jefe: la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR aceptó la denuncia de hechos y asignó el número de averiguación 218/UEIDCSPCAJ/05, que dio origen a la averiguación previa PGR/MEX/TOL/III/1364/2005. Pendiente quedó una segunda querrela contra tres ex funcionarios estatales como prestanombres del ex gobernador en la compra irregular de ciento veintitrés predios en territorio mexiquense.

Los escándalos exaltaron a Montiel, cuyo saldo superó los alcances de su sofisticada esposa Versini y de sus hijos: el sábado 29 de octubre, Cortés presentó una segunda denuncia de hechos, con folio 169490. Montiel y su familia fueron acusados de incurrir en enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de atribuciones y lavado de dinero, pero se pidió indagar también a Luis Enrique Miranda Nava, secretario montielista de Finanzas, Administración y Planeación, así como al padre de éste, Luis Miranda Cardoso, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, como prestanombres de Montiel. Y la denuncia cargó contra casi toda la familia Miranda Nava: Javier, Ana Rosa, José Javier, Gabriel, Alfredo, Armando, Felipe, María Estela, María de los Ángeles, Pedro, Rubén, Salud y Enrique, así como María del Carmen Miranda Nava de Mercado y Roberta Miranda Cardoso.

Al poner el dedo en los bienes inmuebles de los Montiel, en los extraños pero cuantiosos depósitos en efectivo, Cortés mostró una parte del desaseo de aquel gobierno. Éste se convirtió en referente de corrupción y Peña Nieto no podía hacerse a un lado porque había sido

partícipe de ese sexenio iniciado en 1999, en el que fungió como subsecretario de Gobierno y titular de la Secretaría de Administración. Como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y jefe de los legisladores de su partido, participó en la aprobación de las justificadoras cuentas públicas.

Atrapada en una espiral ascendente, la opulenta vida de los Montiel llenó planas y planas de periódicos. Ni los millonarios recursos destinados a las televisoras lograron opacar este curioso legado de dispendio, que quedaría incompleto sin la denuncia penal para indagar las fortunas y el comportamiento, como servidores públicos, de Miguel Sámano Peralta, secretario particular de Montiel, y de Carlos Rello Lara, ex secretario de Desarrollo Económico (también ex jefe de Peña Nieto), operador financiero en las campañas de Peña Nieto y de Montiel.

Las descalificaciones hechas contra el regidor José Luis Cortés y la exaltación de los valores familiares del ex gobernador Arturo Montiel —en la propaganda de televisión en su carrera presidencial contra un “inmoral” Roberto Madrazo— no impidieron a Cortés exigir información sobre la cuenta número 347-88875 del banco Merrill Lynch en Nueva York y otra más en el Moline de Illinois (554-67211) por cerca de tres millones de dólares, a nombre de Sámano y Rello.

Para ese entonces, la PGR ya tenía conocimiento de este último caso. Las autoridades hacendarias y financieras lo habían detectado y reportado desde el año 2004. No obstante, los peritos judiciales desecharon el caso. En el mismo diagnóstico hubo dudas porque las fichas de depósito mostraban irregularidades. Aunque en 2005 se presentaba una nueva oportunidad para investigar a los colaboradores de Montiel, se recordó que aquellas fichas de depósito no correspondían a los movimientos financieros, estaban alteradas, carecían de valor o incluían documentos apócrifos. Ésa fue la razón real que truncó el proceso judicial, y cuando se decidió retomar la indagación, el dinero simplemente ya no estaba.

Sin embargo, poco se habló de otras cuentas del entonces gobernador mexiquense, así como de sus hijos Juan Pablo y Arturo. El río llevaba más agua. Se fue acumulando. Luego se conocerían las triangu-

laciones, los enredos y las artimañas para hacer que los investigadores de la PGR desecharan cualquier inquietud y sospecha —o, en su caso, la guardaran para tiempos mejores—, dados a conocer en una denuncia pública de Televisa que retomaba información que apareció en la revista *Proceso*.

Lo que no pudieron documentar los investigadores federales ni los locales lo hizo el reportero Osvaldo Robles, enviado del periódico *Reforma* a Houston: vecino de los hermanos Bribiesca Sahagún —hijos del entonces presidente Vicente Fox—, Juan Pablo Montiel apareció como propietario de un lujoso departamento de casi medio millón de dólares, pagado en efectivo, en el exclusivo condominio Four Leaf Towers, “a dos cuadras del vanguardista Bulevar Post Oak y a unos metros de The Galleria”, un ostentoso centro comercial. Montiel había comprado en mayo de 2002 el departamento de doscientos cincuenta metros cuadrados en el piso dieciséis, uno arriba del de los Bribiesca, quienes pagaron en 2004 cerca de un cuarto de millón de dólares por un departamento de ciento cincuenta y cinco metros cuadrados.

UNA TRAMPA LLAMADA GREGORIO MONTIEL

Quizá los Montiel sólo hayan respondido a una misteriosa necesidad genética de acumular, con el abuso directo y enfermizo desde cualquier puesto de poder con acceso al dinero público, apostándole al olvido ciudadano y la complicidad partidista.

Hacia la segunda semana de enero de 1969, el gobernador mexicano Juan Fernández Albarrán recibió (como regalo de cumpleaños) en su despacho a una comisión civil responsable de entregarle en mano una amplia y documentada denuncia por actos de corrupción, abusos de autoridad, despotismo y otras arbitrariedades que implicaban, con nombre y apellidos, al alcalde de Atlacomulco: don Víctor Gregorio Montiel Monroy, padre del jovencísimo abogado Arturo Montiel Rojas.

Decididos, los integrantes de la delegación sugerían rastrear los orígenes de una inusitada prosperidad del presidente municipal, distribuidor de la cerveza Corona en la zona norte de la entidad. Si bien la solicitud equivalía a una declaración de guerra, los atacomulquenses buscaban la forma de acabar con el desorden de sus autoridades. El gobernador pidió indagar qué grupo político alentaba a los denunciantes y conspiraba contra Montiel Monroy, pero no encontró nada. Sus investigadores e informantes se estrellaron contra el muro de la verdad y el desaseo municipal. Una gran cantidad de personas habían sido víctimas, en mayor o menor medida, de algunas de las acciones tomadas en la alcaldía.

Aunque tenían fundados temores a las represalias del alcalde, recurrieron al gobierno estatal de Fernández Albarrán porque no había otra autoridad para meter en cintura, enjuiciar y, en su caso, destituir a Gregorio Montiel, a quien responsabilizaban de un irregular aumento a las contribuciones municipales, de beneficiar sus negocios en un anormal y zonificado cobro de impuestos o la rebaja de éstos, además de apropiarse en forma directa de recursos del presupuesto anual de egresos y ocultar ingresos, incluidos los obtenidos a través de la Oficialía del Registro Civil, donde también detectaron manejos dudosos y corrupción en complicidad con el responsable de esa oficina.

La temeridad de aquellos ciudadanos para apersonarse ante la máxima autoridad política del estado sorprendió a Fernández Albarrán, pero fue inútil y no pasó de la impresión. La denuncia pública lo dejó contrariado y con el rostro desencajado. Con la obsesión de terminar bien y en paz su sexenio, el gobernador enterró para siempre la denuncia sobre el cobro doble para obras previamente liquidadas, o los acuerdos confidenciales con el oficial del Registro Civil para exigir cantidades de dinero en los enlaces civiles o servicios de otra índole, sin expedir recibos ni otorgar constancias.

En medio de la tormenta de acusaciones y la intranquilidad de la gubernatura, también se pasaron por alto las acusaciones contra este Montiel por el dudoso manejo presupuestal, la falta de transparencia y la omisión del informe anual para rendir cuentas del manejo del erario municipal. Desde que abandonaron el despacho de Fernández Al-

barrán, los compungidos denunciadores sabían que algo andaba mal. No fue por la fría despedida. Al gobernador lo notaron preocupado con el documento en mano.

Para intentar que el gobernador comprendiera la gravedad del asunto y lo tuviera presente, documentaron el incremento a diversos impuestos locales, hasta en tres veces el porcentaje, excepto a “la clientela de sus establecimientos comerciales, principalmente en una agencia distribuidora de cerveza. Se ordenó el aumento de la carne de res, de cerdo, carne de pollo, la barbacoa, los refrescos y otras mercancías, con el pretexto de que se necesitan mayores ingresos para la construcción del rastro, lo que no se justifica, puesto que el dinero para esa obra ya fue aportado por los vecinos”.

Si pocos prestaron atención al pasado durante el accidentado proceso para imponer a Arturo Montiel Rojas como candidato y luego en unos muy inverosímiles comicios para glorificarlo a partir del 16 de septiembre de 1999 en la gubernatura, en 2006, cuando en México se pusieron serios reparos a su desempeño en el manejo de las arcas mexiquenses, el pasado se cubrió con otra pesada losa de olvido. Acaso lo recordaron en el encumbramiento de Peña y las cordiales palabras de Mónica Pretelini para dar acomodo y prestarle los respetos debidos a su “tío Gregorio”. El sólido principio de sumisión priista evitó sacar conclusiones. Los nombres del pasado se quedaron allí, acumulando más polvo.

Perdidas quedaron para siempre las imprecaciones y, paradójicamente, la alegría de la noche de aquel 16 de enero de 1968, cuando Gregorio Montiel se vio obligado a salir de su casa y recibir en pijama, como alcalde suplente para el trienio 1967-1969, la inesperada visita de una escandalosa comisión de regidores —encabezada por el síndico procurador Hermilo Monroy Pérez— con una encomienda de “extrema y urgente necesidad”, pero difícil de rechazar: a partir de ese momento debía juramentarse, tomar posesión como presidente municipal constitucional y terminar los dos años restantes de gobierno, porque el cabildo había aceptado la renuncia del alcalde titular Sergio Monroy Vélez.

Si hubo alguna maniobra para forzar la dimisión de Monroy u

otras situaciones anómalas, nunca se supo ni a nadie le interesaba aclararlo. Ni siquiera la curiosidad fue mala consejera para atisbar sobre lo que estaba pasando. A fin de cuentas, Gregorio —quien hasta ese momento no había tenido ningún cargo de esa importancia—, Hermilo y Sergio eran parientes cercanos. Los tres tenían una relación que rayaba en la camaradería. Ese lazo de amistad familiar se transmitiría a la siguiente generación Monroy-Montiel.

Cualquiera que haya sido su reacción y cualquiera la verdad sobre el cambio de poderes a esa hora de la noche, Gregorio Montiel, investido en pijama con todas las de la ley, la mañana del 17 de enero de ese año de 1968 empezó constitucionalmente a despachar en la alcaldía, a manejar un presupuesto de seiscientos veinte mil pesos para sus primeros doce meses, y de un millón de pesos para el segundo año y término de su gobierno. Su repentino nombramiento alivió las penurias familiares de don Gregorio, quien consolidó, por primera vez, sus operaciones financieras como distribuidor de cerveza en todo el municipio y un poco más allá. Le dio oportunidad de darse ciertas facilidades o permisos municipales e intentar quebrar a sus competidores y a aquellos establecimientos que no aceptaran precios y tarifas dictadas desde su pequeña oficina.

Pero la sociedad dio cuenta de su sentir ante el desempeño de don *Goyito* Montiel cuando aquel centenar de atacomulquenses entregó el amplio listado de las documentadas anomalías detectadas en el primer año de su gobierno. El asunto pasó inadvertido porque, para entonces —y los quejosos se llenaron de estupor—, un abogado llamado Arturo Montiel Rojas tenía la confianza ciega del contador público Juan Monroy Pérez —hermano del síndico Hermilo y sobrino del obispo Arturo Vélez Martínez—, uno de los colaboradores más cercanos al director general de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), Carlos Hank González. Y en los dos meses siguientes, este Hank sería impuesto (por las malas, bajo la vigilante mira de las bayonetas caladas de elementos de la XXII Zona Militar) como candidato cohesionador y de “unidad” del PRI a la gubernatura mexicana. Monroy sería su funcionario de mayor confianza —en 1969 fungiría como presidente de la legislatura— y Montiel Rojas lo sería

a su vez de este último, como secretario particular e incipiente socio empresarial.

Conocidos los deseos del señor presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, a través de Alfonso Martínez Domínguez, dirigente nacional de todos los priistas, Fernández Albarrán —quien mantenía a buen resguardo sus pecadillos por el libertinaje de sus funcionarios en el manejo presupuestal— se deshizo del “peligroso” documento de la denuncia pública.

Cansado, a sus sesenta y ocho años de edad, el gobernador y ex alcalde de Toluca tenía ganas de irse, terminar la fiesta en paz y pasar los siguientes ocho meses tranquilo. Jamás mostró interés en resolver aquella denuncia de corrupción. Para ser más precisos, quería evitar a toda costa que las nuevas autoridades investigaran su administración. No quería enemistarse con Juan Monroy ni con el secretario particular de éste. Su amistad y su parentesco eran conocidos.

Pero un indiscreto colaborador del gobernador recogió el documento acusatorio, lo filtró y lo hizo llegar a la redacción del *El Sol de Toluca*. Y la dirección del rotativo —el de mayor circulación en el Valle de Toluca y el de más influencia— lo analizó y decidió publicarlo en forma muy amplia en su edición del lunes 3 de febrero: “Atacomulco vive infierno con su alcalde”; según las acusaciones, “ha sido el más arbitrario del estado”.

No ocurrió nada. La justicia se quedaría esperando en el caso de Gregorio Montiel Monroy, como en el futuro pasaría con su hijo Arturo. Fernández Albarrán sería un Poncio Pilatos. Dado que sus bolsillos se vieron afectados, los atacomulquenses acusaron al alcalde de encarcelar, sin causas justificadas, a los habitantes de esa comunidad e imponerles multas elevadas, sin la emisión de recibos ni constancias. Acostumbrados a exigir cuentas del manejo del dinero público, también lo denunciaron por disponer, para cuestiones personales, de la tesorería, y “no se ha demostrado en qué invirtió más de medio millón de pesos, agregando que no rindió informe el 1 de enero anterior”.

Pero la sombra del *Profesor Hank* (y con él la de Monroy) fue suficiente para ignorar las acusaciones: la guerra por la candidatura para suceder a Fernández Albarrán había empezado en diciembre de 1968

y, en pleno Año Nuevo, el director de Gobernación estatal, Ignacio Pichardo Pagaza, abrió fuego para meter en cintura a los “acelerados”. Pero el “acelerado” era apenas el abogado y líder campesino sureño, ex diputado local y ex jefe de la policía política mexicana, Enedino R. Macedo, amigo personal del ex dirigente nacional priista Carlos Alberto Madrazo Becerra, único capaz de enfrentarse a Díaz Ordaz. A Macedo se le acusó de propiciar la indisciplina, agitar a los “bien portados” priistas y encrespar a novecientos diez mil electores mexiquenses.

Interpretando bien las señales enviadas desde la Presidencia de la República —remarcadas por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI— del rechazo abierto a todos los simpatizantes, seguidores o amigos de Madrazo Becerra, además del respeto de Díaz Ordaz a la memoria del extinto Fabela, a Fernández Albarrán le quedó clara la nominación de Hank. Sería éste su sucesor a partir del 16 de septiembre de 1969. No metió las manos ni intentó influir en el ánimo de Los Pinos. Los dos meses siguientes le darían la razón. El apellido Monroy se convirtió en un dique para atajar las denuncias contra don Goyo y permitirle a éste terminar su siguiente año sin intromisiones.

Zorro como era, Fernández Albarrán conocía bien a Juan Monroy: en 1965 se unió al *Profesor* como contralor general de Maíz Industrializado de México (MIMSA), donde dio muestras de saber cómo esconder el dinero y multiplicarlo. En el encuentro con Martínez Domínguez, también se enteró de que el tesorero de la campaña hankista sería el mismo Juan y que con éste llegaría su amigo y discípulo, el joven hijo del cuestionado alcalde de Atlacomulco.

El caso de las acusaciones presentadas por José Luis Cortés Trejo en 2005 tuvo un nuevo episodio durante el 2006. Cortés Trejo había documentado al menos ciento veintitrés propiedades a nombre de los Miranda Nava y Miranda Cardoso, pero que en realidad pertenecían a los Montiel. En el primer semestre de 2006 el seno del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI decidió proteger a Luis Enrique Miranda Nava, ex secretario de Finanzas y hombre cercano a Montiel, además de candidato a la alcaldía de Toluca. La ayuda sirvió de poco,

de nada, porque los electores lo castigaron. Perdió y fue afortunado porque “se cayó para arriba”. Las autoridades estatales lo arroparon con una exoneración y Peña lo reintegró a la nómina gubernamental en la Subsecretaría de Gobierno para más tarde incorporarlo a la Secretaría General de Gobierno, el segundo puesto más importante de la administración estatal.

Antes de que las autoridades federales emitieran cualquier opinión sobre esta otra denuncia de Cortés, el procurador Alfonso Navarrete Prida salió nuevamente al paso: la PGR sólo investigaba a funcionarios del fuero federal y, siendo Montiel un ex servidor local, su caso sería competencia de instancias estatales. De existir un ilícito, sería turnado, pues, a la Procuraduría General de Justicia del estado. Olvidó que la entidad pertenece a una república federal con leyes para cubrir todo el territorio, por tanto el caso Montiel podía en su momento ser también de incumbencia federal, sobre todo de Hacienda.

Cortés desconfiaba de la eficacia en las indagaciones de las instancias locales, ya que Navarrete había sido uno de los funcionarios de alto nivel durante el gobierno de Montiel quien, para el regidor perreñista, gobernó la entidad a la usanza del régimen autoritario priista. De hecho, Cortés relató sobre la respuesta del procurador: “Me atribuyó formar parte de una banda de narcotraficantes, como respuesta a las denuncias. [...] Denuncié, presenté pruebas documentales de los depósitos millonarios en bancos, y en dólares, del ahora ex gobernador, como evidencias de actos de corrupción, pero no prosperaron mis acusaciones. Nadie me hizo caso; en cambio, fui perseguido por haberme atrevido a difundir información de quien era poderoso e intocable. Pasé de acusador a acusado”.

La actuación de Navarrete tenía fondo: Montiel había rescatado a Navarrete —ex funcionario de la PGR acosado por señalamientos de venta de plazas en Chihuahua—, lo nombró subsecretario de Seguridad Pública en 2000 y procurador en 2001, e incluso lo consideró cuando llegó la hora de cambiar gobernador, pero se impuso la costumbre genética. Todo en familia. En septiembre de 2005, Montiel manióbró en su equipo para que Peña aprovechara un vacío legal y ratificara a Navarrete durante tres meses en el cargo, sin el aval de la legislatura.

Cuando Peña Nieto aún no terminaba de asentarse en la Casa de Gobierno, el Registro Público de la Propiedad se vio obligado a reconocer que la familia de su tío, el ex gobernador Montiel, sí era propietaria de ciento veintitrés inmuebles adquiridos por Miranda en años anteriores.

COBRO DE VIEJAS FACTURAS

Con el caso de las dos familias Montiel, el hostigamiento a Cortés Trejo, las interrogantes sobre gastos de campaña, el encarcelamiento de líderes comunitarios o el despido de profesores para evitar la formación del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM) —disidentes del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), uno de los brazos electorales del PRI que controla al menos a ochenta mil personas, incluidos sesenta mil mentores—, asomaron en Peña Nieto rasgos del presidencialismo que mantuvo el PRI durante setenta años.

Las actitudes que asumió ilustraron cómo se irían cobrando facturas de regímenes anteriores. Un sesgo grotesco revistió el caso del líder social Santiago Pérez Alvarado, quien vivió una bochornosa y violenta detención a las puertas de su casa en San Luis Mextepec y fue llevado al penal de Valle de Bravo. Se le acusó de robo al patrimonio del Programa de Apoyo a la Comunidad del gobierno estatal y de delincuencia organizada, aunque en las siguientes horas se descubrió que los delitos habían prescrito.

La jueza que llevó el caso se percató de la precipitación y el enorme desliz de la procuraduría, y ordenó liberarlo. Atragantada la justicia por la equivocación y el gobierno estatal con el honor mancillado por el intento fallido y la incapacidad del Ministerio Público, al día siguiente miembros de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) fueron a recapturarlo pasado el mediodía, justo a la hora en que lo liberaron, por una acusación pendiente en el distrito judicial de Temascaltepec, en cuyo penal lo recluyeron.

La saña con este hombre partidario de la no violencia represen-

to una ruptura del principio de legalidad. Su caso había enardecido al gobierno peñista. Con una acostumbrada entereza, campesinos e indígenas entendieron el mensaje del trasfondo político: atribuyeron la reclusión de ese 4 de julio de 2007 y la posterior del jueves 5 al hecho de haberse organizado para defenderse de las afectaciones por el avance de las obras del Sistema Cutzamala —suspendidas por la inconformidad social— y la consecuente explotación gubernamental en asociación con particulares, de los ríos y las presas en el sur del estado.

Tres años antes, en 2004, Santiago Pérez también asesoró a mujeres mazahuas, quienes ocuparon la planta potabilizadora Los Berros —desde donde se abastece veinticinco por ciento del agua potable de la Ciudad de México— para exigir indemnizaciones por la inundación de cuarenta y cinco hectáreas en 2003, causada por una inadecuada operación de la presa de Villa Victoria. Y, entre 1997 y 2001, fue eje de una lucha pacífica de ejidatarios de varias poblaciones, la cual terminó por descarrilar el proyecto turístico del centro internacional de esquí en el monumental Nevado de Toluca, único volcán en el mundo cuyo cráter se puede llegar en automóvil, aunque desde mediados de 2008 el acceso está cerrado para combatir la contaminación.

El gobierno montielista retomó el caso del centro de esquí alpino como ocurrió con el plan del fallido aeropuerto en Atenco, apostó al detrimento de las etnias de la región y al ocaso de los agricultores.

Santiago asumió la defensa de esos habitantes, pero aquel 5 de julio a las autoridades les ganó la paranoia y lo encarcelaron de nuevo basándose en una acusación de secuestro equiparado, presentada en 1999, cuando campesinos de San Pedro Tenayac retuvieron a dos ingenieros que, rompiendo el acuerdo verbal que se tenía con los afectados, realizaban trabajos en la cuarta etapa del Sistema Cutzamala.

En esas pequeñas poblaciones olvidadas, donde la honra y la dignidad son el mayor valor, habitan campesinos de carácter recio cuyo pasado, presente y futuro está ligado al agua y a la producción de sus tierras. Santiago ha tenido la oportunidad de convivir y trabajar al lado de estos grupos organizados de indígenas.

Así surgió la defensa del Nevado de Toluca o volcán Xinantécatl

que, con cuatro mil seiscientos noventa metros sobre el nivel del mar, posee una cautivadora belleza invernal. Pero, además, de sus entrañas se nutren múltiples afluentes. Las lluvias y el agua de los deshielos invernales representan desde hace siglos la principal fuente de dos de las más importantes cuencas hidrológicas mexicanas: del Lerma y del Balsas.

Y justamente en esa área de cincuenta y un mil hectáreas, declarada parque nacional desde enero de 1936 y situada cincuenta kilómetros al suroeste de Toluca, un grupo de empresarios de la política, apuntalados por inversionistas privados, pretendían construir el centro internacional de esquí, que contaría con tecnología para producir nieve artificial.

Por la escasa visión y un descuido gubernamental, el cambio de uso de suelo boscoso a ganadero y agrícola hace décadas perjudicó al volcán. Y sus notorios cambios climáticos —que causaron en años anteriores algunas avalanchas de agua y lodo— a la larga tendrán impacto en la Ciudad de México y el Valle de Toluca. El bosque languidecerá.

Las lagunas de El Sol y La Luna del Nevado, cada día más contaminadas y descuidadas, surten agua a municipios cercanos y nutren arroyos superficiales y subterráneos del Valle de Toluca, así como otros hacia el sur del estado, formando manantiales y otros cuerpos de agua esenciales para innumerables poblaciones, como el río Temascaltepec, luego Pungaranchó y Cutzamala antes de incorporarse al Balsas.

Los vestigios de la época prehispánica acentúan la importancia del lugar, sagrado para las culturas nahua, matlatzinca, mazahua y otomí. De manera que se trata de un entorno atractivo para la avaricia financiera y los inversionistas privados, quienes han pretendido, a través de esferas gubernamentales, despojar a los indígenas y expulsarlos de su tierra ancestral para llevar a cabo ambiciosos planes: ya fueran los “Alpes mexiquenses” en el gobierno de Carlos Hank González o el centro internacional de esquí en el de Arturo Montiel.

Este lugar iba a formar parte de un cinturón enmarcado en el Plan Puebla Panamá, y se podría llegar a él a través de una amplia red de autopistas de peaje que comunicarían a Acapulco, la Ciudad de México y Cuernavaca. También se contaría con una terminal aérea internacional en San Salvador Atenco, y el existente en Toluca para vuelos ejecu-

ivos. Así, la nieve estaría a cincuenta minutos de la capital del país, y las playas del Pacífico, a menos de tres horas.

Pero las maniobras gubernamentales dejaron al descubierto los manejos engañosos de esos planes. Como intentaron hacerlo en San Salvador Atenco para el aeropuerto internacional alterno al de la Ciudad de México, el último proyecto en el Nevado de Toluca considerada "comprar regalada" —a siete pesos por metro cuadrado— una superficie inicial de seiscientas hectáreas en los ejidos de Tlacotepec y San Juan Tilapa, en Toluca; Zaragoza, en Calimaya, y una parte de San Juan de las Huertas, en Zinacantepec.

Los habitantes se encontraban atrapados entre una espada gubernamental y una pared empresarial, la omisión de las verdaderas intenciones daría un efímero soplo de vida al centro de esquí alpino. Éste ocuparía cien hectáreas con una fuente inagotable de agua, otras cincuenta serían destinadas para lujosas villas habitacionales —incluidas cocinas, condominios, hoteles de cinco estrellas, restaurantes— y cuatrocientas para el fraccionamiento residencial, su campo de golf de dieciocho hoyos, exclusivo club de tenis, centro cinegético, zonas deportivas, club hípico y un centro corporativo de convenciones empresariales que ocuparía unas cincuenta hectáreas. En este hipotético escenario, todos podrían dormir con tranquilidad.

Visto en papel, el proyecto sería uno de los más novedosos y fantásticos de México, superior a cualquier otro desarrollo turístico invernal. El cráter y sus lagunas serían privatizados. Para tratar de suavizar el despojo del patrimonio de los indígenas y los ejidatarios, algunos afectados serían ocupados como peones y albañiles en las etapas de construcción. Carpinteros y herreros también tendrían trabajo temporal. El gobierno se encargaría de las carreteras de acceso.

Al final, muy pocos contarían con empleo estable, sólo como jornaleros, barrénderos y mozos de limpieza que estuvieran en una estructura mínima necesaria para dar salida a cualquier eventualidad legal o satisfacer algunas demandas básicas por las afectaciones. El resultado final sería un volcán lleno de agua y de propiedad privada.

Las mismas autoridades rompieron el encanto porque no hubo estrategias claras para incorporar a los desplazados al aparato productivo.

vo y proporcionarles vivienda, educación o salud. Por otro lado, fueron confusos los detalles por la excentricidad de la nieve artificial para atraer a una clientela ávida de practicar deportes invernales en México o a turistas extranjeros, pues el negocio no serían los teleféricos ni las kilométricas pistas de esquí. Así que los afectados descubrieron un día el trasfondo de los planes: el terreno accidentado y su escasa longitud no serían atractivos para los ocho mil quinientos esquiadores que se decía que acudirían diariamente en la temporada alta, de noviembre a febrero, y por lo tanto, en el proyecto alpino subyacía un negocio encubierto para revender las hectáreas arrebatadas, aunque ya convertidas en lujosas zonas habitacionales y desarrollos ejecutivos al estilo de Santa Fe —en el poniente del Distrito Federal— e Interlomas —en el municipio mexiquense de Huixquilucan—, pero libre de contaminación y a hora y media de la Ciudad de México. Nadie sabe cómo empezó, pero teniendo cerca al rico municipio de Metepec, donde el metro cuadrado llega a superar los dos mil dólares, el negocio de la especulación inmobiliaria habría sido magnífico.

Con la dignidad herida por el nuevo engaño, sin descuidar la preparación de sus tierras para la siembra, los indígenas empezaron su lucha con sólidos argumentos culturales (desechados de antemano por las autoridades). Un movimiento de supervivencia los hizo recurrir a la razón para demostrar que, con el proyecto del centro internacional o de los “Alpes mexiquenses”, serían condenados a emigrar sin ninguna clase de sustento y, por último, a desaparecer.

Cruzado ese camino sin regreso, solicitaron la asesoría de Santiago y probaron lo incosteable de producir nieve artificial. Más aún, demostraron que, de darle el visto bueno, el proyecto provocaría que en unos años (veinte) se desecara La Luna, cuyo nivel de agua ha descendido cerca del treinta por ciento en los últimos tiempos. Atribuida a los pequeños cambios climáticos por la destrucción del hábitat, en El Sol se ha reportado una disminución del siete por ciento.

Sin que nadie se lo solicitara, los indígenas se encargaron de justificar la inviabilidad de la vida humana permanente a casi tres mil ochocientos metros de altura sobre el nivel del mar —punto en el que se proyectaba construir la primera villa alpina mexicana—. Acaso ten-

eran cabida, como ocurre desde hace décadas, campamentos temporales para deportistas de alto rendimiento.

En el último trimestre de 1995, cuando Hank intentó hacer realidad uno de sus más estrambóticos caprichos con los "Alpes mexiquenses", los afectados acreditaron que heladas sin precedentes quemaron sus cultivos de papa, chícharo, maíz, haba, calabaza y lechuga. Nadie sabe si los experimentos para producir la nieve o el cambio climático por la deforestación las causaron, pero el desastre y las pérdidas dieron origen a un organismo integrado por campesinos de Amanalco, Zinacantanpec, Calimaya, Villa Guerrero y Temascaltepec.

Preso en la cárcel de Temascaltepec, el 11 de julio Santiago Pérez, abogado por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) —especialista en derecho legislativo y diplomado en temas de agua y desarrollo—, recapituló sus experiencias. En esa época les presentó un proyecto de defensa que contemplaba derechos humanos, recursos naturales y cultura. No necesitaban un abogado porque no era un asunto de juzgados ni de tribunales, y aún no había decretos de expropiación. Formaron el comité Alas, con representaciones de prensa, organización, financiamiento, seguridad, contacto con otras organizaciones y asesores para denunciar al Grupo Arfra, impulsor del proyecto. Ya se estimaba necesaria una inversión de ciento cincuenta millones de dólares, pero, ante los documentos y los estudios de los indígenas, el dinero nunca llegó.

Otro movimiento fue la resistencia civil pacífica del Comité por la Defensa de los Recursos Naturales del río Temascaltepec, formado por habitantes de comunidades del sur de la entidad. Se le sumaron opositores de Guerrero y Michoacán a la construcción de la presa El Tule, en la zona de San Pedro Tenayac, Temascaltepec, que buscaba captar el agua de ese río, fundamental para las actividades productivas de la región, y conducirla hasta la planta potabilizadora de Los Berros (considerada la más grande del mundo), como parte de la cuarta etapa del Sistema Cutzamala, para bombearla a su vez a la zona metropolitana de la Ciudad de México.

El contexto de esa lucha suscitó el posterior encarcelamiento de Santiago. Mientras se entablaba el diálogo con representantes federa-

les y estatales, las obras de construcción de la presa se mantuvieron en agenda, lo cual llamó la atención de los campesinos, que se sintieron burlados. Enojados, bloquearon caminos y retuvieron a los dos ingenieros para exigir la presencia de una autoridad superior.

En una etapa del proyecto, los estudios de Santiago también revelaron que, a través del plan Cutzamala, el gobierno y un grupo de empresarios pretendían formar un complejo sistema de suministros entre las presas conocidas como Aguas Arriba y Aguas Abajo (El Tule) y la de Valle de Bravo, y crear un circuito de conjuntos residenciales de primer nivel. Pero este otro proyecto ocultaba el interés en explotar los minerales de la región. El agua se enviaría de la presa El Tule a la de Valle de Bravo a través de bombeo permanente, y de Aguas Arriba, el líquido llegaría por gravedad y daría más vida a la zona de Valle de Bravo, controlada por los dueños del dinero del centro del país y algunos políticos prominentes. La oposición campesina echó por tierra esos negocios, excepto el club de golf.

A través del segundo proyecto —dijo Pérez Alvarado—, “se pretendía construir una cortina [de agua] que inundaría cuatrocientas hectáreas de tierra de pino, encino y una parte de selva alta caducifolia; tierras con una belleza escénica envidiable [...]. En tierras cercanas a la presa El Tule —que serían entregadas a gente de poder— se planeaba un desarrollo turístico similar al de Valle de Bravo, pero con mejor clima. Eso no era todo: a la salida del túnel estaba proyectado un conjunto residencial con club de golf. La salida del agua daría un plus al desarrollo, pero cuando se denunció el hecho, el proyecto empezó a perder fuerza”.

El 5 de febrero de 1996, quienes no vendían sus tierras para el Cutzamala y rechazaban el centro de esquí se reunieron en el pueblo de La Comunidad con los afectados por el avance de las obras del Cutzamala y formaron el Comité para la Defensa de los Recursos Naturales del Xinantécatl y del río Temascaltepec. Eso atizó las cenizas, pero la llama se reavivó ante el rezago y la falta de pago de indemnizaciones por los daños que la construcción y operación del Sistema Cutzamala causó a tierras y cultivos en poblados de Villa de Allende, Villa Victoria y Donato Guerra. En zonas contiguas a la planta pota-

bilizadora, y con la asesoría de Santiago, se creó el Frente Mazahua para la Defensa de los Recursos Naturales.

Santiago llegó como asesor en 2003, y en 2004 se aceptó su plan de acción. Pero en abril de 2005 decidió retirarse porque algunos líderes campesinos se vendieron a las autoridades. Antes del retiro —para unirse y asesorar al Movimiento Mazahua, el de las mujeres—, él y sus representantes solicitaron el resarcimiento de daños, proponiendo un proyecto de desarrollo integral sustentable y la dotación urgente de agua. Al no obtener respuesta, la petición se transformó en una exigencia mediante acciones de resistencia pacífica, con rifles de madera en mano, que obligaron al gobierno a volver la mirada hacia ellos, su pobreza, falta de servicios y de oportunidades. Hubo beneficios mínimos, de limosna. Sin embargo, operadores de los gobiernos federal y estatal impidieron al movimiento y le echaron el guante a su asesor.

Como se narró líneas arriba, el gobierno no actuó sino hasta ese miércoles 4 de julio de 2007 en que, antes del mediodía, el defensor de indígenas y campesinos fue arrestado en la puerta de su casa. Al margen de la violenta detención, los agentes remitieron a Santiago al Juzgado Primero de lo Penal a cargo de Porfiria Libertad, bajo la causa 103/2000. Le imputaron robo con violencia en agravio del gobierno estatal, así como delincuencia organizada, cuando en el año 2000 era candidato a diputado por el distrito XXIII de Santo Tomás de los Platanos. En el auditorio municipal y en el Convento de las Carmelitas de este lugar, él y un grupo de campesinos habían descubierto cuarenta toneladas de cemento que la diputada Donaldda Cardoso iba a repartir para condicionar el voto a favor de los candidatos del PRI en 2000. Ante tan burda maniobra, Cardoso fue inhabilitada durante siete años para ocupar cualquier cargo estatal.

Santiago y los campesinos impidieron que ese material fuera repartido antes de los comicios, cosa que no le perdonaron. El gobierno tardó siete años en armarle un expediente.

Al otro día, a la una de la tarde del 5 de julio de 2007, lo arrestaron de nuevo en cuanto lo liberaron de Valle de Bravo. Se olvidaron de aquellos materiales y se lo encargaron a la jueza Primera de lo Penal en Temascaltepec, Marisela Rosales García, bajo la causa 130/1999.

Con esa acción, el gobierno mostró su enojo. Marisela Rosales es una jueza dura. Tiene fama desde hace tiempo, pues a ella llegan los “enemigos” del gobierno estatal. Para empezar, a Santiago le atribuyeron el delito de secuestro equiparado y, ya encarcelado, le “recordaron” la acusación del 7 de septiembre de 1999 por los hechos en Tenayac, cuyas víctimas habían sido dos ingenieros supervisores retenidos por los campesinos. Tres días después se le dictó auto de formal prisión y se fijó fecha para la primera audiencia y desahogo de pruebas.

Abierto como es, Santiago les recordó entonces a los reporteros: “Para la primera acusación, una juez federal me amparó”. Lentas, las autoridades descubrieron el amparo o lo pasaron por alto a propósito. El día 5, el juzgado penal de Valle de Bravo se vio obligado a liberarlo de inmediato. Pero, avisada la justicia del error por el mismo Santiago, fuera del penal ya lo esperaba un contingente de granaderos, apoyados por agentes de la Policía Judicial. Recibió trato de terrorista.

“Yo fui quien les dijo que habían recurrido a una causa en la que el asunto estaba terminado y sugerí recurrir a la causa I30/1999 por los hechos de Temascaltepec y donde soy señalado injustamente. El mismo día 5, un comandante de la Policía Judicial pasó a recoger la orden de captura al Juzgado Penal de Temascaltepec, él me lo dijo en mi traslado.” Tres meses lo dejaron preso.

Capítulo III

Secreto de Estado

LO QUE ESTABA POR LLEGAR en la apuntalada precandidatura presidencial de Montiel con el bloque Todos Unidos Contra Madrazo (Tucom) —o cinco gobernadores contra Roberto Madrazo Pintado—, así como la discreción y la sofisticación del abuso de recursos para imponer a Enrique Peña Nieto, tenían un propósito. Después de todo, no se trataba de un desconocido militante paraxista, sino del sobrino y discípulo político de Arturo Montiel. Una cuestión tan personal debe verse con otros ojos, al margen de la seducción dinástica y la visión de aquella hechicera.

Cumplido su sexenio, Montiel no quería dejar cabos sueltos si, por alguna razón ajena a sus capacidades, no llegaba a la Presidencia de la República. Y el velo del doble misterio lo recorrió el periodista local Jorge Díaz Navarro: Montiel necesitaba márgenes sólidos de seguridad personal y familiar. “No buscó garantizar la continuidad de programas y menos de progreso social y económico, porque no logró concretar ninguno. Fue también una proyección para dimensionar su influencia más allá del tiempo y la geografía, bajo el expediente de encumbrarse como segundo presidente de la República oriundo del estado o, en realidad, el primero, si se toman en cuenta las persistentes dudas sobre el lugar de nacimiento de Adolfo López Mateos.”

Tratando de omitir los señalamientos sobre su fortuna, Montiel creía tener los argumentos para aplastar a Madrazo, porque éste no comprendió a cabalidad los cambios políticos operados en el país con la derrota de Francisco Labastida Ochoa seis años atrás, cuando se dio el asenso de los neopanistas con el guanajuatense Vicente Fox Quesada.

Sin embargo, el mexiquense ocultó secretos oscuros y, como su rival, desdeñó sus derroches tras su caprichosa boda con Maude Versini, antecedida por las modificaciones exprés al Código Civil y los constantes rumores de anomalías sobre su divorcio con Paula Yáñez Villegas, porque el electorado asumió como verdad aquella compensación de diez millones de dólares salidos de las arcas públicas para firmar la separación, sospecha inequívoca de pérdida de juicio de su gobernante.

Las precisiones de Díaz Navarro, maestro de dos generaciones de periodistas en Toluca, se perderían en 2005 en un libro inédito al que, por el control gubernamental sobre asuntos impresos y sus efectivos métodos de censura, muy pocos editores locales le prestaron atención. En doscientas setenta y cinco páginas, dejó constancia sobre los porqués del ascenso de Peña Nieto: en la agenda de Montiel no cabía nadie más porque, de lo contrario, corría el riesgo de que el sucesor lo llamara a cuentas y le fincara responsabilidades. El sobrino representaba seguridad, así que también contó con el apoyo de Maude Versini.

Desde su primer encuentro con la entidad, esta mujer decía en público menos de lo que quería. También hacía más de lo que se notaba. Desde el fondo del alma, anhelaba llegar del brazo de su esposo a la Presidencia de la República, porque de veras estaba convencida de la omnipotencia de Arturo Montiel en la vida política nacional. Su influencia sobre él convirtió la toma de decisiones en un acto íntimo de intrigas nacidas dentro de la Casa de Gobierno en el Paseo Colón—aunque eso terminaría por condenar a ambos—. Maude se veía recibiendo las llaves de Los Pinos, despidiendo a Marta Sahagún.

Como a una princesa llegada de París, le inventaron historias, muchas de ellas ciertas, y le atribuyeron también, a veces sin razón, la autoría intelectual de un buen número de las purgas y los cambios constantes en el inestable gobierno. Desde que convenció a Montiel de separarse y luego divorciarse de Paula, Maude no era un ente lejano. Ese error de subestimarla no debía pasarse por alto, como aquel que cometió una tarde el líder priista Pastor Medrano al calificarla como una “prostituta cara” o una “madame de altos vuelos”, aunque éste contó a sus amigos que lo había dicho de otra manera: “Con todo respeto, señor gobernador, cómo anda usted con ésa.”

Sin que él se diera cuenta, Maude lo oyó cuando entraba a uno de los salones del Palacio para saludar a Montiel. Aquellos calificativos, sumados a otros por el estilo, les costaron muy caro a muchos. Ella se los cobró con toda puntualidad. Otros personajes más intuitivos y educados, como Peña Nieto y el procurador Navarrete, supieron interpretar la personalidad de la ambiciosa mujer, optaron por adularla y de esa manera pudieron sortear con éxito los peligros de la administración.

Ella, que cautivó a Montiel, pero antes a los hijos de éste, porque primero salió con uno de ellos, “no era hermosa, pero tenía algo en su presencia y sus bellos ojos pardos con cejas perfectas o la protuberancia ideal de sus pechos, sus labios bien simulados, su cuello amplio y sus pómulos rosados”, como lo señalaría Jorge Toribio el día que la conoció en una fiesta y la vio acompañada por su primo Arturo Montiel Yáñez. Fueron extrañas las circunstancias de su repentina aparición en la entidad, su amistad, su romance, las dudas sobre su supuesta carrera periodística en medios de Estados Unidos y Francia —que los reporteros toluqueños nunca pudieron comprobar— y las versiones sobre la empresa de acompañantes profesionales que la contrató para venir a México a entretener a gobernadores y políticos.

Periodista o acompañante, francesa encantadora súbitamente convertida en sólida empresaria, especialista en el sector inmobiliario, nueva millonaria, mexicana por adopción y la persona de mayor influencia en la oficina del gobernador, supo adaptarse bien al poder para ayudar a entretejer la candidatura presidencial montielista y encaminar la de la gubernatura que se le concedería al sobrino consentido de su marido. Con su influencia, la estructura burocrática mexiquense se abrió a políticos de todo el país, quienes propiciaron el cambio de más de seiscientos funcionarios, de secretarios a subsecretarios y subdirectores de área.

Para que todos sus amigos entraran en la nómina o para “taparles” la boca a sus familiares, durante su gobierno, del 16 de septiembre de 1999 al 15 de septiembre de 2005, Arturo Montiel puso en marcha una estrategia muy rentable de silencios, haciendo del estado un refugio priista. Y no fue una sorpresa, porque hizo partícipes de sus sueños presidenciales a huraños y nostálgicos desempleados del gobierno

federal luego del triunfo de Fox en 2000. Imbuido por aquella regla no escrita de que los secretos no salen de la familia, porque “la ropa sucia se lava en casa”, no le importó aumentar la nómina de confianza en más de tres mil quinientas plazas ni concretar los mencionados más de seiscientos cambios de funcionarios.

En la nómina se tejía la estructura de un comité de campaña para buscar desde el Estado de México el regreso del PRI a Los Pinos. Con la billetera abierta del gobierno estatal, a través de su operador político y paisano atlacomulquense Isidro Pastor Medrano, Montiel encontró salidas negociadas a cada uno de los problemas que le planteó, aun antes de su llegada, la Cámara de Diputados, controlada por el PAN y el PRD. A través de curiosas e indiscretas compensaciones, Montiel pudo tomar posesión en septiembre de 1999 a pesar del fraude con el que derrotó a su rival panista José Luis Durán Reveles, quien nunca se preparó para defender su triunfo, pero tampoco nunca confió en ganar; además, se integró muy a modo un Instituto Electoral Estatal, de la mano de Pastor Medrano.

Acentuada con la muerte de Carlos Hank González, ocurrida el 11 de agosto de 2001, la anarquía fue la carta de presentación de Montiel. En el más descabellado de sus arrebatos a una clase política acostumbrada a comer de la mano del *Profesor* y luego manejada por la muy dura de Chuayffet, Montiel dio un golpe magistral al hacerse del liderazgo del priismo mexiquense, poner en marcha una campaña eficaz para exterminar a sus rivales y crear una nueva clase política encabezada por Enrique Peña Nieto, Miguel Sámano Peralta, Carlos Iriarte Mercado, Luis Enrique Miranda Nava y Carlos Rello Lara, conocidos como los originales *Golden Boys*. Después se sumarían los llamados *Golden invisibles*, como Carlos Díaz de León, responsable del programa y equipo de espionaje.

En los seis años de Arturo, desfilaron por los pasillos del Palacio ex gobernadores, ex funcionarios o ex aspirantes a la Presidencia de la República, como el sinaloense Francisco Labastida Ochoa, aunque al cabo de unas semanas a éste no le gustaron los modos ni las precipitadas aspiraciones de Montiel. O no les encontró la forma, sobre todo cuando “casualmente” empezó a aparecer por el estado la imagen del

ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien seis años después llegó muy puntual a las exequias de Enrique Peña del Mazo (padre del ya gobernador Peña Nieto) y luego al velorio de Mónica Pretelini Sáenz de Peña, sin contar sus visitas secretas a la Casa de Gobierno, o las públicas, como su asistencia a la toma de protesta de Peña Nieto. Labastida decidió renunciar y buscar un escaño en el Senado.

La nómina estatal también acogió a ex rectores y a ex funcionarios locales. La rotación se volvió constante, según los humores montielistas, y más tarde, según las necesidades y los caprichos de Versini. Ésta empezó a realizar sus actividades desde la oficina estatal del DIF, de la cual era titular, y desde la Casa de Gobierno, imponiendo un ejército de personas "adictas" a su persona a fin de tender los cercos que terminarían por contener las ambiciones de Pastor por la candidatura para gobernador, así como las de los empresarios que presionaban para que el candidato fuera el magnate Carlos Hank Rhon.

Al despuntar su llegada en abril de 2002 y salir a la luz pública su nombre en mayo, Maude sería todopoderosa. No se conformaría con el papel decorativo de dama de compañía del gobernador ni asumiría solo el nombramiento oficial como primera dama responsable del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) con sus obras de caridad. Un día después de que un grupo de enviados desalojó las oficinas que hasta junio de 2002 pertenecieron a su antecesora y ex esposa de Montiel, Paula Yáñez Villegas, su marido le otorgó un salario promedio de ciento veinte mil dólares anuales, el equivalente a un millón doscientos mil pesos con el tipo de cambio de ese momento.

Desde las oficinas del DIF colocó los cimientos de su poder y se hizo de buenos e influyentes amigos. La sede de los programas de atención a la niñez y a los mexiquenses más necesitados se convirtió en una especie de ministerio con influencia en todas las secretarías de gobierno, una "vicegubernatura" con todos los poderes que le daba su relación con Montiel, por más que algunos funcionarios muy allegados a éste vieran en ella a una europea advenediza y su mejor recuerdo fuera aquella noche del 15 de septiembre, cuando apareció enviada con un vestido que no dejó nada a la imaginación de funcionarios e invitados especiales que acompañaban a Montiel a la ceremo-

nia del Grito de la Independencia desde el balcón central del Palacio de Gobierno.

Fue revelador su debut en las grandes celebraciones. Políticos, empresarios, periodistas, jóvenes y funcionarios hicieron su noche con el tremendo escote (de talle cortísimo, casi a la cadera) de aquel entallado vestido rosa. Ahí estaba el nuevo germen de la vitalidad de Arturo. Maude realzó su natural garbo y elegancia, pero su sonrisa indefinida y enigmática le dio un sello de personaje distante y con un toque superior, muy francés. Desde luego, muy pocos repararon en las costosas joyas que adornaban la desnudez del cuello de la primera dama. Y por si no hubiera bastado su presencia en el amplio Salón del Pueblo, ahí se encontraba también Delphie, la hermana menor de Maude, luciendo una cortísima minifalda negra y unas larguísimas y torneadas piernas. La indignación de Arturo por la escena del escote y la minifalda fue visible por primera y única vez en público, aunque poco a poco recobró la calma y guardó la debida compostura. Lo cierto es que él había quedado prendado de la lozanía y la vitalidad de Maude, que era treinta años menor que él.

Así pues, en forma disimulada, esta "refinada" francesa halló rápidamente el camino para acelerar los cambios de gobierno que, a partir de esa fecha, se sucederían en forma vertiginosa.

Tejida al mismo tiempo la estructura paralela para su candidatura presidencial, Montiel tenía en el presupuesto —usado a discreción— el medio más idóneo para allanar obstáculos y comprar fidelidad. Fue muy generoso con los partidos políticos opuestos al PRI a fin de manejar una "dominación pactada". Pero era urgente empezar a ocultar los boquetes que se abrían en el presupuesto, los cuales, a la larga, serían el mayor impedimento en su carrera presidencial. Y es que sirvieron, ciertamente, para mejorar la posición económica del gobernador y cumplir las exigencias cada vez mayores de su mujer. Jurada la felicidad eterna, de inmediato Maude les puso nombre a sus sueños y, aunque no faltaron los malintencionados que vieron la noticia con otros ojos, los de la desconfianza, le dio dos hijos a Arturo Montiel. Unos gemelos.

Lo hizo rejuvenecer. Incluso, antes de quedar embarazada, lo convenció de hacerse un cambio de imagen. De modo que por primera vez

se emblanqueció y emparejó la dentadura. También recurrió a estilistas franceses para arreglar su peinado, y durante un tiempo hasta se lo tiñó de color pardo. El mayor cambio se le notó en la voz. Antes de la llegada de Maude, aun durante su campaña para la gubernatura, poco se entendía de lo que hablaba, pues poseía una voz entre cavernosa y ronca, un problema que había padecido desde la infancia. Se especulaba que tenía cáncer en la garganta. Pero un día viajó a Estados Unidos y regresó con nuevo timbre de voz. Perdió para siempre el peculiar tono pastoso que lo identificaba con su padre Gregorio.

Investigadores y académicos advirtieron que el cambio permanente de personal en la administración montielista propició la falta de continuidad en los programas de gobierno, aunque Montiel pudiera atender a su clientela a través de un manejo discrecional de las nóminas del gobierno central.

Como se dijo antes, en marzo de 2004 —a casi dos años de la llegada de Maude y a nueve meses del destape de Peña—, el vivo retrato de dicha inestabilidad era el hecho de que en el gobierno estatal se habían creado unas quinientas unidades administrativas, cada una de ellas con unos siete funcionarios de diferentes jerarquías. Esto se tradujo en la contratación de unos tres mil quinientos (nuevos) empleados en el servicio público, de acuerdo con observaciones que hizo en su momento Cecilia Cadena, coordinadora de investigación de El Colegio Mexiquense y doctora en ciencias políticas y sociales por la Universidad Complutense de Madrid.

Desde los inicios de su sexenio, ya se notaban los impulsos y claroscuros montielistas. El 16 de septiembre de 1999, el doctor Alfonso X. Iracheta —presidente de El Colegio Mexiquense— fue nombrado subsecretario de Educación. Ese día, la subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, Arlette López Trujillo, fue degradada a la Dirección del Colegio de Bachilleres. Especialista en temas de reordenación urbana, el investigador se jugó su futuro académico al declinar el cargo por motivos personales. Por su parte, Arlette agradeció el honor conferido por el nuevo puesto, pero tampoco lo aceptó.

Es difícil imaginar un rechazo al gabinete y sustraerse de sus “leyes de atracción”, pero para evitarle vergüenzas al gobernador, o de plano debilitarlo desenmascarando su impericia y carácter impulsivo, su equipo maniobró, deshizo los entuertos caprichosos del jefe, movió hilos y se echó la culpa. Pasadas las horas amargas de los recién llegados, Iracheta firmó su deceso político, conservó su puesto en El Colegio hasta cumplir el plazo para el que fue nombrado y luego nadie se acordó de él. Con el tiempo se convertiría en uno de los mayores críticos al proyecto del aeropuerto de Texcoco. La subsecretaria López Trujillo se hizo la interesante; al equipo de Montiel lo sedujo su rechazo; recordaron su experiencia como directora de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) en Iztacala, conservó su trabajo como subsecretaria y se metió en las voluntades de Montiel.

Tratándolos como marionetas que estuvieran en sus manos, en las de su mujer o en las del presidente del PRI estatal (Pastor Medrano), Montiel advirtió y apenó a sus funcionarios cuando señaló en una entrevista: “Si en las próximas dos horas se me ocurre hacer un cambio, lo voy a hacer”, o “a mí no me tiembla la mano para quitar y poner”, y así lo hizo durante todo su gobierno. Un secretario de Ecología (Alfredo García González) le duró apenas dos quincenas. Sus palabras no necesitaban interpretación. De septiembre de 1999 a junio de 2004, cuatro personas pasaron por el despacho de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Para entonces, cuando promediaba un cambio en el gabinete cada dos meses —lo cual contribuyó a encubrir la protección a Peña Nieto—, al menos seis funcionarios pasaron por la Coordinación General de Comunicación Social.

Con el riesgo de firmar su paso a las defunciones políticas si llegaban al círculo ejecutivo de colaboradores, algunos amigos de Montiel rayaron en el cinismo, pues estuvieron dispuestos a cobrar, aunque fuera unos meses, en las secretarías o subsecretarías de Estado. Ocurrió hasta con su paisano Mayolo del Mazo Alcántara, investido como secretario de Agricultura, pero que desde el principio apoyó al rival de Montiel, el texcocano Humberto Lira Mora. Poco duró; el gobernador le dio las gracias y desapareció de la administración pública.

Todos, incluido Peña Nieto, que se había convertido en un políti-

co "multichambas", fueron parte de las contradicciones y de las intrigas montielistas. Extraños o poco claros tantos cambios —porque mostraban la falta de estrategia para desarrollar e impulsar políticas públicas—, el cinismo abrió paso al humor grotesco y llegaron las quinielas al estilo deportivo: con tres remociones de titular aparecieron siete secretarías de Estado (Comunicaciones, Desarrollo Económico, Ecología, Educación, Desarrollo Metropolitano, Desarrollo Social y la Contraloría). Con dos, la del Trabajo y Previsión. Las menos inestables fueron Finanzas y Salud, aunque sus titulares tampoco se salvaron. El único que se mantuvo durante los seis años fue Manuel Cadenza Morales, secretario de Gobierno y, por lo tanto, responsable de apagar los fuegos internos del descontento social.

Un punto tenían claro Montiel, Maude y Pastor: la estrategia para dirigir al país implicaba seducir a ex gobernadores, hombres de diversos grupos y, por lo mismo, con contactos políticos fuera del Estado de México, incluso en el extranjero. Así, cortejaron al salinista Otto Granados Roldán, ex gobernador de Aguascalientes, quien apoyaría en los trabajos de imagen y comunicación. A su paisano Del Mazo González, titular de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, lo nombraron, en 2001, presidente del Consejo Consultivo para la Protección y Aprovechamiento de los Mantos Acuíferos; luego lo llevarían a ocupar un curul en la Cámara de Diputados federal, aunque fuese de representación proporcional.

A raíz de esos cambios rodaron las palabras *inestabilidad*, *falta de continuidad*, *sucesión adelantada* y *clientelismo* del futuro precandidato presidencial o de su esposa Versini. Desde la mayoría de los medios locales controlados por la publicidad gubernamental germinó la semilla de la inquietud. Cuando la pareja Montiel-Versini aún contenía sus ambiciones de llegar a la Presidencia y podía manipular a Pastor Medrano, este puso en marcha un programa para convertir a su jefe en el coordinador de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) o, al menos, de los gobernadores priistas.

También fue contratado el ex director general de Pemex, Mario Ramón Beteta Monsalve, doctor en economía, formado en el sector

público como secretario de Hacienda con el presidente Luis Echeverría Álvarez, y que antes había pasado por una subsecretaría de esa dependencia, la Dirección General de Crédito y una subdirección del Banco Central o Banco de México (Banxico). Beteta fue degradado cuando Carlos Salinas de Gortari ganó los comicios con el primer fraude cibernético, el cual dejó fuera a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, al panista Manuel J. Clouthier y a la activista Rosario Ibarra de Piedra. Salinas lo obligó a renunciar como gobernador del Estado de México en septiembre de 1989, antes de cumplir dos años en el cargo. Montiel nombró a Beteta presidente del Consejo Consultivo Económico, organismo que duplicaba o triplicaba funciones de la Secretaría de Desarrollo Económico y otros organismos similares.

En ese desorden, algunos funcionarios se apuntaron en 2004 para sustituir a su jefe: de la mano de la Versini llegó como puntero el procurador Alfonso Navarrete, seguido por el líder estatal priista Isidro Pastor y por el secretario de Gobierno, el texcocano Manuel Cadena.

Por su historia modesta, porque pocos se fijaron en sus antecedentes familiares, porque todavía menos hicieron notar su ascendencia directa con cinco ex gobernadores, porque la mayoría cometió el error de verlo como el subordinado y eterno sumiso sobrino de Montiel, porque nadie lo tomaba en serio —excepto su amigo y camarada Luis Enrique Miranda, el secretario de Finanzas y negociador inmobiliario del gobernador—, el ascenso de un opacado Enrique Peña Nieto fue silencioso y discreto. Pocos se enteraron de aquel día en que hizo compadre de grado a Montiel. Su silueta era borrosa y quienes se dirigían a él buscaban acercarse a Montiel. Ni a los atlacomulquenses les decía nada el nombre, excepto que era el hijo del ingeniero Peña del Mazo y de doña *Socorrito*.

Sin embargo, las condiciones para el anonimato no siempre resultaron negativas, porque le fueron propicias para evitar el golpeteo interno de Pastor, Navarrete y de otros aspirantes visibles, como el empresario Carlos Hank Rhon. Principalmente, alejado de las miradas indiscretas y sin un perfil delineado en la sucesión, quedó a salvo de la contaminación representada por el líder nacional priista, Roberto Mardrazo Pintado.

Cuando en enero de 2005 Peña presentó su registro como candidato único del PRI a gobernador, llevaba casi dos décadas en el sector público y adoptó una nueva actitud; el joven atacomulquense egresado de la Universidad Panamericana (UP) en la Ciudad de México era desconocido de una familia política cuyos secretos son la disciplina, la unidad, la lealtad y el silencio. Su meteórico ascenso desde la secretaría particular hasta una secretaría de Estado y luego a la presidencia de la Cámara de Diputados impresionaba a muy pocos, aunque era el hombre más ilustre del gobierno.

Revisando el acopio de apellidos de la "realeza" en la gubernatura él los reunía todos desde 1942. Ninguna estirpe lo podía igualar, ni siquiera la directa de los Del Mazo ni la del multimillonario Hank. Cualquiera que haya sido su imagen, una mirada a la historia de sus apellidos habría servido como una señal irrevocable del estilo Montiel. Peña estaba metido en la pelea desde el primer minuto del 16 de septiembre de 1999. El lazo de sangre bastaba para darle reconocimiento. Y, en uso de ese derecho, debía ser el heredero del imperio familiar y de la vocación dinástica del grupo en el poder. La opacidad lo condujo al éxito.

No obstante, Peña era un político sin dinero para financiar una campaña en la que, además, se encontraba muy por debajo de su rival panista Rubén Mendoza Ayala. Su padre, el ingeniero Enrique Peña del Mazo, funcionario de mando medio, laboró durante décadas en la Comisión Federal de Electricidad, tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México. No era millonario. Su mamá, Socorro Nieto Sánchez, provenía de una familia con más recursos; el padre de ésta había sido alcalde de Atacomulco y próspero comerciante. Tuvo negocios en Toluca, entre ellos una concesión de Pemex. Con todo, no era suficiente para cubrir los gastos de una campaña.

Peña Nieto tampoco contaba con capital para hacer su propio grupo, pero tenía otras virtudes igualmente valoradas, como la cercanía y la lealtad, que supo capitalizar para convertirse en gobernador. Aunque su padre no compartía el mismo entusiasmo, esas cualidades se le arraigaron a Peña Nieto gracias a la influencia de Maude.

En esta sucesión de apellidos ilustres y su "predisposición genéti-

ca” a perpetuarse, la falta de memoria política ocultó el encubrimiento de Peña Nieto, quien, quizá por eso, siguió pasando inadvertido, en tanto Montiel terminaba de prepararlo y encontraba las formas para “salvar el asunto del nepotismo”, presente desde que lo nombró titular de una secretaría de Estado.

Para evitar cuestionamientos y acallar críticas, se dieron órdenes al Registro Civil de sustituir el acta de matrimonio de Peña y cualquier otro documento en el que estuviera consignado el parentesco. Así quedó allanado el camino rumbo a la sucesión.

Las prebendas repartidas a la oposición durante el gobierno montielista siempre se hicieron evidentes, aunque fueron fáciles de maquillar, incluso desde municipios alejados de Toluca y cercanos al Distrito Federal. El regidor José Luis Cortés recurrió a instancias superiores de su partido para averiguar por qué los diputados perredistas locales habían autorizado a Montiel el Presupuesto y la Cuenta Pública de 2003, si presentaba irregularidades. “Es increíble que, siendo mayoría la oposición en la Cámara de Diputados, se autorizara cualquier deseo del gobernador. En el caso del PAN, sabemos que se negoció que uno de sus militantes fuera designado auditor superior, a cambio de aprobar la Cuenta Pública.”

El regidor atacó la corrupción como un mal endémico del estado, donde la situación geográfica permite a los presidentes municipales hacer cualquier cosa y convertirse en caciques auspiciados por el gobierno central en Toluca. “Todos fuimos testigos que en los medios de información se dieron a conocer los millonarios bienes del ex gobernador, y nos interesa conocer el origen de treinta y cinco millones doscientos trece mil trescientos sesenta y nueve pesos depositados en efectivo en cuentas del hijo del ex gobernador mexiquense, Juan Pablo Montiel Yáñez. Sin embargo, nadie se atrevía a presentar la denuncia correspondiente, por lo que decidí hacerlo, pese a no tener un cargo importante.”

Otra denuncia, derivada de la actitud crítica del edil, fue presentada el 25 de octubre de 2005 ante la Contraloría estatal. Esta vez se

trató de trece diputados a la LIV Legislatura, quienes recibieron del gobierno de Montiel veinticinco millones de pesos. Por la gravedad del caso, se pidió investigar a Juan Abad de Jesús, Leonardo Bravo Hernández, Mario Enríquez del Toro, Carlos Fernando Galán Domínguez, Ricardo García Alavés, Gonzalo López Luna, Hesiquio López Trevilla, María Isabel Maya Pineda, Francisco Murillo Castro, Francisco Antonio Ruiz López, José Suárez Reyes, Aarón Urbina Bedolla y Domingo de Guzmán Vilchis Pichardo.

Fue inexplicable cómo, luego de aprobar una de las cuentas públicas, el diputado local panista Moisés Alcalde Virgen obtuvo recursos para emprender una campaña publicitaria, que en realidad llevaba la intención de promoverlo para la candidatura del PAN a la alcaldía de Naucalpan. Situaciones de esa naturaleza se atribuyeron a la posibilidad del gobernador de comprar a legisladores. Los mecanismos montielistas de control fueron protagonistas de un régimen de partido de Estado.

Paulatinamente se alzaron voces locales: si no había transparencia, sería difícil hacer realidad el estado de derecho. Ése era el reto de Peña, pero conllevaba sus riesgos. Para empezar, Montiel mantuvo el control de la mayoría de los organismos estatales implicados en su investigación. En la balanza, la entidad mexiquense se convirtió en una de las más representativas para el estudio de la corrupción.

De hecho, la encuesta nacional publicada por Transparencia Mexicana en 2003, cuando Montiel estaba en todo su esplendor y ejercía el poder con mano de hierro, ubicó al Estado de México como la tercera entidad más corrupta, antecedida sólo por el Distrito Federal y Puebla, que ocupaba el primer sitio. Pero en 2007 saltó a la cabeza de la lista. La corrupción echó raíces en los gobiernos priistas, en los panistas y en los perredistas. Montiel nunca estuvo solo. Su situación fue muy reveladora porque, como candidato, en su ominoso eslogan de campaña “Los derechos humanos son de los humanos, no de las ratas”, prometió acabar con los delincuentes y, visto a la luz pública con el perdón mexiquense, se convirtió en la rata mayor.

Ante el cúmulo de denuncias públicas sobre su repentina y extraña bonanza financiera —por decir lo menos— y la creciente exigencia de

juzgarlo, por varias razones para Peña Nieto nunca fue viable investigarlo siquiera. Entre ellas —al margen de la lealtad, por haber sido él el motor de su encumbramiento, con todo y la simpatía de Maude—, Montiel puede convertirse a futuro en el tiro de gracia a su posible campaña presidencial por el PRI en 2012, ya que conoce sus secretos.

El ex gobernante posee la información clasificada de la carrera de su sobrino. Encerrar al tío o a cualquiera de sus colaboradores, aparte de ensuciar la imagen de las honorables familias atacomulquenses, que por cierto son muchas, le quitaría recursos a Peña en 2012. Montiel es un hombre solvente, un nuevo rico, y el actual gobernador necesitará mucho apoyo si quiere ganar la candidatura a la Presidencia de la República.

ESPEJISMO

Con lujo de hipocresía, a finales de 2004, los enemigos políticos anotaron en la lista formal de sucesión para la gubernatura mexiquense a Pastor Medrano, seguido por Hank Rhon, Cadena (como atención al leal secretario de Gobierno), Navarrete (en otra deferencia a la esposa del gobernador) y un rosario de nombres, algunos conocidos y otros simples anzuelos, encabezados por Humberto Lira Mora (sarcasmo para recordarle que nunca lo dejarían llegar), Jaime Vázquez Castillo, Gustavo Cárdenas Monroy, Héctor Luna de la Vega, Enrique Jacob Rocha y Fernando Alberto García Cuevas.

De todos, los de menos posibilidades eran Lira Mora, traicionado seis años atrás, y Luna de la Vega, cuyo futuro político quedó escrito cuando le botó a su amigo Montiel la Secretaría de Finanzas por no estar de acuerdo con el manejo del dinero público, y porque así manifestaba su rechazo a la solicitud para sacar del presupuesto diez millones de dólares, los cuales serían entregados a Paula Yáñez Villegas cuando ésta firmara el divorcio definitivo de Montiel, con sus respectivas cláusulas de confidencialidad. También contaron los desacuerdos por el manejo que se dio a la herencia de Juan Monroy Pérez, maestro y amigo de Montiel y de Luna de la Vega.

La situación de Luna de la Vega empeoró cuando el 21 de febrero de 2004 se hizo el invitado a una ceremonia magisterial, en la que se destapó como candidato a la gubernatura y todo mundo vio moverse los hilos para armarle un equipo de campaña al magnate Carlos Hank Rhon. Si en el camino renunciaban algunos precandidatos y se sumaban a Hank, este empresario partidista se presentaría como un candidato sólido y de unidad. Eso fue alta traición para Montiel. Éste y Luna se habían formado juntos, venían en un equipo compacto desde 1969. El destape se vio como una epidemia hankista porque, apenas cuatro días antes, Jacob Rocha había expresado su determinación de “sacrificarse”, pero todo mundo veía detrás los recursos del hijo del *Profesor*.

La revelación hankista obligó al jefe a descubrir su verdadera cara y dar la batalla por la candidatura. Y ésta, por atractiva, fue la causa de inquietud de Versini y Montiel. De pronto, la cúpula priista se encontró con una sorpresa seductora. Los dueños del dinero del estado, sumado a capitales de algunos millonarios del Distrito Federal y de todo el país, mantenían una campaña sigilosa, agresiva, basada sólo en la cuestionable popularidad de los apellidos del extinto Carlos Hank González, para promover a su hijo Carlos Hank Rhon; el heredero del imperio levantado desde cargos gubernamentales y, mucho después, desde algunas oficinas bancarias, a través del complejo Interacciones (el cual comprende negocios de arrendamiento, bancario, aseguradoras y construcción), así como desde sus haciendas en Santiago Tianguistenco, sin contar el majestuoso complejo hotelero y de villas en las más de trescientas setenta y seis hectáreas que la familia adquirió en la paradisíaca Isla Mujeres.

Algunos vieron con optimismo a este precandidato que podía convertir en realidad muchos de sus objetivos. Otros miraron primero y directo a los ojos de la esposa del gobernador. Al contrario de los demás aspirantes a la gubernatura, Hank entraba en escena para reclamar el poder. La leyenda y los mitos de su padre, pero sobre todo el capital financiero y las ligas empresariales y políticas que éste heredó a su familia dentro y fuera del estado, definían las preferencias o los intereses del priismo mexicano.

Jamás tantos políticos del Estado de México se volvieron al mis-

mo tiempo hacia la Casa de Gobierno en el Paseo Colón. Pero por el peso de los apellidos de Santiago Tianguistenco, hasta los tíos de Arturo Montiel en Atlacomulco se apresuraron a cobijar al magnate. Nicolás Montiel Flores, compadre de Carlos Hank González, llegó al grado de abrir, en aquel pueblo en 2005 y en los predios Montiel, las oficinas de apoyo a Hank Rhon.

Aunque su estirpe no llegaba tan atrás como la de Peña Nieto, el principal obstáculo de Hank Rhon no era su trabajo político —porque no existía—, tampoco que la mayor parte de su vida hubiera sido residente de la Ciudad de México (el ejemplo más claro fue Beteta, impuesto en la gubernatura sin cubrir el requisito de la residencia) y menos su falta de experiencia en el sector público, pues jamás había ocupado un cargo de elección popular o de partido. Tenía dinero suficiente para obviar esos trámites. Su problema tenía nombre y apellido: Maude Versini. Quien no estuviera al día y desconociera la rapidez inusitada con que esta mujer ganó sigilosamente la voluntad de Montiel estaba hundido.

Si bien la relación de la pareja llevaba poco tiempo, a los dos parecía divertirles el entramado político. Ella aprendió pronto, entendió a los sumisos funcionarios mexiquenses cercanos a Montiel, quienes se encargaron de mostrarle los diferentes rostros de los Hank. A muchos les parecía curioso el interés de Maude por las familias tradicionales de poder. Ésa fue la razón por la que dejaron aquel espinoso tema en sus manos cuando el nombre del empresario apolítico se alzó como un espectro desde el monumento a su padre en el Paseo Tollocan.

Y es que, por primera vez desde que murió Carlos Hank González, su hijo asomó la cabeza. Quería llenar el vacío, y los medios lo siguieron. Ante las cámaras, como en aquella entrevista que le hicieron el 20 de octubre de 2004 durante el noticiero matutino de Carlos Loret de Mola, en Televisa, Carlos Hank Rhon lució como un príncipe. Millonario, sí, pero desorientado en temas de política mexiquense. No obstante, aceptando al heredero del imperio, en las páginas de algunos diarios se alzaron voces para unir a la dispersa y gran familia priista. Como pasó con Hank, *El Profesor*, ciudadanos anónimos le pidieron al hijo mantener sus negocios financiero-empresariales y tomar

Las riendas del poder. Con él a la cabeza, esperaban un acuerdo interno democrático y plural. Para ponerlo de otra manera, a los priistas locales les resultaba más fácil ser simples espectadores y esperar el resultado del choque.

Los Hank Rhon creían en la invencibilidad de los apellidos y primero hicieron su lucha desde Baja California, donde Jorge —el hermano de Carlos— demostraría que se podía explotar el apellido familiar, pues en 2004, a sólo tres años del deceso de su padre y cuando en el Estado de México se desataba la guerra interna de los precandidatos, se convirtió en alcalde de Tijuana, apoyado por su compadre y amigo Roberto Madrazo. Con el paso del tiempo, sin embargo, este caso también revelaría que el apellido Hank se volvería un fantasma, pues Jorge sería doblegado por los electores cuando se lanzó como candidato a gobernador de Baja California.

En 2004, los rumores, cada vez más insistentes, sobre las ambiciones de la familia Hank tomaron por sorpresa a Maude y a Montiel. El asunto es anecdótico como se cuenta ahora, pero no aclara los sentimientos de la pareja ni deja traslucir sus deseos verdaderos después de apiacar al hijo del *Profesor* con contratos de obra pública. Ni él ni ella estaban en condiciones de asumir los costos de una guerra frontal. De manera que la pareja echó por delante, como carne de cañón, al ambicioso líder estatal priista, Pastor Medrano, el hijo del campanero del pueblo de Atlacomulco. Éste, un hombre sin secretos políticos, profundamente irritado, lanzó un ataque feroz y despiadado, demoledor. Marginó al advenedizo hijo del *Profesor* y lo descalificó porque, a pesar del apellido, no cumplía con ninguno de los requisitos del PRI para ser postulado como candidato a gobernador. Por lo menos no de los priistas mexiquenses.

Ajeno a la realidad, devorado por sus propias pretensiones y las críticas mordaces a Maude, Pastor no sabía que ella lo marginaría de la vida pública cuantas veces fuera necesario. La precandidatura por la sucesión en 2005 se convertiría en un infierno mayor para el dirigencia del PRI, porque no tenía cabida en esa pequeñísima élite de sofisticación francesa. Por eso, desde dentro del mismo gobierno le asestaron un golpe mortal y lo enfrentaron a los Hank cuando se abrió la

puerta —si bien fue una jugada para aplacar ánimos y desviar la atención— a la postulación de Carlos, a través del segundo párrafo del artículo 7 de los estatutos del PRI: “De suscribirse candidaturas comunes, frentes o coaliciones, los candidatos quedarán exentos de los requisitos y procesos de postulación a que hace referencia el Título Cuarto de los presentes estatutos y deberán establecerse los compromisos básicos que adquieren con el Partido”.

La pugna escondida contra Hank parecía más una pelea arreglada para allanarle el camino. Al menos algunos de los allegados del empresario sintieron a su príncipe como nuevo virrey del Estado de México. Por su parte, creación exclusiva de Arturo Montiel, Pastor mantenía despierta la imaginación de los reporteros y la suya propia. Sin tomar partido abierto por uno ni por otro, el gobernador sedujo al empresario, lo arrimó a su lado, lo consintió, lo paseó por el estado y, en los hechos, puso en sus manos el liderazgo priista vacante desde 2001 con la muerte del *Profesor*.

Carlos Hank Rhon vería como una mera alucinación sus apariciones en los informes regionales de Montiel en 2004, así como las multitudes priistas que lo aclamaban cuando ocupaba los lugares de honor junto al gobernador. . . Mientras, Maude se encargaba de librar de obstáculos al sobrino, joven aristócrata, guapo y, por lo visto en los resultados, menos ingenuo.

En octubre de 2004, como un montaje electoral —similar al de los comicios internos para imponer a Montiel en 1998—, se ideó una estrategia enmarcada por la guerra Hank-Pastor, que consistía en designar nueve aspirantes para buscar al sucesor de Montiel.

Arturo Montiel, con Maude hablándole al oído y el viento momentáneamente a su favor por la pugna de Roberto Madrazo con la maestra Elba Esther Gordillo, con las aspiraciones presidenciales más sólidas que nunca, puso en marcha un ensayo democrático, un teatro bufo en el que Hank Rhon y Pastor Medrano descubrirían las dimensiones reales del ejercicio del poder y recibirían una dura lección. La aristocracia les jugó una mala pasada y les mostró que los iguales no son tan iguales.

Admitidos con registro condicionado —Hank por las acusaciones

fundamentadas de Pastor, y éste por su voracidad al adelantar su campaña proselitista—, ambos fueron actores secundarios de una obra escrita para otro actor principal. Por primera vez contemplaron en toda su extensión la figura de Enrique Peña Nieto, aquel *Golden Boy* que Montiel colocó primero como subsecretario de Gobierno y que luego fue soltando y preparando para ser gobernador.

También, por primera vez, se mostrarían indignados, porque a uno (el empresario), con todos los recursos de su fortuna y la prosapia del apellido, y a otro (el líder estatal de su partido), con todo el control de los dirigentes priistas en los ciento veinticinco municipios, se les impondría la ley mordaza, se les haría cautivos de su propio oportunismo. Contemplarían el poder como un espejismo. No se les permitiría hablar sino hasta el 15 de noviembre de 2004, cuando la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI los presentaría en Ecatepec.

Peña Nieto se armó de paciencia ante los acontecimientos porque se sabía ganador. En tanto, los periodistas del Distrito Federal y de otras ciudades del país aún se negaban a ver el juego de Maude y Montiel. Estaban convencidos de que entre los nueve aspirantes se escondía muy bien el hijo de Carlos Hank González y llegaron a evocar al patriarca en sus crónicas, como relató Jesús Ramírez Cuevas en un reportaje del 21 de noviembre de 2004 para el suplemento *Masiosare* de *La Jornada*: “No sueñes en poseer cosas, sino en construir patrias, escribió *El Profesor* en una carta dirigida a su hijo Carlos, cuando éste cumplió los dieciocho años. Casi cuatro décadas después, a la fortuna económica del clan familiar, Carlos Hank Rhon está cerca de sumar la herencia política del padre. La egregia figura de *El Profe* se alza sobre el Paseo Tollocan, a la entrada de Toluca, a unos metros del IEEM. El fastuoso monumento (un millón de pesos) fue inaugurado por Montiel en agosto pasado. La ceremonia significó el retorno de la dinastía Hank a las lides políticas en la persona de su vástago, quien en el acto anunció su decisión de contender por la gubernatura”.

Por ese entonces, Montiel salió del país. Viajó a Francia para buscar a Maude, que se había escapado por enésima vez de su residencia en el Paseo Colón. Esa relación había nacido en agonía y se mantenía viva gracias a la llamita de la candidatura presidencial. La joven seño-

ra Versini estaba cansada de su marido. Y éste, doblándole la edad y habiendo soltado mucho dinero para retener a su francesa, se aferraba a ella (la amaba, aunque la golpeara, o la golpeaba porque la amaba) y poco le importaban las intromisiones del líder priista nacional, Roberto Madrazo Pintado, en los feudos del Estado de México. Menos le importaba el “parentesco” de éste (en los hechos, hijo adoptivo del *Profesor*, y luego esposo de la viuda de Cuauhtémoc Hank Rhon) con la familia Hank.

Lo más llamativo fue que, en octubre de 2004, Montiel prestó poca atención, incluso miró con desdén el hecho de que Madrazo impusiera en el PRI estatal a Manuel Garza González, *El Meme*, y a Rafael Rodríguez Barrera para llevar de la mano a Hank Rhon y garantizarle la candidatura. Nunca como entonces fue tan incierto el porvenir de Hank. Acababa de empezar su carrera política y Montiel lo hizo zozobrar cuando expresó sin cortapisas: “El control del partido en el estado lo tengo yo”.

Tampoco nadie fue capaz de ver entonces las intenciones cristalinadas de la Casa de Gobierno. La candidatura de Peña había tomado forma. Su presencia ya no intrigaba a nadie. Montiel necesitaba un hombre de confianza en la gubernatura. Y, al mismo tiempo que desde la procuraduría Maude cocinaba con Navarrete la muerte política de Pastor, relacionándolo incluso con el narcotráfico, porque en realidad éste era el único rival convencido del derecho sucesorio y de que la amistad del gobernador le abriría las puertas llegado el momento, mientras tanto Montiel mantenía muy cerca a Hank, como se debe mantener a los enemigos.

Seducidos por la magia que irradiaba el monumento de Carlos Hank González, los periodistas lanzaron crónicas sobre la trayectoria empresarial del *Profesor*, como Ramírez Cuevas: “A mediados de los años setenta entregó a su hijo todos los negocios de la familia, que abarcaban bancos, servicios financieros, industria automovilística, transporte y construcción. En 1976, el vástago tomó el control de la empresa Campos Hermanos. Dos años después, presidió la Sociedad Industrial Hermes. Al concluir Hank su gestión como regente en 1982, ese grupo estaba entre los veinticinco más importantes del país.

Carlos hijo mostró olfato para los negocios y durante la década de los ochenta se hizo accionista en los grupos financieros Interacciones y Banamex-Accival, Tribasa (involucrada en el rescate carretero), en Transportación Marítima Mexicana (a la que el gobierno entregó el manejo de los puertos) y en el Grupo Embotellador de México (implicado en el fraude a ingenios azucareros). Tras la crisis de 1995, el emporio sufrió un golpe y tuvo que vender sus acciones en Mercedes-Benz. Se ha publicado que una parte de la deuda de los Hank terminó en el Fobaproa, pero resulta imposible probarlo”.

Todos se quedarían esperando la candidatura de Carlos Hank Rhon. Hasta él.

CADENA DE FAVORES

Una semana antes del inicio de la gubernatura de Enrique Peña Nieto, se culminaron las negociaciones con los clanes políticos para armar su gabinete. Una enorme sonrisa se dibujó en el rostro de los colaboradores de Montiel, quien colocó a sus principales operadores en puestos clave de la administración, la legislatura y los órganos encargados de la impartición de justicia y de rendición de cuentas.

Atado desde principios de la década de 1990 a la suerte de su predecesor, Peña nunca tuvo la oportunidad de poner los ojos en quien a partir del 16 de septiembre de 2005 manejaría el dinero público —un presupuesto anual cercano a cien mil millones de pesos— en la mayor secretaría y la segunda con más poder, la de Finanzas, Planeación y Administración. En el fondo resultó comprensible: Montiel era precandidato presidencial y lo veían en el Estado de México como el priista mejor posicionado, con capacidad para derrotar al PAN. Le impuso a Luis Videgaray Caso, tecnócrata formado en el equipo salinista de Pedro Aspe Armella, responsable de renegociar en 2004 una deuda pública de treinta mil millones de pesos.

La noticia se difundió con todas las de la ley en un boletín del gobierno montielista: “El artífice del milagro cuya negociación se llevó diez meses es la firma Protego Asesores, encabezada por el ex secreta-

rio de Hacienda, Pedro Aspe, y Luis Videgaray. En tanto, el instrumento será un fideicomiso maestro en el que cabrá la totalidad de la deuda, cuyo respaldo único serán las participaciones del gobierno federal hacia el Estado de México”.

Cuando un reportero preguntó qué pasaría si el futuro gobernador intentaba hacer alguna enmienda, la respuesta fue simple “El fideicomiso maestro está autorizado para apretar las tuercas, cobrarse a lo chino vía las participaciones federativas; cancelar los beneficios de la tasa fija o reducir los plazos de vencimiento del principal”. Con esa frase de profeta llegó Videgaray al gabinete en septiembre de 2005, y en mayo de 2008 convenció a Peña para entrar en otra renegociación para financiar veinticinco mil ciento setenta y cinco millones de pesos, equivalentes a ochenta y siete por ciento de la deuda total.

Aquello fue un milagro a medias, porque el nuevo gobierno se comprometió a pagar, durante cinco lustros y por concepto de intereses, más de cincuenta y seis mil millones de pesos, un promedio de dos mil doscientos setenta millones setecientos ochenta y cinco mil pesos anuales. Los mexiquenses pagarán a los bancos el equivalente a tres deudas públicas en veinticinco años. Como lo puso en su columna el periodista local Maçario Lozano: “Para liquidar los empréstitos con todo e intereses se necesitará lo que resta del gobierno de Peña, los siguientes cuatro sexenios completos y, al menos, la mitad de un quinto periodo, siempre y cuando no haya más endeudamientos o una nueva renegociación”.

Montiel también manejó los hilos para imponer en la Secretaría General de Gobierno —responsable de mantener en paz a casi ocho millones de electores y a otros siete millones de mexiquenses menores de edad— al cuestionado Humberto Benítez Treviño, ex procurador general de la República y del Distrito Federal.

Si bien a este hombre se le pueden colocar las caretas políticas de Hank González y de Liébano Sáenz Ortiz, el secretario particular con cartera de jefe de gabinete en el gobierno zedillista, la mano de Montiel lo rescató cuando le caían acusaciones, sospechas por manejo dudoso del caso del asesinato de Luis Donald Colosio Murrieta y más adelante por el caso de la ejecución del líder priista Francisco Ruiz

Massieu, mientras el procurador (en ese momento el panista Antonio Lozano Gracia) lo responsabilizaba por fallas en el proceso contra el banquero tabasqueño Carlos Cabal Peniche. Posteriormente, Montiel le asignó el Consejo Consultivo para actualizar la legislación mexicana y lo llevó como diputado a la legislatura local, poniéndolo como compañero de banca para cuidar a su sobrino.

Tal como después lo haría Peña, el sexenio montielista cobijó a personajes acusados de irregularidades en el servicio público. Ése fue el caso de Alejandro Osuna Rivero, alcalde de Toluca en el trienio 1994-1996, cuando era gobernador su amigo y aliado Chuayffet, quien de ahí lo pasó al Comité Directivo Estatal del PRI. Casi al final de su gobierno, Montiel lo nombró secretario de Desarrollo Social.

Osuna fue inhabilitado en varias ocasiones por la Secretaría de la Función Pública debido a sus abusos como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal en el Estado de México. La primera, fechada el 24 de junio de 2002 por irregularidades en sus facultades y atribuciones. La segunda, el 5 de diciembre de 2003, durante diez años, del 6 de marzo de 2004 al 5 de diciembre de 2014, por una liberación irregular de recursos al ayuntamiento de Ecatepec; a raíz de ésta le impusieron una sanción superior a dos millones de pesos. La tercera se reportó el 20 de junio de 2004, por un año, del 27 de agosto de 2004 al 26 de agosto de 2005, acusado de malversación en el manejo del Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda.

Con una serie de gambitos en esas imposiciones en los cargos más importantes de la administración pública estatal, Montiel reacomodó a peones y alfiles y puso en jaque a la Cámara de Diputados —responsable de ratificar el nombramiento— para mantener como procurador en el gobierno de Peña a Alfonso Navarrete Prida. Echó mano otra vez del sobrino, quien no tuvo más remedio que aceptarlo.

Cumplida la exoneración de los Montiel Versini y Montiel Yáñez, limpio y pulido el nombre de Arturo, libre de cualquier sospecha, juzgado el caso entre amigos, Navarrete fue asignado después a la Secretaría de Asuntos Metropolitanos. Como nuevo procurador llegó el ex magistrado Abel Villicaña Estrada, quien redimió a Montiel por tercera ocasión, aunque al final fueron cuatro los perdones. En 2009, Na-

varrete se haría de una candidatura a una diputación federal. Para evitarse problemas por si su caso llegaba a la legislatura, Montiel impuso a su amigo Eruviel Ávila Villegas, ex alcalde de Ecatepec, en la presidencia de la Junta de Coordinación Política.

La confianza del tío tenía sus fronteras trazadas. De inmediato, el sobrino daría muestras amplias de gratitud, respeto y solidez en los lazos familiares cuando en marzo de 2006 nombró a un reconocido jurista veracruzano, ministro en retiro, para hacerse cargo de las investigaciones en la Fiscalía Especial para el caso Montiel. No obstante, el octogenario maestro en derecho penal y doctor por la UNAM, Luis Fernández Doblado, descubrió el entuerto sobre cómo querían usarlo para realizar una indagación artificial, y renunció apenas cuatro días después de asumirlo, “antes de tener acceso a la confidencialidad e importante información documental que integra la averiguación que se ha llevado a cabo con motivo de las denuncias que se han presentado en el asunto que nos ocupa y toda la cual desconozco por completo”.

Fecha el 27 de marzo de ese año, la carta que el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió a Villicaña esbozó parte de la realidad cuando le dijo no sólo que fue un error aceptar la propuesta de Peña, sino “una precipitada y senil actitud mía”. Luego, en entrevista con Ricardo Ravelo para *Proceso*, advirtió sobre la contaminación política del asunto y agregó: “Me querían usar”. Dos días después de su nombramiento, cuando ya conocía a sus fiscales auxiliares, Armando Quirasco y Víctor Ávila Ceniceros, descubrió que en sus oficinas o las de la fiscalía para analizar e investigar no había nada, ni mobiliario, ni documentos, ni una secretaria, para trabajar.

La dimisión del magistrado se sumó a la del abogado Miguel Ontiveros Alonso, quien en los primeros días de ese mes de marzo declinó el honor de llevar el asunto, unas horas antes de que Peña oficializara su nombramiento como fiscal especial. La segunda semana de marzo de 2006, Ontiveros adujo motivos personales para rechazar la oferta. Con el fracaso encima, el gobierno estatal mintió sobre la segunda renuncia —la de Fernández—, cuando los mexiquenses conjeturaban quiénes investigarían a Montiel. Todavía, el 20 de abril, Peña ocultó que su gobierno intentaba convencer a Fernández Doblado de

mantenerse en el caso, negó lo de la dimisión de éste y exigió un avance sobre las indagaciones. “En realidad”, le dijo Fernández a Ravelo, “estaban ansiosos de usar mi nombre, mi prestigio profesional y académico para avalar la investigación. Por eso no querían soltarme”.

Pero hay otra versión. En un amplio reportaje de *Proceso* en su número 1536, del 9 de abril de 2006, Ravelo escribió: “Basado efectivamente en un riguroso trabajo de inteligencia, el informe —de Ernesto Ibarra Santés en 1993— identificaba buena parte de las conexiones de los hermanos Arellano Félix, cabezas del cártel de Tijuana, entre quienes figuraba una persona clave en la protección de esa organización criminal: Luis Fernández Doblado —entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, a quien se señalaba como protector de un grupo de jueces que emitía resoluciones para favorecer a los hermanos Arellano Félix. [...] El informe de Ibarra Santés —asesinado de varios balazos en 1996 por encargo de los Arellano Félix, poco después de arribar a la Ciudad de México— exponía, además, que por esos favores Fernández Doblado presuntamente recibía maletines de dinero, por lo que el entonces investigador de la PGR sugirió indagar sobre esa red protectora que operaba a la sombra del Poder Judicial. [...] También tuvo conocimiento del informe el entonces subprocurador y actual secretario de Gobierno del Estado de México, Humberto Benítez Treviño, principal impulsor de la figura de la fiscalía para investigar a Montiel. [...] Trece años después, y en medio del escándalo que protagoniza el ex gobernador Arturo Montiel Rojas, Fernández Doblado recobró vida política tras ser recomendado por Benítez Treviño para encabezar la Fiscalía Especial Colegiada que buscará aclarar —según sus propósitos— el origen de la cuantiosa fortuna del político mexiquense, quien ya es investigado por la PGR por presuntos delitos financieros, entre ellos defraudación fiscal y lavado de dinero”.

Otros personajes de la etapa montielista recibieron acomodo en el gobierno de Peña. Un repaso muestra que Benjamín Fournier, ex secretario de Agua y Obra Pública fue ratificado en el mismo puesto y, más

tarde, sustituido por David Korenfeld, de origen judío y ex alcalde de Huixquilucan, donde el uso de suelo ha cambiado para albergar a conglomerados habitacionales y zonas residenciales cotizadas en decenas de miles de dólares. Laura Barrera Fortoul, ex titular de Turismo, fue nombrada secretaria del mismo ramo. Pertenece a la familia Barrera, de secretarios de Gobierno y diputados locales. Francisco Maldonado llegó a la Secretaría de Transporte, sin aplicar su programa de reordenamiento vehicular en las dos administraciones. Eduardo Segovia, ex contralor, exoneró a Montiel por primera vez y fue sustituido por Marco Abaid Kado, quien trabajó para el ex mandatario. Enrique Jacob fue secretario y coordinador de Desarrollo Social con Montiel, y con Peña es de Desarrollo Económico. Ricardo Aguilar, ex diputado, fue nombrado secretario del Trabajo y luego presidente estatal del PRI.

Esa perspectiva sucesoria donde todo cambia para seguir igual fue un mal augurio. La historia pareció retroceder hasta 1942, o mucho más atrás, porque el poder se ejerció a la vieja usanza, enmarcando la figura eterna de Montiel en todos los movimientos. El perfil del nuevo gobierno convocó a mordaces comentarios de Arturo Montiel Yáñez: la idea de formar una clase política joven tenía por objetivo tomar las riendas del estado para relevar a la vieja guardia. El proyecto está vigente, se refleja en el gobierno, varias secretarías están controladas por paisanos o parientes de Atlacomulco que rayan en los cuarenta años de edad.

Peña nombró a su tío Alfredo Hilario Isidro del Mazo González titular del Consejo Mexiquense de Infraestructura, con la pretensión de mostrar independencia, apaciguar rescoldos de la crítica y apagar las alarmas ciudadanas. Adoptó una estrategia definida de vinculación política, amparado en la célebre “ley de méritos y compensaciones familiares”, norma conocida también como el “poder queda en familia”.

Lograda la “separación” del tío Montiel, el otro tío obtuvo más: a su coordinador general de Comunicación Social en la gubernatura y en la Secretaría de Energía, David López, se le ofreció el mismo cargo de vocero social; y a su hijo, Alfredo del Mazo Maza, Peña lo hizo titular del Instituto del Emprendedor Mexiquense. A partir del 20 de mayo de 2008 lo puso en línea sucesoria, ya que lo nombró secretario

de Turismo, a pesar de las acusaciones de haberse hecho acreedor, en forma irregular y sospechosa, de un jugoso apoyo de Pemex para estudiar en Estados Unidos.

La historia ocurrió así. En 2000, en su calidad de empleado de Pemex, Del Mazo Maza recibió una beca de más de doscientos cincuenta mil pesos para inscribirse en la Universidad de Harvard. En el tema se involucró a Juan José Domene Berlanga y a Carlos Juaristi Septién, acusados también de un desvío superior a mil quinientos millones de pesos de las arcas de la paraestatal hacia el PRI, junto con su ex jefe Rogelio Montemayor Seguy. A raíz de una denuncia presentada por la Contraloría, se abrió la averiguación previa 09/DAFMJ/2002 en la PGR.

La beca le llegó a tres meses de haber entrado a laborar a Pemex, aunque la normatividad interna exigía haber cumplido tres años de servicio para hacerse acreedor a esa prestación. Una nota del periódico *Reforma* precisó que no era “profesionista de planta”, otro de los requisitos. El entonces director, Montemayor, creó para él un puesto especial clasificado como “fuera de cuadro”. El jefe directo de Del Mazo Maza era Domene. Así que, en junio de 2000, la empresa giró el acuerdo para proponer y autorizar, de manera especial, esa beca —incluidos salarios, aguinaldo, fondo de ahorro, incentivos al desempeño, reembolso de beca, reembolso por libros y viáticos—.

El total fue de doscientos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y dos pesos. Según la querrela de Contraloría, las autoridades de Pemex violaron numerosas disposiciones internas para favorecer al hijo del ex gobernador. Y denunció a Domene y Juaristi por uso indebido de atribuciones y facultades. También señaló como presuntos responsables a Antonio Manzur Kobeh, entonces gerente de Administración Financiera, así como a Ricardo Salgado y Teresa Gómez Melo, del área de Recursos Humanos.

En su momento se habló de la posibilidad de fincar responsabilidades a Del Mazo Maza, por la sospecha de que no tenía, al momento de recibir la beca, el título profesional para estudiar un posgrado. El favor petrolero le sirvió para estudiar dicho posgrado en administración de negocios. También se le concedió un permiso especial con goce de sueldo y sin interrupción de antigüedad.

Esa práctica de alianzas estratégicas es muy vieja y esconde la vocación dinástica del PRI. El ejemplo lo representa el arribo —con los únicos méritos de la amistad— de su papá, Del Mazo González, a la gubernatura y a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. A la primera llegó impulsado por el líder obrero Fidel Velázquez, así como por su “hermano” adoptivo, el secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid, cuando el presidente López Portillo sabía que impondría a este último como su sucesor.

Tomando en cuenta el peso de las secretarías de Finanzas (tres en una) y la de Gobierno, así como la procuraduría y la legislatura entregadas a los montielistas, a su tío Del Mazo González también le concedió la Secretaría de Comunicaciones a través de uno de sus tres personajes más cercanos, Gerardo Ruiz Esparza. En 1997, Ruiz Esparza fue el coordinador general de su fallida campaña en el Distrito Federal. En la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal fue su asesor especial y en 1987, cuando le heredó la gubernatura a Alfredo Baranda García, lo impuso como secretario general de Gobierno.

Peña se llevó a su estimada prima Carolina Monroy del Mazo (sobrina consentida de Del Mazo González) a ocupar cargos tan disím-bolos como la dirección general del Instituto Mexiquense de Cultura o del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y sus Municipios (ISSEMyM). En 2006, Peña y Del Mazo González la quisieron presumir con todo y apellido, pero tuvieron que pedirle su renuncia de Cultura por un escándalo internacional a raíz de que presentó “la piñata más grande del mundo” en el Récord Guinness. (La gigantesca artesanía estuvo mal hecha, fue elaborada por estudiantes de primaria y terminó arrumbada en una bodega.) Luego del ridículo, no le fue mal. La impusieron como candidata a la alcaldía de Metepec, donde perdió frente al Partido del Trabajo. Para castigar al electorado de ese insolente municipio, Peña la llevó a la dirección general de Radio y Televisión Mexiquense, cuyas oficinas centrales se encuentran enclavadas precisamente en la cabecera municipal de Metepec.

Los muertos reviven y andan. Ernesto Javier Némer Álvarez, su esposo, también había perdido los comicios cuando disputó ese mismo ayuntamiento en 2000. Tampoco le fue mal. Los electores no lo favo-

recieron, pero lo regresaron al gobierno central y, de puesto en puesto, entre secretarías y subsecretarías, Peña lo amparó con todo y familia. Gracias al parentesco, había sido secretario de Administración en el sexenio de Montiel. Peña lo nombró secretario de Desarrollo Social, una especie de supersecretario, y en la nómina del gobierno no sólo se respetaron las quincenas de su esposa, sino las de una decena de sus familiares, ubicados en puestos públicos clave.

La lista es larga, pero el primer día de gobierno en 2005 la integraron su hermano Manuel Némer Álvarez, en la dirección general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar. En sus manos quedó parte del destino de ochenta mil educadores agrupados en el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), a disposición de las filas del PRI. Luis Felipe Némer fue empleado en la Dirección de Administración y Finanzas de los Servicios de Educación Integrados (SEIEM), que tiene el control de otros cincuenta mil maestros de la sección XXXVI del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezado por la maestra Elba Esther Gordillo Morales. Cuando los educadores mequenses ponen en duda el poder de esta sección, sólo se les recuerda que de allí salió Gordillo Morales, una mujer que contribuyó al triunfo de Felipe Calderón y al descarrilamiento del tabasqueño Roberto Madrazo Pintado.

Capítulo IV

Adiós a Los Pinos

CON UN COSTOSO proyecto publicitario apuntalado en la tesorería estatal para comprar abundantes y pródigas apologías personales, a través de Televisa y TV Azteca, y con amplias reticencias para transparentar esos gastos, las apariciones persistentes de Arturo Montiel, así como el “elogio” a sus logros a través de las pantallas y de “noticias” pagadas en páginas de diarios y revistas, representan uno de los testimonios del libre dispendio en su competencia por la candidatura presidencial contra el tabasqueño Roberto Madrazo.

Antes de entregar las llaves de la Casa de Gobierno en el Paseo Colón a Enrique Peña Nieto y a su esposa, Mónica Pretelini Sáenz, el 15 de septiembre de 2005, se transmitían anuncios en las dos mayores empresas de la televisión mexicana como un símbolo “objetivo” del “esperado” arribo de Montiel a la residencia oficial de Los Pinos, de la mano de su muy guapa y elegante señora esposa Maude Versini, sin contar que casi todo el país estaba invadido de pintas y de anuncios espectaculares en los que se invirtieron millones de pesos.

Sin embargo, sus desencuentros como pareja se ventilaban abiertamente entre su primer círculo de colaboradores. Ella se había marchado en varias ocasiones a Estados Unidos y a Europa, mientras él, que hacía mucho había dejado la juventud para dar paso natural a sus sesenta y cuatro años de edad, se aferraba a la lucha por la candidatura priista.

En la Presidencia de la República tendría los arrestos o los encantos para emprender la reconquista de Maude. Como los dos Del Mazo antes que él, se sentía depositario único de la profecía atacomulquen-

se y, por lo tanto, ya se veía cómodamente sentado en el sillón del jefe del Poder Ejecutivo Federal. Maude, por su parte, a pesar de sus arrebatos y de que la relación estaba muerta y bien enterrada, guardaba las apariencias y se contemplaba como la primera dama de México.

Por los halagos en las campañas de publicidad en la televisión y la prensa, además del manejo de sus equipos profesionales desde las oficinas del PRI en Toluca, Arturo entró confiado a la guerra cuando en la primera semana de octubre de aquel año de 2005 se lanzó por fin la anhelada convocatoria para presentar la solicitud de registro como precandidato presidencial. Como si a fuerza de verla a los ojos la hubiera vuelto a enamorar, apostaba a la personalidad de su radiante mujer para atraer el apoyo y el voto de hombres y mujeres jóvenes —así como él había caído rendido ante sus encantos—. Se sentía cada día más cerca y con más ansias de guiar al país.

Arturo concibió su precandidatura real desde el 5 de agosto de 2005. Ese día, después de desayunar en la Casa de Gobierno con su esposa, sus rivales Enrique Jackson Ramírez —coordinador del PRI en el Senado— y Manuel Ángel Núñez Soto —gobernador de Hidalgo— aceptaron la derrota y le levantaron la mano. Reunidos al mediodía en un hotel de Polanco, en la Ciudad de México, con el neoleonés Natividad González Parás, el coahuilense Enrique Martínez y Genaro Borrego, coordinador del Tucum, alistaron la estrategia para enfrentar al otro precandidato: Madrazo.

Y Montiel vislumbró un triunfo espectacular, hasta que el 8 de octubre se sorprendió cuando su equipo descifró la convocatoria para disputar la candidatura presidencial priista y encontró los puntos finos de su “ingenuidad” o incapacidad para operar: las cartas se echaron para elegir a Roberto Madrazo. La convocatoria lo beneficiaba abiertamente y no garantizaba un proceso transparente, equitativo ni democrático. La elección quedaba en manos de un PRI controlado por Madrazo y su gente. Aturdido, Montiel llamó sinvergüenza y “gandalla” a su opositor.

Sin formalidades, lo acusó de manipular un partido marioneta presidido por el queretano Mariano Palacios Alcocer. Entre gitanos empezaron a leerse las manos.

La convocatoria y la indiferencia y el desdén priistas desconcertaron a Montiel, ex gobernador del Estado de México, la entidad con mayores recursos del país; él, que tenía el apoyo de sus “amigos” los gobernadores Tomás Yárrington (Tamaulipas), Natividad González (Nuevo León), Eduardo Bours (Sonora), Enrique Martínez (Coahuila), Miguel Alemán (Veracruz) y Manuel Ángel Núñez Soto (Hidalgo), o de legisladores federales como Enrique Jackson Ramírez y Emilio Gamboa Patrón, congregados en el grupo Todos Unidos contra Madrazo (Tucom); él, capaz de conquistar a una mujer a la que le doblaba la edad —cuando se casaron el sábado 22 de junio de 2002 en Valle de Bravo ella tenía veintiocho años, y Montiel, cincuenta y ocho—; él, un hombre maduro capaz de refinar los salones de Los Pinos o las oficinas del Palacio Nacional con una mujer de “cultura superior”; él, que podía prometer eso y más, no era el atlacomulquense de la profecía. Jamás llegaría a la Presidencia de la República.

A partir de ese 8 de octubre de 2005 no funcionaron la adivinación ni la publicidad. Estaba condenado a ser un ex gobernador con sueños de fallido gran seductor. A manejarse en las sombras del poder y sin posibilidades de volver a elegirse para ningún cargo público.

Pero la adversidad le tenía reservada otra sorpresa. El lunes 10 de octubre, dos días después de presentar su solicitud de registro para buscar la candidatura, interrumpió su trabajo, canceló sus giras proselitistas, salió de su casa de Valle de Bravo y en helicóptero se trasladó muy aprisa al Palacio de Gobierno en Toluca, pasando sobre el casco de la hacienda Barbabosa en Zinacantepec. Una bomba periodística le estalló a flor de piel.

En Televisa —que en honor a la justicia sólo retomó información publicada meses atrás en el semanario *Proceso*—, beneficiaria de un millonario contrato de publicidad para promover la imagen de Montiel como precandidato presidencial, se presentó documentada la denuncia pública sobre la fortuna de los Montiel. A las siete de la mañana, el programa *El cristal con que se mira* dio cuenta de la noticia con cruel ironía de la mano de su conductor Brozo: la Procuraduría General de la República (PGR) investigaba depósitos irregulares por más de treinta y cinco millones de pesos en efectivo hechos a cuentas bancarias de

Juan Pablo Montiel Yáñez, hijo menor del precandidato presidencial Arturo Montiel Rojas.

Pero los treinta y cinco millones se multiplicaron y, con asombro tornado en estupor generalizado, en el panorama aparecieron más. En medio del desconcierto empezaron a correr rumores de que Montiel poseía además una boyante economía personal en París y en la española Costa del Sol.

Tenía propiedades en Guerrero, en Jalisco, en el Estado de México y sí, era cierto lo de los bienes en Francia y en España. Al término de su gobierno le habían contabilizado sus viajes al exterior, unos para ir al encuentro de Maude en Europa y otros para ventilar operaciones inmobiliarias, ambos bien disfrazados como giras oficiales de trabajo. Sus escapadas románticas lo llevaron de París a Nueva York, de las costas gaditanas a los flemáticos bares londinenses.

Por venir de Televisa, su supuesta aliada, la denuncia rompió una prolongada luna de miel con un sector del PRI y sus socios del Tucom, quienes ya preparaban maletas para ocupar secretarías con Montiel. Pocas veces y en tan pocas horas se notó tal deterioro de imagen. Adquirió carácter de tragedia. Roberto Madrazo olfateó los signos de debilidad y se abalanzó sobre su presa. Y advirtió: "Montiel pretende encontrar en la candidatura presidencial del PRI el pañuelo para limpiarse la cara sucia. El precandidato mexiquense no es confiable porque está cosechando la siembra de un verdadero problema de gobierno y no me van a cargar el muertito a mí. Si hoy, como dicen en todas las publicaciones, sembró un gobierno muy desordenado, ésa no es mi responsabilidad".

El árbol caído dio buena leña: "Yo no conozco a los hijos de Arturo Montiel; no llevé a los hijos de Arturo Montiel a depositar treinta y cinco millones de pesos en efectivo, ocultando el origen de esos recursos. No llevé a un joven de veinticuatro años y a otro joven menor de treinta años a comprar un terreno, en veintiún millones de pesos, de más de catorce hectáreas. No le presenté a su esposa convertida hoy en una corredora inmobiliaria, con bienes en El Santuario, en Careyes, en Acapulco... no tengo la menor idea de qué ha hecho esa familia. ¿Qué hacen sus hijos? ¿Qué hacen sus hijos si

en un año y medio Juan Pablo logró acumular treinta y cinco millones de pesos?”

Toda la familia guardó silencio. Se les derrumbaron la arrogancia y la valentía. La vida había dejado de sonreírles y les era adversa. Al nuevo patriarca, Montiel, seguramente lo hicieron recordar su infancia y juventud cuando, a regañadientes y por obligación, ayudaba en el reparto de cerveza en Atlacomulco, así como en tiendas, fiestas, fondas, taquerías, depósitos o ferias de San Felipe del Obraje, actual San Felipe del Progreso. Arturo siempre odió ese trabajo. Lo afrentaba cargar y descargar las cajas del camión, mientras su padre la hacía de chofer y de cobrador. Las cosas mejoraron de veras cuando don Gregorio llegó a la alcaldía de Atlacomulco. Pero éstos eran tiempos pasados.

Las palabras que emplearon los conductores de Televisa al dar la noticia sembraron hondos recelos porque mostraron al aspirante en su dimensión real, mientras la “elegancia” de vocabulario y de conducta de la vieja clase política mexiquense rescató la máxima pronunciada años antes, sin resquemores, por el mismo Arturo Montiel: “Los derechos humanos no son para las ratas”.

En ese mismo mes, la puntilla la dio una lista de cincuenta y tres depósitos —con todo y hora, fecha y sucursal bancaria— hechos entre 2000 y 2001, seguida de la implacable observación de que Montiel había empezado su gobierno el 16 de septiembre de 1999. También se exhibieron documentos de tres inmuebles adquiridos por la nueva esposa en zonas residenciales de San Gaspar, en Metepec, y en Valle de Bravo, donde Montiel ya poseía una casa estilo semicolonial desde la década de los setenta y donde, ya como gobernador, despachaba con regularidad durante los fines de semana, acompañado por Enrique Peña Nieto y Luis Miranda Nava.

NECIO AMOR

Además de las acusaciones por corrupción, nepotismo, compadrazgo, traición a Carlos Hank Rhon, a Humberto Lira Mora, a Chuayffet o a la aguascalentense Paula, desvío de fondos o enriquecimiento inex-

plicable —todo difundido como señales de catástrofe en la batalla prepresidencial de 2006—, Montiel protagonizó fugaces historias de amor que lo colocaron en las glamurosas páginas de las llamadas revistas del corazón, de cuyo encanto no pudo sustraerse.

Antes de que los estrategas electorales de Peña Nieto proyectaran una campaña para atraer el voto de la mujer, en 1999 la ex Miss Feria de San Marcos, Paula Yáñez Villegas —entonces esposa inseparable del candidato a gobernador Arturo Montiel Rojas—, concibió y puso en marcha un programa para llamar la atención de las mujeres de clase media o popular. Ella fue la mejor impulsora de la figura de su marido, colaboradora eficaz en la promoción del voto, y le dio un nuevo sentido a la imagen familiar.

Si al equipo montielista se le hizo necesario recurrir al chantaje y a la corrupción para validar su triunfo sobre el panista Durán Reveles, ella nada tuvo que ver. Hay quienes opinan que ni siquiera estaba enterada de que Montiel, desde sus extrañas giras al exterior, preparaba en sigilo su rompimiento matrimonial luego de que conoció a una mujer muy joven que le presentó un ex gobernador.

Jurado como nuevo mandatario estatal para cubrir el periodo del 16 de septiembre de 1999 al 15 del mismo mes, pero de 2005, Arturo trabajó estrechamente con Paula, un matrimonio que tenía dos hijos con quienes formaban la familia Montiel Yáñez. Él, desde la gubernatura; ella, desde las oficinas de la presidencia del Sistema Integral Para el Desarrollo de la Familia (DIF) del Estado de México.

Arturo y Paula llevaron consigo, al menos en apariencia, un pesado lastre llamado convivencia familiar. De la mano de Paula, Arturo cultivó viejas costumbres clientelares y corporativas priistas. Con el aparato político mexiquense como aval, en los dos primeros años de gobierno lograron alejar esos fantasmas de la separación o del escándalo que suponían las continuas “escapadas” del gobernador. Desde el DIF, ella se encargó, y aparentemente lo hizo siempre bien, de capotear las constantes aventuras de su marido.

Durante los dos primeros años de gobierno, Paula mantuvo unida a la familia del gobernador, pero de pronto las cosas se le salieron de control.

Desde finales de 2001 se negó insistentemente el posible despido de Paula Yáñez de la presidencia del DIF. También se negaron los rumores sobre el nuevo amorío de su esposo, que sólo parecía sumarse a su colección de amantes fugaces.

Pero nunca hubo duda. Desde su fortaleza en San Carlos, Maude se aprestaba para dejar de ser la amante en turno y alistaba el menaje para despachar desde el Paseo Colón. El periódico *La Calle* sorprendió a una amodorrada Toluca al publicar descripciones de Arturo mientras besaba a otra mujer. Incluso, adelantó la separación de la pareja gobernante, así como el nuevo compromiso y la futura boda de Arturo Montiel con una enigmática ciudadana francesa, acto que iba a celebrarse en una exclusiva residencia de Valle de Bravo. Todavía hubo quienes se atrevieron a dudar. Sin embargo, el 19 de junio de 2002, desde el Salón del Pueblo, el mismo gobernador hizo oficial la separación y anunció su unión matrimonial con la "periodista" Maude Marie Laure Christiane Versini.

"Respetuoso" de las leyes, como se relató antes, Arturo Montiel ordenó modernizar los viejos y obsoletos códigos Civil y de Procedimientos Civiles (aprobados en la década de 1960), incluido, desde luego, el ordenamiento de que un divorciado debía esperar al menos un año para volver a casarse. En mayo de 2002, los legisladores recibieron el proyecto del gobernador, cuya mayor innovación fue la de permitir que el divorciado contrajera una nueva unión matrimonial a partir del momento en que quedara disuelto el contrato anterior. Ambas iniciativas se aprobaron por unanimidad el 31 de mayo de ese año, con la particularidad de que entrarían en vigor el 22 de junio, el mismo día de su matrimonio con Maude Versini, un día después de consumar su separación con Paula.

Los diputados pasaron por alto los cuestionamientos sobre una velada forma de prostitución, las polémicas, y las consultas para aprobar los nuevos ordenamientos y validar el matrimonio de su gobernador.

En julio de 2005, Maude reconoció en una entrevista que a los habitantes de su estado adoptivo les costó trabajo asimilar la boda de una mujer francesa de veintiocho años con un mexicano de cincuenta y ocho. Con el matrimonio, ella se entregó a una próspera carrera en el

sector de bienes raíces. Se hizo millonaria. Y él se dedicó a ella, y a sus jugosos negocios y mansiones. Pero en 2007, la historia dio un vuelco dramático cuando todos los hogares mexicanos se enteraron de que Maude había presentado una demanda de divorcio, peleando por la custodia de los bienes y por varios millones de dólares.

Los escándalos no terminaron ahí, todavía en 2009 Maude y Arturo fueron noticia cuando salió a la luz una historia del pasado: se murmuraba de un tórrido romance que Maude, su novia de entonces, luego prometida y esposa, sostuvo con un maestro de tenis de mesa. Si fueron fundadas las sospechas o no, lo cierto es que el deportista argentino terminó por desaparecer de la escena. Asesinado.

Mario Palacios Montarcé fue ejecutado —de un balazo en la cabeza— la tarde del viernes 21 de noviembre de 2003 en el interior de la panadería La Bondi, ubicada en la avenida Lerdo de la capital mexicana. En la primera semana de febrero de 2009, la revista *Chilango* publicó un reportaje sobre el homicidio y documentó que se derivó de la presunta relación sentimental entre Versini y Palacios Montarcé, quien en enero de 1999 abandonó la pobreza de su barrio ferrocarrilero de Neuquén, en la Patagonia argentina, para integrarse como uno de los empleados del Club Toluca.

En dicho reportaje, titulado “Muerte súbita” y firmado por el periodista Diego Enrique Osorno y el fotógrafo José Luis Aranda, la revista destaca: “Montiel dejó sin investigar el asesinato de un deportista argentino. La posible causa: Maude Versini, su entonces esposa”, y cita a un funcionario de la procuraduría estatal, quien habló sobre el tema con la condición de que se mantuviera el anonimato: “Es uno de los expedientes con menos hojas que he visto en mi vida. [Señaló que incluía tres declaraciones ministeriales de personas relacionadas con lo sucedido.] El caso fue archivado [...]. No hubo investigación”. Otro alto funcionario de la procuraduría que labora en el gobierno de Enrique Peña Nieto declaró: “Ese caso no se resolvió y nunca se resolverá. Es un tema bastante delicado. Y no murió en un asalto. Checa eso. Es todo lo que te puedo decir”.

El periodista también refiere que en la Oficialía 3 del Registro Civil de Toluca, en el libro 6, constancia 01018, se encuentra el acta

de defunción de Palacios Montarcé, “soltero nacido en Neuquén, muerto a causa de herida penetrante por proyectil de arma de fuego en cráneo”.

Casi de inmediato se orquestó, sobre todo a través de foros en Internet, una campaña para descalificar el trabajo de Osorno. Sin embargo, ninguna aclaración ha tenido el peso suficiente para cambiar la percepción de la opinión pública. En cambio, el reportaje fue suficiente para que desde Argentina se haya exigido abrir una línea de investigación que revele quién asesinó en Toluca a aquel desafortunado joven.

En una carta enviada al semanario toluqueño *Nuestro Tiempo*, Maude negó cualquier relación con Palacios y afirmó que se trató de meras especulaciones con tintes políticos que podían dirimirse ante un tribunal. Pidió “dejar de lado esa trama de mentiras que al menos en mi persona se señalan” y reconoció: “no es la primera vez que aparecen manifestaciones en ese sentido sin sustento y sin verificarse con objetividad”.

¿Cuándo llegó Maude a Toluca? ¿Dónde se instaló? Aunque su noviazgo con Montiel no se hizo oficial sino hasta mayo de 2002, hay evidencias de que hacia mediados de 2001 ya radicaba en la capital mexicana. Por ese entonces, un conocido arquitecto local fue llamado con urgencia para rediseñar los interiores de una propiedad de seiscientos metros cuadrados de construcción, con una piscina de cuarenta y cinco metros, en el exclusivo fraccionamiento residencial y club de golf San Carlos, en Metepec. En las siguientes semanas se mudó allí una turista francesa acompañada por su joven hermana, invitadas especiales del gobernador mexicano.

Estaba lejos el divorcio de Montiel; en realidad, éste todavía no lo consideraba y su relación con Paula parecía tan sólida como siempre.

Aquella mansión se utilizaba para alojar a los dignatarios de otras entidades que llegaban por asuntos de trabajo con la gubernatura. De igual trascendencia resultaba la presencia de Maude Versini, sólo que por otras razones: su atractivo físico fue argumento para que el gobernador mexicano sostuviera una serie de entrevistas con ella sobre

cuestiones turísticas. Maude y la hermana llegaron cuando el arquitecto, apoyado por una cuadrilla de peones, ordenaba retirar muebles, puertas, baños, alfombras, cortinas, cristales, cocina y más. Todo se fue al depósito de basura. La mansión quedó en obra blanca para iniciar el proceso de la nueva decoración.

La locura de esos días sólo se alteraba de vez en vez, cuando Montiel aparecía en su Mercedes-Benz negro, cuyo interior se había esterilizado previamente con baños de alcohol. En efecto, desde su llegada a la gubernatura, la esterilización se convirtió en uno de los hábitos de limpieza preferidos del gobernador. Por eso, después de cada entrevista con campesinos, obreros y amas de casa, debía limpiarse las manos con generosas porciones de alcohol y algunos otros químicos, a fin de cuidar su salud.

Así transcurrieron semanas. El arquitecto cumplió con su responsabilidad de reacondicionar y redecorar la mansión —valuada en un millón y medio de dólares— bajo la presencia vigilante y directriz de aquella dama misteriosa. Al final, en los trabajos se invirtieron cerca de novecientos mil dólares. Con excepción del foyer, la cocina y los baños de la planta baja (recubiertos con mármol de importación), todo fue revestido con alfombra blanca, también de importación, para satisfacer los gustos de la exigente invitada.

Los muebles, las vajillas y la utilería se adquirieron en el extranjero. Las telas se compraron en Versace México. Aunque los muebles, como la sala, llegaron tapizados con finos hilados europeos, fueron desmantelados para retapizarse con las Versace. La residencia se decoró siguiendo patrones clásicos y vanguardistas. Las persianas eléctricas remataron la obra. El despilfarro resultó abrumador.

A decir verdad, la decoración rayó en la vulgaridad cuando alguien ordenó la compra de obras falsificadas de grandes maestros. Se solicitaron reproducciones al óleo sobre lienzo cuyo costo osciló entre mil quinientos y dos mil dólares por pieza. Una vez entregadas, se enviaron a un taller especializado donde, mediante procesos industriales, se hicieron “antiguas”. El costo por transformarlas fue aún mayor: entre tres mil y tres mil doscientos dólares cada una.

Las habitaciones de la servidumbre, dentro de la misma casa, que-

daron ocultas; su puerta de acceso y salida se adaptó a través de la cocina, con una disimulada escalera de caracol. El objetivo: en lo posible evitarle al gobernador todo contacto con el personal durante sus visitas y encuentros de trabajo con la joven francesa. Fue la mejor época de Versini y Montiel.

Fue también la época en que a las empleadas domésticas se les capacitó para esterilizarse al hacer la limpieza y se les dieron instrucciones de usar botas de un plástico especial, guantes y tapabocas no para cuidar la alfombra, sino para mantener la mansión libre de gérmenes y bacterias. Por pequeño que fuera, ningún detalle se dejó al azar.

En aquella casa se habló de divorcio, y en ella vivió Maude con su hermana hasta que Arturo consiguió la firma de Paula.

Asimismo, allí se consolidó una fructífera relación de camaradería entre Maude y Enrique Peña Nieto, el joven secretario de Administración. La amistad sería correspondida, y el buen trato del joven funcionario, recompensado.

AUDACIA

Si no tan sólidos como los del extinto profesor Carlos Hank González, manejados en miles de millones de dólares, los cimientos del poder montielista parecían firmes. Poseía un predio para construir un complejo residencial de lujo denominado La Providencia, en Metepec, de catorce mil metros cuadrados. Pero esto apenas era el comienzo. También era dueño de una residencia de descanso, valuada en diez millones de pesos y situada en la parte alta de una colina en el fraccionamiento Santuario, en Valle de Bravo, una reserva ecológica donde se asentaban lujosos clubes de golf y vela. Había otros dos lotes en el mismo fraccionamiento a nombre de Maude, y una residencia campes tre con vista al lago en el club de golf Gran Reserva de Ixtapan de la Sal, sobre un terreno de dos mil metros cuadrados a pie del helipuerto, del club hípico del spa y de las canchas de tenis. Se contaba también aquella mansión, finca o como se le denominara, sobre un terreno plano de cinco mil metros cuadrados en el fraccionamiento Las

Fuentes, en Atlacomulco, a un costado de la de su pariente consanguíneo y rival político René Montiel Peña.

Del rosario de propiedades dieron cuenta *Reforma*, *La Jornada*, *La Crisis*, *Excélsior*, *Diario Monitor* y *Proceso*. Habría que mencionar, aparte, la "casita" residencial de Arturo Montiel en la calle Carmen Serdán de Toluca, del fraccionamiento Colón, una de las zonas más caras de la capital mexiquense, muy cerca de la Casa de Gobierno; y la residencia semimoderna, también en el fraccionamiento atlatomulquense Las Fuentes, propiedad del ex alcalde Gregorio Montiel Monroy.

La sorpresa fue un yate anclado en la laguna de Valle de Bravo, que usaba los fines de semana Arturo Montiel Yáñez, el primogénito, propietario además de una colección de autos de lujo: un Ferrari, una Hummer, un Audi, un Mercedes-Benz y un BMW, y de una selección, valuada en millón y medio de dólares, de relojes de marca: Baume & Mercier, Franck Muller, Patek Philippe, Roger Dubois, Cartier, Roller Porsche o Ulysse Nardin. Sin contar sus lotes de arte (con obras de Toledo, Nishizawa y Botero) o de piezas arqueológicas (nacionales, africanas e indias). O sus cuarenta y cinco gasolineras a nombre de terceros. Verdad o no, entre sus allegados se dijo que Arturo Montiel Yáñez tuvo un negocio particular que le dejó por cada día hábil del sexenio de su padre seiscientos mil pesos libres de impuestos.

A todo eso había que sumar la gran cantidad de propiedades de su hermano Juan Pablo Montiel Yáñez, quien tenía autos de lujo, algunos de ellos blindados, y fincó una residencia con valor de un millón de dólares en el fraccionamiento de Zamarrero, uno de los lugares más caros de la zona Toluca-Zinacantepec. (Zamarrero fue propiedad de la familia Gómez de Orozco, uno de los socios de Carlos Hank González.) Otro negocio que le dejó buenos dividendos a Juan Pablo fue su mueblería In House, ubicada en la exclusiva área de Santa Fe, en el Distrito Federal.

Obstinado, suicida o muy cínico, pero sin un plan de emergencia y con un equipo —encabezado por Manuel Cadena Morales— incapaz de ofrecer respuestas para restaurar la credibilidad de su líder o contrarrestar las imputaciones lanzadas desde Televisa a las pantallas

de todo el país, en una reunión con sus paisanos de Atlacomulco Montiel todavía les dijo:

—Yo no me rajaré. Vamos para adelante.

Y en Monterrey le señaló a su equipo cercano que ése era el momento de la verdad para ver quiénes estaban con él por su dinero y quiénes por lealtad.

En Atlacomulco se exaltaron sus cualidades de “estadista”, de hombre visionario por haber llevado a su sobrino Enrique a la gubernatura. Hasta ese día nadie se atrevía a pensar que aquella televisora que se benefició con millonarios contratos de publicidad le daría la espalda, ni mucho menos que daría a conocer los manejos sucios del precandidato presidencial. Fue como una guerra de traiciones muy anunciada. Televisa encendió la mecha que tendió *Proceso* e hizo estallar la bomba.

No obstante, por más exoneraciones que hicieron las autoridades judiciales de la entidad, Arturo Montiel no dejó de sumar: en Tonatico, municipio colindante con el paradisiaco Ixtapan de la Sal, adquirió tres predios por un monto cercano a cuatro millones de pesos, los cuales regaló a sus hijos Arturo y Juan Pablo Montiel Yáñez, quienes, a su vez, se lo donaron a su madre Paula Yáñez, cuando todos sabían que la operación formaba parte de los arreglos para la firma de un divorcio por mutuo acuerdo, aceptación de la boda de Montiel con Maude Versini y, aún mejor, el consentimiento de las cláusulas de confidencialidad.

Una mirada de indiscreta extrañeza se dirigió hacia el Registro Público de la Propiedad en Tenancingo, en cuyos libros, el 6 de mayo de 2002, quedó asentada una operación que realizó el entonces subsecretario de Asuntos Jurídicos del gobierno estatal, Luis Enrique Miranda Nava: la compra de predios a la familia Kurt Visetti. Al cabo de diez días, Miranda los revendió por el mismo precio a su jefe, quien unificó los tres predios en un lotecito de seis mil quinientos treinta y nueve metros cuadrados.

Como colofón, unos meses después Miranda fue nombrado nuevo secretario de Finanzas. Le fue todavía mejor, porque su nueva dependencia absorbió los asuntos de la Secretaría de Planeación y los de

La de Administración que dejaba pendientes Peña Nieto para registrarse como candidato a diputado local por un distrito de su natal Atlacomulco para el periodo 2003-2006. A Miranda le crearon una supersecretaría, y en 2009, de la mano de Montiel, sería nombrado secretario general de Gobierno.

Montiel fue entregado en bandeja de plata a su rival tabasqueño. Con su muy dudosa reputación, Madrazo apareció de la noche a la mañana como un hombre más recto. Luego de la denuncia desde Televisa, se documentó el famoso departamento de Montiel en el Bosque de Boulogne, barrio dieciséis, una zona donde se encuentran residencias de embajadas y grandes personalidades. Pagó un millón trescientos mil euros por aquella construcción de doscientos diez metros cuadrados. Allí, Maude y Montiel fueron captados por los paparazzi en autos de lujo, entre ellos un Mini Cooper superequipado, convertible, negro, conducido por ella.

Hubo todavía un poco más. En su edición del martes 7 de febrero de 2006, el periódico *Reforma* informó en su nota principal: “Estreza Montiel casa en España”. La nota, firmada por Luis Méndez, dio cuenta en Sotogrande, Cádiz, de la “exclusiva residencia en uno de los más lujosos balnearios en la Costa del Sol española”, valuada en al menos un millón setecientos mil dólares. En esa marina bañada por un paisaje de lujosos yates, la familia Montiel Versini pasó sus vacaciones en diciembre de 2005. Luego, el diario recordó que, de las diez veces en que Montiel viajó a Europa como gobernador, ocho fueron a España. Dos semanas antes, a Juan Pablo Montiel Yáñez y a su socio Ernesto Zedillo Velasco, hijo del ex presidente Ernesto Zedillo, se les había denunciado e implicado en un fraude durante una millonaria compra de electrodomésticos.

El ex gobernador estaba abrumado. Seguían comentándose temas como la compra que hizo en 2003 su hijo Arturo Montiel Yáñez —considerado el mejor negocio de su vida— de diez hectáreas agrícolas en el municipio de San Antonio la Isla —entre Tenango del Valle y Metepec—, a través de un intermediario y a muy bajo precio. Después, echando mano de sus influencias, hizo cambiar el uso del suelo para conformar el proyecto inmobiliario Las Ventanillas,

edificar seiscientas treinta y tres viviendas de interés social y multiplicar, por la cantidad que él decidiera, el valor de cada metro cuadrado que adquirió.

Esta noticia se publicó como nota principal en *Excelsior* el viernes 24 de febrero de 2006 y fue la puntilla para la demanda que José Luis Cortés Trejo, el mencionado decimoquinto regidor de Tlalnepantla, presentó ante la PGR a fin de aclarar los depósitos millonarios de Miguel Sámano Peralta, secretario particular de Arturo Montiel Rojas, y de Carlos Rello Lara, su titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, por varios millones de dólares en cuentas personales abiertas en bancos de Estados Unidos.

Los abusos de Montiel no se dieron todos durante su gobierno. Desde años atrás ya tenía sus cartas de presentación. En su tierra natal se aprovechó de la familia cuando pudo hacerlo, asociado con su amigo y jefe Juan Monroy Pérez. En 1981, siendo este último secretario general de Gobierno, Montiel —que era su secretario particular— entró en arreglos con Teodoro Mendoza Plata, alcalde de Atlacomulco, e hizo un pingüe negocio de fabulosas ganancias.

Montiel y Monroy dieron indicaciones al edil para otorgar en concesión, por tiempo indefinido, una mina de tezontle en el cerro de Las Cruces, en las proximidades de la cabecera municipal, a la empresa Calefa Construcciones. Y así se hizo, aunque el predio, cuyo dueño había sido un tío abuelo de Arturo, Maximino Montiel Olmos —muerto seis años atrás—, pertenecía a una hija de éste y tía de aquél: Guadalupe Montiel Flores, cuya residencia estaba registrada en Ensenada, Baja California. Doña Guadalupe era propietaria de veinte mil metros cuadrados, e igual superficie de cerro pertenecía a otros herederos de Maximino. Propiedad de Montiel y Monroy, Calefa Construcciones comenzó de inmediato sus trabajos de explotación.

Muerto el tío y la tía radicada en Baja California, ambos sabían que esos cuarenta mil metros cuadrados se multiplicaban con creces por la cantidad de metros cúbicos de tezontle que había en la mina. El negocio fue redondo. Treinta años después se mantiene constante la explotación de los filones de tierra. Se estima que éstos han dejado unos diez millones de dólares.

Sin embargo, fallaron los tiempos políticos de Monroy Pérez, quien ya se veía como gobernador. Su amigo Jorge Jiménez Cantú no pudo heredarle el cargo. Monroy desapareció de la entidad con su joven secretario particular; ambos se dedicaron a la iniciativa privada. Además de expropiar las vetas de tezontle, adquirieron grandes extensiones de tierra ejidal en Metepec. En el sexenio de Alfredo del Mazo González consolidaron el desarrollo del fraccionamiento residencial San Carlos (título en homenaje a Carlos Hank González, el hombre que los llevó al poder) y la zona aldeaña conocida como Ciprés. A finales de los años ochenta iniciaron la construcción de Las Américas, que fue la primera plaza comercial de gran nivel en el valle de Toluca.

Del Mazo gobernó de 1981 a 1987. En una de sus primeras decisiones impuso en la alcaldía de Atlacomulco a su primo Arturo Peña del Mazo (1982-1984). No fue sino hasta entonces cuando a doña Guadalupe Montiel le informaron de la invasión y extraña “expropiación” de su predio, ideada por su sobrino y por el amigo de éste, Monroy. Se abrió un larguísimo proceso judicial, y en 1985 a Montiel y a Monroy se les obligó a pactar —según documentos municipales publicados en *Atlacomulco, historia de su gobierno*, de Antonio Corral Castañeda— el término del contrato de explotación del banco de tezontle que realizaba la empresa Calefa. Luego, el ayuntamiento mantuvo la explotación del predio. Hasta la fecha.

Ante el bombardeo de noticias sobre la muy prolífica familia llevado a cabo por los noticieros de Televisa aquel 10 de octubre de 2005, Arturo Montiel Rojas dejó de luchar y renunció a sus aspiraciones. Maude resistió poco, desilusionada de la política mexicana que tanto le dio en tan poco tiempo, y regresó a Francia. Firmó una generosa acta de divorcio y volvió a casarse. En una de sus escapadas a París, antes de su separación, los paparazzi le tomaron fotografías en las que aparecía abrazada de un joven mientras caminaban por las calles de esa ciudad. Cuando alguien le preguntó de quién se trataba, respondió: “Con quien estoy abrazada es un amigo gay”.

Por absurdo que parezca, la llamada “transparencia” le dio una manita a Montiel cuando la PGR fijó doce años para abrir la información relacionada con los criterios en los que se basó para integrar una investigación contra el gobernador Montiel, después de determinar la no acción penal. “Se trata de información reservada o confidencial, fue la respuesta que dio la Unidad de Enlace de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad a la solicitud de *Proceso* para conocer la averiguación previa AP-PGR/028/2001 integrada contra Montiel, Miguel Sámano Peralta (su secretario particular) y Carlos Rello Lara (ex concesionario de la Pepsi Cola) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.”

La sola medida de la PGR dio pie a más sospechas o evidencias de corrupción, pero el gobierno de Peña aprisionó la otra pinza: el 17 de octubre de 2005 clasificó como confidencial y cerró archivos electrónicos y expedientes mexiquenses relacionados con el manejo y refinanciamiento de la deuda pública, así como los salarios de los funcionarios del sector central y los datos sobre la nómina, porque la difusión y publicación de informes de esa naturaleza “constituye” un riesgo para los funcionarios. Esa medida se complementó con la decisión de clasificar los expedientes de personal de confianza del sector central porque, otra vez, dicha información contiene datos financieros vinculados al ámbito familiar y privado de los funcionarios, mientras la deuda —además del impuesto a la nómina, los créditos fiscales y los impuestos sobre vehículos— se cerró por convenir a los intereses de la hacienda pública.

Si bien es cierto que Montiel creó un sofisticado sistema de triangulación, intermediación y cambio de fechas para sortear o sacudirse el rastreo de los depósitos a sus cuentas bancarias en Estados Unidos o de sus propiedades, antes de asumir la gubernatura en 1999 su capital era inferior a diez millones de pesos —aunque a estas alturas tampoco puede dudarse que haya triangulado recursos desde Protección Civil y Talleres Gráficos de la Nación, cuyas direcciones generales ocupó entre 1994 y 1997—: su residencia en la zona de El Calvario en Toluca, una parte pequeña de los terrenos de su finca El Fresno en el fraccionamiento Las Fuentes de Atlacomulco, el Ford Thunder-

bird negro 1988, un Mustang negro, que a su salida eran ya sólo parte de una colección de recuerdos.

En diciembre de 2006, la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal absolvió de manera definitiva a Montiel, quien así quedó limpio de las acusaciones de haber incurrido en enriquecimiento inexplicable. El contralor Eduardo Segovia Abascal explicó que el patrimonio de su ex jefe Montiel y el de su esposa Maude Versini eran congruentes con los ingresos que percibió durante su periodo en la gubernatura. A decir verdad, nadie esperaba que Segovia ni Peña condenaran al ex gobernador; tampoco a sus hijos ni, mucho menos, a su esposa. El mensaje de exoneración, contenido en cinco cuartillas y leído en siete minutos, fue muy preciso: “El patrimonio reportado en la manifestación por alta es consistente con las modificaciones reportadas en las manifestaciones por anualidades 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y baja. [...] Los bienes y valores manifestados por el licenciado Arturo Montiel Rojas durante el periodo de su gestión guardan consistencia con los ingresos que ha manifestado percibir durante ese lapso”.

No obstante, las dudas persisten. En ese mismo año, el abogado Ricardo Sodi Cuéllar, uno de los cinco observadores ciudadanos que analizaron el expediente sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Montiel, comentó al periodista Jorge Alejandro Medellín, de *El Universal*, que el peritaje mercantil elaborado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) sobre la adquisición de bienes de Montiel “estuvo hecho para favorecer al ex mandatario”, y advirtió que el procurador Navarrete y su equipo no elaboraron un peritaje especializado para determinar “el origen de los recursos del señor Montiel”. De acuerdo con los informes oficiales, en la investigación participaron al menos treinta y cinco peritos en distintas áreas.

“Hubo cinco peritajes mercantiles; integrantes de dos legislaturas —la LIII y la LIV— revisaron y avalaron lo investigado; hay auditorías de los años 2000, 2001 y 2002 y en ninguna se detectaron desvíos y en ellas se declaró al señor Montiel sin observaciones. [...] Y

están las declaraciones fiscales del ex gobernador, donde se acredita que ese dinero es lícito y que se pagaron impuestos por ese dinero”, dijo el procurador Navarrete al periodista.

No obstante, las exoneraciones fueron inútiles, porque el caso de Arturo Montiel le dio la vuelta al mundo. Jorge Toribio decidió enlistar las propiedades de su pariente en uno de los capítulos de su libro *Grupo Atlacomulco: Revelaciones 1915-2006*. Cuando se publicó, en 2006, Carolina Monroy del Mazo, prima de Peña Nieto y en ese momento responsable de la política cultural en el gobierno mexiquense, llegó muy temprano a las oficinas de Jorge para exigirle que renunciara, con la amenaza velada de hacer una auditoría al Museo de El Oro, cuya dirección él tenía a su cargo y desde donde había denunciado (a través de *El Sol de Toluca*) la desaparición, sustracción o robo de piezas valiosas de la cultura estatal. Carolina argumentó: “En este gobierno está prohibido publicar cosas contra el Grupo Atlacomulco”. El escritor se fue. No por la exigencia ni el enojo de Carolina, sino por el abierto acto de censura oficial. El trabajo de Toribio no había empezado en 2006, sino seis años antes. Distribuido en contadas librerías de Toluca, su libro desapareció o voló en las manos de unas cuantas personas, quienes llegaron a comprar la totalidad de los ejemplares.

Todavía se hizo un último y más radical esfuerzo de censura: horas antes de la presentación del libro, en un salón del Instituto de Estudios Legislativos, Arturo Montiel envió a un personero para llamar al sobrino Jorge Toribio a su oficina del Palacio de Gobierno. En un diálogo breve, grotesco e insultante, el gobernador le ofreció al autor un millón de pesos por los mil ejemplares impresos de *Revelaciones* y por los derechos posteriores de la obra. Apacible como es, o resistiendo el coraje por la osadía, Jorge redescubrió la estatura de su familiar, que se enfilaba hacia la candidatura presidencial. El libro se presentó sin incidentes, pero días después, en pleno centro de Toluca, sí hubo uno.

—¿Qué hago? —preguntó la sorprendida responsable de una librería cuando una persona, con un simulado aspecto de agente del gobierno estatal, llegó a comprar los libros, todos los que ella tenía a resguardo, del Grupo Atlacomulco.

Tuvo que venderle los ejemplares sin chistar. La historia fue ade-

rezada con el buen humor de Jorge Toribio, quien cargará toda su vida con el estigma de ser un Montiel.

Generosos en nombres y detalles, pero sobre todo con enorme asombro, los internautas, a través del blog El Largato (lagarto-original.blogspot.com), realizaron un trabajo de investigación en el que fallaron agentes de las procuradurías General de la República y del Estado de México. Gracias a ellos, los mexiquenses se enteraron de las extravagancias en la vida de recreo de su ex gobernador, cuando un usuario subió una fotografía de Montiel y Maude que los mostraba descansando desnudos en la piscina de su residencia en Acapulco, valuada en dos millones de dólares. Además, se exhibió parte de sus interiores, como el recibidor, donde había piezas de escultura en madera de uno de los artistas más cotizados de Valle de Bravo. El aliento alcanzó para detenerse un poco más al norte, en un acantilado de otra mansión, en Careyes, propiedad de más de mil metros cuadrados y valuada en sesenta millones de pesos, desde donde se dominaba la bahía del Embrujo, para satisfacer una encarecida solicitud de la señora esposa de Montiel.

Si Montiel le atribuyó a Madrazo el escándalo desatado desde Televisa, tenía razón en parte, y persisten las dudas por la mala fama y el desprestigio bien ganado que aquel tabasqueño se cargaba, porque la convocatoria estaba amañada y nada lo haría soltar la candidatura presidencial. Pero con el descrédito encima, Montiel tenía un aliado del diablo: el alboroto de corrupción, la inmoralidad y la permisividad que quemaba a los hermanos Bribiesca Sahagún, hijastros del presidente Vicente Fox. Las atenciones al asunto familiar presidencial se presentaron como una momentánea polvareda salvadora porque se dejó de lado el asunto Montiel.

Historia de una conspiración

LA POLVAREDA LEVANTADA por Montiel estaba suspendida desde julio de 2001, en pleno idilio de los recién casados Marta Sahagún y Vicente Fox. Cuando todavía estaba calientito el afecto pasional en la residencia presidencial y nadie podía apagar las estelas del *toallagate*, el viernes 6 de julio de 2001 se conoció desde la PGR un bochornoso espectáculo de control político protagonizado por espías mexiquenses.

Un golpe de suerte en un operativo coordinado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de la Secretaría de Gobernación y por la PGR dejó al descubierto la verdad sobre modernas historias de espías, métodos de vigilancia y seguimiento de funcionarios para sacar información a través de “agentes James Bond montielistas”.

Este peculiar equipo mexiquense, que tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino de un grupo de agentes federales, tenía el encargo de investigar, analizar la conducta, declaraciones y relaciones de funcionarios, líderes panistas estatales, priistas locales de rango —Carlos Hank González, Emilio Chuayffet y Alfredo del Mazo—, viejos rivales del gobernador, entre ellos Humberto Lira Mora, así como Norma Meraz Domínguez, directora general de Radio y Televisión Mexiquense, quien en 2008 tomaría el antiguo lugar de Paula Yáñez Villegas y de Maude Versini en el corazón de Montiel.

El montielismo fue pillado con las manos en la masa en una jugosa e ilegal colecta de información. El 7 de octubre de 2001 el subprocurador federal de Procedimientos Penales A, Gilberto Higuera Bernal, y el coordinador de la Unidad Especializada en Delincuencia

Organizada (UEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, hicieron público el desmantelamiento de una red de espionaje político responsable de escudriñar también en la vida pública y privada de integrantes del gabinete del presidente Fox, además de crear un sistema de escuchas para intervenir líneas telefónicas de los principales funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Hacienda, así como de dirigentes de los tres partidos mayores: Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del propio Revolucionario Institucional (PRI).

Las investigaciones de la PGR, las declaraciones de Higuera y la confirmación de Vasconcelos eran muy precisas, pero no reflejaban las retorcidas intenciones del gobierno mexiquense, que contemplaba una adelantada acumulación de informes, así como la elaboración de perfiles personalizados y archivos de análisis con miras a la sucesión de 2006. Desde septiembre de 2000, luego de que Francisco Labastida Ochoa perdió las elecciones presidenciales, Montiel quería tener en sus manos y en las de su equipo el dudoso privilegio de fiscalizar la vida y el desempeño de las principales figuras públicas, como si el país entero fuera un teatro guiñol.

Esa práctica, acompañada de otras menos visibles pero igualmente efectivas, como la corrupción disfrazada en la distribución de generosos bonos, le había dado buenos resultados cuando la puso en marcha en la Cámara de Diputados para someter a un grupo de ambiciosos legisladores locales panistas. Desde antes de su toma de posesión, el 16 de septiembre de 1999, los perredistas habían sucumbido a las febriles y provocativas pretensiones.

Además de crear oficinas para darle una pantalla legal al desarrollo del programa de espionaje e inteligencia —una policía de investigaciones políticas secretas muy similar a la de la Secretaría de Gobernación—, Montiel y su equipo intentaban reforzar algunos de esos pequeños centros y crear un grupo propio disciplinado, basado en la sumisión, para controlar a líderes sociales y a dirigentes sindicales potencialmente peligrosos, capaces de sembrar el descontento y esparcir inconformidades.

Tres días antes de aquel sábado 7 de octubre, algunas oficinas gubernamentales en Toluca quedaron atrapadas en una estela de pánico.

Se ordenó dismantelar, a marchas forzadas, los centros más evidentes, coleccionar todo el material y deshacerse de otro que, en la prisa, pudiera ser abandonado. El personal fue despachado a casa o de vacaciones obligadas con goce de sueldo. Pero a todos se les pidió guardar silencio. De la nómina fueron borrados nombres comprometedores y a los jefes se les pidió esconderse. La inusitada medida nada tenía de extraño, porque para entonces el gobierno de Montiel sabía que agentes federales andaban tras la pista de espías y escuchas mexiquenses.

Agitación y trastorno describirían y resumirían la situación de ese día y el siguiente en la Secretaría General de Gobierno y la Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado de México, responsables de mantener esa estructura que llegó a tener más de cuatrocientas personas y de destinarle un presupuesto no comprobable —porque salía de los gastos confidenciales, las llamadas partidas secretas— de al menos cuatro millones de pesos mensuales, aunque en principio se habló de nueve millones de pesos anuales y de un cuerpo de doscientos espías, bajo la clasificación de analistas de información política, distribuidos en los ciento veinticinco municipios de la entidad.

La confusión y el nerviosismo tenían su razón de ser. Los agentes federales ya conocían el programa mexiquense e incluso habían solicitado (en el transcurso del 5 de julio) informes sobre un grupo de retenidos, entre ellos un menor de edad enviado al Consejo Tutelar. En los primeros dos años del sexenio montielista y hasta que la PGR descubrió la red, el responsable de ese programa —Manuel Cadena Morales, secretario de Gobierno— fue la persona con más poder en el gobierno, aunque a decir verdad también lo tenía por escalafón. Fracasada la aventura, más tarde lo superaría en influencia el líder priista Isidro Pastor Medrano.

Los implicados del gobierno mexiquense se lanzaron a nadar contra la corriente, inseguros porque desconocían la profundidad de las indagaciones federales sobre la “red de inteligencia” estatal, cuya labor inicial, incluido el seguimiento físico, se concentró en los críticos del régimen, así como en los rivales panistas de Montiel, y luego se amplió. Negaron que once personas retenidas y arraigadas durante noventa días fueran espías del gobierno de Montiel. “Ninguno de los doce

[uno fue remitido al Consejo Tutelar para Menores Infractores] detenidos por la PGR trabaja en la estructura." Pero la información preliminar era ya una avalancha. En el aparato que urdió el plan y en el cuerpo de espionaje había ex empleados de las desaparecidas direcciones Federal de Seguridad y General de Investigaciones Políticas y Sociales de Gobernación, además de trabajadores estatales directos, responsables de la coordinación y tareas de logística.

En el momento en que fueron descubiertas sus labores por mera casualidad en los primeros días de junio, cuando agentes de la PGR y el Cisen rastreaban una banda de secuestradores, los espías mexiquenses detenidos aún contaban con un "rudimentario" equipo conectado a líneas telefónicas fijas, pero tenían en su poder un nutrido número de audiocasetes ya grabados y etiquetados, listos para transcribir, analizar y enviar la información correspondiente a funcionarios del Estado Mayor de la Dirección de Seguridad Pública y de la Secretaría General de Gobierno. Estaban detectadas algunas "oficinas" de la red de escuchas telefónicas en el Estado de México y en el Distrito Federal.

El propietario de un diario de Toluca también se benefició de la tecnología del moderno espionaje cuando recibió un equipo para rastrear llamadas telefónicas y ubicación de números celulares. El dispositivo se había instalado en una computadora que transmitía una señal a una antena para verificar los números que le interesaban.

Los asesores montielistas de inteligencia estaban nerviosos por la solicitud de la PGR sobre el grupo de retenidos, pero confiaron en la habilidad y la discreción de su "moderno" equipo humano del ilegal espionaje para eludir al Cisen. Con exceso de soberbia, desdeñaron las peticiones federales, apostaron a la inexperiencia e incapacidad de Fox y la ingenuidad de Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación, para enfrentar un problema de esa naturaleza. Y los quisieron exhibir bisonños, sin tomar en cuenta las repercusiones de muy largo plazo que pudiera ocasionarle a su jefe un enfrentamiento con la Presidencia de la República.

Todavía un día después de las declaraciones de Higuera y Vasconcelos, la vocera gubernamental Ana Lilia Herrera Anzaldo —citada en un reportaje de *Milenio Diario* sobre el Grupo Atlacomulco— inició

una campaña para defender a su jefe: "La mexiquense es hoy la clase política más sólida del país y Arturo Montiel es el primer priista de la entidad". Después, ella misma intentaría deslindarse del montielismo. Por su parte, el secretario de Gobierno, Manuel Cadena, se estrelló contra las evidencias y se vio obligado a reconocer que seis espías sí cobraban como aviadores en el gobierno estatal.

Lo mismo ocurrió con el subsecretario de Seguridad Pública, Alfonso Navarrete, quien amplió los informes: seis trabajaban como empleados en las áreas de Archivo y Personal de la Subsecretaría Administrativa. "En marzo de este año se regularizó la contratación de personal. Los seis fueron dados de baja y no reclamaron, ya que no estaban inscritos en nómina. Podían ser aviadores. Sus cargos eran menores. No estaban en áreas que manejan información sustantiva."

Cuando todos pensaban que el asunto se enfriaría con las declaraciones de Cadena y Navarrete, y también con las de la vocera para cerrar filas en torno a su jefe y líder, se hicieron públicos nombres de panistas espiados, entre los que sobresalían los del naucalpense José Luis Durán Reveles, subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación y ex candidato a la gubernatura; Francisco Gárate Chapa, presidente estatal del PAN; el senador Carlos Madrazo Limón, y el diputado Julián Andrade. Y estaban intervenidas todas las líneas del cuartel central de ese partido en Naucalpan y de la presidencia municipal, lo mismo que las de las alcaldías de Tlalnepantla, Toluca y Atizapán.

Mal asesorado por sus funcionarios de inteligencia detectivesca, el inquieto e inseguro Montiel dejó huellas de torpeza porque desde la Secretaría de Administración, controlada por Peña Nieto, salieron pagos para algunos integrantes del cuerpo de espionaje diseminados por todo el estado, especialmente en municipios de la zona conurbada, el Distrito Federal y algunos ayuntamientos del Valle de Toluca. En esos días germinó una de las semillas que le obstruirían a Montiel el camino a la candidatura presidencial al enfrentarse a la familia Fox-Sahagún.

Sin frenos, con enemigos identificables, agentes de la PGR cada día más cerca y seis de once arraigados reconocidos y aceptados como

burócratas estatales, el apresurado desmantelamiento del aparato de inteligencia, al menos aquél dedicado a la escucha de funcionarios y dirigentes partidistas, fue inútil. Los federales todavía tuvieron tiempo de descubrir nueve inmuebles adaptados como centros de escuchas, uno de ellos en la calle Abraham González, en la Ciudad de México, a tres cuadras de la Secretaría de Gobernación, y uno más en la de Valladolid, en la colonia Roma, desde donde observaban la sede nacional del PAN. Los otros estaban en Toluca, Tlalnepantla, Naucalpan, Los Reyes Iztacala, Ecatepec, Ciudad Nezahualcóyotl y Zinacantepec.

El Universal le fue cerrando a Montiel otras posibles justificaciones hasta dejarlo de plano sin salida, y documentó una red de inteligencia responsable de vigilar e investigar también a “empresarios y líderes sociales”, adscritos a las seis subdirecciones regionales operativas de la Secretaría de Seguridad Pública. Y: “al final de la cadena de mando que recorre la información confidencial se encuentran el secretario general de Gobierno, Manuel Cadena Morales, y Alfonso Navarrete Prieta, subsecretario de Seguridad Pública”. Más adelante, este último sería nombrado procurador de Justicia.

Arturo Montiel ya no pudo eludir lo ineludible. Empezó a probar la “candidez” foxista cuando se descubrió en los círculos de la Secretaría General de Gobierno un cuerpo élite e ilegal de espionaje que, simplificando las tareas, respondía al primer círculo de los funcionarios de la gubernatura, sin incluir a Cadena, responsable de analizar con mayor rigor la información recabada por las escuchas telefónicas, entregarla “digerida” y bien interpretada en las oficinas de Miguel Sámano Peralta, secretario particular del gobernador, además de crear perfiles de personas, sin importar ideología ni posición económica, y grupos que pudieran representar un riesgo para la gubernatura.

Las tácticas de la inteligencia mexiquense a través de la intervención de cables de líneas telefónicas con rosetas, la infiltración a grupos de amigos y colaboradores de funcionarios determinados, la vigilancia fija y móvil de blancos elegidos, la intervención a teléfonos particulares y de oficinas, así como el envío de información a través de Internet a oficinas de acopio, se rastrearon hasta 1994, durante el gobierno de César Camacho, con la renta de un cuarto en la calle Amapolas, en la

popular colonia San Antonio Zomeyucan del municipio de Naucalpan (por cierto, este municipio es llamado el peor dolor de cabeza para los priistas, porque es el más rico y está en manos del PAN).

El alcance del programa de espionaje era ambicioso. Se habían hecho planes para dotar a algunos centros con cámaras infrarrojas, transmisores de audio y video inalámbrico, y escáners de radiofrecuencia. Manejado el estado como una pequeña república, hubo voces que pidieron ampliar esas oficinas conforme Montiel avanzaba hacia el palacio presidencial, y dotar a las más importantes —responsables de personajes en Gobernación, Hacienda y el PAN— con otras herramientas disponibles casi en cualquier tienda de Estados Unidos, como cámaras de visión nocturna y periscopios.

Cuando nadie le veía un fin tan abrupto a la carrera de Montiel y todo mundo se alistaba para tomar por asalto la candidatura presidencial, hubo quienes ambicionaban un complejo programa de espionaje profesional con pinganillos inalámbricos, chuletas electrónicas MIR-2I, detectores de micrófonos y de escuchas, intervención de teléfonos móviles e inhibidores telefónicos GSM. En aquel año 2001, el proyecto mexiquense para desplazar al Cisen o crear una policía política paralela era más de lo que parecía a simple vista. A largo plazo contemplaba la localización vehicular por satélite, cámaras mini, micrófonos espía y pistolas eléctricas.

Asimismo, los implicados deseaban instalar algunos centros, disfrazados de oficinas políticas, en las ciudades más importantes del país, para identificar y neutralizar a los principales líderes sindicalistas, intelectuales opositores al PRI, empresarios e inversionistas y a todos aquellos que pudieran representar un escollo a la clase gobernante mexiquense. Pero en los primeros días de julio de 2001, un comando federal integrado por sesenta agentes, con apoyo de elementos élite de la policía municipal de Naucalpan, irrumpió en un cuarto de cinco por cinco metros, donde encontraron cables pelados para intervenir líneas telefónicas. El miércoles 11 de julio, Montiel ya sopesaba los peligros. Todavía negó cualquier tipo de vinculación con la red y se declaró “el principal interesado en que se inicie esta investigación” para deslindar responsabilidades.

Llamó “burdo” y “arcaico” el espionaje, porque representaba “regresar a los tiempos de las filtraciones y la siembra de pruebas con fines políticos”. Acorralado en una ceremonia en el Museo de la Ciudad de México para la firma de un convenio con la Secretaría de Turismo, el cuestionado gobernador intentó calmar las inquietudes de los periodistas: “En mi gobierno trabajan más o menos doscientas mil personas. Por eso se está pidiendo una investigación. Yo desconocía que hubiera espías en mi estado”. Pero entonces ya se preparaban otros cateos federales, aparecieron recibos de nómina (del gobierno estatal) de algunos espías y se dieron a conocer los nombres de los hermanos Alejandro —ex funcionario del Consejo Nacional de Seguridad Pública— y Carlos Díaz de León, integrados a la administración pública a través de Carlos Iriarte Mercado, titular de Seguridad Pública.

Montiel asimiló el golpe. Aún parecía tranquilo e impasible. Cuantas veces pudo, negó cualquier intención de renunciar a la gubernatura. Sin embargo, estaba lista su vinculación con los hermanos Díaz de León. El primero, titular de la Dirección de Inteligencia Estatal, y el segundo, jefe de la Coordinación General de Gobernación (que meses antes había sustituido a la Dirección General de Gobierno, bajo las órdenes de Cadena) y del manejo directo de espías, cuya responsabilidad estaba definida: crear carpetas de personajes potencialmente peligrosos para el sistema, incluso empresarios; dar seguimiento a información política y social que pudiera desestabilizar al gobierno, y de seguridad pública a través de redes bien establecidas de informantes y de policías encubiertos.

Fueron días de datos abundantes. Se habían confirmado las identidades de treinta y cinco personas, once de ellas arraigadas en una casa de seguridad de la PGR en San Ángel: Roberto Pérez Andrade, Alberto González Palomino, Arturo Pérez Negrete, Alejandro I. Bustamante Rivera, Luis Ignacio Zendejas Fuerte, Beatriz Carrera Martínez, María Elena García Acosta, Gerardo Alejandro Santillán Meneses, Fortino Ángel Cruz Pablo, Ricardo García Padilla y Elizabeth Calderón González. Y había una orden de presentación contra René Reyes Córdoba y los hermanos Díaz de León. No hizo falta que alguno de los arraigados mencionara los nombres de Arturo Montiel y Manuel

Cadena como sus jefes. Los otros centenares de espías fueron desapareciendo y abandonaron sus sedes operativas.

Pocas veces se han atado tantos cabos sueltos al mismo tiempo, y pocas veces se han dejado huellas regadas con tanto descuido. Algunos indiscretos recibos de nómina del gobierno estatal se colaron hasta la redacción de *Milenio Diario*. Fechados en los meses de mayo y abril de 2001, los primeros correspondían a Gerardo Alejandro Santillán Meneses, uno de los cabecillas, cuyo salario salía de la Secretaría de Finanzas, y otros eran de María Elena García Acosta. El primero tenía un ingreso mensual superior a treinta y cuatro mil pesos; la segunda, de diecisiete mil. Las indagaciones filtradas al diario llevaron a Miguel Sámano; además, al secretario de Administración, Enrique Peña Nieto, al de Desarrollo Económico, Carlos Rello Lara —quien se deslindó de inmediato—, y a Carlos Iriarte Mercado, asentados ya como *Golden Boys*.

Daba la impresión de que el montielismo estaba preparado para todo. Había infiltrado sindicatos, organizaciones campesinas, vecinales y partidistas, pero el evidente cuerpo del delito —el equipo decomisado y los recibos de pago— originó un caos. Y en ese desorden Montiel dio muestras de ingenuidad política y de sentirse acorralado porque cometió el peor error de su carrera, aquel que quizá le costó la Presidencia de la República. Se tiró al vacío y enfocó sus baterías contra Fox, en ese momento preocupado más por enseñar a montar a caballo —allá en el rancho de Guanajuato— a su nueva esposa, Martita Sahagún.

El miércoles 18 de julio, algunos matutinos publicaron un extraño desplegado atribuido a Fernando Chávez Méndez, secretario particular del gobernador de San Luis Potosí, Fernando Silva Nieto, escrito con un lenguaje virulento y lleno de calificativos, condenas, cuestionamientos y reproches a un gobierno federal autoritario, revanchista e incapaz, encabezado por Fox. Sobre todo, salía a la defensa del gobernador mexiquense. Contra los cálculos optimistas, dicho desplegado tuvo un efecto multiplicador de apoyo priista al presidente de la República. Y, en los hechos, representó la manifestación más clara del fracaso mexiquense. Jamás nadie supuso que las repercusiones llegarían

años después. Pero tampoco en 2006, cuando se les cayó la candidatura presidencial, nadie recordó el memorable desplegado.

Al pie aparecían los nombres de dieciocho de los diecinueve gobernadores priistas. A última hora, Montiel se acobardó, se dejó llevar por su ingenuidad negándose a firmar un escrito salido de su gobierno. En las horas siguientes fueron identificados los responsables de la publicación —que apareció en la página 41 de *Milenio Diario*—, pagada en efectivo casi en forma clandestina; nada tenían que ver con San Luis Potosí: los viejos periodistas toluqueños Alfredo Albíter Sánchez, encargado de la oficina de Comunicación Social de la legislatura, y Hugo Miranda, jefe de prensa de la fracción priista, empleados ambos del diputado Isidro Pastor, el personaje más cercano a Montiel y a partir de ese momento el segundo hombre con más poder en su gobierno hasta octubre de 2004. Luego se verificó el origen del documento en las oficinas de Sámano, secretario particular del gobernador.

En las siguientes horas, quince de los dieciocho mandatarios “firmantes” del ataque a Fox se deslindaron del desplegado. Se negaron a entrar en una guerra con el presidente de la República. Aunque Montiel no se dio cuenta, y más adelante, en 2006, en plena etapa de la sucesión foxista, pocos se acordaban del asunto, su futuro político quedó sellado en ese momento. Él no lo sabía, y sus operadores políticos, cortos de memoria, se negaron a echar un vistazo hacia el pasado reciente. Se confiaron en el borrón y cuenta nueva.

La inmoral fortuna fue el golpe final. Sus espléndidas mansiones, sus millones, los de sus dos hijos mayores y sus excentricidades con Maude no eran de oídas, ni se habían difundido sólo como rumores o sospechas infundadas. Exhibido y agobiado en octubre de 2006, Montiel se lanzó contra el PRI y lo debilitó. Martita respiró durante unas semanas, el PAN ganó sus segundas elecciones presidenciales y los hermanos Bribiesca Sahagún desaparecieron del panorama.

En términos boxísticos, el último volado de derecha lo recibió Montiel de puños de su propio ex secretario de Finanzas y candidato del PRI a la alcaldía de Toluca, Luis Enrique Miranda Nava, cuando en la primera semana de noviembre llegó a la Procuraduría de Justicia del Estado de México para querrellarse por difamación contra el regidor

perredista José Luis Cortés Trejo, porque éste había basado su demanda —la de las ciento veintitrés propiedades— en documentos públicos en los cuales los inmuebles aparecían a nombre de familiares. Afirmó que las operaciones se habían realizado antes de 1999, pero en la demanda contra Cortés Trejo, Miranda se olvidó de que las acusaciones de corrupción en su contra no provenían sólo del regidor perredista y dejó de lado una nota documentada de los reporteros Mónica Ramírez e Israel Martínez, publicada el 31 de octubre de 2005 en el diario *Milenio Toluca*, sobre la “Bonanza económica de Luis Miranda a la sombra de Montiel”.

Días después, una crónica publicada en la edición de *Milenio* del 11 de noviembre de 2005 quedó como valor intrínseco de esa extraña moral del gobierno mexicano, así como de los enojos por la investigación de Mónica e Israel: “En algún momento, un encolerizado, prepotente y electrizado Miranda sostuvo ante los medios de comunicación ser víctima de maniobras políticas para afectar sus aspiraciones a la alcaldía de Toluca, y luego de identificar a la reportera de *Milenio Toluca*, dejó de dirigirse a todos los periodistas presentes, se le acercó y le advirtió: ‘No aceptaré chantajes de absolutamente nadie, que quede claro’, pretendiendo cobardemente, ante cámaras y grabadoras, que este diario lo ha chantajeado. [...] No es posible que el debate por la alcaldía o por cualquier otro puesto público se base en difamaciones, se base en chantajes, o se base en forma irresponsable en atacar a gente que no solamente no va a contender, como es mi padre, sino de una familia entera [...] y eso es para cualquiera”.

Como respuesta a la perorata de Miranda, en esa edición del 11 de noviembre, *Milenio* publicó de nueva cuenta las acusaciones contra el funcionario, con el encabezado “Investigación de *Milenio Toluca*”: “Miranda no sólo tiene a su nombre negocios y propiedades, sino que también sus hijos, menores de edad, están registrados como dueños de inmuebles en Toluca e Ixtapan de la Sal, lo que hace que la fortuna del aspirante a alcalde alcance cantidades incuantificables. [...] Los documentos permiten conocer desde la concesión obtenida para convertirse en apoderado legal, para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales, aun las especiales, de Cablenet Internacional —otorgado por

Emilio Murillo (sic) Azcárraga— [...]. O la conformación de la empresa denominada Grupo Textil Mexiquense (cuando ya era secretario de Finanzas) de la cual es presidente y accionista mayoritario”.

FUNDACIÓN

Hace mucho que Enrique Peña Nieto dejó de ser ese niño ingenuo que muchos quieren ver. Representa una de las dinastías más perdurables nacidas en el seno del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), precursor del PRI. Su encumbramiento pone de manifiesto que ahora sólo es cuestión de dar el salto definitivo, negociar con sus eventuales rivales partidistas, capaces de interponerse en su camino, convencerlos de que no es un político incipiente y de que tiene capacidad para saltarse las amarras de su antecesor. Su llegada a la gubernatura y el posterior retiro vergonzoso de Montiel de la candidatura presidencial le dieron otro rango persuasivo en las políticas priistas para desplegar planes en otra dimensión.

Por arriesgada que parezca la empresa en un país gobernado por el PAN desde 2000, los ocho millones de electores mexiquenses ejercen una irresistible tentación. A veinte años de haber obtenido su primer cargo en el gobierno estatal y su primera responsabilidad partidista, la impaciencia presidencial lo acosa desde el primer minuto del 16 de septiembre de 2005, tal como en 1999 la ansiedad comenzó a devorar a Montiel. Desde ese momento nada es casualidad, pero los Del Mazo, Baz Prada, Chuayffet y Montiel representan el ruido de los fracasos.

La aventura parece excesiva si no se obtienen resultados. Ningún mexiquense ha logrado sobreponerse a la derrota. Pocos tocan el caso de Adolfo López Mateos en 1958 —impuesto por Adolfo Ruiz Cortines—, por las prevalecientes dudas sobre su lugar de nacimiento. Y aunque hubiera nacido de veras en Atizapán de Zaragoza, los políticos del Valle de Toluca están inmunizados contra los del llamado Valle de México. Hay un rechazo natural hacia éstos. López Mateos podría ser originario de Atizapán, pero ese municipio está lejos de Toluca y to-

davía más de Atlacomulco. Daría lo mismo si fuera centroamericano o de un estado nortño.

Enrique Peña Nieto no es mal parecido. Quizá le falte un poco de estatura (mide apenas 1.72 metros y pesa sesenta y nueve kilogramos), pero encuadra bien con el maquillaje y ya dejó atrás esa figura menuda para dar paso a la de un hombre joven. Por su pelo engominado y eternamente peinado hacia atrás, frente amplia y nueva sonrisa, algunos columnistas lo llaman *Jimmy Neutrón*. Sin embargo, este aspecto le ha dado un nuevo atractivo personal y le ha permitido ser catalogado como un político galán y pretendido. Lejos quedaron los sobrenombres de otra época: "En los círculos íntimos de las familias poderosas de Atlacomulco y del estado, donde son comunes los apellidos González, Montiel, Del Mazo, Peña, Monter, Cordero, Nieto, se narran, entre chocolates y galletitas, anécdotas de los funcionarios públicos. Una de ellas recapitula: en las fiestas universitarias uno de los priistas más influyentes de hoy era conocido como el *Charal*, cariñoso apodo surgido de la moda de aquel momento, pues el mencionado personaje era muy delgadito, distinguido también por aquellas tremendas botas tipo minero muy bien lustradas. Nadie sospechaba que, con el tiempo, el servicial *Charal* —quien odió toda su vida el sobrenombre escolar del *Patotas*— se convertiría en el jefe de todos", escribió el periodista Miguel Alvarado.

Sin considerar sus márgenes de maniobra política ya bien estudiados por Arturo Montiel y Alfredo del Mazo, el actual gobernador mexiquense pronto se dejó seducir y sucumbió al encanto de la publicidad. Como su fallido tío antes que él, también puso su imagen, esperanzas y futuro en las manos expertas de la Televisa de Emilio Azcárraga Jean. Las campañas masivas en prensa escrita, radio y televisión han servido para crearle una percepción ante los ojos del electorado de todo el país: situar su cara de niño bien y bien portado, de joven viudo triste o de padre entusiasta, resignado y cariñoso.

Luego de las controvertidas elecciones en el Estado de México y la anormal derrota del panista Rubén Mendoza, en la mente de los priistas mexiquenses surgió la mañana misma del 16 de septiembre de 2005 una pregunta: ¿Por qué no? La interrogación, y al mismo tiempo aseveración, fue como una sacudida.

El ingeniero Arturo Peña del Mazo, ex alcalde de Atlacomulco —con o sin el consentimiento del ya gobernador Peña Nieto—, se movió con rapidez: se dio a la tarea silenciosa de reorganizar desde las calles de la colonia Verónica Anzures, en el Distrito Federal, la fundación cultural Isidro Fabela Alfaro, A. C., que a finales de 2008 tenía una presencia básica en la mitad de México, desde Tijuana hasta Palenque. Aunque en un momento de su carrera su primo, el gobernador Alfredo del Mazo González, maniobró para obligarlo a solicitar licencia, renunciar y abandonar la presidencia municipal en diciembre de 1984, el tiempo desvaneció los tropiezos políticos e imprudencias administrativas de este hermano del extinto padre de Enrique.

Aquel diciembre de 1984, el presidente de la legislatura, Mario Ruiz de Chávez, desobedeció a su jefe Del Mazo González y se negó a hacerle un juicio político exprés al impetuoso Arturo Peña. Ruiz de Chávez meditó la solicitud del gobernador Alfredo del Mazo y buscó una salida alterna. Al final se ahorró el bochorno. Supuso que algún día los primos podían contentarse, sentarse a la misma mesa en Atlacomulco y comer de la misma mano. El tiempo le daría la razón.

En la saga familiar, este tío Peña del Mazo no aparece como un ingenuo ni un atrabancado de la política. En noviembre de 2004, durante aquella ardiente época en la que los Hank Rhon, los Pastor y los Navarrete hacían esfuerzos para desplazar a su sobrino, hizo un comentario sorpresivo. Fueron los primeros días en los que Enrique vivió el poder. El exaltado señalamiento pasó inadvertido casi para todos, y algunos lo consideraron lunático: en un encuentro formal con la dirigencia estatal del Frente Juvenil Revolucionario, adelantó que la sucesión de Montiel estaba decidida para Enrique Peña Nieto, aunque sólo mencionó las letras EPN, añadiendo simplemente: “Este proyecto es nuestro”. Cada letra inicial del futuro gobernador quedaría grabada en las paredes del restaurante Anturios, de Toluca.

La mayoría, incluido el líder de ese organismo, Gustavo Mendoza Figueroa, tomó la declaración como un alarde de fanfarronería que buscaba apoyos para inclinar la balanza de la candidatura priista hacia Enrique. Adquirió cariz de cariñoso auspicio para crear una estructura juvenil y embarcarla en una aventura riesgosa porque, en los hechos,

representaba rudeza innecesaria contra el empresario Carlos Hank Rhon y la declaración de guerra a éste. Estilo y olfato les faltó a aquellos jóvenes reunidos. También les sobró soberbia porque los impresionaba el magnate Hank Rhon, que se lucía en algunas giras del gobernador Montiel.

Poco tardaron los aletargados jóvenes en conocer de viva voz de Montiel la respuesta a su incredulidad. Su recelo y falta de pericia fue una peligrosa mezcla. Y su explosividad los sobrecogió cuando, semanas después de aquel cónclave y la inexplicable indiscreción en el restaurante, los hechos acreditaron a Arturo Peña. Los demás precandidatos fueron obligados a declinar uno a uno, hasta forzar la salida del reacio millonario Carlos Hank Rhon, con todo y el apoyo incondicional del líder nacional priista Roberto Madrazo.

CATADORA OFICIAL

A Enrique Peña Nieto le asignaron doscientos dieciséis millones setecientos sesenta mil setecientos pesos para su campaña como candidato a la gubernatura y, según los árbitros electorales, únicamente eso gastó. Sin embargo, dicha cantidad sería el vestigio de un infierno por chamuscarlo. Lo quemaría no sólo porque haciendo sumas y restas, los números no cuadraban y se acomodaron muy a fuerza, sino por las denuncias para investigarlo, las cuales, junto con el tema del panista Mendoza Ayala, pusieron en tela de juicio su honorabilidad política.

Para los primeros días de la campaña por la gubernatura parecía un personaje de telenovela creado por los especialistas del Canal de las Estrellas. La televisora cubrió a Peña Nieto en todos sus noticieros, en sus horarios estelares, poniéndolo al lado de figuras de la farándula y hasta presentando su juego de relojes, bolígrafos, lápices, lapiceros, chamarras, gorras, calcomanías, playeras y todo aquello que pudiera fijarlo en el imaginario colectivo. Por eso, Peña mismo y el equipo encabezado por sus tíos Arturo Montiel y Alfredo del Mazo se sorprendieron cuando una encuesta del 16 de abril de 2005 lo ubi-

có diez puntos porcentuales por debajo de su rival panista Rubén Mendoza Ayala.

Era una situación catastrófica, a pesar del esfuerzo de Mónica Pretelini Sáenz para formar grupos de mujeres, potenciales votantes, en torno a la gallardía y los atractivos varoniles de su marido. De manera que ejecutivos, creadores de imagen, maquillistas, camarógrafos y conductores de la televisora replantearon la figura del protagonista de aquel drama electoral. Apareció entonces un rejuvenecido Peña Nieto, más sonriente, al lado de personajes todavía más populares de Televisa.

Tan pronto le perdió el miedo a las cámaras y se acostumbró a vender la imagen, a Peña Nieto se le vio con Adal Ramones, Omar Chaparro, Galilea Montijo, así como en entrevistas con los conductores de los noticieros estelares de esa empresa o de otras, como TV Azteca. La tendencia publicitaria se mantuvo con la misma fuerza ya siendo gobernador. Su administración destinó de entrada un promedio de cuatrocientos mil pesos diarios para promoverse como gobernador capaz, político cumplidor y hombre de familia. Fue un fenómeno indiscreto y dispendioso con la tutoría de Televisa.

Bien arropado por Del Mazo González, quien en los primeros dos años de gobierno tomó en sus manos la imagen del sobrino, porque Montiel se enfrascó con el Tucom en la batalla perdida por la candidatura presidencial, sólo en 2006 Peña destinó ciento treinta millones de pesos para spots y anuncios en prensa. De acuerdo con el reporte oficial de gastos realizados en la contratación de espacios publicitarios, el gobierno autorizó cincuenta millones en pagos para Televisa, otros catorce millones trescientos treinta y tres mil pesos para TV Azteca y casi cinco millones para la empresa Astron Publicidad.

Todavía en ese momento lejos estaba alguien de suponer que un día sería necesario emplear a una joven conocida sólo como Marisol, cuya presencia despertó sospechas por callada y trabajadora. Un funcionario indiscreto comentó que muy pocos tenían la certeza sobre qué hacía Marisol, una jovencita comunicadora que desde principios del año 2008 se convirtió en la sombra del gobernador Peña Nieto.

Marisol empezó encargándose con dedicación de labores fraterna-

les y domésticas, tales como limpiar las moronas o el polvo adherido al saco del señor gobernador. Luego, casi de inmediato, los cuidados y la pulcritud se extendieron a la vigilancia permanente para que los niños llegaran puntuales, aseados y bien desayunados al colegio.

En el círculo cercano a Enrique Peña Nieto se descartó que se tratara de alguna relación que no fuera profesional. La nueva empleada llegó a laborar sin dar pie a ningún tipo de murmuraciones que pudieran mortificar a su jefe y filtrarse a las páginas de revistas especializadas en chismorreos.

Más adelante, las labores de esa joven universitaria pasaron a los cuidados del pelo siempre engominado y bien peinado del señor gobernador. Celebraron entonces que éste atendiera con esmero su propio aspecto, pero más de una persona descubrió que aquella joven Marisol no era una creadora de imagen, que para eso estaba Margarita Neyra, la sobrina del líder refresquero Armando Neyra Chávez.

A partir de marzo de 2008, Marisol tomó un papel protagónico indiscutible. Empeñosa y ajena a las habladerías, la joven Marisol cuidó los puños almidonados, los cuellos planchados y las rayas muy derechas en las mangas de las camisas o los pantalones, así como los botones bien pegados en las prendas de vestir. Pero este fue el disfraz de una realidad más contundente.

El trabajo político más delicado de esta mujer profesional de la comunicación consistía, hasta fines de 2008, en probar los alimentos, el agua y cualesquier otros líquidos o comestibles que pretendiera degustar el señor gobernador o que manos ajenas sirvieran en su mesa. En palabras llanas y en ese juego de inquietudes sucesorias, de problemas apremiantes, delincuencia organizada, esperanzas cifradas o de revanchismos inesperados, ella se convirtió en la catadora oficial.

En junio de 2008 también se hizo público lo que todo mundo percibía: para garantizar actos, presencia y seguridad de Peña Nieto, durante 2007 la administración estatal aumentó en más del cien por ciento los casi quince millones de pesos —a casi treinta y cuatro millones y medio— del gasto presupuestado a la Coordinación de Ayudantía, de Logística y Seguridad, inscritos en el programa de Conducción de las Políticas Generales de Gobierno, cuyo presupuesto inicial

de cuatrocientos catorce millones trescientos mil pesos fue insuficiente y terminó arriba de quinientos veintiún millones.

CARA... CARITA... CARÍSIMA

La aventura presidencial de Montiel terminó el jueves 20 de octubre de 2005, setenta y ocho días después de haber sido elegido representante del Tucom para hacerle frente a Madrazo. Se rindió a las evidencias, tiró la toalla, guardó sus millones, decidió perder a su bien amada Maude y ésta se fue a París. El poderoso ex gobernador, autoimpuesto heredero del vacante liderazgo hankista, renunció a sus aspiraciones. Pero la maquinaria pro Peña no se detendría.

La imagen de éste irrumpió en la pantalla desde 2004. En ese año todavía no salían a la luz pública los negocios de su ex jefe, los depósitos millonarios, las propiedades regadas ni, menos, que de las arcas estatales provenían cerca de doscientos sesenta mil pesos diarios para alimentar esas buenas imágenes en las horas estelares de la televisión. Los priistas mexiquenses pregonaban la honradez de su gallo presidencial y mostraban su frente muy en alto para pasar sobre Roberto Madrazo, arrebatarle la candidatura y llegar a Los Pinos para sustituir a Fox. Ya le abrían su espacio a la sofisticación y juventud de Maude Versini para opacar a doña Marta Sahagún.

Representante del PRD ante el IEEM, Rubén Islas Ramos prefiguró una ruta para conocer los fondos que el gobierno del estado (con Montiel y con Peña) destinó para promoverse ante los electores del Estado de México y luego a nivel nacional, a fin de posicionar al primero y legitimar el triunfo del segundo. Aunque ésta no fue la primera vez que se cuestionaron los gastos de campaña de un candidato del PRI, sí permitió delinear un camino procesal para abrir la cerrazón gubernamental.

Con periodistas de *Diario Monitor*, Islas Ramos fue rearmando, funcionario por funcionario, la integración grupal del gobierno de Peña, la repartición por cuotas a Montiel, Del Mazo, César Camacho o Emilio Chuayffet, el nepotismo y los compromisos a los amigos. Con

Jenaro Villamil, de *Proceso*, trazó una ruta sobre la entrega de contratos millonarios de publicidad a la televisión, la radio y la prensa escrita desde 2004, cuando con toda certeza Arturo Montiel había confirmado la decisión de disputar la candidatura presidencial priista o se sentía ya recorriendo los amplios jardines de Los Pinos y había pactado con Maude Versini los procedimientos para imponer a su sobrino como su sucesor.

Rubén Islas Ramos, basado en el análisis de las emisiones televisivas y radiales, así como en el estudio de las notas publicadas en revistas y periódicos, junto con *Proceso* llevó a cabo un diagnóstico sobre el fondo de los gastos publicitarios. Empezó a ordenar la información para dilucidar cómo fue que David López se convirtió en uno de los tres gestores del gobierno mexiquense en la negociación con Televisa sobre “un paquete de cuatro campañas simultáneas que sirvieron para maquillar el verdadero gasto de Peña en spots electorales durante la campaña”.

También delineó una ruta crítica con el objetivo de presentar “un recurso de solicitud de acceso a la información para conocer las tarifas, los tiempos, los spots y las bitácoras reales de lo que gastó Montiel en 2004 y 2005”, y luego dar cauce procesal a su petición de apertura, porque “existió una simulación mercantil en el caso de la contratación de publicidad televisiva en el Estado de México” para promover “cuatro campañas diferentes (la institucional del gobernador Arturo, la de credencialización, la de Unidos por México promoviendo a Peña y la precampaña presidencial de Montiel en la interna del PRI) [que] se negociaron en forma simultánea a través de los mismos gestores, de forma que al gobierno del estado se le cobraron las tarifas más altas para maquillar el gasto de Peña y los propios ingresos reales de las televisoras”.

La Coordinación General de Comunicación Social, a cargo de David López, dio un portazo y decidió clasificar como “reservada” la información sobre todos los contratos de publicidad en medios de comunicación, tanto escritos como electrónicos. Para Islas Ramos, este candado no estaba “fundado ni motivado”, ya que no correspondía a la tipificación de información reservada que establece la ley en la ma-

teria. Por eso, el Instituto de Transparencia le dio la razón a Islas en su alegato, aunque las autoridades se negaron a entregar los contratos completos.

El caso llegó hasta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La clave de este litigio fue aclarar si Peña había rebasado o no el tope de gastos y si las cifras se habían maquillado a través de un contrato de "publicidad en paquete" con las mismas empresas que le habían servido a Televisa para esta operación: TV Promo y Radar. La información confidencial involucró a Montiel, quien tan sólo en mil doscientos anuncios televisivos como aspirante del PRI gastó ciento trece millones trescientos veintinueve mil quinientos pesos entre el 4 de julio y el 7 de octubre de 2005, de acuerdo con la empresa Verificación y Monitoreo que realizó ese seguimiento para el periódico *El Universal*. Contando abril, mayo y junio, la cifra se elevó a ciento cincuenta y tres millones de pesos.

Otro registro, a partir de datos de la empresa de medición de audiencia IBOPE, reveló que entre el 16 de abril y el 30 de junio de ese año, para el candidato Peña se destinaron doscientos treinta y cinco millones de pesos en publicidad. Esta cifra significó un rebase del tope de gastos de campaña, fijados en doscientos dieciséis millones setecientos sesenta mil setecientos pesos, como se indicó anteriormente. El PRD no pudo acreditar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) esta violación, ya que no tuvo acceso a las facturas originales negociadas con los medios. Únicamente Peña Nieto sabe cuáles fueron los gastos totales para su promoción, aunque la revista *Proceso* documentó que, tan sólo en 2005, habrían promediado setecientos cuarenta y dos millones de pesos.

Pero nada fue lo mismo después del escándalo de las cuentas de los hijos de Montiel que se difundió en el programa *El cristal con que se mira*, de Víctor Trujillo, por Canal 4. La sucesión presidencial tomó otros rumbos y las circunstancias obligaron a Peña Nieto a abrir, al menos en forma parcial, y dar a conocer contratos de publicidad directa. Se supo que, en los primeros dos años de su administración, Televisa cobró por servicios publicitarios ciento ocho millones ochocientos treinta y ocho mil veinticuatro pesos. La empresa

donde Emilio Azcárraga Jean es el mayor controlador promocionó al gobernador en todos sus medios, incluidos Internet, revistas y diarios, de acuerdo con el reporte de Transparencia para gastos de publicidad. Esto significa que, cada día, Televisa se llevó del Estado de México ciento veintiocho mil cuarenta y cuatro pesos por gestionar la imagen del gobernador.

Los pagos a esta empresa y sus asociados comenzaron el 16 de septiembre del 2005. En ese mismo año, el diario deportivo *Ovaciones* cobró ciento dieciséis mil quinientos noventa y cuatro pesos. Para 2006, W Noticias facturó once mil quinientos pesos, era, sí, muy poco, pero la rebanada grande del pastel fue para Televisa, con cincuenta millones once mil doscientos ochenta y ocho pesos; *Ovaciones*, otro millón novecientos cincuenta y nueve mil cincuenta y seis pesos, y la división Televisa Editorial, doscientos sesenta y cinco mil pesos.

Cómo se consolidó la relación Televisa-gobierno del Estado de México es un enigma, pero —al margen de los acercamientos que pudieron tener en alguna reunión Azcárraga y Peña— el periodista José Martínez ofreció desde abril de 1997 pistas en un análisis que escribió para la revista *Fórum*: “Antes de anunciar su retiro, *El Tigre* Emilio Azcárraga Milmo tomó las últimas decisiones políticas para mantener el control del tercer relevo generacional y designó a su hijo Emilio Azcárraga Jean presidente ejecutivo del Grupo Televisa. Guillermo Cañedo White también asumió la Presidencia del Consejo de Administración, mientras la vicepresidencia quedó en manos de Miguel Alemán Velasco, quien renunció a una senaduría por Veracruz. Las funciones prioritarias de su hijo serían las relaciones políticas con el gobierno federal, así como con gobernadores, dirigentes de los partidos políticos y la supervisión de los noticieros.

“Para apoyar al *Tigrillo* quedaron Emilio Dávila, ex presidente de Univisión y Univisa, en la Vicepresidencia de Operaciones, mientras de la planeación financiera quedaría encargado un grupo de tecnócratas de las filas del salinismo, como Raúl López, formado a la sombra de *El Tigre*, así como parte del equipo de Pedro Aspe Armella, ex titular de la Secretaría de Hacienda, como su ex jefe de asesores, Alejandro Reynoso, su ex secretario particular Jorge Terrazas y otros como

Emilio Romano, ex funcionario de la Procuraduría Fiscal, y Juan José Juárez, ex ejecutivo de Banamex.”

La clave aparece en los apellidos Aspe Armella. El ex funcionario también fue (en la firma especializada Protego Asesores Financieros, que controla la refinanciación de la deuda mexicana) jefe directo de Luis Videgaray Caso, secretario de Finanzas, Planeación y Administración de Peña.

Para 2007, Televisa se llevó en contratos directos cincuenta millones de pesos, y Televisa Toluca, cinco millones más. Otra de las empresas favoritas del gobernador Peña, la Organización Editorial Mexicana (OEM), propiedad de la familia Vázquez Raña y editora de los diarios *El Sol*, también se embolsó una buena cantidad. En total, los Vázquez Raña facturaron más de veintidós millones de pesos en sus distintos medios. Uno de los más favorecidos fue *El Sol de Toluca*, que en tres años cobró casi once millones de pesos. En 2005, en cuatro meses se llevó dos millones ciento setenta y tres mil seiscientos setenta y nueve pesos; en 2006, cuatro millones trescientos noventa y dos mil setecientos sesenta y dos pesos; y en 2007, cinco millones quinientos mil noventa y dos pesos. Pero el dinero se repartió entre el diario deportivo *Esto*, *El Sol de México* y las cadenas de radio ABC; esta última facturó medio millón de pesos en 2006.

Otro medio favorecido por el dinero del gobierno ha sido *Milenio*, que ha facturado cinco millones novecientos cincuenta y cinco mil doscientos setenta y nueve pesos, divididos en cuatro fuentes, *Milenio Diario*, *Milenio Semanal*, *Milenio Toluca* y *Milenio Estado de México*. La partida más grande corresponde a *Milenio Diario*, en 2006, con un millón novecientos treinta y cinco mil ciento ochenta y siete pesos.

El Herald de Toluca, de la familia Mena, cuyos negocios alcanzan distribuidoras automotrices, inmobiliarias, al propio gobierno estatal y a la Cámara de Diputados, facturó cuatro millones cuatrocientos diez mil trescientos sesenta y ocho pesos.

En 2005, los contratos alcanzaron para cubrir cincuenta medios escritos y nueve electrónicos; en 2006, se contrataron doscientos veinticuatro escritos y veinte electrónicos. Para 2007, los medios amparados en la publicidad de Peña fueron sesenta y siete escritos y trece elec-

trónicos. En todo este tiempo, el coordinador de Comunicación Social y responsable de los convenios ha sido David López, uno de los fundadores de Radio y Televisión Mexiquense, hace dos décadas.

TV Azteca se llevó la segunda rebanada más grande en estos convenios. Peña ha entregado al grupo de Salinas Pliego dieciséis millones de pesos, divididos entre la revista *Vértigo*, los dos canales nacionales de TV Azteca y TV Azteca Toluca.

El Diario, otro medio local tradicional de Toluca, propiedad de la familia Maccise, facturó dos millones sesenta y cinco mil doscientos doce pesos, repartidos entre radio y prensa escrita.

Reforma, el gigante mediático del norte, propiedad de la familia Junco, cobró dos millones ciento cuarenta mil novecientos setenta y un pesos.

Impulso, otro de los diarios locales oficiales, propiedad del empresario Alejandro Zendejas —dueño, entre otros negocios, de la escuela Argos—, facturó dos millones setecientos cuarenta y cinco mil seiscientos veinticinco pesos.

Portal ha facturado para el gobierno cuatrocientos cuarenta y un mil pesos, mientras que *Puntual* reporta seiscientos mil.

Casi todos los medios mantienen algún tipo de convenio con Peña, y todos han visto incrementado este pago, año con año. Incluso los de línea crítica, como *La Jornada*, *Proceso* y *El Chamuco*, tienen contratos. *La Jornada* ha facturado un millón trescientos setenta y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos. *Proceso* cobró tres millones trescientos doce mil, y *El Chamuco*, ciento quince mil pesos.

En 2007, la novedad fue que cierta revista del corazón se sumó a la lista de los medios que han firmado convenio: *TV Notas* le cobró a Peña trescientos treinta y siete mil pesos, aunque publica muy poco sobre el gobierno. Las revistas *Quién* y *Hola* cobran por artículo y entrevista, pero no cuentan con contrato público.

Como desde el principio de su gobierno, el plan de Peña Nieto tiene tres orientaciones estratégicas: mantener y acrecentar la simpatía y aprobación de la opinión pública; generar escenarios favorables para el trabajo del gobernador y su proyecto político-gubernamental en la sociedad; y promover y consolidar el reconocimiento positivo de su

administración 2005-2011, tanto en el ámbito regional como en el nacional.

En un análisis que realizó la revista *Etcétera*, se señaló: con cargo al erario, Peña afianza su presencia nacional; y en uno de sus párrafos precisa: “En 2006, Astron Publicidad captó más recursos que los obtenidos por cada uno de los medios impresos y radiofónicos durante el mismo año: cuatro millones seiscientos mil pesos. De la oficina de Comunicación Social se nos informó que el gobierno mexiquense erogó tales recursos por el pago de créditos —o menciones— gubernamentales en la entrada y salida de los ‘Comentarios a la noticia’ de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula”.

En septiembre de 2007, durante una comparecencia de Luis Videgaray Caso, la diputada local Martha Angélica Bernardino advirtió al gobierno, papeles en mano recibidos de la oficina de Peña, sobre la exageración de los montos. “En el tomo uno de la Cuenta Pública que ustedes nos turnaron se puede observar que en el ejercicio de ese año gastaron doscientos cuatro millones de pesos en publicidad, cuando la legislatura sólo autorizó ciento treinta y dos millones de pesos.”

Correcto, educado y muy amable, Videgaray pidió a los diputados fijarse en otras entidades —es decir, que se olvidaran del Estado de México—, donde se asigna hasta el 0.26 por ciento de su presupuesto anual a la publicidad, mientras que el gobierno federal destina hasta 0.36 por ciento de su presupuesto total.

Exasperado, pero también educado y afable, el diputado perredista Francisco Vázquez reviró: “¿Cómo es posible que diga eso? ¡Todos vemos a diario anuncios del gobernador en horarios estelares triple A!” Luego le pidió hacer memoria, tener en cuenta que esa clase de spots tienen un costo superior a trescientos cincuenta mil pesos cada uno. Le hizo ver o le ejemplificó que unas semanas atrás Peña había acudido a su distrito electoral (el del legislador perredista) para inaugurar una calle en Tezoyuca a la que, con una inversión de cien mil pesos, le instalaron alumbrado público, y “al otro día vimos varios anuncios de esa obra en horarios triple A”, lo cual se traduce en que, a veces, “nos sale más cara la difusión de la obra que la ejecución de la misma”.

Pese al bochorno ocasionado por el desliz montielista en “El cristal con que se mira”, la relación del gobierno de Peña con la televisión y otros medios se hizo más fructífera. Incluso, en la primera parte de su administración, con el propósito de legitimar su gubernatura, se puso en marcha un programa para acallar rumores sobre las extrañas circunstancias de la muerte de Mónica Pretelini Sáenz y la apresurada incineración de sus restos. Haciendo cuentas claras, de 2004 a 2006, en la construcción de la imagen de Peña y la consolidación a nivel nacional de la de Montiel, los gobiernos de ambos destinaron en forma directa un promedio diario de doscientos ochenta y dos mil trescientos noventa y siete pesos. Eso significó que, por cada peso que el gobierno del Estado de México gastó durante 2004, trece centavos pararon en publicidad. El año siguiente fueron once y en 2006 se elevaron a catorce.

A Peña tampoco le funcionó el posicionamiento: en los comicios locales y federales de 2006 su partido perdió todo: las tres senadurías, las votaciones para presidente de la República, las diputaciones locales y las consideradas alcaldías mayores: Naucalpan, Tlalnepantla y Metepec. En la capital, Toluca, fue derrotado Miranda, el mejor amigo de Peña. Aun así, para 2008, en la parte pública el gobierno destinó más de ochenta millones de pesos para la contratación de espacios. *El Sol de Toluca*, la *Extra del Sol*, Grupo Acir Toluca, Televisa, con más de treinta y tres millones de pesos; TV Azteca, con once y medio millones; *Reforma*, *Ovaciones*, *Agrobusiness*, *Consulta Médica*, *Debate Feminista*, *Industria*, *Mundo Ejecutivo*, *The Billionaire* y *TV Notas* fueron otros beneficiados. La tercera semana de abril de 2009, la oficina de Transparencia estatal confirmó que entre el 16 de febrero y el 30 de abril del mismo año, Televisa, TV Azteca y la cantante Lucero recibieron sesenta y ocho millones de pesos por la campaña “Logros” del gobierno de Enrique Peña Nieto. Haciendo sumas y restas entre el número de *spots* que se transmitirían con la imagen de la también actriz, cada segundo al aire les costaría mil pesos a los contribuyentes mexiquenses.

El manto del Opus Dei

ENRIQUE PEÑA, figura continuista y sucesoria real de Arturo Montiel más que del Grupo Atlacomulco, se perfila como candidato presidencial para el año 2012. No hay dudas sobre su relación familiar, como advierte el arqueólogo atlatomulquense Jorge Toribio: “Todos los Montiel descendemos de una sola rama, de Manuel Montiel, un pintor sacro llegado a Santa María de Guadalupe Atlacomulco en el siglo XVIII. Son cuatro generaciones desposándose hasta el nacimiento de Gregorio Montiel Monroy, papá de Arturo, mientras que la madre de Enrique, Socorro Nieto Sánchez, es hija de Enrique Nieto Montiel y de Ofelia Sánchez. La madre de Enrique Nieto Montiel se llamó Efigenia Montiel, bisabuela de Enrique Peña Nieto. Cuando los hijos de la bisabuela se desposan, el apellido Montiel se pierde por ser materno, por eso al actual gobernador ya no le tocó”.

Como los apellidos, las crónicas sobre la vida pública de Peña se perderán en el tiempo, pero trascenderán las que explican cómo un político, a través de la publicidad y el buen cuidado familiar, escaló todos los puestos de la administración. Si tiene el destino marcado, el tiempo lo dirá, pero esa tutela de generaciones, con la experiencia de casi seis décadas en el gobierno estatal y otro tanto acumulado en secretarías de Estado de la federación, puede ser la base para encontrar las fórmulas en la sucesión del presidente Calderón. A Peña no parecen afectarlo los enormes contratos de publicidad con las televisoras y otros medios de comunicación, ni el estigma de las exoneraciones de los Montiel, ni los cuestionamientos por su imposición como sucesor en línea de la familia política de Atlacomulco.

Si uno ha de atenerse al arte de la adivinación, resulta que Peña Nieto es el sexto gobernador de Atlacomulco y el quinto nacido en esas tierras.

Familiar de los ex gobernadores Fabela, Del Mazo Vélez, Sánchez Colín, Del Mazo González y Montiel Rojas, Peña escaló posiciones en forma vertiginosa durante el sexenio de su tío Arturo. Desde los primeros años de la década de 1990, éste lo tuteló en las artes del poder y lo llevó de la mano hasta la gubernatura, puesto predestinado desde antes de que iniciara sus estudios de derecho en la Universidad Panamericana (UP), uno de los brazos del Opus Dei, junto con la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), o su maestría en el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), cuyos principales integrantes del patronato en el campus mexiquense son atlatomulquenses: el empresario Eduardo Monroy Cárdenas, e hijos, así como su sobrino, el político Gustavo Cárdenas Monroy; Santiago Velasco Ruiz, ex director del ISSEMyM, y Mayolo del Mazo Alcántara, lo mismo que Arturo Montiel.

Su número de cargos floreció en unos años: secretario particular del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de 1993 a 1998 (los primeros años con Montiel y, a la renuncia de éste, quedó Carlos Rello); subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, de septiembre de 1999 a marzo de 2000; integrante de los consejos de administración de diversos organismos públicos de marzo de 2000 a octubre de 2002; vicepresidente de la Junta de Gobierno del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIF), de marzo de 2000 a octubre de 2002; presidente del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), de marzo de 2000 a octubre de 2002; titular de la Secretaría de Administración, de marzo de 2000 a octubre de 2002.

Algunos puestos se alternaron con otros partidistas o de elección popular para evitar todos los candados y otros obstáculos, llegada la hora de la sucesión y ya de la mano de Montiel, quien en octubre de 1991 fue designado presidente estatal de los priistas. Peña fue delegado distrital del PRI mexiquense en febrero de 1992; delegado de

organización en los municipios de Jocotitlán e Ixtlahuaca en marzo de 1993; secretario general del Instituto Político Empresarial de octubre de 1998 a enero de 1999; subcoordinador de la campaña para gobernador de Arturo Montiel Rojas, ese mismo año; delegado a la XVIII Asamblea General del PRI nacional en noviembre de 2001; integrante del Consejo Político Estatal del PRI; integrante del Consejo Político Nacional; diputado local por Atlacomulco (2003-2006); coordinador del grupo parlamentario priista en la LV Legislatura local, de septiembre de 2003 a septiembre de 2004, y presidente de la Junta de Coordinación Política de septiembre a octubre de 2004.

Educado y criado con el desahogo de las familias acomodadas de su pueblo, Peña Nieto entró con mucho tiempo en el proyecto sucesorio que fue anunciado a los notables de Atlacomulco. Las predicciones de aquella mujer que supo interpretar los sueños de un grupo y decirles lo que querían oír se nutrió de poderosas raíces políticas, aunque ahora subyace una honda preocupación. Cada gobernante de ese lugar que ha entrado a la antesala de la candidatura presidencial se ha resignado a verla como un espejismo. Después de las palabras de la mujer, todo puede resumirse en que esos notables salieron a encontrarse con su destino incierto porque sólo uno de ellos ha de alcanzarlo y ha de ser nacido en Atlacomulco. Recreada con el paso de los años, pocos se atreven a subestimar esa visión.

No fueron casualidad los encargos ni las funciones en la clase privilegiada del poder en las que Arturo Montiel fue colocando a su sobriño. Tampoco fue una casualidad su traslado a la Ciudad de México para inscribirse en los cursos regulares de la UP, donde terminó su licenciatura en derecho. Descrito como un hombre muy religioso y conservador, su paso por las oficinas gubernamentales y partidistas en el Estado de México se enmarcó como un noviciado o destino intermedio; representó también la compra de su billete en la lotería sucesoria presidencial desde que por primera vez su tío Arturo decidió confiar en él.

Sellado para siempre su sino en ese pueblo chico, las aulas universitarias sirvieron para disciplinarlo en las debidas y no menos escrupu-

losas ambiciones del padre, ahora santo, José María Escrivá de Balaguer, sintetizadas en la Obra de Dios, u Opus Dei.

Si la primera congregación de esta moderna y radical secta se fundó curiosamente en 1928 en la España franquista, cuando el general masón Plutarco Elías Calles se convertía en presidente de México, declarándose enemigo acérrimo de la Iglesia católica, el 18 de febrero de 1949 —durante el gobierno mexicano de Alfredo del Mazo Vélez— en la capital mexicana se erigió el primer centro del Opus Dei, cuyas pretensiones eran de largo plazo e intentarían legitimar una irrupción a la Presidencia de la República.

Los escándalos de abusos y corrupción de la clase política mexicana han facilitado la continua presencia de Peña mediante la publicidad pagada en la televisión o los medios impresos, casi desde un año antes de llegar a la gubernatura. Librado por el momento ese espectro llamado Arturo Montiel —aunque el primer equipo de éste se coló a la gubernatura—, la imagen de Peña se ha difundido por todo el país en un calculado proyecto. El propósito es hacerlo familiar, primero, entre el electorado femenino. Ganar votos a través de las mujeres.

La imagen de un joven gobernante guapo atrajo de inmediato a las firmas encuestadoras. Enrique Peña Nieto luce fuerte ante los cuestionamientos y acusaciones por actos de corrupción a personajes del PAN, la muerte del secretario de Gobernación —Juan Camilo Mouriño— o las guerras intestinas por la dirigencia perredista, con el desgaste permanente de Andrés Manuel López Obrador. Si en el PRI entienden que algunos de sus “dinosaurios”, como Manlio Fabio Beltrones o Enrique Jackson Ramírez, llegarían con muchas dificultades a Los Pinos en 2012, el Opus Dei tendrá las puertas abiertas con el joven político.

Los optimistas quieren pensar que, para equilibrar la dependencia de Peña respecto de la Obra, éste se ha convertido a la masonería dentro de la logia simbólica del Valle de México. Pero es un rumor no confirmado que circula en los pasillos del Palacio. Y es que, después de Adolfo López Mateos y Carlos Hank González, o la simbólica logia de Atlacomulco, los masones mexicanos sueñan con influir en este gobernador. Al margen de su fidelidad opusdeísta, el

objetivo es que deje en paz a la aparente diezmada masonería, manteniendo un "equilibrio de hermandad" y de favores para con las dos cofradías.

La masonería no acepta o todavía no quiere ver que la Obra y los Caballeros de Colón pertenecen a extremos de la Iglesia católica capaces de arrinconarla en todos los territorios donde San Pedro es pilar. No es casualidad que el papa Juan Pablo II impulsara el radicalismo del Opus Dei y nombrase a uno de sus miembros como vocero del Vaticano, además de mantener a la masonería como enemiga de la Iglesia porque profesa un culto antagónico. Más allá, el Vaticano es alérgico a los masones porque supuestamente resguardan documentos y enseñanzas sobre la práctica de la creencia de Dios y los orígenes de la Iglesia que, de ser conocidos, la pondrían en serios apuros.

Si la masonería le cerró las puertas a la Iglesia católica en México (a través del masón grado 33 Benito Juárez García y más tarde del general Calles), Carlos Salinas de Gortari, ahora muy cercano a Peña, golpearía a la masonería al ir contra el ideario juarista y restablecer relaciones diplomáticas con el Vaticano. Cuando Juan Pablo II visitó México durante el mandato de Fox, éste le besó la mano. Y Arturo Montiel se apresuró a recibir sus bendiciones en compañía de su madre.

A reserva de las negociaciones y la posición que tomarán panistas como el maltrecho senador Santiago Creel Miranda, y otros excluidos del gabinete presidencial, todas las referencias llevan a la Obra, que tiene acceso a poderosas fuentes de financiamiento en México mediante empresarios y banqueros. Si bien brotan algunos nombres conocidos, otros guardan sus "sacrificios" amparados desde siempre en las primeras constituciones opusdeístas, reformadas luego de inoportunos deslices o denuncias sobre algunos de sus artículos, como el ciento noventa, que impone el voto del silencio: "A los extraños se les oculta el número de socios y, más aún, los nuestros no han de conversar de estos menesteres con extraños", o el ciento noventa y uno: "Socios numerarios y supernumerarios sepan bien que han de guardar siempre un prudente silencio respecto al nombre de los otros miembros; y que a nadie van a revelar nunca que ellos mismos pertenecen al Opus Dei".

PIEL DE CORDERO

De todos los gobernantes que ha tenido el Estado de México (Adolfo López Mateos llegó más arriba, pero jamás pasó por la gubernatura), Enrique Peña Nieto ha tenido el privilegio, desde el primer día de su mandato, de ubicarse en el primer lugar —incluidos sus probables rivales en los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD)— en la lucha sucesoria presidencial. Ni siquiera personajes como Gustavo Baz Prada, Alfredo del Mazo Vélez, Emilio Chuayffet o Alfredo del Mazo González pudieron verse en ese nivel.

La desaparición de Mouriño nada ha aclarado sobre los presidenciables del PAN y, por eso, la mira de los equipos de Peña ha empezado a girar hacia otros nombres. Y allí sobresale el de Ernesto Cordero Arroyo, secretario de Desarrollo Social, sin dejar de lado a otros como Gerardo Ruiz Montes, titular de la Secretaría de Economía. Si los priistas se cobijan bajo la sombra de Televisa, con hombres como Cordero descubrirán con sorpresa que Azcárraga, a pesar del caudal del dinero mexiquense, no será soldado del PRI ni Televisa una aliada eterna.

El paso de Cordero por instituciones como la Universidad de Pensilvania o el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde conoció a Felipe Calderón en 1992, ha obligado a los priistas mexiquenses a despertar de un sueño que empezó el 16 de septiembre de 2005 y terminó por disiparse cuando Montiel bajó la guardia y se fue a esconder. Accesible como parece este Cordero, hijo de un médico y de una enfermera, nacido en mayo de 1968, habla ya de él mismo cuando se lo preguntan y se ha cuidado de inmiscuirse en escándalos sentimentales o en la protección de familiares. Como Peña, el secretario de Estado pertenece a una generación de jóvenes listos a extender su influencia dentro del partido. La casualidad quiso que este profesor e investigador de economía, que no tiene hijos, impartiera clases en la misma institución donde Peña Nieto terminó su licenciatura: la UP. El 15 de enero de 2008, Calderón lo nombró titular de Desarrollo Social, en sustitución de Beatriz Zavala Peniche.

Después de Cordero, las máximas preocupaciones de la intransigente Obra y del mismo Peña estarían dentro del priismo, por un lado,

y por el otro, en el Estado de México con temas que han quedado pendientes, como el de Montiel y dos de sus tres familias, y otros propios: la represión en San Salvador Atenco, los más de ciento diez años de prisión impuestos a su líder, la extraña muerte de Pretelini, la posterior ejecución en Veracruz de cuatro agentes de seguridad —uno de ellos cercano a la extinta Mónica— que custodiaban a los tres hijos de la difunta, así como la larga historia de nepotismo y grupos de poder enquistados en el PRI.

En la resonancia de las encuestas de opinión pública que lo ven como candidato presidencial, o huésped de Los Pinos si los comicios de 2012 se realizaran en este momento, es difícil conocer cómo y cuándo Peña se abrirá por completo y echará sus cartas en el juego de la precandidatura presidencial. Pero mientras no se le aparezcan aquellos fantasmas de Del Mazo González y Del Mazo Vélez, o los espectros de otros gobernantes mexiquenses, quienes se adelantaron y les fue mal, entre ellos el ex secretario de Gobernación Emilio Chuayffet, puede jugar a sus anchas en la seductora batalla presidencial.

Afianzado el acercamiento del Opus Dei con los poderes político y económico, después de la santificación de Escrivá —cuya misión y acciones quedaron delineadas para recaudar fondos a gran escala, enganchar y movilizar jóvenes entre las clases dominantes— circulan en Toluca toda clase de rumores y versiones sobre la formación religiosa de su gobernante, acercándolo unas veces a los Legionarios de Cristo o doctrinas de cualquier denominación, incluso la masonería, y cómo influirá esa relación con la Iglesia católica si el joven atacomulquense llegara de veras a ganar la carrera presidencial en 2012, pero sería un error ver como novedad el acercamiento de Peña al catolicismo sectario.

Yerro sería también atribuirle su descubrimiento a la Obra de Dios, porque sus ritos de iniciación en la Iglesia católica más puritana pueden rastrearse hasta mucho antes de sus primeros días en las aulas universitarias, incluso antes de su niñez, a través de dos de sus más ilustres paisanos y antepasados en forma indirecta, ambos nacidos en la cabecera municipal de Atacomulco: el primero, su excelencia ilustrísima don José Luis Maximino Bernardo, un clérigo de la más alta

condición, mejor conocido como el excelentísimo tres veces obispo Maximino Ruiz y Flores, canónigo penitenciario de la Basílica de Guadalupe, quien caminó de veras sobre los pasos de San Pablo apóstol y fue seguidor ferviente de la teología dogmática.

El nacimiento de Peña está ligado indisolublemente a la religión. En la memorable travesía de Maximino, antes de andar esos pasos, al inicio del siglo XX, a los veintiséis años de edad, la Pontificia Universidad Mexicana le entregó el capelo y la borla de doctor en teología sagrada, para dos meses más tarde ordenarlo como sacerdote. El 8 de julio de 1913, el papa Pío X lo designó obispo de Chiapas. Consagrado el 8 de septiembre de ese año en la Basílica de Guadalupe, en una celebración encabezada por el excelentísimo arzobispo José Mora y del Río, desempeñó su encargo durante seis años, pues en 1919 se despidió para ingresar al instituto de los Misioneros del Espíritu Santo. Su permanencia en esta orden fue breve, porque en 1920, por un expreso deseo del papa, fue restaurado y promovido como obispo de Derbe, en la antigua Asia Menor, hoy Turquía, donde la historia recoge la prédica misionera de San Pablo. Su estadía también sería fugaz, porque el arzobispo Mora del Río lo solicitó como obispo auxiliar de la Diócesis de México. En abril de 1927 recibió con todos los honores eclesiales el cargo de gobernador de la Curia Metropolitana, la arquidiócesis más importante de México, y aún en 1938 se mantenía como vicario general del arzobispado. En forma paralela fue, durante casi nueve años, rector del Seminario Conciliar de México.

En enero de 1928, en plena Guerra Cristera, el presidente Calles ordenó cerrarle el seminario, saquearlo, detener al cura y encarcelarlo junto con más de doscientas personas —entre seminaristas de cinco ciudades, párrocos y algunos asistentes—. Un día después, el 27 de enero, el mandatario cambió de parecer; se arrepintió del encarcelamiento y ordenó liberar de inmediato a su ilustrísima Ruiz y Flores, quien no tenía ningún parentesco con su contemporáneo, el queretano excelentísimo señor Leopoldo Ruiz y Flores, arzobispo de Morelia y delegado apostólico.

Considerado uno de los dos personajes más importantes en la historia de Atlacomulco y uno de los jefes de la Iglesia católica mexi-

cana que negociaron el término de la Guerra Cristera, antes de su retiro definitivo alcanzó a consagrar, en una misa pontifical en la capilla atacomulquense del Señor del Huerto, al cura Arturo Vélez Martínez, primer obispo de Toluca.

A monseñor Ruiz y Flores le adjudican el haber fundado la obra de difusión del Santo Evangelio en la Arquidiócesis de México. Con sus debidas alabanzas, también fue arcediano de la catedral en la Ciudad de México, además de portar con el mayor de los orgullos su sociedad honoraria de la Academia Mexicana de Santa María de Guadalupe —cuya causa abrazaría Escrivá—, defensor de su protectorado a los Caballeros de Colón y devoto de la Adoración Nocturna.

Apaciguar los ánimos expansionistas de las doctrinas de Escrivá ha sido muy difícil desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Una vez acalladas las razones de los combates bélicos, se dio consistencia al ideal de este padre. Llegó a México con vientos de nueva conquista: reclutar y adoctrinar a los más preparados, a los más poderosos y a los caudillos. Y esto fue un bálsamo para los siempre católicos ricos de la provincia mexicana. Les dio esperanza. Si bien Enrique recibió una educación propia de quien algún día podía convertirse en un gobernante estatal, el ambiente académico eclesial-católico y de extrema derecha iría forjando desde su pueblo el carácter de este joven.

Apenas tomó posesión en septiembre de 2005, su destino fue marcado por conflictos sociales como el de San Salvador Atenco, que traspasaron pronto la frontera mexiquense para llegar a oficinas de organismos como Amnistía Internacional, donde tuvo oportunidad de mostrar al menos una parte de su formación opusdeísta. Atenco, conflicto que le heredó su tío Arturo, se convirtió en una ocasión propicia para el diálogo, pero las órdenes abrieron la puerta a una represión inesperada y con un lenguaje bélico poco oído desde finales de la década de los cincuenta.

Al mismo tiempo, y como resultado del fallido intento de Montiel, el Estado de México se convirtió en un tránsito temporal para Peña, nacido el 20 de julio de 1966 en pleno corazón de Atacomulco. Allí nacieron tres de sus más renombrados antepasados: Isidro Fabela Alfaro, Alfredo del Mazo Vélez y Arturo Vélez Martínez; este úl-

timo, el humilde vicario foráneo de la iglesia de San José en Toluca, adonde llegó en 1949 con la intervención piadosa e infatigable de su primo hermano, el gobernador Alfredo del Mazo Vélez, nacidos ambos con veinte días de diferencia en 1904.

Impulsado otra vez por convincentes plegarias de Del Mazo Vélez ante la mitra mexicana y luego ante el Vaticano, el cura Vélez Martínez fue elevado en abril de 1951 a primer obispo de la Diócesis de Toluca. Este monseñor fue la segunda influencia de Peña —y de todos los atacomulquenses con poder— en la Iglesia católica. En su primera obra, se echó a la espalda la “caritativa” misión de reconstruir la iglesia de San José, elevada con su misma designación de iglesia parroquial a catedral de Toluca. Consagrado en fastuosa ceremonia concelebrada, decidió agrandar sus bulas obispales. Por eso, la reconstrucción dio paso a una monumental catedral. Para hacerse de recursos, creó y manejó un organismo civil y de beneficencia bautizado por él mismo como Patronato Pro Construcción Catedral.

Fuente inacabable y socorrida de colectas fueron las funciones de teatro, las kermeses, las vendimias y otros actos locales, de donde brotaron las primeras limosnas para la nueva morada de Dios en Toluca. La mendicante institución percibió un brevísimo pero generoso paisaje de dinero y, convencida del piadoso recibimiento, extendió la charola a rifas y sorteos mayores: de residencias a motocicletas, automóviles y electrodomésticos, al menos ésa fue la promesa. Para capturar la atención de la feligresía de todo el país, el obispo se encomendó, a través del primo, al alma misericordiosa de la devota, influyente y muy elegante doña María Izaguirre de Ruiz Cortines, esposa del entonces secretario de Gobernación, el ex gobernador veracruzano Adolfo Ruiz Cortines. Llegado éste a la Presidencia de la República, la ayuda se mantuvo en forma intermitente.

La congregación acudió al llamado de este representante de Jesús en suelo toluqueño y, además, primo hermano del gobernador y luego senador Del Mazo Vélez, así como familiar del diplomático Fabela. La historia y los apellidos lo avalaron. El auxilio de la bondad presidencial de la mano de María Izaguirre permitió al patronato incluir en las rifas una mansión en Lomas de Chapultepec.

El bálsamo de los ingresos fue suficiente para instalar un conjunto de lujosas oficinas. Y el obispo ganó más indulgencias expurgatorias cuando consiguió que el periódico *Excelsior* autorizara al patronato un crédito cercano a un millón de pesos en publicidad para los sorteos y la venta del boletaje. La asociación automática de apellidos (Vélez, Del Mazo y Ruiz Cortines) se convirtió en un infalible picaporte para el obispo Arturo Vélez Martínez.

Pero la fe de los ejecutivos del diario se apagó al cabo de unos años, cuando López Mateos estaba ya en el despacho presidencial y Del Mazo Vélez era senador: el día en que en sus diligencias ordinarias descubrieron que el patronato había desaparecido la ganancia íntegra de rifas, sorteos, kermeses y funciones de teatro. La suavidad de trato y la dulzura del obispo no pudieron ocultar la quiebra ni los malos manejos del organismo. La corrupción, en una palabra.

Los donativos se evaporaron en las manos del apacible ex cura de Atlacomulco. Con toda su finura, el fraude escandaloso de aquellas extrañas formas de entregar limosna se propaló cuando el obispo decidió confiar en la intervención celestial y no entregar una residencia ubicada sobre la carretera México-Toluca.

En una relectura de los hechos, la monumental catedral de Toluca se convirtió en un templo de oración para la clase en el poder. El resto de los habitantes de la capital del estado y los pueblos circunvecinos se distanciaron porque, al margen del vacío espiritual en la inmensidad de esa construcción alejada de las proporciones humanas, la revisión de valores dio por entendido que la levantaron en el río revuelto del pecado de un cura sinvergüenza, expuesto años más tarde en el capítulo "Asuntos importantes de la Catedral de Toluca o La grande y triste rifa por la Catedral", de *Mis tiempos*, libro del ex presidente José López Portillo. Con esos pensamientos y otros como "Creo en Dios, pero no en los curas", el vocablo "religiosidad" se practicó en iglesias "modestas", como la Santa Veracruz, al lado, y la de El Carmen, aledaña al Palacio de Gobierno.

Viejos periodistas toluqueños, como Jorge Díaz Navarro, recuerdan: "Muchas personas de edad, principalmente de los pueblos circunvecinos a la capital del estado, no han ido jamás a la catedral porque consideran que es producto del pecado. Esto es, del fraude y del enga-

ño. Pues se hizo —dicen— con dinero que besó el diablo, por lo tanto no es la casa de Dios, sino del mismísimo Lucifer”.

El escándalo se volvió un martirio perpetuo. *Excelsior* contrató al despacho J. de J. Taladrid para llevar el caso y éste se lo entregó al entonces joven abogado postulante José López Portillo, quien se vio en la penosa necesidad de escudriñar en todas las cuentas, auditar y exigir el embargo precautorio de los bienes conseguidos a través de las rifas, al grado que el obispo de Toluca estuvo a punto de pisar los corredores de la penitenciaría. Para evitar un vergonzoso bochorno familiar por esas pillerías, el ya senador Del Mazo Vélez llegó a un acuerdo: liquidó muy en silencio la deuda de su primo hermano.

El patronato violó las normas oficiales sobre rifas y sorteos, pero, a pesar del escándalo, Vélez Martínez descubrió la grandiosidad del tributo terrenal y se levantó como el hotelero más poderoso del Valle de Toluca con algunos negocios: el Motel del Rey o La Quinta del Rey, y Villa Jardín, la discoteca más importante en los noventa, donde se reunían juniors de entonces liderados por Arturo Montiel Yáñez. Su apellido aún es la cabeza más visible del Holiday Inn en Toluca y hoy los herederos están por fincar en Malinalco otro complejo hotelero. Fiel devoto con la gracia del Señor, levantó un emporio bien cimentado en el Motel del Rey, transformado luego en un alojamiento de cinco estrellas en Paseo Tolloacan, justo donde comienza la avenida Alfredo del Mazo.

Aquel ambiente impregnó las calles de Atlacomulco y rodeó a Peña hasta los once años de edad. Sus recuerdos de formación no pasaron de allí. En cuanto terminó la primaria, su papá Gilberto Enrique Peña del Mazo y su mamá María del Perpetuo Socorro Nieto Sánchez (hija de Constantino Enrique Nieto Montiel, esposo a su vez, en esa madeja de apellidos, de Ofelia Sánchez Colín, hermana del ex gobernador Salvador Sánchez Colín) decidieron que ése era el momento de preparar a Enrique para el futuro. Lo sacaron para siempre de las calles del pueblo. Primero lo ambientaron unos años en Toluca y más tarde lo enviaron a la capital del país.

En la reduccionista gran familia del Opus Dei en América Latina, el número de fieles supera veinte mil, distribuidos en Argentina, Chile y

Colombia, además de México. En este último país controla la Universidad Panamericana y el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE); en Chile, la Universidad de los Andes, y en Argentina, la Universidad Austral, entre docenas de negocios, instituciones, medios y empresas. Está documentado que al IPADE asistieron los presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas.

Para reforzar su título de la UP, Peña hizo una maestría en administración de empresas en el ITESM. En la UP tuvo una breve estancia como profesor, pero la política lo llamó desde joven, pues a los veintisiete años de edad —como ya vimos— fue secretario particular de Montiel, cuando éste era el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno estatal. Montiel renunció y se lo heredó al nuevo titular de esa dependencia. Mucho antes, el mismo Montiel lo había recomendado para dirigir uno de los sectores juveniles del PRI mexiquense, pero en el sector popular lo rechazaron.

En esos seis años, Peña Nieto realizó múltiples actividades en forma paralela. Lo demás sólo fue cuestión de tiempo, Montiel dejó que las fichas se acomodaran solas, para por último, en enero de 2005, imponer a Peña como candidato a gobernador.

Con el derecho a picaporte que le dio su tío Montiel, la cercanía y los contactos de Alfredo del Mazo González —ex gobernador mexiquense, secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal en el régimen de Miguel de la Madrid, hijo de otro ex gobernador que fue secretario de Recursos Hidráulicos en el sexenio de López Mateos—, las puertas se le abrieron con facilidad.

GUERRA SUCIA

La opción de Peña parecía clara desde el principio del régimen montielista. En 2004 todavía hubo quienes dudaron del respaldo de Arturo a su sobrino, pero pronto se desengañarían. Como se relató anteriormente, los procesos internos priistas para elegir al sucesor de Montiel contaron con un rosario de candidatos, pero al menos con dos posibilidades reales: Isidro Pastor Medrano, el ex regidor atlaco-

mulquense que controló y rehizo de la nada al PRI de Montiel, y el empresario Carlos Hank Rhon.

Las campañas internas mostraron su inutilidad, además de la incapacidad y la corrupción del PRI para superar sus viejos vicios, porque el “dedazo” fue implacable. Los demás precandidatos —Guillermo González Martínez, Fernando Alberto García Cuevas, Jaime Vázquez Castillo, Gustavo Cárdenas Monroy, Enrique Jacob Rocha, Héctor Luna de la Vega, Cuauhtémoc García Ortega y Eduardo Bernal Martínez— entendieron el mensaje y se hicieron a un lado, a pesar de que contaban con sólidos respaldos.

Por ejemplo, el entonces diputado Gustavo Cárdenas Monroy, también con fuertes antecedentes en Atlacomulco, es sobrino de uno de los empresarios más poderosos de México, Eduardo Monroy Cárdenas, dueño de La Moderna, aliado con Roberto González a través de los Hank con su Grupo Financiero Interacciones. Roberto González Barrera, cabeza de Maseca y Banorte, es suegro de Carlos Hank Rhon. No es todo; el apoyo central de Cárdenas Monroy proviene del grupo IAMSA, propietario de ocho mil unidades de transporte de pasajeros, fundado por Jesús Alcántara Miranda, originario de Acambay, y que preside su hijo Roberto Alcántara Rojas —pariente de Montiel—.

Pese al historial y los vínculos de cada uno de los candidatos, la lista se reduciría pronto: Pastor fue descalificado luego de una campaña orquestada desde las oficinas de Versini y el procurador Navarrete. Borrado hasta hoy de los planos políticos estatales, amarró después una frustrada alianza (vista como un caballo de Troya) con el panista Mendoza Ayala, que no le redituó a este último.

Y Hank Rhon se hizo a un lado cuando vio que Montiel y Versini no lo dejarían llegar de ninguna manera. Se fue tranquilo a medias, con la promesa de contratos de obra pública, aunque los analistas más suspicaces de la política mexiquense vincularon su declinación a la candidatura, en diciembre de 2004, a las extrañas circunstancias en que fue encontrado asesinado el ingeniero Enrique Eduardo Salinas de Gortari. La madrugada del lunes 6 de ese diciembre, cuando Hank Rhon aparecía muy a menudo al lado del gobernador Montiel, como su invitado especial, en medio de lo que ya era una inocultable y enconada lucha pree-

lectoral entre hermanos priistas, descubrieron en un automóvil el cadáver de Enrique Eduardo, que tenía una bolsa de plástico en la cabeza y mostraba huellas de tortura. Por tratarse de un personaje tan relevante, las autoridades se apresuraron a informar que había muerto por asfixia.

El automóvil, propiedad de la misma víctima, era un Volkswagen Passat de color gris plata; lo abandonaron en las calles de un fraccionamiento residencial del municipio de Huixquilucan. Se descartó que hubiera sido un secuestro, aunque el día anterior su familia había denunciado, en Cuernavaca, Morelos, la desaparición del ingeniero, empresario de cincuenta y cinco años de edad. Un día después del hallazgo del cadáver, Hank Rhon anunció públicamente su retiro de la contienda, por no ver futuro. Ese día asistió a los funerales, en los que estuvo presente el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

La horrorizada ciudadanía mexiquense recordó entonces algunos escándalos recientes de la familia Salinas de Gortari: el hermano incómodo, Raúl, todavía purgaba una condena en el penal de Almoloya de Juárez, acusado por el homicidio de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu. (El peso de la investigación recayó en connotados personajes mexiquenses incrustados ahora en el gobierno de Montiel, entre ellos el diputado Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno en la administración de Peña, y a quien, un mes después de la muerte de Colosio, en 1994, lo nombraron procurador de la República. Luego de más de una década, Raúl fue absuelto y liberado.) Y Carlos, obligado a exiliarse como uno de los ex presidentes (y políticos) más odiados, no podía quitarse de encima la sombra de dudas por el magnicidio del candidato presidencial Luis Donald Colosio Murrieta.

Antes de ser ejecutado, a Enrique Eduardo se le relacionaba con una maraña de delitos de todos los calibres, pero sobresalía el de lavado de dinero. Las líneas de investigación apuntaron a su círculo íntimo: compadres, familiares, una ex esposa y su compañera sentimental, quienes habrían intentado chantajearlo. "Estos personajes sabían que Enrique escondía una gran fortuna", señaló *Milenio Diario*. Pero la hipótesis de chantaje formaba parte de la información confidencial, como eran aquellas precisiones de que el ingeniero era investigado por una transferencia de siete millones de dólares a un banco europeo.

Más adelante, el procurador Navarrete declaró que estaban identificados los cómplices del homicidio y que se habían tomado medidas para evitar una fuga; señaló que el crimen se había planeado desde el primer círculo de allegados y, en una conferencia, prometió una “sacudida nacional” con el resultado de las investigaciones coordinadas por sus agentes. Los nombres de los presuntos cómplices nunca salieron a la luz pública y la sacudida aún aguarda en los desgastados archivos de la procuraduría estatal o en boca del funcionario, hoy alejado de las cuestiones judiciales.

Así pues, cuando el escándalo del asesinato bañaba todas las capas gubernamentales, Hank Rhon renunció al proceso interno para elegir candidato del PRI a la gubernatura y se retiró. “Porque sentí que no era el candidato de unidad.” Para hacerlo con elegancia o menos espinoso, dijo a sus seguidores que lucharía por la candidatura de la alianza PRI-PVEM. Y el empresario se fue para siempre. Tal como ocurrió con su paisano Guillermo González, afectado por un coma prediabético, y Eduardo Bernal.

Con ese inexplicable crimen como telón de fondo del proceso priista para elegir a su candidato a gobernador, Hank Rhon se alejó de Montiel. Su hermano Jorge había perdido las elecciones en Baja California, derrotado por un panista o por la maestra Elba Esther Gordillo; como el líder nacional de su partido, su amigo y compadre Roberto Madrazo, no pudo defenderlo, anunció su declinación para volver a sus negocios. El 31 de enero de 2005, Peña se registró como candidato único y de unidad de todo el priismo del Estado de México. Solo ya, esperaba la voz de arranque para las campañas políticas en las que se enfrentaría a la perredista Yeidckol Polevnsky, abanderada de Andrés Manuel López Obrador, y sin ninguna esperanza, y al panista Rubén Mendoza Ayala, arriba en las encuestas.

Sin aspavientos, Mendoza Ayala, ex legislador y ex alcalde de Tlalnepantla, había derrotado en una contienda interna al conocido panista José Luis Durán Reveles. Su presencia inquietaba. Intentaban obligarlo a renunciar a esa lucha inútil. Tanto era el temor, que grupos priistas pugnaron en tres ocasiones para que el Instituto Electoral le retirara el registro. Mendoza tenía un pecado grave o mortal: en su ju-

ventud se había formado en las filas del PRI. Había sido una de sus mayores promesas y esperanzas; conocía sus mañas, sus trampas.

En algún momento se acercó e integró al grupo juvenil creado por Abraham Talavera López, un hombre elegante, perspicaz, dominante y muy inteligente, tres veces diputado priista, ex embajador de México en Guatemala, ex oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, director de Investigaciones Políticas (en el sexenio de López Portillo), consejero presidencial y mago de la alquimia electoral. Era de esos políticos que poseían el don único de descubrir estudiantes que pudieran adoctrinarse y enrolarse en las filas el PRI.

Reclutado en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) en Acatlán por Cuauhtémoc Sánchez Barrales, el ex —en dos ocasiones— alcalde de Tlalnepantla, ex diputado federal y en su momento presidente del PRI mexicano, Mendoza Ayala conoció a Talavera en alguna etapa de su carrera. Trabajó amistad con él y con algunas de las promesas que estaban bajo su tutela, como Carlos Iriarte Mercado (quien en el sexenio 1999-2005 sería incorporado al equipo de primera línea de Montiel, con Peña, Miranda, Sámano y Eduardo Segovia), Ulises Ramírez Núñez (un futuro diputado local, alcalde de Tlalnepantla y senador por el PAN) y el diputado Mario Enrique del Toro (quien de las filas panistas saltó al PRD).

Dueño de peculiar vida, avezado en el fraude electoral, receloso, proclive al derroche, a la apariencia física pulcra y la imagen corporativa, sin capacidad para ocultar algunas de sus extravagancias, como sus interminables veladas, sus coloquios o tertulias, Talavera López dio forma desde el PRI a uno de los grupos actuales más exquisitos y de mayor influencia en la zona conurbada de la Ciudad de México, que terminaría alineándose y militando en el PAN estatal. Talavera estaba convencido de que Rubén Mendoza Ayala tenía madera para desplazar a los políticos pertenecientes al Grupo Atlacomulco y llegar a la gubernatura.

Talavera se echó a la espalda la tarea de educar, por llamarle de alguna forma, a Rubén. Había gran afinidad entre ellos. Lo enseñó a vestir, le corrigió la forma de hablar, lo introdujo en una maraña de tiempos y amistades priistas para hacerlo alcalde de Tlalnepantla, diputado y líder del partido. A Rubén lo veía con la cabeza fría y lo considera-

ba un hombre inteligente. Iban juntos a todas partes. Pero un drama se atravesó en el camino: un día, Talavera amaneció sin vida.

Su muerte es uno de los muchos casos apilados entre montones y montones de legajos del archivo judicial que alimentan el descrédito gubernamental. El lunes 27 de enero de 1997 Abraham Talavera López, reconocido político mexiquense, quien ocupaba la Dirección Editorial del PRI, fue hallado muerto en su domicilio en la colonia Héroes de la Revolución, en Tecamachalco, Naucalpan.

Según el acta, Guillermo Camiseau García, secretario particular de la víctima, encontró el cuerpo a las diez y media de la mañana de ese día, por lo que dio aviso a las autoridades. El encargado de despacho de la subprocuraduría del estado en la zona de Tlalnepantla, Sebastián Cruz Vargas, informó que el crimen había sido perpetrado en el interior de la residencia de la víctima, en Plutarco Elías Calles 18. Indicó que, con certeza, los asesinos eran personas conocidas, por lo que bien podía tratarse de una venganza.

A las once de la noche dio inicio la declaración de uno de los secretarios auxiliares, Miguel Ángel Córdova, la última persona que lo vio con vida y lo dejó a las puertas de su residencia en la madrugada del mismo lunes, alrededor de las tres y media. Los primeros análisis de la necropsia revelaron que la víctima fue golpeada con un objeto contundente —un tubo o un bate de beisbol—. Talavera recibió cuatro golpes en la cabeza, uno en la espalda y otro en el tórax. De las heridas en la cabeza, presentaba una de tres centímetros en la sien del lado izquierdo. Las otras tres estaban en la parte posterior del cráneo. Originario de Tenango del Valle, donde nació en 1949, el político murió entre las cuatro y las seis de la mañana.

Se encontraron otras huellas de violencia en el interior de la residencia, lo que hizo suponer a los especialistas que hubo resistencia o una riña. Los peritos hallaron sangre por toda la casa y descartaron que se hubiera forzado alguna de las puertas de entrada.

Además de su brillante carrera política en cargos de elección popular, así como de designación, Talavera militó en el PRI desde 1967. Fue líder juvenil estatal de 1970 a 1972, y director del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPES) en 1983. Fungió como de-

legado general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en Campeche (1976), durante la campaña presidencial, y se integró a la Comisión de Asuntos Internacionales de 1980 a 1994. Fue coordinador de asesores del oficial mayor del PRI en 1987; secretario de Capacitación Política del CEN, de 1988 a 1989, y fundador de la revista priista *Examen* en 1989. Entre 1989 y 1991 fue director general del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del CEN e integrante del Consejo Político del PRI mexiquense de 1991 a 1995.

Talavera vivía solo desde que se separó de su esposa María de los Ángeles González, con quien procreó una hija. Era amigo personal del asesinado candidato presidencial priista Luis Donald Colosio. Egresado de El Colegio de México, cursó en Chile y Perú estudios latinoamericanos, y en la Universidad de Harvard, una maestría en positivismo mexicano. Fue becario de la Biblioteca Nacional de Washington y desdeñó una beca en la Universidad de Oxford, en Gran Bretaña. Cuando José López Portillo era presidente de México, lo invitó como titular de la Dirección de Investigaciones Políticas, oficina desde la que tuvo acceso a los archivos de toda la clase política mexicana. Lo llamaban el *Espía Mayor*. Conocía los secretos de todos. Más tarde, De la Madrid lo hizo embajador en Guatemala, y a su regreso le ofrecieron la dirección general del IEPES.

En las siguientes semanas, a Miguel Ángel Córdova se le acusó de homicidio y falso testimonio, y a Guillermo Camiseau García, de falso testimonio y encubrimiento. Se informó que a Talavera no lo habían golpeado con un bate ni con un tubo, sino con una botella de whisky Johnnie Walker. Durante unos días, nada más, el crimen acaparó las páginas de algunos diarios. Después se diluyó en la insensibilidad de las autoridades priistas mexiquenses; para entonces era gobernador sustituto César Camacho Quiroz, y procurador de Justicia Luis Aguilar Basurto —luego Jorge Reyes Santana—.

En marzo de 2005, la guerra electoral contra Rubén Mendoza Ayala expuso otras artimañas de la política del Estado de México (en esa guerra habían caído Hank Rhon y la perredista Polevnsky, cuyo nombre fue atacado hasta mostrarla como una impostora), caracterizada por una creciente vocación persecutoria. El lunes 7 de ese mes, la

sociedad mexiquense se sobrecogió cuando el diseñador Mario González Albarrán, copartícipe de una llamada guerra sucia contra varios actores políticos en Michoacán, Guerrero, Colima, Yucatán y Sinaloa, convocó a una rueda de prensa para denunciar al delegado del PRI en el Estado de México, Jesús Murillo Karam, porque a través del consultor y publicista venezolano Juan José Rendón había orquestado una campaña contra el abanderado panista a fin de involucrarlo en asuntos de homosexualidad y orgías.

Si alguna vez lo tuvo, el componente humano de la política estaba perdido. Apareció toda una sucesión de subterfugios y mentiras, cuyos secretos sólo se conocían en el PRI. Sin embargo, las dudas sobre Mendoza Ayala ya estaban sembradas. González Albarrán precisó que desde febrero le habían encargado una serie de fotomontajes del panista, por los cuales recibió un anticipo de cien mil pesos. También aceptó que, con anterioridad, se involucró en campañas para desacreditar a candidatos de oposición al PRI, como el perredista Lázaro Cárdenas Batel —a quien se le acusó de practicar la santería—, que, con todo, ganó la gubernatura en Michoacán. Agregó que decidió denunciar porque su conciencia no le permitía estar tranquilo y le indignaban esos actos.

Durante la campaña hubo una ausencia total de escrúpulos y de buenos propósitos. Esa situación permitió propagar rumores de todos los calibres posibles. Acompañado por integrantes de la Asociación de Mujeres Unidas por el Estado de México, el diseñador confió en que sus revelaciones no tendrían repercusiones legales, porque lo apoyaba una institución no gubernamental ni partidista.

De manera que a mediados de febrero le encargaron a González Albarrán realizar los fotomontajes contra Mendoza para desprestigiarlo, y como prueba de ello mostró algunos en los que se veía al ex alcalde de Tlalnepantla y candidato panista sosteniendo relaciones con hombres. No hubo una sola modulación del crudo lenguaje.

“Me presento aquí a denunciar estas porquerías, porque si bien me quedé callado cuando la gubernatura de Michoacán, ya no podía más. Sé que estos actos son vergonzosos. Me indignan. Ya mi conciencia no podía estar tranquila. Estoy aquí por una cuestión moral y porque me indigna que un personaje extranjero venga a nuestro país a corromper

la política mexicana.” Y agregó: “[Rendón] ha recibido millones por parte del estado de Sinaloa gracias a Francisco Labastida Ochoa”. Confesó que desde 2001 estaba dedicado de tiempo completo a producir campañas de guerra sucia.

No había necesidad de probar las declaraciones de González Albarrán, pues sirvieron sólo como pantalla distractora para atizar el fuego encendido con el retiro de Hank Rhon y los ataques a Polevnsky. Literalmente, metieron la política mexiquense a un cochinerero. La guerra contra Mendoza empezó mucho antes y fue real, aunque tenía mucha tela de dónde cortar por sus abusos en la alcaldía de Tlalnepantla.

Esta campaña descubriría el lamentable estado de la política mexiquense y el “arte” de destruir al enemigo. En el PRI se sentaron pacientes a atestiguar la muerte política de Rubén Mendoza Ayala. La mañana del lunes 13 de diciembre de 2004 cuajó el modelo a seguir. La nota principal de *El Sol de Toluca* cayó de improviso con un encabezado más chismoso que informativo: “Rubén no le cumplió a su novia. Mónica Mondragón no lo considera buen compañero ‘ni capaz de gobernar mi hogar’”.

Fechada en Metepec, la nota franqueó todos los terrenos de la imaginación: Mendoza Ayala había faltado a su palabra de caballero y, luego de anunciar unilateralmente en diversos medios su compromiso matrimonial con Mónica Mondragón, periodista y conductora del noticiero “Buenos Días Toluca”, de la noche a la mañana se desentendió de él, provocando serios inconvenientes en la vida privada, familiar y laboral de su supuesta prometida.

“La fuerte presión ejercida en Mónica Estrada —firma con el apellido de Mondragón— provocó que este sábado fuera internada de urgencia en el Centro Médico de Toluca, aquejada por excesivo vómito y migraña, generados por el grave estrés por la falta de respuesta de Mendoza Ayala, que simplemente ha rehuido a hablar con ella. [...] Aún convaleciente en el hospital, Mónica Estrada refirió la difícil situación por la que atraviesa, debido a la forma en la que se dieron las cosas, primero con un intempestivo anuncio matrimonial en el cual Mendoza Ayala no le pidió su opinión, pero con el cual estuvo de acuerdo después de haberse dado una larga plática entre ambos y, lue-

go, con la completa desatención y falta de seriedad del candidato panista. [...] 'Estuve dispuesta a tomar la mano de un hombre que dentro de una relación presentó para mí la posibilidad de una verdadera pareja. Su propuesta de matrimonio alentó mi confianza en poder desarrollar a su lado un proyecto común a favor de la familia del Estado de México.' [...] Sin poder hablar demasiado debido a su endeble estado de salud, nos entregó una carta escrita por su puño y letra donde señala que después de momentos reflexivos, signados por una actitud reflexiva y honesta, 'he decidido salir de un círculo informativo falaz, generado por el entorno a un supuesto matrimonio con el licenciado Rubén Mendoza Ayala, candidato a gobernador del Estado de México por el PAN, que afecta mi vida profesional y personal. [...] Como toda mujer comprometida, me dispuse a responder con dignidad y activamente a la relación, así como al compromiso, circunstancia que sólo la ejercí en lo individual, siempre dirigida y atendida por sus colaboradores, en ausencia y absoluta desatención del licenciado Mendoza Ayala, quien habiendo satisfecho su necesidad de presentar futura consorte derivó una necesaria circunstancia que para los seres humanos es de vital importancia, una simple cuestión de relaciones públicas e imagen. [...] Considero que ninguna relación se puede fundar en el desamor, interés político y la apariencia. Esperé, de una persona de su estatura y presencia, consideración, seriedad y, sobre todo, calidad de sentimientos; ante la circunstancia, no considero a Rubén Mendoza Ayala buen compañero, pero no capaz de gobernar y ejemplo para mis hijos. [...] La supuesta relación tejida por Rubén Mendoza Ayala me ha causado en mi vida privada, familiar y profesional serios inconvenientes. Conformo su finiquito y desautorizo cualquier expresión que en torno a ésta emita el citado candidato'."

A fin de darle imagen a Peña, apareció toda la gama de maquinaciones de la democracia. Por ejemplo, el sábado 11 de diciembre de 2004, el Consejo Político Estatal del PRI celebró un encuentro para el cual contó con policías en treinta y cuatro patrullas y doce camionetas, al menos trescientos efectivos vestidos de civil y francotiradores aposta-

dos en edificios contiguos a la sede priista. Semejante despliegue de fuerzas iba a garantizar la expulsión deshonrosa de Isidro Pastor Medrano, condenado por simular eventos, meter ideas y descarrilar el proceso, además de insertar en la nómina a un equipo de cuatro mil "aviadores". No obstante, lo hizo con el beneplácito de su jefe Arturo Montiel. Sin los recursos autorizados desde la gubernatura, Pastor jamás habría podido mantener ni siquiera un tercio de ese equipo.

El caso de las maniobras dañinas del diseñador Mario González Albarrán, acompañado por sus mujeres defensoras, fue otro ejemplo extremo y deleznable. Sin embargo, lo que siguió espantó, por su primitivismo, a un selecto grupo de periodistas que en enero de 2005 recibieron por correo electrónico un anónimo, en el cual se inculpaba a Rubén Mendoza Ayala del homicidio de su amigo y ex jefe Talavera.

Tras cuatro años de silencio, una indiscreción reveló aquella otra confabulación. Por el lenguaje rudo, además de un fundado temor a represalias, los periodistas decidieron deshacerse de las camufladas "revelaciones" del anónimo y no publicar una sola línea. Nadie intentó indagar de dónde había salido, su veracidad, ni quiénes lo divulgaron. El mensaje llegó a donde el PRI quería hacerlo llegar: a los periodistas que tenían contacto con Mendoza Ayala.

Uno de esos periodistas toluqueños descifró el mensaje y lo guardó en sus archivos. Lo mantiene bajo resguardo como parte del ambiente sucio que rodeó aquella campaña grotesca que buscaba desalentar el voto por el PAN.

En el contexto de ese anónimo, así como de algunos otros vestigios de la renuncia de Hank Rhon y el burdo ataque al nombre de Yeidckol Polevnsky, la declaración del diseñador Mario González Albarrán forma parte de aquellas acciones que parecían limitadas y se convirtieron en signos de una atmósfera descompuesta. A partir de ese día, la campaña electoral del PAN no volvió a ser la misma. Rubén Mendoza fue desdibujándose hasta desaparecer.

Como nunca, o quizá como siempre, con ese anónimo la política partidista mexiquense fue absurda y se puso por encima de la ley. Ese tono

de barbarie caníbal se mantuvo en toda la campaña. Los fragmentos del anónimo ayudan a reconstruir la atmósfera de degradación en las semanas previas a los comicios:

"Hace más de diez años guardo esto en mi memoria. Éste es un recuerdo de los actores de la historia o historieta en camino de gobernar. No puedo resistir oírlos hablar de moral, de familia, de buenas costumbres, de honestidad, de valores, cuando son la muestra de lo que no debe de ser, de lo que la política no debe representar.

"Vivía en la zona norte del Distrito Federal y tomaba clases en un Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). Hombre rudo, golpeador y alcohólico, mi padre se dedicaba al transporte de mercancías en un camión de tres y media toneladas, rentado en la zona industrial de Vallejo; después de clases o en fines de semana me obligaba a trabajar como machetero, cargando y descargando, sin salario. Mi madre toleraba esta situación para evitar las golpizas que nos propinaba. Aguantó ella por nosotros. Quería que fuéramos licenciados.

"Un día, a la salida de la escuela, acompañaba a mi novia a su casa. Caminando bajo el fuerte sol que quemaba el pavimento de la calzada Vallejo, nos dirigíamos a la unidad El Rosario, donde ella vivía. De pronto escuchamos un claxon y vimos aproximarse a un Jetta. La miré indignado porque pensé en algún pretendiente. Pero no, del vehículo bajó un hombre elegante. Hacía un casting para comerciales, y yo daba el tipo. Si me elegían, tendría paga. Me entregó una tarjeta con su nombre y teléfono, pidiéndome que llamara antes del viernes. La tarjeta tenía un nombre: Lic. Rubén Mendoza Ayala, y su número telefónico.

"Se ofreció a llevarnos pero me negué. Creí que quería conocer a mi novia. Ese jueves mi papá se emborrachó. A las quejas de mi madre, la respuesta fue la de siempre: golpes. Salí. Como no tenía a dónde ir, me acordé de la propuesta, así que llamé. Pedí por Rubén. El casting estaba cerrado, pero harían una excepción. Me recibirían la noche del sábado en una casa por el rumbo de Tlalnepantla.

"Me presenté puntual. Era una casa muy grande. Alrededor se encontraban estacionados vehículos de lujo, toqué el timbre. Me abrió un joven bien vestido. Era una fiesta para hombres solos. Había cua-

tro o cinco jóvenes, Rubén y un hombre maduro, como de cuarenta y cinco años, a quien todos se dirigían con respeto y admiración. Rubén me recibió con afecto. Tomamos. Después de cuatro o cinco vasos de whisky, estaba mareado. Me invitó a recostarme en una de las habitaciones y me acompañó. Me puse bravo, y pareció arrepentirse, pero sacó mucho dinero.

"Prometió más. Salió y regresó con el hombre maduro. Su nombre era Abraham. Así se llamaba. Le gustaba que le dijeran jefe o diputado. Agarré mi dinero, más de quinientos dólares. Me prometieron empleo. Tomé un taxi a mi casa. Durante varios días dudé. Fui contratado como jefe de departamento, con un salario superior a dos mil dólares mensuales. La mayoría de los asistentes a la fiesta trabajaba en la misma oficina; ahí estaban Rubén Mendoza, Alberto —su secretario particular—, Ulises, mi jefe, y responsable del dinero; Carlos Iriarte —luego contratado para el gabinete de Arturo Montiel—, otro cuate y yo.

"Cada sábado nos reuníamos en casa de Abraham Talavera. Del trabajo no hay mucho qué decir, era bien pagado. Abraham nos obligaba a vestir bien y a manejar un buen carro. Para eso, Alberto nos prestaba, por instrucciones de Abraham, para el enganche de los coches. Para la ropa, cada mes nos visitaba un sastre con trajes de marca. Pasado el tiempo, me tocó una ayuda para ir a vivir con Ulises, aprovechando que éste se salió de su casa. Yo, encantado de dejar a mi padre, me fui a vivir con él, a un departamento cerca de la Zona Rosa.

"El dinero era el cebo de la trampa, porque una vez aceptado no te podías salir, debías mucho... y no podías renunciar; ése era el arreglo, mientras lo respetaras no había problema, seguías cobrando y viviendo bien. A mí me gustó. Manejaba mi Ford Escort del año, verde botella, importado, de lujo, circulando por la ciudad, vestido con ropa de marca y, cuando podía, acompañado por alguna mujer.

"Algún tiempo después, Rubén empezó a visitarnos. Su relación se hizo más fuerte y estrecha. Esa época fue de las más felices que vivimos. Pero lo bueno dura poco. Por esos días Iriarte también empezó a visitar el departamento. Se sentía solo y, de paso, cargaba con la pena del abandono de sus estudios en el Colegio Militar. Con el apoyo de Abraham, arregló lo de su baja. La investigación se cerró, y el asunto

cayó al olvido. Iriarte se presentaba vistiendo un uniforme negro de gala, el que usan los cadetes en ocasiones especiales.

"Una noche Talavera montó en cólera contra Rubén, quien se había enriquecido y beneficiado de sus relaciones políticas. En la siguiente fiesta sabatina, con Ulises Ramírez, Alberto y Carlos Iriarte —Rubén llegaría más tarde, porque llevó a su mamá a una boda—, Abraham fue otro. Como a las dos de la mañana, por fin llegó Mendoza Ayala. Abraham se violentó y amenazó con un 'cabrones, yo los hice, y los puedo deshacer, el que manda soy yo'.

"La historia es confusa: se escuchó un grito de dolor. Abraham reaccionó dirigiéndose hacia un mueble de la sala. De un cajón sacó una pistola, le apuntó a un Ulises asustado. Rubén tomó una botella de vidrio color verde, de whisky JB, y golpeó a Talavera. Abraham, el político profesional, el diputado federal, el reconocido académico y el talentoso abogado, se desplomó desmayado, sangrante. Rubén y Ulises, los aprendices, la emprendieron a patadas en contra del indefenso ser humano. Iriarte se sumó a la golpiza. Era ésa una furia descontrolada.

"En esa orgía de patadas, salió un disparo. Los agresores se quedaron paralizados. Los tres se retiraron a un rincón. Alberto se acercó, tocó el pecho de Talavera. Con una palidez mortecina, confirmó: 'está muerto'. Rubén, Ulises y Carlos se abrazaron desconsolados y llorando. Ahora eran cómplices del homicidio de su jefe y protector. Rubén nos entregó diez mil dólares a cada uno, aunque al final de cuentas, nadie hubiera hablado por lo denigrante y comprometedor del asunto, como por las amenazas de muerte. Abandoné el país."

Rubén Mendoza salió "muerto" en esa peligrosa guerra de exterminio político. Su campaña fue, desde entonces, un circo de tres pistas. Terminó refugiándose en sus dominios de Tlalnepantla. Acción Nacional nunca entendió qué pasaba, buscó explicaciones donde no las había. Y el carismático Talavera regresó a su muerte, enterrado para siempre. Su caso sigue a buen resguardo en los archivos judiciales y en la historia de este país.

El domingo 3 de julio de 2005, Peña ganó con mucha comodidad los comicios y, casi de inmediato, se convirtió a la vez gobernador electo y precandidato presidencial.

Una noche de agosto de 2008, sentado a una mesa del restaurante California sobre el Paseo Tollocan, en Toluca, durante una plática informal —cuando intentaba contratarlo para dirigir su periódico y un portal en Internet—, Isidro Pastor Medrano hizo una confesión mordaz al periodista Miguel Alvarado. Lejos los comicios para suceder a Montiel, incluso éste ya divorciado de Versini y casado con Norma Meraz, Pastor no podía dañar a nadie, además de que su futuro seguía en el limbo político luego de la vergonzosa expulsión del PRI. Palabras más, palabras menos, le dijo a Alvarado que en aquel entonces estaba listo un expediente para involucrar al candidato panista Rubén Mendoza Ayala en asuntos de pedofilia. También atribuyó su caída a la intervención de Maude Versini.

Capítulo VII

Alianza pecaminosa

SOMBRAS DE DUDA cubrían desde 1998 la personalidad de Arturo Montiel Rojas, cuando se develaron algunos misterios sobre su forma de hacer y entender la política. En la historia de su ascensión hasta la candidatura para suceder a César Camacho Quiroz es difícil hablar de casualidades porque se amontonan intrigas, traiciones y dos fraudes electorales: uno interno a través de la manipulación priista, aparentemente una maniobra para frenar aspiraciones de su amigo entrañable y ex jefe Humberto Lira Mora; y otro para detener el avance del PAN en la entidad, evitar el triunfo de su candidato a gobernador José Luis Durán Reveles, desmantelarlo y armar su propio grupo político. Con calificativos de todos los calibres —tramposo, desleal, transa, perverso, mezquino, corruptor—, Arturo Montiel se hizo del poder absoluto y, llegado el momento de cada uno, se desembarazó de sus adversarios priistas, panistas y perredistas.

Antes de consumarse ambas conjuras, no puede omitirse reconocer la ayuda que Montiel recibió de Emilio Chuayffet.

Elegido gobernador del Estado de México para el periodo del 16 de septiembre de 1993 al 15 del mismo mes pero de 1999, Chuayffet no completó dos años porque, a finales de junio de 1995, Zedillo corrió a su secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán (luego de una matanza de campesinos en Guerrero, perpetrada por la policía de aquella entidad, y porque el mismo presidente dificultó su

trabajo), y le pidió al mexiquense renunciar a la gubernatura —lo que Chuayffet hizo el 2 de julio— para reemplazarlo.

A pesar de los argumentos sólidos de la oposición en la legislatura del Estado de México, Chuayffet recurrió a su poder para imponer en el cargo que dejaba vacante, a Camacho Quiroz. Fue un movimiento estratégico con miras a la sucesión presidencial del 2000. Y fue también su primer yerro mayor: exceso de confianza. Antes de sentarse a despachar en la Ciudad de México para controlar la política interna de un país convulso, le ganaron sus prematuras ansias sucesorias. Y desde su nueva posición se apropió del liderazgo del Grupo Atlacomulco.

En forma incuestionable mordió el anzuelo de la ambición, lo que le trajo dramáticas consecuencias el martes 9 de septiembre de 1997, cuando quedó atrapado entre los enconos del salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro. En una moción promovida por Marcelo Ebrard Casaubón, los diputados federales lo censuraron, recriminaron y desconocieron como interlocutor ante el gobierno federal. Frente a esos legisladores, a los que había intentado someter, apenas le alcanzó el aliento para bajar la mirada, callar y perder su autoridad.

Chuayffet mostró un intervencionismo abierto para evitar la instalación de la Cámara de Diputados el último día de agosto de 1997. La fallida maniobra podría haber tenido serias consecuencias, ya que el país estuvo al borde de la ruptura constitucional. Cualquiera que haya sido el origen del hecho —sus ambiciones o las obsesiones de Zedillo por la animosidad hacia Porfirio Muñoz Ledo—, esa crisis, provocada para imponer por la fuerza a una diputación minoritaria del PRI, lo deslegitimó y descartó como candidato presidencial.

Ese día también el PRI empezó a perder la Presidencia de la República. De haber tenido éxito en su intentona de “golpe de Estado” al Congreso de la Unión y haber puesto a los diputados mayoritarios a merced de los doscientos treinta y nueve del PRI y las veleidades zedillistas, Gobernación habría hecho añicos la de por sí endeble “democracia” mexicana. La medida habría colocado a Chuayffet junto al nada honroso lugar del “error de diciembre” de 1994, causante de una traumática devaluación del peso que dejó como herencia la peor crisis económica y financiera de la historia mexicana.

El intervencionismo en la Cámara fue mal planeado e inútil. Por encima le pasaron el perredista Muñoz Ledo y el panista Carlos Medina Plascencia quienes, al menos en ese momento, terminaron con el histórico avasallamiento priista. La legislatura se instaló. No funcionaron ni los intentos de soborno. Cegado ante los síntomas de agonía en el presidencialismo, el despacho de Zedillo todavía cuestionó la validez jurídica de la legislatura mediante una tramposa interpretación de la ley y se cerró con el bloque opositor. Para "dialogar" les envió al autor material del frustrado golpe: el secretario de Gobernación.

A través de políticos mexiquenses cercanos a Chuayffet en esa época, Jorge Díaz Navarro recrea en su libro inédito parte de esa crisis y concluye que el entonces secretario de Gobernación quería usar al Ejército para impedir la toma de protesta de los opositores y proteger a los priistas. "Instruyó al PRI para que, al día siguiente, en todas las capitales, los priistas se manifestaran en contra del espurio Congreso opositorista. Y el Ejército garantizaría la seguridad de los manifestantes. Al enterarse los altos mandos de las fuerzas armadas de la situación, pues se les había pedido poner en estado de alerta a todas las zonas militares, se reunieron para analizarla en los ámbitos jurídico, social, político y militar, cayendo en cuenta que las manifestaciones constituirían actos de provocación y porque la Legislatura estaba legalmente constituida. [...] Sin la fuerza de las armas, el PRI desistió y Muñoz Ledo, como se había elegido, contestaría el informe presidencial."

AFRENTA LLAMADA BETETA

Pero los desatinos de Chuayffet comenzaron varios años atrás, tal vez durante aquella mañana del 8 de septiembre de 1989 cuando, en su oficina de la Secretaría General de Gobierno, lloró frente a un reportero para negar las versiones de alta traición a su jefe, el gobernador mexiquense Mario Ramón Beteta Monsalve. La mañana del día anterior, el presidente Carlos Salinas de Gortari había ordenado cesar a Beteta inmediatamente.

Aunque las invitaciones para celebrar el Grito de la Independencia

ya se habían distribuido y Beteta se aprestaba a pasar el 15 su última noche en la soledad del Palacio, la exigencia de su renuncia, disfrazada de la promoción a una gerencia bancaria, fue terminante. Él la esperaba desde la segunda semana de julio de 1988. Esta vez no lo salvaría el recuerdo de su padre, el general y pintor Ignacio Beteta, jefe del Estado Mayor del presidente Lázaro Cárdenas, ni el de su tío, Ramón Beteta, secretario de Hacienda y Crédito Público del presidente Miguel Alemán Valdés. Su "muerte" estaba decretada.

El cambio fue imperioso. Salinas lo aguantó hasta septiembre de 1989, cuando su gobierno estaba por cumplir dos años, para evitarse el trauma de convocar a nuevos comicios. El mandatario no mostró el menor interés sobre elecciones en el Estado de México porque un año y dos meses antes, el 6 de julio de 1988, había perdido todo, y ese todo se reflejó en el millón doscientos mil votos que apoyaron las aspiraciones presidenciales de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en la entidad, contra seiscientos cuarenta y nueve mil salinistas. El recuerdo de Cárdenas fue una sombra vengadora. Frente al reportero, Chuayffet soltaba lágrimas redentoras y hacía maletas, guardaba sus recuerdos.

Desde el principio no hubo confianza en la lealtad de Chuayffet. Las elecciones federales de 1988 se convirtieron en una miniguerra de espionaje interno porque el pequeño grupo cercano al gobernador tenía la certeza de que el secretario general de Gobierno y titular de la Comisión Estatal Electoral tejía en secreto sus redes para sustituir a Beteta, y lo hacía en forma directa a través de allegados al candidato presidencial priista Carlos Salinas. Al otro día de los comicios federales de julio de 1988, el PRI mexiquense recurrió a la manipulación de sufragios para sostener a sus candidatos a senadores y diputados, pero no puso igual empeño con los votos del candidato presidencial.

Había fuertes rumores sobre el inminente y disfrazado despido de Beteta, que ya había librado la crisis generada por los ataques a Pemex —empresa de la que había sido director general—, cuya engañosa culminación fue el encarcelamiento del líder Joaquín Hernández Galicia, *La Quina*. Los aduladores de Beteta lo aislaron, le hablaron bonito y él creyó que la gubernatura sería eterna. Todos lo alentaban, incluidos los seguidores de Chuayffet, que veían a éste como su sustituto. Chuayffet

lo sabía e hizo poco por frenar los rumores sobre el desahucio político de Beteta y por el contrario, aumentaron.

Entrada la noche del jueves 7 de septiembre, en un juego minucioso de sesenta palabras devastadoras, Beteta hizo pública su decisión, irrevocable, de dimitir y regresar a la capital; de separarse de su "irrenunciabile" encargo público de inmediato, a partir de la madrugada del viernes 8. Las crónicas de los diarios reflejaron el tono imperativo del despido: "Todos los patios del Palacio estaban llenos de camionetas y vehículos donde los principales funcionarios se llevaron sus efectos personales y dejaron sus despachos limpios para entregarlos".

El fulminante cese pareció un "magnicidio político" ante los ojos de los mexiquenses. Lo compararon, guardadas las distancias, con el asesinato de Alfredo Zárate Albarrán en marzo de 1942. Aquella destitución reveló el carácter de Salinas y su amargura por los resultados que en el Estado de México hicieron ganador a Cuauhtémoc Cárdenas. Aunado a ello, fue clara la descortesía y la burla del presidente de la República al obligar a renunciar al gobernador sin dar aviso a la legislatura local.

Las elecciones presidenciales de 1988 se convirtieron en una pesadilla para el PRI en todo el país, particularmente en los estados de México, Michoacán y Baja California, donde el candidato del Frente Democrático Nacional (FDN), Cuauhtémoc Cárdenas, lo arrolló. El gobernante michoacano, Luis Martínez Villicaña, y el bajacaliforniano, Xicoténcatl Leyva Mortera, también fueron cesados de inmediato. Al primero se le degradó a la dirección general de Caminos y Puentes Federales, y el segundo se marchó desterrado a Washington como representante de Nafinsa. Al gobernador "mexiquense" —más bien, al capitalino impuesto a los mexiquenses por capricho de Miguel de la Madrid—, lo toleraron un poco más.

La debacle priista y la desgracia de Beteta debieron ser responsabilidad de Chuayffet, como titular de la Secretaría General de Gobierno y garante de la Comisión Estatal Electoral, en su calidad de operador político de un gobernador foráneo. Él debía tener el control de los hilos partidistas, así como de las tendencias del voto. Todo le salió mal o lo manejó a su favor. No hubo visión para prevenir el desastre.

La afrenta fue demasiado. Salinas lo sabía, como lo sabía todo mundo: Beteta nunca hizo nada por la campaña presidencial. Ningún petrolero hizo nada o trabajaron por Cárdenas, y él había llegado a la gubernatura mexiquense desde la dirección general de Pemex, sin haber vivido un solo día en la entidad y, la verdad sea dicha, sin tampoco mover un dedo para "ajustar" los resultados electorales de 1988. Y Chuayffet lo secundó, dejó correr las aguas, pero no tomó ninguna precaución. Talentoso como parecía e inteligente como lo calificaban los priistas mexiquenses, debió haber previsto la catástrofe. Todas las "virtudes" del secretario general de Gobierno quedaron expuestas en su borrascosa indolencia o manifiesta incapacidad para dominar una entidad que estaba obligado a conocer como la palma de su mano.

Con los votos mexiquenses no habría sido necesario recurrir a la tristemente célebre "caída del sistema". Esa farsa electoral sembraría graves dudas sobre la legitimidad salinista. En 1988 se diluyó la transición democrática para dar paso a un fraude cibernético entre la maraña de incoherencias oficiales, números irreales, acusaciones y los asesinatos de los cardenistas Francisco Xavier Ovando Hernández y Román Gil Heráldez.

Aquella estafa electoral sepultó al gobernador. Se separó del cargo con el fin de aceptar una asesoría especial con Salinas, así como la dirección general del Banco Mexicano de Comercio Exterior, o la llamada Multibanca Comermex.

Así, el lunes 11 de septiembre, en una de las oficinas de la alcaldía, Ignacio Pichardo Pagaza, titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Consumidor (Profeco), esperaba apertrechado la decisión de los diputados locales, convertidos en un Colegio Electoral muy aleccionado para violar las leyes estatales e imponerlo. Al filo de las cinco y media de la tarde fue juramentado. Humberto Lira Mora llegó a la Secretaría General de Gobierno y Chuayffet salió huyendo por la puerta de atrás.

En su destierro, Chuayffet llegó a la Profeco y se tomó tiempo para olvidar, terminó de enjugarse las lágrimas y amarró una negociación política con Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación salinista. El 16 de septiembre de 1993, Salinas y Gutiérrez Ba-

rrios llevaron a Emilio con los brazos en alto a la gubernatura como sucesor de Pichardo Pagaza. Los desmemoriados priistas echaron en saco roto la traición a Beteta y la hecatombe electoral. Todo fue perdonado y sepultado desde el primer minuto del aquél día.

La fuerza del nuevo gobernador se hizo patente, no con la persecución de quienes le disputaron la candidatura, sino con la decisión de adular al poder salinista dividiendo en dos al municipio de Chalco y creando el municipio ciento veintidós: Valle de Chalco Solidaridad, en homenaje al programa estrella de Carlos Salinas.

DESDE GOBERNACIÓN

Como se relató antes, en la mañana del domingo 2 de julio de 1995 Chuayffet entregó su solicitud de licencia para separarse del cargo en forma definitiva, pues había aceptado una invitación del presidente Zedillo para ocupar la Secretaría de Gobernación, en sustitución de Moctezuma Barragán.

Los primeros doce meses de Chuayffet en Gobernación tenían huellas claras de sobrada insolencia e ingenuidad. El 28 de junio de 1996, bajo la proclama: "El gobierno se ha negado a satisfacer los reclamos de justicia, libertad y democracia del pueblo, y ha demostrado que jamás va a ceder, por lo que hemos decidido conquistarlos con la fuerza de las armas". Se trataba de la aparición pública del Ejército Popular Revolucionario (EPR), durante la conmemoración del primer aniversario luctuoso de la masacre en Aguas Blancas, Guerrero, donde, por órdenes del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, la policía emboscó a un grupo de campesinos y disparó contra ellos; diecisiete murieron y hubo veinticuatro heridos. Figueroa sería obligado a renunciar el 12 de marzo de 1996.

El encumbrado Chuayffet respondió a las proclamas del movimiento armado con arrogancia: "Yo no admito que se le llame guerrilla. Fue una pantomima montada para ganar publicidad". Ya tendría tiempo de rectificar. Por arriesgadas y por negarse a ver la realidad, las declaraciones del funcionario responsable de mantener la paz interna

se volvieron un martirio. El 28 de agosto, el comando central rebelde le envió una respuesta menos teatral. Coordinó nuevos atentados en instalaciones militares y policiacas de cuatro estados. Luego del ataque en Huatulco, el más publicitado, Chuayffet inició una persecución abierta contra el grupo armado.

Los guerrilleros ampliarían su radio de acción a Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos e incluso llegaron a realizar ataques a instalaciones de Pemex. Los oficios de alerta roja militar mostrarían esa "ficción" de 1996 en palabras del presidente Felipe Calderón, cuando el lunes 16 de julio de 2007 señaló que, frente a la acción criminal de los terroristas, "el combate a este mal exige decisión y firmeza. [...] Enfrentamos riesgos a la seguridad internacional como lo son el crimen organizado o el terrorismo que actúa en nuestros países".

Ni Chuayffet, ni su equipo cercano, ni sus asesores, ni sus espías de inteligencia incrustados en la nómina de la policía política supieron enfrentar esa "mascarada", ni tuvieron capacidad para detectarla. El país empezó a cobrarle. Tampoco encontró la hebra fina, fuera del autoritarismo y la manipulación, para negociar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En dos años y medio Chuayffet no pudo apagar los fuegos que consumían la paz interna, a pesar de la evidente militarización de algunas zonas y las campañas de exterminio indígena. Su equipo no pudo siquiera convencer a los partidos de oposición de sus buenas intenciones, y se aprobó una reforma electoral que defendía las últimas ventajas del PRI.

Capitalizados los errores por la oposición, otra amenaza golpeó al secretario de Gobernación. Desde los púlpitos de la catedral, en su homilía del domingo 20 de octubre de 1996, el arzobispo Norberto Rivera Carrera envió una amenaza velada cuando leyó una proclama propia. Le recordó que, cuando una autoridad se sale del marco legal o contraviene los derechos humanos, "no hay obligación de tributarle obediencia". Ese día quedó atrapado en un campo minado. También la Iglesia estaba harta de la política interna.

Ahí comenzó la última etapa de la ruidosa caída de Chuayffet y abrió la puerta al sinaloense Francisco Labastida Ochoa. El descon-

cierto cundió en la dependencia y se impuso el autoritarismo: desde las oficinas de Asuntos Religiosos salió una arriesgada respuesta a la arenga de monseñor Rivera, amenazándolo con imponerle una multa de veinte mil días de salario mínimo o clausurarle la Catedral Metropolitana. Gobernación le recordó: "Nadie, bajo ningún argumento, se encuentra eximido del respeto y la obediencia al régimen del derecho".

Minado, Chuayffet descubrió tarde la intolerancia de su respuesta. Con una guerra de baja intensidad para someter a los zapatistas, así como a las comunidades indígenas chiapanecas, y el EPR quemándolo los discursos, la jerarquía eclesial unida se le fue encima. La Dirección de Comunicación Social de la Arquidiócesis reviró: "Lo que se dijo, se dijo bien y se sostiene, y no hay que rectificar ni una coma".

Resintiendo la reprimenda de Gobernación y sintiendo la amenaza intimidatoria, el obispo de Tacámbaro, Michoacán, Rogelio Cabrera López, advirtió: "La autoridad no debe comportarse de manera despótica, sino actuar para el bien común como fuerza moral, que se basa en la libertad y en las obligaciones que ha adquirido con los ciudadanos. [...] En la actualidad nadie quiere someterse a nada ni a nadie, ni a las leyes ni a los acuerdos internacionales. [...] Ante esta situación de anarquía hay dos opciones: se obedece o se impone la autoridad. No hay más, obediencia o autoritarismo".

Una semana aguantó Gobernación respuestas de obispos y arzobispos a su amenaza velada. Chuayffet no se encontraba en condiciones de afrontar una "guerrilla" eclesial, de manera que reuló, pactó con la jerarquía católica y la dejó en santa paz. Nadie esperaba que la Iglesia llegara al punto de iniciar una revuelta civil, pero se tomó como una bravuconada cerrar la Catedral Metropolitana. Sin embargo, el golpe de gracia llegó con los conflictos religiosos en la selva lacandona chiapaneca.

Con la permisividad de los gobiernos federal y estatal, el PRI atizó una escalada de hostigamiento y persecución contra indígenas protestantes y simpatizantes de Marcos. Una mano tendida visiblemente llevaba al gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, y al despacho de Chuayffet, a través del Cisen, que preparaban grupos paramilitares capacitados en el espionaje político —Paz y Justicia, Los Chin-

chulines, Máscara Roja o Mira fueron el botón de muestra— para cercar a zapatistas en Los Altos y someter a disidentes a una guerra de baja intensidad, además de crear zonas militares (una en Ocosingo, bastión del EZLN, y otra en Tenosique, Tabasco).

Enmarcada esa beligerancia, 1996 fue el año del despegue de los gastos militares internos. Las fuerzas armadas —Ejército y Marina— recibieron un presupuesto global de catorce mil novecientos setenta y un millones de pesos, incremento de un cuarenta y seis por ciento en relación con el año anterior. Todavía en la segunda semana de diciembre de 1997, los cabecillas de Paz y Justicia concedieron una especie de tregua, maquillaron la realidad para dejar pasar sin novedad e inadvertida la gira por Chiapas del nuncio apostólico, monseñor Justo Mullor.

El 22 de diciembre, los paramilitares se adentraron en la selva. A pesar del intenso patrullaje de soldados, apoyado en morteros de 81 milímetros, ametralladoras 0-50 de ciento veinte tiros por minuto, fusiles de asalto G-3, con aditamentos especiales para mira telescópica, visión nocturna o de rayo láser, vehículos anfíbios y tanquetas, en el municipio de Chenalhó esos verdugos paramilitares asesinaron y descuartizaron en el campamento Las Abejas a un grupo de indígenas que oraban en una ermita. Las víctimas sumaron cuarenta y cinco: nueve niñas, veintiún mujeres adultas (cinco estaban embarazadas), seis niños y nueve hombres adultos. Además, resultaron heridas diez mujeres (cuatro niñas) y siete hombres (cuatro niños).

La impunidad dio paso al exterminio. El 10 de junio de ese año, en El Bosque (municipio autónomo zapatista de San Juan de la Libertad) fueron ejecutados ocho campesinos, algunos por la espalda. La matanza se atribuyó a soldados, policías estatales y agentes del Cisen. En el operativo, coordinado en las comunidades zapatistas de Chavajebal y Unión Progreso, se reportó la detención y tortura de cincuenta y tres personas, además de actos de rapiña.

La carnicería en Las Abejas tuvo su desenlace once días más tarde. El montaje de los paramilitares solapados por Gobernación no pudo sostenerse en una reconstrucción inicial de hechos. Habían matado por la espalda. Zedillo montó en cólera y el 3 de enero de 1998 despidió a Chuayffet sin honores. Éste se fue con el currículum en-

sangrentado. Durante sus treinta meses en Gobernación, fueron ejecutados cerca de cuatrocientos indígenas. Antes de concluir el tortuoso 1997, los zapatistas ya eran un movimiento político-social. Y el obispo Samuel Ruiz García denunció que el Ejército tenía en Chiapas cincuenta y siete mil soldados repartidos en las ocho regiones autónomas y los treinta y un municipios en rebeldía. En las cercanías se contabilizaron tanques Tymoney equipados con proyectiles, orugas artilladas para terreno fangoso y helicópteros Bell-212.

El despido sumió a Emilio Chuayffet en el descrédito por sus torpezas políticas, sus enfrentamientos con la Iglesia católica, su desdén por la guerrilla desde Oaxaca y Guerrero, la formación de grupos paramilitares, y las fallidas maniobras que buscaban la ruptura constitucional, un "golpe de Estado" al Congreso para someter a los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), cuya alianza convirtió a sus doscientos sesenta y un diputados en un bloque mayoritario en la LVII Legislatura, una "amenaza" para el gobierno zedillista.

Maltrecho, desprestigiado, malgastadas sus ilusiones de llegar como puntero a los comicios de 2000 para instalarse como sucesor legítimo de Zedillo, y sin posibilidades de regresar a la gubernatura resguardada por su amigo Camacho, Chuayffet volvió para ajustar cuentas a su rival histórico, el texcocano Humberto Lira Mora.

La imposición

RECELOSO POR EL MALTRATO de la prensa durante su estancia en Gobernación, donde también le recordaron el otorgamiento de permisos de apuesta a Jorge Hank Rhon, Emilio Chuayffet se autoexilió en la fría capital mexiquense y sintiéndose el líder de los priistas del Estado de México, tomó en 1999 el control de la sucesión de Camacho como si fuera la propia. Parecía buscar a alguien a modo, ambicioso, manejable y, por sobre todas las cosas, capaz de llegar a la deslealtad.

Atrincherado en Toluca y aferrado en mantenerse a flote en la política mexicana, sostenía un liderazgo endeble y fisurado que parecía tener un objetivo: dar un golpe efectivo para deshacerse de sus enemigos a través de la imposición. Además, sería una lección para el presidente de la República, por osar despedirlo y, peor, desnudar sus incapacidades políticas y de diálogo. No le costó trabajo encontrar a ese aliado momentáneo en el presidente del PRI estatal, por segunda ocasión: Arturo Montiel Rojas.

La segunda llegada de Montiel al PRI, el 17 de febrero de 1997, serviría de preámbulo para la esperada candidatura de Humberto Lira Mora. Por lo menos éste así lo creyó. Montiel había sido su colaborador cercano y gran camarada.

La traición a Lira Mora se hilvanó con apoyo de los ex gobernadores, hasta conseguir el visto bueno del enfermo Hank González.

Muerto Hank dos años después de la imposición de Montiel, el periodista Jorge Díaz Navarro armó el rompecabezas de los embates para acorralar a Lira Mora, hacerlo presa de la refinada política de

Chuayffet, víctima de la conspiración de su amigo Montiel y del oportunismo de Hank: "Llegado el momento en que el gobernador y los ex gobernadores, en ese perverso ritual de atajarle el paso a la democracia, tenían que consensuar sobre quién sería el candidato que habría que sacar adelante a como diera lugar, Chuayffet y Camacho filtraron a gente de Hank (para esconder sus intenciones verdaderas al ya viejo profesor) que su respaldo sería para el senador Héctor Ximénez González. Pero el magnate de Tianguistenco no simpatizaría con esa propuesta. Hablando por todos los demás ex gobernadores (no estaban presentes ni Pichardo ni Alfredo del Mazo, pero se arrogó su representación), Emilio confesó. Tampoco ellos se inclinaban por Lira Mora. Y ofreció una serie de razones sobre la sobrevivencia de la clase política a la que ellos pertenecían.

"—Entonces ¿quién? —preguntó Hank—. Fuera de ellos —agregó—, no veo en los demás prospectos a alguien que nos garantice.

"Emilio sacó su as de la manga.

"—Creo que no se ha tomado en cuenta a un nuevo prospecto que conoce el estado y sabe todo lo que es preciso saber de nuestra política, porque se ha hecho entre nosotros. Me refiero al señor presidente de nuestro partido, al licenciado Arturo Montiel Rojas.

"Cuando todos pensaban que Hank pediría la opinión a los demás, sorprendió, vio bien esa posibilidad. Aceptó. *El Profesor* recordó que Montiel hizo su carrera bajo la égida de su amigo y socio en negocios Juan Monroy Pérez.

"De aquel cónclave corren muchas versiones, pero la mayoría coincide en que ninguno de los presentes había pensado siquiera en el nombre de Montiel, conocida su amistad cercana, afinidad y dependencia política y laboral de Lira Mora. Descartados y guillotinos que fueron Lira Mora y Ximénez González y, consumado que fue un golpe más a la clase política del Valle de México, todo quedó en manos de Emilio y de César para que el prospecto fuera sacado adelante en la elección abierta a la militancia. [...] Para enviar el mensaje a los priistas de que el bueno era Montiel, ahí mismo se decidió que lo sustituyera en la dirigencia del partido el secretario general de Gobierno, Jaime Vázquez Castillo. Cuando corrió la noticia, los menos suspic-

ces apostaban a que Montiel declinaría a favor de su jefe Lira Mora. Pero, otros redomados chimuelos mascadores de toda suerte de tuercas y clavos, se fueron a lo directo y advirtieron que el síndrome de Iscariote permeó a Montiel, quien se prestó a tan incalificable felonía política, ya que desde que llegó por segunda ocasión al PRI, se advertía que venía a prepararle el camino al texcocano.”

La clase priista mexiquense aceptó que, de nuevo, el líder Hank González, secundado por viejos amigos suyos como los ex gobernadores Jorge Jiménez Cantú y Salvador Sánchez Colín, decidiera el nombre del nuevo gobernador. Por eso, ante una maraña bien manejada por Chuayffet, el día de la reunión ni siquiera se pararon Del Mazo González ni Pichardo. Al primero se le dio la oportunidad de meter a uno de sus hombres a la pelea: Alejandro Nieto Enríquez. Pero desde la derrota en el Distrito Federal ante Cárdenas, la influencia de Del Mazo había sido mínima en el selecto grupo de ex gobernadores. Sin poder y sin recursos, su candidato estaba muerto. Además, su relación con Hank González y Jiménez Cantú estaba por los suelos (aunque en política hasta los muertos resucitan y, años después, Del Mazo “reencarnó” en su sobrino Peña).

Sólo Montiel sabe cuándo y cómo Chuayffet le habló al oído sobre la posibilidad de entrar en la línea sucesoria, si bien al parecer la fecha más indicada fue junio de 1998. Muy débil de carácter y entrampado por momentos entre la lealtad a su ex jefe y amigo, el 7 de julio de aquel año ya había sucumbido a la posibilidad de la sucesión y a la historia sobre la vidente, los seis gobernadores atacomulquenses y la leyenda de que uno de ellos llegaría a la Presidencia de la República.

Había tomado una decisión y fue consecuente. Quería ser gobernador y más adelante impulsaría su candidatura presidencial. Tiempo tenía. No le costó trabajó conocer la opinión de los líderes municipales priistas y, menos, inclinar la balanza del PRI a su lado para hacer entrar en razón a esos dirigentes, porque él los había impuesto.

Con esa semilla sembrada casi sesenta años atrás, Arturo Montiel Rojas preparó discretamente su ascenso. Y consumó la traición políti-

ca, su primera de gran envergadura. De la mano de Emilio Chuayffet, apoyado en colaboradores de mucha confianza, entre ellos su asistente auxiliar Enrique Peña Nieto, así como su paisano, el regidor Isidro Pastor, y después Luis Enrique Miranda.

Humberto Lira Mora confiaba en las reglas no escritas de la lealtad y tenía confianza plena en su amigo y ex subordinado. Cuando fue asesinado Luis Donald Colosio, Pichardo Pagaza resucitó en la política en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y en busca de apoyo rápidamente colocó a mexiquenses. Nombró a Lira Mora secretario de Acción Electoral. A su vez, Lira invitó a Montiel como subsecretario también de Acción Electoral. Éste renunció como secretario de Desarrollo Económico, cansado de los modos de Chuayffet. Entendió, como lo hicieron Pichardo y Lira Mora, que el reemplazo de Colosio, Ernesto Zedillo, acogería a la dirigencia priista.

Para Montiel, un cargo en la federación fue una oportunidad de oro y asumió la representación de la Secretaría de Gobernación ante la Comisión Intersecretarial de Investigación Oceanográfica (CIIO). Asentado Lira Mora en la Subsecretaría de Protección Civil, hizo a su amigo director general del ramo en esa dependencia. Más tarde, pasaría a la Dirección General de Talleres Gráficos de la Nación, para regresar por segunda ocasión en ese 1997 como presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI.

Pero el 7 de julio de 1998, como preámbulo a la elección interna del candidato que se realizaría el 31 de enero de 1999, el PRI convocó a la elaboración de su plataforma electoral. Hecho público el inesperado movimiento, las formas empezaron a revelar fondo y trasfondo. Estaba rota la promesa no escrita de imponer a Lira Mora en la gubernatura. Fue un golpe mortal, y éste lo supo, porque la misma convocatoria allanaba el camino a otros precandidatos —a través de lo que ya se perfilaba como unos comicios abiertos o una inédita elección primaria estatal, bajo el disfraz del respeto a la democracia interna—, controlados todos desde las instalaciones del PRI bajo el mando de Montiel y la mano muy visible de Chuayffet a través de su sucesor César Camacho.

Abierta la deslealtad, Lira Mora sabía quién sería el candidato y,

por ende, quién el gobernador a partir del 16 de septiembre de 1999. Su amigo y Camacho tenían bajo férreo control a cada uno de los ciento veinticinco presidentes de los comités municipales priistas. Ir a una elección interna abierta sería un suicidio. Lo sabía, pero no le quedaba de otra. Tampoco le dieron oportunidad de renunciar a su precandidatura. La convocatoria lo obligó a poner sobre la mesa sus cartas, abrirlas y el 26 de julio entrar al simulado juego democrático. Enviado por *La Jornada*, Alberto Aguirre advirtió: "Tres priistas destapados y otros seis ocultos están moviendo sus piezas. Carlos Hank [González] lleva la voz cantante, pero dentro del grupo 'toluco' hay fisuras, producto de añejas rivalidades".

La lista de precandidatos fue amplia: Jaime Vázquez Castillo, ex secretario general de Gobierno, encumbrado por Chuayffet, se anotó entre los primeros; luego se sumaron Manuel Cadena Morales y Herberto Barrera Velásquez, hasta entonces dos políticos de no muy grandes vuelos. En el momento oportuno, ambos renunciaron para apoyar a Montiel. El primero también se disciplinaría o se haría a un lado cuando le ordenaron sustituir al precandidato en la presidencia estatal del PRI y hacerse cargo de la campaña montielista. Vázquez se fue de la lengua y prometió al menos dos millones cuatrocientos mil votos para la elección contra los aspirantes del PAN y del PRD.

Hubo una sola mujer: Yolanda Sentíes Echeverría (sobrina del ex presidente Luis Echeverría Álvarez e hija del ex regente Octavio Sentíes Gómez), pero todo mundo —al menos todos los priistas— sabía de su llegada en calidad de bulto para birlar a Lira Mora aunque fuera unos cuantos votos de las mujeres de la vieja guardia. Luego anotó su nombre otro aliado de Pichardo Pagaza, José Merino Mañón (si no era uno sería otro), que haría aún más obvio el objetivo del grupo encabezado por Chuayffet: echar montón a Lira Mora. El senador Héctor Ximénez González enriquecería la lista, pero él dudaba del proceso y por lo menos intentó guardar un poco el decoro partidista.

Mientras Montiel quedaba con vía libre para entrar a ese pleito desigual y como presidente del partido hacía llamados a la calma y respetar los tiempos, recorría abiertamente los ciento veinticinco municipios. Hacía una campaña en lo oscurito para fortalecer su candidatura

y atizar el antagonismo contra su amigo Lira Mora, quien sumaba influyentes adeptos: los atlaacomulquenses Mayolo del Mazo Alcántara y Ricardo Montiel Espinoza, que venía laborando al lado de René Martínez Souverville y le preparaba la campaña en Naucalpan.

Lira lanzó sus mejores golpes y se confió en la protección de su ex jefe, el ex gobernador Pichardo Pagaza. Pero todo estaba hecho. En una entrevista, Barrera señaló al diario *Liberación*, cuyo propietario era un hijo del ex gobernador Pichardo: "Se dice que Montiel tiene la línea del gobernador [Camacho]". Yolanda Sentíes trató de enmendarle la plana. Reconoció el riesgo de la línea a favor de un candidato: "No hay que olvidar que en casi setenta años se hizo [de ese modo]".

Herido de muerte, con la idea de que le sería imposible sortear los peligros y los escollos tendidos por su amigo Montiel y por su enemigo Chuayffet, Lira Mora tiró algunos golpes en una entrevista que el mismo rotativo publicó como nota principal de su edición del 8 de enero, cuando amenazó con derrotar al "priismo autoritario" que pretendía manipular la elección del candidato.

El 17 de noviembre de 1998, Montiel renunció a la presidencia del PRI estatal y al día siguiente entregó su solicitud como precandidato a la gubernatura. Luego vinieron "en bola" los demás precandidatos. Para evitar sorpresas, todavía Emilio y Arturo dieron órdenes de infiltrar los equipos de Ximénez y de Lira. Camacho le jugó rudo a Emilio, cuando a los pocos meses de que Montiel se convirtió en gobernador sonaron los nombres para el Senado y la Cámara de Diputados federales que llegarían en 2000. Montiel palomeó la lista, aliado con Camacho. Chuayffet quería un escaño en el Senado y todo el priismo lo apoyó; pero Montiel lo hizo a un lado y metió a su amigo, el ex gobernador Camacho. Enterado de su exclusión, Chuayffet montó en cólera, se infartó por la traición y terminó hospitalizado.

La otra candidatura al Senado recayó en Barrera Velásquez. En su momento, éste declinó como precandidato del PRI para sumarse a Montiel. Ambos, Camacho y Barrera, perdieron. Aunque alcanzó a meterse por representación proporcional, Camacho fue humillado. El pueblo que gobernó durante cuatro años y medio fue "ingrato" y le dio la espalda. Para entonces, Montiel ya tenía su proyecto.

El 31 de enero y los días que siguieron a esa discutida elección primaria, el semblante y las palabras de Lira Mora fueron el termómetro de la situación: "Ganó la fuerza, el uso de la fuerza... no reconozco a la fuerza como fuente de legitimidad en el uso del poder", y terminó refunfuñando su pena como subsecretario de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, impuesto por Zedillo. Fueron sus últimos esfuerzos por buscar la gubernatura.

A partir de ese día, Montiel empezó a formar su grupo para instalarse en la gubernatura y preparar el camino hacia Los Pinos. Pocos repararon entonces en la importancia del nombramiento de Peña Nieto como subcoordinador de la campaña de Montiel a la gubernatura. Pasó inadvertido. Más de un priista reconoce, hasta ahora, que en esa campaña Enrique ya era hombre del poder, siempre protegido por Arturo Montiel.

NUEVA TRAICIÓN

Nadie imaginaba entonces que en 2001, con la muerte de Hank González, Arturo Montiel, ya instalado en la silla de gobernador, se alzaría como el político mexiquense con más poder desde marzo de 1942. Además, su apellido atacomulquense había reclamado con derechos la gubernatura, pues Fidel Montiel Saldívar, segundo procurador de Justicia del gobierno de Isidro Fabela, no pudo colarse en 1951. Fabela y la Presidencia de la República impusieron a Del Mazo Vélez.

Su llegada a la gubernatura encajó bien en una entidad priista intolerante, acostumbrada a valerse de todos los medios, sobre todo el fraude, el nepotismo, el control del dinero y el sometimiento de la prensa, para conservar el poder. Aquel domingo 4 de julio de 1999, el candidato priista habría podido ganar por un voto, por un millón o por tres millones. Habría podido perder por cinco millones de sufragios o más y aun así habría sido declarado ganador con todas las de la ley, porque ya estaba decidido.

La noche de ese domingo, las tendencias electorales lo dieron como puntero, con un inverosímil margen de doscientos mil votos so-

bre su rival panista José Luis Durán Reveles. En esa elección inequitativa, el PRI recurrió a la compra del voto, al robo de urnas, el relleno, la manipulación del padrón y de actas, la falta de cómputo de casillas, el acarreo y el secuestro de resultados, pero los panistas estaban poco preparados para defender con elementos categóricos su triunfo contra las irregularidades. Hubo un descuido —aunado a los árbitros electorales vestidos con los colores del PRI y el apoyo abierto del gobierno de Camacho, a través del desvío de recursos y una campaña sucia contra el panismo— porque descubrieron tarde el aparato de espionaje montado por los priistas para vigilar las actividades de Durán y su repunte en las encuestas, así como a sus principales colaboradores.

La estrategia del PRI fue muy clara. La razón por la que nadie le dio credibilidad a los doscientos mil votos de ventaja fue que la decisión ya estaba tomada desde la gubernatura de Camacho. El 28 de junio de 1999, seis días antes de las elecciones constitucionales, quedó completado y empacado el *Diccionario Enciclopédico del Estado de México*, impreso en los talleres de X Pert Press S. A. de C. V. y encuadernado en los Talleres de Arte S. A. de C. V. Su tiraje fue de cinco mil ejemplares, más los sobrantes para reposición y los que por la noche de ese día se filtraron a personajes especiales y a algunos periodistas... En sus páginas apareció, por vez primera, el nombre de Arturo Montiel, ya acompañado del título de gobernador constitucional, a pesar de que aún no se celebraban los comicios. En la página 311, con una foto en el margen superior derecho, el diccionario —coordinado por Humberto Musacchio y Luis Fernando Granados— establece: "Montiel Rojas, Arturo. n. en Atlacomulco, Méx. (1943). Licenciado en Administración de Empresas y contador público por la UNAM (1962-67), donde fue profesor (1967). Desde 1966 es miembro del PRI, en el que ha sido tres veces miembro del Consejo Político Nacional, secretario general de la FOP mexiquense (1990), presidente del comité estatal mexiquense en dos ocasiones y secretario general del movimiento UNE (1990-91). Consejero de la Asociación de Industriales del Estado de México. Se ha desempeñado como presidente municipal de Naucalpan de Juárez (1975), secretario particular del gobernador Jorge Jiménez Cantú (1976-1981), diputado federal por

el Estado de México (1991-94), secretario de Desarrollo Económico del gobierno del estado, director de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (1995-96) y director general de los Talleres Gráficos de México”.

El pecado del diccionario acarreo por sí mismo una pesada penitencia. Hasta el 31 de julio se expidió el bando que declaraba a Montiel gobernador electo para el periodo 1999-2005, sólo cuatro de cada diez electores (tomando como base esos números oficiales) habrían votado por él.

Por eso, diputados de oposición —el PAN y el PRD eran mayoría en la legislatura, mientras los alcaldes de esos partidos, que también gobernaban los municipios más ricos e influyentes, amenazaron con impedir que Montiel pisara sus territorios— informaron a la opinión pública que no se presentarían a la sesión del 15 de septiembre de 1999 para la toma de protesta. El avance de los partidos de oposición en la legislatura y los ayuntamientos mexiquenses más poblados comenzó a verse durante el gobierno de Chuayffet, se acentuó con Camacho y se vería arrasado diez meses después de que Montiel tomara las riendas del PRI.

Acosado por la intranquilidad, la documentada compra de votos, la transa, la cuestionada legitimidad del proceso, el significado de la rebelión de los legisladores, el peligro siempre latente de las acusaciones por el fraude electoral, la objetada legalidad de su triunfo y un ambiente cada día más enrarecido, pero amparado en el milagro del diccionario enciclopédico, el “gobernador electo” al fin mostró su rostro, porque si se retrasaba por treinta días la fastidiosa toma de posesión, la Cámara de Diputados debía convocar a nuevas elecciones, en un plazo no mayor de ciento veinte días a partir del inicio del periodo constitucional.

Los montielistas negociaron bonos extras para algunos diputados y el PRD aceptó presentarse, sumarse a la bancada del PRI, levantar el brazo y dar cumplimiento al artículo 75 de la Constitución local, la juramentación ante la legislatura con todos sus ritos implicados. La actitud perredista resultó extraña porque su candidato Higinio Martínez Miranda desconoció la legitimidad del proceso y los números finales.

Si los sueños de llegar a la gubernatura se iniciaron con la complicidad de Chuayffet, nadie se ocupó de aclararle a Montiel que su personalidad era poco atractiva para el electorado, de ahí también el diluvio de insistencias y maliciosos rumores de que había que cambiarlo por el ex regente de la capital del país, Óscar Espinosa Villarreal, quien para entonces era presa de escándalos políticos y acusaciones de fraude en su gobierno y en la malograda Nafinsa. Esa posibilidad figuró siempre en la lista de deseos de aquellos priistas que inundaban las redacciones con comentarios sobre el perfil opaco de su candidato. Y se hizo todo lo posible por recordárselo.

Prestaron atención a cada detalle del dominio público. En el PRI y en el gobierno estatal nadie alzó un dedo para defenderlo porque, a fin de cuentas, tomaría posesión. Comoquiera, aquella atmósfera escocía la vanidad del candidato, quien no estaba a la altura de sus antecesores. Antes de llegar por segunda vez a la gubernatura, Baz fue rector de la UNAM, secretario de Salubridad y director de la Escuela Médico-Militar; Juan Fernández Albarrán, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista; Hank González, director general de Conasupo; Jiménez Cantú despachó como secretario de Salubridad y Asistencia; ni qué hablar del currículum superior de Beteta; y Del Mazo llegó desde la dirección general del Banco Obrero. Aun así, el 15 de septiembre de 1999, con la legitimación avalada por el perredismo (bono de por medio), Montiel pudo rendir protesta ante cuarenta y dos de los setenta y cinco diputados (los treinta del PRI, diez del PRD y dos del Partido del Trabajo). El desaire lo pagarían los panistas más adelante.

Completada la mudanza de su antecesor, en el primer minuto del 16 de septiembre de 1999 Montiel debió meterse a su primera decisión política en una batalla presidencial. Su posición al frente del gobierno de la entidad más rica del país en términos económicos y electorales, lo convirtió en un interlocutor codiciado por el tabasqueño Madrazo y el sinaloense Labastida, aunque el horizonte sucesorio lo acaparaba Fox. A Montiel lo sorprendieron el rezago y la lentitud del arranque de Labastida.

Labastida carecía de una personalidad magnética; más bien parecía tibio y sin estatura, pero estaba revestido de los elogios presidenciales.

Desde abril de 1999 Zedillo despejó cualquier inquietud, apoyado en su hombre más cercano: el secretario de Desarrollo Social, Esteban Moctezuma Barragán. A fin de evitar escenas bochornosas, Moctezuma fue el rostro zedillista para encauzar la cargada, y para allá se volcó Montiel.

ESLABÓN ROTO

Todos suponían que Hank González calmaría el apetito político de Montiel y sus ansias de aparecer como interlocutor válido, cuando le pidió apoyar la candidatura de su “hijo adoptivo” y protegido Madrazo. La misma solicitud hizo Chuayffet.

El gabinete zedillista estaba obsesionado con las consejas de su jefe para “democratizar” la selección en el dedazo; en 1999 los precandidatos ya le habían tomado la palabra. El poblano Manuel Bartlett Díaz y el tabasqueño Madrazo estaban en plena campaña desde el inicio de ese año.

Montiel vio en ese momento la oportunidad histórica de romper con Hank, de ser posible desplazarlo, tomar su lugar. Y lo tomó.

Por razones sentimentales, Hank jamás le daría la espalda a Madrazo. No sólo era uno de sus hombres leales, como lo fue el también tabasqueño Manuel Gurría Ordóñez, que estuvo bajo el cobijo de Hank desde la década de los setenta. Madrazo tenía vínculos en las empresas hankistas, conocía el tejemaneje y, como a su tío Gurría Ordóñez, *El Profesor* lo había apoyado para ganar posiciones de magnitud, aun contra la voluntad de Zedillo.

Madrazo se casó con Isabel de la Parra, hija de Víctor de la Parra —quien dirigió parte del emporio de Hank desde la década de los ochenta— y viuda de Cuauhtémoc Hank Rhon. En el Estado de México, el relato popular cuenta que “Carlos Alberto Madrazo Becerra, padre de Roberto, y Hank fueron amigos. Cuando Carlos muere [o lo matan junto a su esposa Graciela Pintado y otro centenar de pasajeros, entre ellos el tenista Rafael *El Pelón* Osuna] en un sospechoso accidente aéreo la mañana del 4 de junio de 1969 en el cerro del Fraile en

Monterrey, los hijos quedan desamparados. A pesar de las dudas todo apunta a que sí hubo un complot del secretario de Gobernación Luis Echeverría, con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, porque Madrazo avanzaba necio en la conformación de un nuevo partido político. Tres meses después, Hank llegó a la gubernatura y ordenó apoyar a los huérfanos del fallecido ex líder nacional priista”.

Si Hank creía en el proceso de democratización que Carlos Madrazo emprendió para limpiar al PRI y en el partido propuesto (Patria Nueva), eso se lo llevó a la tumba, pero dio instrucciones de arrojar a los Madrazo. A Roberto lo tuvo cerca. Le pagó estudios en Estados Unidos y lo hizo su asesor. Cuando Hank fue nombrado regente del Distrito Federal, de nueva cuenta lo llamó a su lado; Madrazo también trabajó en algunas de las empresas de Hank. Más adelante lo nombró delegado en Magdalena Contreras, y su tío Gurría Ordóñez despachaba como secretario de Gobierno del Departamento del Distrito Federal. Hoy, Jorge Hank Rhon y Madrazo Pintado son compadres. También emparentó por el lado político.

Las ansiedades presidenciales le ganaban a Madrazo. Se peleó para siempre con Zedillo desde que en esa maraña de malas negociaciones y peores contranegociaciones éste le ordenó renunciar a la gubernatura de Tabasco para integrarse a la Secretaría de Educación Pública a fin de llevar a buen término negociaciones zedillistas con tabasqueños antimadracistas. Además, Zedillo había negociado ya la gubernatura con el PRD. Madrazo se negó a renunciar e hizo quedar en ridículo al presidente de la República, que jamás le perdonaría la terrible afrenta. Sin embargo, en ese momento el presidente titubeó, se echó para atrás con lo de la dimisión, agachó la cabeza y fue a levantarle la mano a Madrazo hasta las riberas del río Grijalva como nuevo gobernador. De manera que Madrazo tenía enfrente obstáculos insalvables, además de su bien ganada imagen negra.

Ahí estaba también Manuel Bartlett. Desde su silla en Puebla, éste era todo menos un espectador pasivo: si el PRI no asumía una actitud democrática seria y responsable, alertaba, sería derrotado en 2000. El blanco de sus dardos era la política neoliberal que el zedillismo ejercía en detrimento del desarrollo. Insinuaba sus intenciones —sospechosas

u obscenas, después de aquella caída del sistema en 1988— de entrar a la sucesión. Por último resaltaban los incrédulos anhelos del sinaloense Labastida, el sueño guajiro del ex líder nacional priista Humberto Roque Villanueva y el titubeante gobernador veracruzano Miguel Alemán con su ingenio sondeo telefónico.

Sin proponérselo, Zedillo rompería el eslabón de la continuidad priista y los escándalos de la “dictadura perfecta”, como alguna vez la bautizó el novelista peruano Mario Vargas Llosa en el círculo de potencias de la revista *Vuelta* y en donde Octavio Paz se encolerizó. Si en 1994 Zedillo no quería a Madrazo como gobernador de Tabasco, menos como candidato presidencial. En 2000 recurrió a la práctica viciada de todos sus antecesores, hizo a un lado sus prédicas democratizadoras y tomó el papel principal en su sucesión para cerrarle las puertas a Madrazo. Intervino enérgicamente para imponer a su candidato y corrompió el proceso con el ancestral recurso del dedazo.

A decir verdad, desde un inicio Zedillo cerró las puertas a sus adversarios, primero al hacer lo necesario para que Madrazo dejara Tabasco, después con el encarcelamiento de Raúl Salinas de Gortari, como presunto asesino intelectual de su cuñado Francisco Ruiz Massieu. Al poco tiempo, cuando Jorge Hank pisó la cárcel por unas horas, pero sobre todo cuando levantó la mano a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el Distrito Federal, dejando al malogrado Alfredo del Mazo González en la banca.

Zedillo comenzaba a sacudirse la carga Hank-Madrazo. A Del Mazo no le quedó otra que refugiarse en el Estado de México sin encargo, hasta que su amigo de la infancia en Atlacomulco, Arturo Montiel, llegó a la gubernatura. Pero eso no acabó ahí. El gobierno zedillista y el perredista del Distrito Federal le tendieron un cerco a Óscar Espinoza Villarreal por peculado en Nafinsa y como jefe del Departamento del Distrito Federal. Meses más tarde, el 3 de enero de 1998, Zedillo despidió a Chuavffet de Gobernación: tiempo atrás había quitado a Pichardo como titular de la Secretaría de Energía. La dedicatoria fue clara para la clase política de Atlacomulco. La hizo a un lado.

Montiel descubrió pronto el gusto por mandar y ser obedecido, a no recibir órdenes ni aceptar consejos. Fue inútil la recomendación de

apoyar a Madrazo. No hubo argumentos para convencerlo de que era el bueno, o muy peligroso, como lo vería seis años después. Montiel desencadenó una polémica estéril cuando, institucional, inclinó sus fichas por el candidato zedillista: Labastida fue bien acogido por el priismo mexiquense de Montiel, al grado que éste lo cargó en el Toreo de Cuatro Caminos.

Entre avalanchas de comentarios de esa clase política recreada en el mito del Grupo Atlacomulco, a hankistas y chuayffetistas se les reveló la segunda traición de su protegido Montiel.

Con la salud maltrecha por el cáncer, Hank González guardó las facturas que intentaba cobrarle a Zedillo por la persecución a Salinas y a su hijo Jorge Hank, quien estuvo a punto de pasarse varios años preso por un “problema menor”: tráfico de piezas arqueológicas. Chuayffet se guardó en su residencia de Toluca a sanar las heridas abiertas y sangrantes por su despido de Gobernación. La misma conducta sumisa y silenciosa siguieron Pichardo y el derrotado Del Mazo.

Espinoza Villareal huyó a Centroamérica. Hankistas y labastidistas serían irreconciliables, sobre todo cuando en campaña Labastida declaró que no aceptaría dinero de Jorge Hank y deslizó la sospecha del narco-tráfico. Montiel no hizo caso a esas declaraciones, y ya en el poder hizo lo posible por acercar a Labastida con *El Profesor*. El 23 de abril de 2000 se organizó una reunión en el Estado de México, llegó Labastida, flanqueado por Montiel, Hank, Del Mazo, Alfredo Baranda García y Chuayffet. Un reportero le preguntó a Hank sobre las declaraciones de Labastida. Caballeroso, como siempre, respondió que no sabía nada. En cambio, declaró que eran buenos amigos. Zedillo se guardó sus rencores. Todo indica que al final se distanció de su candidato presidencial y, también por eso, decidió levantarle la mano al PAN.

Montiel descubrió tardíamente —en 2005, durante la lucha por la candidatura presidencial priista— que su apoyo a Labastida en 2000 había fortalecido a Madrazo porque, aliado con la maestra Elba Esther Gordillo Morales, les ganó la dirigencia nacional del PRI y de allí brincó a la candidatura presidencial. Montiel debió retirarse por la puerta de atrás, aunque tampoco el tabasqueño tendría fuerza ni estrategia para derrotar al panista Calderón.

Ni Hank con toda su maestría en el arte de adular, ni Chuayffet con su visión de hombre superior, tuvieron capacidad para aceptar su declive. Desdeñados, toreados y vencidos por Montiel, quien ofreció su maquinaria priista a Labastida, se alinearon. En un intento por rescatar un poco de su maltrecho honor, negociaron el apoyo a la campaña labastidista, con la promesa de reivindicación a Emilio con una senaduría, siempre y cuando éste apoyara una posible llegada de Montiel a la Secretaría de Gobernación. De esto, nada se cumpliría.

Con la memoria todavía dolida por el fraude del domingo 4 de julio de 1999, los electores le recordaron al sistema que nada es para siempre. Muy temprano, el domingo 2 de julio de 2000, cuando apenas empezaban a contarse las actas de la elección presidencial, un aviso alertó a Montiel; le hizo saber la debacle para el PRI y todos sus candidatos en el estado. Perdió las dos senadurías —la de Camacho y la de Barrera— y sus candidatos apenas pudieron ganar once de los treinta y seis distritos electorales federales. Diecinueve se los arrebató el PAN, cinco el PRD y uno los ecologistas.

Otro aviso lo obligó a reaccionar. De los cuarenta y cinco distritos locales para integrar la Cámara de Diputados, apenas le reportaron una leve mayoría en dieciocho. Veintiuno se los quedaron candidatos panistas y seis los perredistas. Y faltaba una sorpresa más: la oposición también se quedó con los más importantes, ricos e influyentes de los ciento veintidós municipios, incluidos Naucalpan, la capital Toluca, el vecino Metepec y Ciudad Nezahualcóyotl. No fue un destello aislado: el PAN se asentó en treinta ayuntamientos, y el PRD, en veintiuno. “Los chiquitos” se les quedaron a los priistas. Pronto Montiel y su equipo conocieron el sentir mexiquense.

El panismo llevó un registro de la desgracia priista: “El PAN del Estado de México aportó para el triunfo [de Fox] la friolera de dos millones doscientos treinta y nueve mil setecientos cincuenta sufragios contra el millón seiscientos mil setecientos catorce del PRI a Labastida. No fue carro completo, pero Acción Nacional se ubicó, por primera vez en su historia, como la principal fuerza política”, como en 2005 publicaría Jesús Delgado Guerrero en su *Historia del PAN en el Estado de México*.

Ese fracaso tuvo sus interpretaciones. En el intercambio de confianzas esporádicas entre funcionarios del gobierno estatal y los desolados directivos del PRI nadie osó arriesgar su futuro y atribuir la derrota a la memoria fresca de la burla y consumación del fraude de 1999. Las críticas internas en voz baja fueron agrias para el gobernante, su inestabilidad, sus desaciertos a la hora de seleccionar candidatos y su errónea apuesta por Labastida. El bullicioso júbilo de la oposición y el silencio lúgubre en el edificio del PRI en Toluca representaron los dos símbolos de la debilidad momentánea de Montiel. Su imagen sufrió un doloroso descalabro. No le preocupaba enfrentar a una legislatura adversa, porque ya tenía planes para lidiar con el PAN, sino el ocaso de su sueño por llegar a la Secretaría de Gobernación y desde allí controlar al madracismo.

Pero él era el jefe. Se acallaron los señalamientos reprobatorios a su incipiente y maltrecha labor gubernamental. Se rehicieron una y otra vez las cuentas aritméticas, hasta que alguien se acordó de las partidas secretas del presupuesto estatal, replanteó esas sumas y sacó dinero de la nada. Operadores de Montiel encabezados por Pastor diseñaron una estructura sazónada en recursos para aprovechar la embriaguez del triunfalismo panista.

La postura mayoritaria vistió de una altanera arrogancia a un grupo de diputados panistas. Mareados por el triunfo, abrieron un frente de guerra interna persecutoria basada en el hostigamiento y la descalificación. Empezaron a pelear, aun antes de tomar posesión, por la jefatura de la bancada, que representaba recursos económicos y un escalón hacia la presidencia de la Gran Comisión de la legislatura. El espectáculo del encono blanquiazul opacó el descalabro priista, que iría diluyéndose. La prensa volcaría sus atenciones hacia los desfiguros azules.

Interrogado por la prensa sobre el nombramiento de Julián Angulo Góngora como coordinador de la fracción del PAN a la LIV Legislatura, Domingo de Guzmán Vilchis Pichardo hizo una acusación contra su compañero, la cual mostró la fisonomía de las hostilidades: "Tantas torpezas ya me parecen sospechosas... él se quiere sentir jefe y aquí no lo es". El significado político de esa agresión verbal llevaba otro sentido y tuvo efecto de carambola, porque representó un des-

ahogo momentáneo para el alicaído gobierno montielista, así como un inesperado y virulento ataque personal contra el líder estatal panista Francisco Gárate Chapa, impulsor de Angulo. Y las posiciones se endurecieron todavía más.

A Pastor se le encargó seducir a los inconformes encabezados por De Guzmán. Algunos aceptaron la lluvia de recursos. El gobernador estaba al tanto del avance para colapsar la bancada panista. Y, aplicando la máxima del general Álvaro Obregón de que nadie resiste un "cañonazo de cincuenta mil pesos", su artillería preparó impactos ciertos indexados a la plusvalía del momento. La escuela de Fabela recibió su mayor elogio.

El desenlace: trece diputados panistas se acogieron a la vieja y sabia máxima de que "quien obedece no se equivoca", guardaron sus pudores, escondieron la dignidad, debilitaron al PAN y decidieron crear una fracción independiente emperifollada con los desgastados colores nacionales del PRI. La nueva bancada fue pactada en veinticinco millones de pesos por cada uno de los trece desertores.

A pesar de los esfuerzos por ocultar el millonario soborno, en 2002 una indiscreción permitió ver con toda nitidez el pragmatismo de los legisladores apartados: en una conferencia de prensa, a finales de ese año, el diputado independiente Ricardo García Alavés aceptó lo del vigoroso "disparo de cañón" de veinticinco millones de pesos. La conferencia, en la que anunciaría su candidatura a la alcaldía de Toluca, se desvió cuando un periodista le preguntó expresamente sobre aquel dinero. No lo negó y aclaró que, en su caso, pidió al gobierno de Montiel entregarle esa cantidad en materiales y maquinaria de construcción para favorecer a sus representados del II Distrito de Toluca. Sus declaraciones posteriores dejaron constancia sobre cómo nació esa fracción. "De los demás", dijo, "no me consta la forma en que hayan recibido esos millones, pero de que hubo un apoyo para que nos hiciéramos independientes, por supuesto."

En marzo de 2001, la nueva bancada, "sucursal" del PRI, quedó integrada por De Guzmán (ex alcalde de Villa Nicolás Romero), Hesiquio López Trevilla, Ricardo García Alavés, María Isabel Maya Pineda, Carlos Galán Domínguez, Gonzalo López Luna, Leonardo Bra-

vo Hernández y Francisco Antonio Ruiz López, militantes del PAN, a quienes se sumaron los neopanistas (ex priistas y de nueva cuenta priistas redimidos) José Suárez Reyes, Francisco Murillo Castro, Juan Abad de Jesús, Mario Enrique del Toro y Aarón Urbina Bedolla.

Tras las elecciones de julio de 2000 y con una bancada priista apuntalada por los independientes y el PRD, Montiel movió a su gente. Sacó de la Subsecretaría de Gobierno a Peña y lo llevó a la Secretaría de Administración en lugar de Ernesto Némer. También hizo movimientos en la de Finanzas y en Planeación, encargadas de administrar y distribuir ingresos y egresos gubernamentales, así como en la Contraloría. No es arriesgado advertir que Montiel, enganchado a la compra de conciencias, castigó al estado por el revés priista del 2 de julio. El avance blanquiazul lo obsesionó, lo vio como afrenta personal.

Su campaña por desestabilizar al PAN mexiquense le rindió frutos en marzo de 2001. La decisión de borrarlo y hacerle pagar los agravios —iniciados con las acusaciones de un fraude electoral para evitar el ascenso de Durán Reveles, y la posterior rebeldía para frenar la toma de posesión en septiembre de 1999— se mostró con crudeza cuando, el 21 de marzo de 2001, De Guzmán, coordinador de la fracción independiente, declaró que él y sus compañeros seguían reconociéndose panistas de sangre blanquiazul, pero en la Ciudad de México se publicaron las otras “insospechadas” razones. *Proceso* y *Reforma* difundieron pruebas de la sumisión a Montiel a través de bonos especiales de hasta cuatrocientos cincuenta mil pesos entregados a varios independientes, así como concesiones (autos nuevos y bonos) a los del PRD.

Contaminado, el panismo mexiquense entró en crisis. Los excesos de la ruptura quedaron expuestos otra vez el 6 de mayo de 2001. En el reportaje “Canibalismo estilo panista”, *Proceso* publicó copias de recibos expedidos por la presidencia de la Gran Comisión de la LIV Legislatura, a nombre de los ex panistas De Guzmán y Urbina Bedolla. El 15 de enero, el primero recibió ciento dieciocho mil pesos en un bono para fondo revolvente. Y en diciembre de 2000, Urbina recibió doscientos cuarenta y ocho mil pesos por gastos de representación.

Los testimonios desgranados mostraron todavía un nivel más viciado y se perdió la oportunidad histórica de una legislatura indepen-

diente, un poder real que habría servido para refrenar o exhibir en su momento los abusos de Montiel. Todos se enteraron del laboratorio montielista montado para exterminar al panismo. En una nota firmada por Enrique I. Gómez y Humberto Padgett en la edición del 18 de septiembre de 2001, *Reforma* documentó que la Gran Comisión, encabezada por Pastor, otorgaba bonos de entre noventa mil y ciento ochenta mil pesos. El secreto de la compra de legisladores a través de ese beneficio comprometió a otros "independientes": Galán Domínguez (ciento cuarenta y cinco mil pesos), Abad de Jesús (ciento treinta y seis mil) y Bravo Hernández (noventa mil).

En el golpe mortal a la independencia del Poder Legislativo, también parte de las maniobras priistas para salvar el débil gobierno de Montiel, no hubo contemplaciones. El esquema se repitió en otros partidos políticos. La misma edición del rotativo advirtió sobre la entrega de bonos especiales a los diputados perredistas José Saavedra Coronel (ciento cincuenta mil pesos), Juana Bonilla (ciento cincuenta mil) y Antonio Cabello (ciento ochenta mil) e involucró a Valentín Gómez Bautista, ex alcalde de Ciudad Nezahualcóyotl, quien a mediados de septiembre había ocupado la presidencia de la Gran Comisión, con un bono por trescientos mil pesos, a través de la Secretaría de Administración, la de Peña.

Galán intentó refutar las pruebas de la rentabilidad priista, alzó los brazos para defenderse y calificó de falsos los documentos, pero la respuesta corrió a cargo del diputado panista Alejandro Gamiño Palacios, quien no sólo comprobó, mediante peritaje grafológico judicial, la entrega de un bono a Galán, sino de otros dos: por noventa mil y cuatrocientos cincuenta mil pesos, además de uno por doscientos cincuenta mil pesos para él y sus compañeros De Guzmán, Urbina y López Trevilla en apoyo a actividades partidistas, lo cual era absurdo, pues nunca se supo de actividad alguna ni de que hubieran fundado un partido independiente, como recordó años más tarde Jesús Delgado. "Sin embargo, apenas fue una parte de la distribución de fondos públicos a los independientes, ya que el 15 de enero de 2001, De Guzmán recibió, además de los ciento dieciocho mil pesos mencionados, trescientos mil más para la compra de vehículos; en la misma fecha Ur-

bina fue beneficiado con otros trescientos mil pesos por el mismo concepto, mientras que Juan Abad fue apoyado con noventa y cinco mil pesos para la contratación temporal de personal. Respecto a los perredistas, Valentín Gómez Bautista y José Antonio Saavedra Coronel recibieron ciento cincuenta mil pesos y ciento quince mil por bono especial para fondo revolvente, y bono especial para apoyo de personal externo, en forma respectiva. La diputada Rosalba Ruenes, del Partido Acción Social, fue favorecida con trescientos mil pesos para la adquisición de vehículos.”

EL REBAÑO DEL PASTOR

La presencia de Arturo Montiel fue asomándose en la vida política nacional, hábito que no abandonaría sino hasta caer en desgracia como precandidato presidencial. Con ambiciones que se revelaron muy lentamente, entró a los estados, sobre todo a los gobernados por priistas, de una forma peculiar e indiscreta a través de un “ejército” profesional formado por especialistas en alterar, con todas las trampas posibles —relleno y robo de urnas, voto múltiple a través del carrusel, acarreo, intimidación a funcionarios para dilatar o impedir la instalación de casillas y alteración de actas— resultados electorales, conocido pronto como “Fuerza Mexiquense”.

Montiel retomó las enseñanzas dinásticas del viejo Fabela. Inundó con políticos leales y sumisos los ayuntamientos más notables. Así pasó en Toluca, Tlalnepantla, Naucalpan, Chalco, Zumpango de la Laguna e Ixtlahuaca, además de Atlacomulco y Acambay. Envío jueces, agentes del Ministerio Público, secretarios y tesoreros. Incluso nombró como alcaldes a incondicionales, con la intención de mantenerlos como espías y controladores de los caciques de esas comarcas. Todo bajo el rubro de “renovación moral”.

Fue un equipo de mapaches formado y controlado en forma vertical por el ex seminarista, amigo de Montiel y ex regidor atlacomulquense Isidro Pastor, con recursos ilimitados de partidas presupuestales secretas que le dieron rango de secretario o jefe de gabinete sin

cartera. Esa organización política —espías incluidos, responsables de infiltrar reuniones, mítines, eventos, conferencias o cualquier tipo de encuentros— buscaba evitarle descalabros al PRI, pero tuvo poco éxito, como lo demostraron los resultados de los comicios de 2000.

Experimento autoritario partidista, Fuerza Mexiquense fue una especie de híbrido de experiencias trágicas probadas en épocas pasadas, como en la del tabasqueño Tomás Garrido Canabal, con su grupo de choque Bloque de Juventudes Revolucionarias (los tristemente célebres Camisas Rojas de fines de los veinte y los treinta, cuya misión era eliminar —ésa era la palabra— a los “santurriones” católicos), o aquellos infames Dragones de la década de los ochenta, que era una brigada controlada desde el CEN priista, especialista en alquimia electoral, desplegada primero en el verano de 1986 en Chihuahua para contener a panistas encabezados por su candidato a gobernador —el empresario Francisco Barrio Terrazas— e imponer, a sangre y fuego, a Fernando Baeza Meléndez.

Fue entonces cuando surgió el nombre del joven Roberto Madrazo Pintado, delegado de la dirigencia priista que despachaba desde la Ciudad de México y que estaba aterrorizada por el avance de Barrio. En 1992 todavía aparecieron los Dragones en el estado de Michoacán para garantizar el triunfo del empresario porcicultor Eduardo Villaseñor Peña. Con la guía del delegado nacional priista, Madrazo, el PRI retuvo la gubernatura, pero el trabajo quedó incompleto porque Villaseñor Peña nunca pudo gobernar. Dos años más tarde, Madrazo fue reubicado en su natal Tabasco.

Capacitados y formados para improvisar y dar salida a cualquier tipo de asuntos electorales, los Dragones se hicieron pasar incluso como representantes de partido en comités distritales o desconocidos electores de un distrito, con capacidad para votar cuantas veces se les ordenara en un número ilimitado de distritos o casillas. Aparecían cuando era necesario anular las mismas casillas a fin de detener el avance de la oposición, sin importar el color del partido ni las siglas. Su movilidad para alterar resultados estaba controlado desde la Ciudad de México, desde donde se expandieron a estados como Sinaloa. Con esos ejemplos, la Fuerza Mexiquense fue tomando forma.

Pocos supieron cuántos elementos integraban este nuevo ejército rojo, capaz de inclinar una elección, pero el sábado 11 de diciembre de 2004, cuando la maquinaria priista lo empujó a la desgracia por intentar disputarle la candidatura a Peña, el nuevo dirigente del partido en la entidad, Manuel Garza González, *El Meme* —impuesto con el único propósito de enfrentar y someter al líder rebelde—, ofreció una rueda de prensa en Toluca y denunció que Pastor tenía injustificadamente en nómina a más de cuatro mil personas. Esos empleados representaban una carga onerosísima e insostenible.

Conocido en forma amplia por las mismas “cualidades” de Pastor, pero a nivel nacional, y calificado como uno de los políticos de la picaresca priista, *El Meme* negó acusaciones de despidos masivos y sin razón, pero aceptó que estaba en proceso la desarticulación de un grupo personal con fines proselitistas: “Lo que estamos haciendo es que nosotros no tenemos recursos para sostener eso, no tengo yo idea cómo [Pastor] podía proveerse de recursos para sostener un aparato de ese tamaño. [...] Que tuvo una estructura que decían que era lateral, pero para mi gusto era sobrepuesta, encima de la estructura orgánica formal del PRI, donde los comités municipales fueron desproveídos de recursos y, en cambio, compañeros disponían de recursos y vehículos. [...] Los recursos se desviaban del propósito formal. Las estructuras formales del partido estaban desmanteladas, comités municipales cerrados, sin teléfono, sin ningún apoyo, en tanto que grupos de personas reclutadas cumplían labores de proselitismo al margen de la actividad y de los programas del partido”.

Capítulo IX

Asalto en Atenco

YA MOLIDOS A GOLPES, a los detenidos —hombres y mujeres— los arrastraron, los acostaron bocabajo en el piso de las cajas de los vehículos de la policía estatal. Como reses en canal, los arrojaron en hileras, apilados unos sobre otros. Agazapados en la cómplice oscuridad de la madrugada, los agentes caminaron sobre ellos. Tirados ahí, los reventaron a toletazos. Los patearon. Había órdenes de romperles las nalgas a las mujeres por “pendejas y putas”. A algunas las obligaron a desnudarse o de plano les desgarraron y arrancaron la ropa para “desnudarlas a güevo”, porque había que bajarles lo “calientes”.

A tres años de distancia, todo se mira de soslayo con los ojos tan abiertos y a la vez tan cerrados para no ver nada y seguirse de largo pensando que todo es irreal. Sin embargo, con esa brutalidad, crueldad y desmedida violencia entró la justicia mexiquense, empleando sus más avanzados métodos de represión. Ahí quedan los dolorosos e inagotables recuerdos de abuso sexual, la violación a las garantías individuales, el trato inhumano y degradante, el uso excesivo de fuerza y la tortura sistemática en la incursión policiaca a San Salvador Atenco.

Esa justicia llegó instigada por una televisión que transmitió, retransmitió y se regodeó con las imágenes de un policía caído, en medio de una narración estridente y provocadora: “Se acerca al policía inconsciente y lo golpea en los testículos de la forma más ruin”, “Aquí están las imágenes para el señor Enrique Peña Nieto”, “Señor, hay que poner mano dura”. La ley y la justicia mexiquenses se lanzaron despiadadamente sobre sus presas.

Descontextualizada y manipulada la noticia en radio y televisión, los conductores de noticias prendieron fuego a la mecha: “Es una vergüenza lo que estamos viendo en la televisión, yo no sé qué espera el gobierno para dar una orden más fuerte y eficaz y precisa para acabar con estos hombres que están atacando a la policía [...], están quedando en vergüenza, están quedando en entredicho la autoridad tanto del Estado de México como del gobierno”, exigían los de TV Azteca. A las diez y media de la mañana del jueves 4 de mayo de 2006, los rastros de la incursión, el ataque y el pillaje policiaco paramilitar de los elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) eran visibles en Atenco.

El pueblo es diferente a tres años de distancia. Algunas bardas guardan neciamente las siglas y leyendas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y su Otra Campaña. Nadie le apuesta a San Salvador Atenco. Los presos, la perseguida América del Valle, hija del líder de los ejidatarios de Atenco, y los habitantes traumatizados no fueron suficientes. Sobre la autopista Texcoco-Lechería los señalamientos que guían al pueblo han sido borrados. Apenas dos, escondidos entre los matorrales, dan cuenta de este territorio y dos discretas entradas conducen al lugar.

El 3 de mayo de 2006 la noche protegió un movimiento sigiloso de tropas de choque. Al amparo de la oscuridad, cuando rayaban las cuatro de la mañana del día 4, más de tres mil quinientos policías estatales y federales, acompañados por dos hombres encapuchados —dos delatores que señalaban la puerta de algunas viviendas—, empezaron a cumplir la orden de allanar.

Esa madrugada, en forma paralela, otros agentes dispararon luces de bengala, cuyo estallido desde el cielo fue la señal. Los miles de agentes armados se dispersaron por todo el pueblo. Las salidas estaban tapadas. No había para dónde correr. Se oyeron disparos y explosiones, se formó una inmensa nube de gas lacrimógeno. Gritos cercanos y desesperados: “Nos están disparando, compañeros”. La gente —“atenecos” mezclados con estudiantes— iba en todas direcciones sin saber qué hacer. Hubo confusión, luego caos. “Es el inicio del asalto a un pueblo y sus casi cuarenta mil habitantes. Ésta es la madrugada que reescribe la historia. Y éste es el viejo pueblo de San Salvador Atenco.

Son las cuatro de la mañana del 4 de mayo. La omisión de las autoridades, su negativa a informar o su silencio sobre los hechos de esas horas, y las posteriores, daría paso a la especulación. Pero la recopilación de imágenes mostraría que la policía sí estaba armada.”

Los primeros fragmentos del ataque fueron de un videoaficionado. Él mostró que la tecnología puso a disposición social una herramienta eficaz contra la palabra oficial. Sólo Wilfrido Robledo Madrid sabe cuál fue la orden que emitió su jefe Peña, porque a éste le respondía en persona, pero en el operativo y la represión contra los “atencos” y su escaso apoyo —jóvenes que esperaban o preparaban la llegada de Marcos— se notó un cúmulo de odio contenido.

Algo pasaba en el pueblo. La oscuridad se hizo cómplice de la brutalidad. La embestida aplastó la resistencia precaria.

La madrugada de aquel 4 de mayo los uniformados élite fueron enviados desde Toluca u otras bases regionales de la policía mexiquenses, con el apoyo amplio de las televisoras, así como de la inteligencia federal antiterrorista, para contener y someter al “grupo subversivo”, ese tratamiento le dieron al conocido como Frente de Pueblos para la Defensa de la Tierra. A su paso se llevaron todo lo de valor, como pasa en todas las guerras y como sufren siempre todas las víctimas. Recurrieron a decenas de allanamientos sin orden judicial, guiadas por dos delatores encapuchados, dos infiltrados de la comunidad que denunciaron a sus hermanos y vecinos para capturar a su líder Ignacio del Valle Medina. A través del terror de organismos de Estado, acallaron y sometieron a ese grupo unido de atencuenses, quienes cuatro años antes tuvieron la osadía de descarrilar una decisión equivocada e injusta de los gobiernos federal y estatal.

Acumuladas unas cincuenta y cinco mil fojas en el expediente, cerca de tres mil pruebas desahogadas, varias decenas de juicios de amparo, reconocidos los abusos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero de 2009 y convertido aquél en el proceso penal más voluminoso y complicado en la historia judicial mexiquense, el olvido supone para Atenco un interminable castigo oficial y una puntual venganza a su insolencia machetera.

La mañana del 4 de mayo la placita principal lucía las huellas de

la violencia contra un movimiento social: piedras, charcos de sangre, zapatos abandonados, vidrios rotos, tubos, un automóvil destrozado y hasta cartulinas de colores con la invitación para asistir a mítines que encabezaría el zapatista Marcos. Todas las calles estaban sitiadas. La principal, Miguel Hidalgo, era la peor. Parecía zona de guerra. La casa de cultura popular José Enrique Espinosa Juárez fue tomada por asalto para dar acomodo a un estado mayor policial comandado por el vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid y supervisado por Humberto Benítez Treviño, secretario general de Gobierno. Ésta era su guerra y ellos, los victoriosos.

En el transcurso del 3 de mayo, el día anterior, algunos reporteros de Toluca todavía recuerdan —en el Palacio de Gobierno de la capital mexiquense— a un agitado vicealmirante que vociferaba, condicionando e intentando convencer a Peña sobre la necesidad de entrar a su manera, literalmente a sangre y fuego, con la policía élite estatal, para someter a los macheteros. En aquella reunión emergente del “gabinete de seguridad pública” estatal, instigaba y azuzaba al gobernador, alzando la voz y exigiendo autorización para realizar una incursión al pueblo rebelde. Tenía hambre de entrar en acción.

Es imposible conocer la respuesta textual de Peña pero, en la madrugada de ese día 4, de la boca de Robledo salieron órdenes para reducir el movimiento popular que echó por tierra un negocio superior a siete mil millones de dólares, en su primera etapa, para beneficio de unas cuantas familias mexiquenses, entre ellas las de Montiel el ex gobernador y de Hank, además de la larga cadena de beneficiarios de los Fox-Sahagún. Si el nuevo gobernador Peña aprobó los excesos del operativo, la situación fue grave porque reveló, apenas iniciado su sexenio, cómo su administración criminalizaría conflictos sociales, con el diálogo particular de terror, de la alteración de contextos y del uso de técnicas efectivas, a través de la radio y la televisión, para conseguir el visto bueno de los ciudadanos. Si no lo supo, si se enteró a medias y sus dos subordinados actuaron por cuenta propia, la situación es igual de grave, porque mostró impericia y falta de control en los cuerpos responsables de garantizar la seguridad ciudadana.

El estudio “La ruta de la represión. Apuntes para una historia de

la persecución política en México. Primera parte: la prisión política (1990-2008)", de Eugenia Gutiérrez y Gloria Arenas Agis —presa en el penal mexiquense de Santa María Chiconautla—, difundido el 2 de octubre de 2008, da cuenta del saldo final: "Al menos doscientas doce personas fueron detenidas, golpeadas y torturadas. Un joven de veinte años y un adolescente de catorce murieron víctimas de la policía. Veintiséis mujeres denunciaron violación sexual y cinco personas fueron expulsadas del país. Nueve menores, entre ellos una mujer, fueron enviados al Tutelar de Menores de Zinacantepec [zona conurbada con Toluca] para ser torturados durante veinticuatro días. Todos los detenidos fueron torturados durante las cinco horas que duró su trayecto de Atenco hacia el reclusorio de Santiaguito".

Las televisoras guardaron silencio sobre la ejecución del jovencito Francisco Javier Cortés, asesinado con una bala de pistola reglamentaria calibre .38. John Gibler de Global Exchange Human Rights y el periodista Diego Enrique Osorno removieron esquirolas del miedo en una de sus crónicas: "Francisco había sido enviado por su madre a recoger tamales de tripa de pollo ese día [3 de mayo] de la batalla en la carretera. El joven de catorce años caminaba por el interior del pueblo, donde no había enfrentamientos. De repente se topó con un pequeño grupo de policías desesperados ante la derrota frente a los pobladores alzados. Uno de los policías se acercó a él y, sin más, descargó su pistola contra él, señalaron tres testigos. El atacante del jovencito estaba a setenta centímetros, establece contundente la autopsia practicada, y no mereció nunca una sola mención en la televisora nacional".

El documento de Eugenia Gutiérrez y Gloria Arenas Agis concluye: "El responsable es Enrique Peña. El ataque fue dirigido por Róbledo. En días posteriores, diecisiete personas fueron liberadas sin cargos y ciento sesenta y dos bajo fianza. Treinta y tres personas quedaron encarceladas. Trece aún lo están, y allí permanecerán bajo cargos de secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación. Algunos han sido sentenciados a ciento doce, y a treinta y dos años de prisión. Tres fueron reclusos en un penal de máxima seguridad".

Los especuladores que se frótaban las manos por el succulento negocio del lucro inmobiliario quisieron ocultar la historia de una zona

que ejemplifica el olvido y el desdén gubernamental, y donde son palpables la pobreza, la desigualdad y la marginación. Allí, en unas horas llenas de odio incontenible, la maquinaria oficial mostró cómo se usa y para qué sirve la justicia. Por eso nadie le apuesta a Atenco, ni a sus habitantes. Las autoridades ejercieron la violencia contra un pueblo que no tiene nada. Y a finales de agosto de 2008 reforzaron su supremacía con el terror psicológico, cuando se informó que a Ignacio del Valle le habían impuesto una nueva condena acumulada.

Los atenguenses aún no se reponen y se preguntan hasta dónde pretende llegar el gobierno, cuyos excesos pueden convertirse en el burmerán de 2012. Con la incursión de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y sus machetes, las autoridades perdieron las formas, así como el sentido político y humano. La justicia encontró sustentos para legitimar la represión a ese pueblo y mostró ampliamente el proyecto de un grupo que mira hacia la candidatura presidencial.

Mientras los atenguenses todavía esperan un milagro y luchan por la liberación de sus presos, sus calles viejas y pobres siguen contando historias terribles y lamentablemente reales, como la del joven Ken Lueders Monsiváis, que detrás de las rejas de la prisión de Santiaguito mostraba una cara amoratada y sanguinolenta, así como los dedos fracturados de una de sus manos. O la de aquella indígena de unos cuarenta años de edad, Magdalena García, de pelo lacio, largo, grueso y negrísimo, una analfabeta que además casi no hablaba español y que malbarató su burro Filemón para poder pagar a su abogada por un juicio que la llevara a obtener la libertad. O la de la condena acumulada superior a los ciento doce años de prisión que le impusieron a Ignacio del Valle. O la de abusos que sufrió una madre soltera, quien la tarde del 3 de mayo fue sometida, golpeada y obligada a practicar felaciones a tres policías. Acaso estas vejaciones nunca se van a borrar porque, como reza una frase escrita debajo de la fotografía de América del Valle que está en la Casa de la Cultura: "Sólo nos queda la resistencia".

Con una Agencia de Seguridad Estatal (ASE) paramilitarizada y apoyada por una policía federal incapaz de desactivar conflictos sociales y sin preparación para controlar muchedumbres si no es a través de la fuerza primitiva del fusil y del garrote, este pueblo sucumbió en un

mensaje inescrutable y sin enredos políticos: muertos, tortura sexual, golpeados, vejaciones sistemáticas a mujeres, torturados, líderes en el exilio y presos políticos refundidos de por vida.

Sería simplista advertir que, organizados, ellos resistieron también con violencia o que en ocasiones amenazaron y desafiaron. Consecuencia de la injusticia, retuvieron a una docena de policías en el auditorio municipal. Como se narró antes, a otro más lo masacraron a golpes y la televisión se encargó de mostrar los vestigios de la barbarie e incluso sus noticieros estelares y sus cápsulas especiales se regodearon con esas escenas que mostraban a un "pueblo salvaje". Sus conductores ocultaron la pobreza y la injusticia social, así como el abuso gubernamental para despojarlos de sus tierras, y hablaron de los "rebeldes" atenuados como mercancías desechables.

En su momento, nadie hizo el intento de esconder el pasado de su líder Ignacio del Valle Medina, serigrafista nacido en 1955, ni nadie ocultó que en 1999 fue uno de los promotores más activos de la campaña priista que culminó en 2000 con la llegada de Margarito Yáñez Ramos a la presidencia municipal de Atenco, y nadie tampoco justificó ninguna acción de este hombre.

Este pueblo agredido repelió a tubazos a los granaderos antimotines, amagó con sus machetes, preparó y lanzó bombas molotov, se armó con piedras y petardos, y se parapetó en la quema de neumáticos. Los mantuvo a raya. Sí, todo eso se hizo y nada se justifica, pero ni el gobernador, ni su secretario de Gobierno, Benítez Treviño, ni los asesores de éstos supieron cómo negociar. Fueron incapaces de ofrecer salidas políticas a una población agredida. Recurrieron al aniquilamiento de algunos de sus habitantes.

Peña mostró para qué sirve la preparación de la Agencia de Seguridad del Estado (ASE). En Atenco fue claro quién manda, cómo lo hace y quiénes obedecen. Encontró en el diálogo de la violencia de Estado la única salida para acallar a ese pueblo de una vez y para siempre.

Las fotografías de los abusos dieron la vuelta al mundo y mostraron la incivildad de este "diálogo" muy peculiar. "En nuestra democracia", advirtió el profesor Nelson Arteaga Botello, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y doctor en

sociología por la Universidad de Alicante, en una entrevista con Seline Hernández días después de la toma del poblado, “no se puede criminalizar a los sujetos sociales en conflicto, lo cual no significa apoyar a todos los conflictos sociales que surjan, sino que no podemos partir del supuesto que los criminales están del otro lado. [...] Se requiere un cambio de mentalidad porque parece que los políticos fueron forzados a someterse a los lineamientos democráticos y son democráticos en términos electorales, pero no para realizar un diseño institucional. Lo anterior se puede demostrar porque todo estalló por el desalojo de ocho floristas, que degeneró en acometida con dimensiones internacionales. Y eso habla de la incapacidad institucional para establecer cauce a un conflicto”.

Los testimonios de viva voz se rescataron en cada periódico de la Ciudad de México. En el número que apareció el 15 de mayo de 2006, *larevista* reprodujo el de Raymundo Sánchez: “Peña Nieto los mandó drogados, sólo así se explica su brutalidad. Se metieron a mi casa. Nos encañonaron y se llevaron a mis hijos a punta de pistola”. Y el de Manuel Salinas: “Lo dejaron muy golpeado, está muy magullado, no puede ni caminar”, cuando describe la situación de su padre, Jorge Salinas Jardón.

En la última semana de enero de 2009, el dictamen final que sobre el caso elaboró José de Jesús Gudiño Pelayo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió que las carencias y las deficiencias con que operan los cuerpos de seguridad, la falta de profesionalismo de los policías, así como la inexistencia de una legislación y de protocolos acerca del uso de la fuerza pública, detonaron las violaciones graves en la comunidad de Atenco en mayo de 2006. Propiciaron que los policías que participaron en los hechos se salieran de control y que, incluso, algunos de ellos abusaran sexualmente de las mujeres aprehendidas.

El documento afirmó que, a raíz de las indagatorias realizadas sobre el caso, en efecto se detectaron indicios y pruebas de que varias de las mujeres detenidas fueron víctimas de algún tipo de abuso sexual. A manera de advertencia, el texto destacó que el cúmulo de carencias y deficiencias detectadas no eran privativas de quienes participaron en

los operativos de Atenco, sino de todas las policías del país, por lo que, incluso, de manera reiterada, advirtió del riesgo y del “estado sensible de vulnerabilidad” en que se coloca a la población cada que se tiene que hacer uso de la fuerza pública.

El dictamen presentó una relación de las personas que participaron en los hechos acontecidos los días 3 y 4 de mayo de 2006, “sin realizar un señalamiento acerca de su responsabilidad en los hechos”. En la lista lo mismo aparecieron el gobernador del Estado de México y el actual procurador general de la República y ex secretario de Seguridad Pública Federal en el momento de los hechos, Eduardo Medina Mora, que funcionarios estatales y federales de menor rango, aunque la corte no está facultada para emitir un pronunciamiento de culpabilidad personal, por corresponder al ámbito de otras autoridades en el orden federal, estatal o municipal.

El texto, producto de las conclusiones de una comisión de ministros, exoneró a Peña, pero anotó que las acciones de fuerza pública en Atenco fueron ejecutadas “de manera excesiva, desproporcionada, ineficiente, improfesional e indolente”, al perseguir a ambulantes y activistas de esa comunidad el 3 y 4 de mayo de 2006. Expuso que hubo impunidad derivada de las acciones policiacas, tanto al ejecutar el operativo como al no castigar a los responsables de los excesos.

La SCJN enlistó a los funcionarios que tendrían responsabilidad en esos hechos e incluyó a quien fuera coordinador nacional del Consejo de Seguridad Pública, actual director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes; al secretario general de Gobierno mexiquense, Humberto Benítez Treviño; al entonces procurador, Abel Villicaña Estrada, y a Eduardo Medina Mora, Ardelio Vargas Fosado, Ramón Pequeño García y Héctor Sánchez Gutiérrez. “Según las funciones que a cada uno competían, en términos de lo explicado en los considerandos precedentes [del documento], habrían configurado las violaciones a derechos humanos apuntadas”, precisa la SCJN en el capítulo duodécimo del proyecto, titulado “Sobre la determinación de quiénes participaron en las violaciones graves encontradas”. “Las violaciones de garantías individuales son graves porque alteraron de manera negativa la forma de vida de la comunidad en que acontecieron, así como sus relaciones con la autoridad.”

Una crónica del semanario *Nuestro Tiempo* muestra cómo se manipuló la verdad: la información se obtuvo del diálogo de los jóvenes técnicos de Televisa, que preparaban escenas con los comisarios ejidales para un programa dominical. Los encargados de entrevistar a Santiago Medina y a Ricardo López manipularon el entorno a fin de lograr imágenes de impacto. Se les ocurrió grabar las entrevistas a través de un agujero en la puerta de la pequeña oficina del comisariado ejidal. Como el espacio era insuficiente, uno de ellos la rompió y le arrancó un trozo. Cuando el semanario regresó a finales de 2008, descubrió el agujero reparado. La puerta fue cambiada. Aquella habitación, en la que Televisa mostró a los líderes como si estuvieran en la clandestinidad, permanecía cerrada con llave.

—Ya está, Miguelón, a ver qué te parece así.

Apararon las luces y la entrevista se realizó en menos de cinco minutos. Las preguntas se centraron en el miedo que quizá sentían los ejidatarios, si podían dormir bien, si su movimiento estaba muerto o si podían salir a la calle con toda normalidad. Estas entrevistas pasaron al aire un domingo 14 de mayo en un programa de análisis y se complementaron con un pequeño recuento de lo sucedido en Atenco. Santiago Medina estuvo a cuadro apenas dos minutos.

La manipulación de la imagen, del fondo y de la forma se permite siempre y cuando no afecte la percepción de la realidad. Televisa lo hizo en busca de un mayor impacto y presentó a los ejidatarios en un ambiente lúgubre, y, como se dijo antes, clandestino. Utilizó la palabra *escondidos*. La verdad fue diferente. Ellos accedieron a la entrevista en la pequeña oficina, donde había al menos otras siete personas y cuyo acceso era libre. Los ejidatarios no estaban en penumbra, mucho menos escondidos, y les preocupaban asuntos más importantes, como la liberación de sus compañeros y la seguridad de sus familiares, según comentaron ellos mismos antes de iniciar la grabación.

Así, Miguelón y sus compañeros presentaron un rostro deformado de San Salvador Atenco.

Como se detallará más adelante, este lugar saltó a la fama en 2001 cuando los gobiernos federal —encabezado por Fox— y estatal —por Montiel— decidieron construir allí un aeropuerto internacional que

anualmente realizaría más de trescientas mil operaciones y tendría capacidad para movilizar hasta ochenta millones de pasajeros. Machetes en mano, los ejidatarios se hicieron escuchar porque querían comprarles sus tierras a precios regalados. Además, serían desplazados. Si acaso, unos cuantos tendrían una fuente de empleo cuando el aeropuerto estuviera terminado. Éste era el megaproyecto Fox-Montiel. El primero, junto con los hijos de Martita, y el segundo, con los propios, los Montiel Yáñez.

Los ejidatarios se organizaron en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Abanderaron otras causas, radicales algunas, o éstas les llegaron a ellos. Concretaron alianzas con otros movimientos campesinos, dentro y fuera de su estado. Pronto el nombre de los macheteros y ese pueblo aguerrido estuvo en boca de todos y de todos los periódicos. Su alianza más visible se dio en la selva de Chiapas, donde el EZLN los acogió como miembros. Para entonces los "guerrilleros" de Marcos eran ya un grupo indígena rebelde sin armas, una guerrilla desarmada; una minoría que buscaba formas para insertarse a la vida política formal.

Las consecuencias naturales de su lucha en esa tierra de nadie, porque para entonces ya estaban expropiadas, los hicieron aguantar las miradas y ellos miraron a los ojos de todos. El "Ya basta" y la pérdida del miedo al gobierno priista de Montiel y al panista "del cambio" de Fox cautivaron a otros. Tuvieron un efecto multiplicador cuando más de cinco mil personas se atrevieron a llegar, portando machetes, a las inmediaciones de Los Pinos. Los frentes Popular Francisco Villa, el Movimiento Popular Revolucionario y los activistas del sobreviviente Consejo General de Huelga (CGH) de la UNAM se hicieron eco de las victorias. Se arrimaron a su sombra e intentaron incrustarse en ese pequeño filón de rebeldía campesina. La historia no terminó allí. Fue excesivo, pero hubo quienes, impresionados cuando el machete resonó, los relacionaron con la organización separatista vasca ETA y con el maoísta peruano Sendero Luminoso.

Silencioso y abandonado, frente al quiosco de San Salvador Atenco se yergue el auditorio municipal, sede del movimiento contra Fox y Montiel, quienes ya tenían todos los planes para distribuir la tierra, las

concesiones y repartir los desarrollos alternos —hoteles de cinco estrellas, residenciales campestres con campo de golf y exclusivos supermercados—. Un mural cuya imagen dio la vuelta al mundo permanece a la intemperie. Aparecen las figuras de Marcos y de Ignacio del Valle, líder de los macheteros, preso en el penal de máxima seguridad Almoloya. También Emiliano Zapata y Ricardo Flores Magón, símbolos mudos de la lucha de aquella gente con su grito de guerra: “Atenco no está a la venta”.

Este pueblo se levanta temprano y, en silencio, se traslada a Texcoco y a las zonas más cercanas del Distrito Federal. Aquí no hay rascacielos ni ejecutivos; nadie habla frenéticamente por celular ni anda a las prisas. En el pequeño ayuntamiento, unos cuantos empleados llevan papeles de un lado a otro. A las diez de la mañana, la sede del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra abre sus puertas. Ubicado a doscientos metros del Palacio Municipal, este edificio, que fue centro de la atención del mundo, luce solitario, pero no abandonado. Todavía concurren algunos, entre ellos Trinidad Ramírez, la esposa de Ignacio del Valle, el líder del movimiento, preso desde el 4 de mayo de 2006 en el penal federal de El Altiplano.

Ella es la cabeza emblemática de lo que queda del grupo. Organiza giras, supervisa la defensa de su familia desintegrada y se ocupa de la sede, con el apoyo de unos cuantos más. Es cierto que no presenta el mismo aspecto de los días posteriores al mayo aquel, pero Atenco es un pueblo temeroso.

“Ése no sería el único ni el último revés contra Peña Nieto”, escribió el periodista Rodolfo Montes en un reportaje para la desaparecida *larevista* de *El Universal*. “Rectores y directores de cuatro universidades le advirtieron que sus instituciones asumirían la defensa jurídica de al menos trece estudiantes que fueron capturados en la revuelta. [...] Fue una represión estúpida, le espetó el rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Manuel Pérez Rocha, al dar a conocer que un estudiante de su escuela había sido detenido. Se trata de Mario Alejandro Escobedo. [...] El de la Universidad Autónoma de Chapingo, Sergio Barrales Domínguez, hizo lo propio y presentó una lista con los nombres de los detenidos que pertenecen a la institución

que dirige." De la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) fueron detenidos Arturo Manuel González Rosas, Rafael Renato Balderas y Mariana Silva Gómez. Del plantel Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) destacó Damián Gustavo Camacho, quien trabajaba en una tesis sobre el movimiento social de esa región.

Nunca en el Estado de México se había sentido la represión en esa magnitud, nunca la impunidad como entonces y nunca como entonces estuvieron las calles tan llenas de ojos vigilantes. Atenco intenta disimular que no pasa nada, pero no lo consigue.

Aún esperan lo peor porque ven factibles las ambiciones de Peña y del Grupo Atlacomulco por la Presidencia de la República y creen que nada los detendrá. Montiel —recuerdan— no poseía la misma certeza, porque había muchas acusaciones en su contra. A Peña lo ven diferente, con mucho tiempo para ocultar, limpiar su imagen a través de la publicidad en las televisoras, y aún no le aparecen rivales, ni en el PAN, luego de la muerte del hombre más cercano al presidente Calderón. Eso justamente está haciendo la campaña televisiva de Peña, quien desde finales de junio de 2008 cambió su imagen triunfante por la de la actriz Angélica Rivera, quien alguna vez encabezó una campaña contra la violencia de género.

En ese junio de 2008, de pronto la actriz apareció posando en un primer plano, y en el fondo, la mayoría de las trescientas obras que el gobernador Peña se comprometió a entregar cuando era aspirante, aunque faltaban otras trescientas, que intentaría entregar en lo que resta de su gobierno.

DE PRINCIPIO A FIN

Antes de que Montiel le declarara la guerra personal a Fox el 18 de julio de 2002, la empresa parecía libre de riesgos. El gobierno del Estado de México sólo debía promover las bondades del decreto federal para desaparecer un poblado, quitarle algunas miles de hectáreas a otros más y construir un aeropuerto internacional en el Valle de Mé-

xico. En septiembre de 2001, el gobernador mexiquense tenía la situación bajo control. Su mayor obstáculo —los diputados panistas— estaba sometido, y a otros dirigentes o funcionarios municipales del PAN los mantenía bajo una especial vigilancia a través de su sofisticado programa de escuchas y espionaje telefónicos. Con certeza de mando se lo hizo saber a la federación.

El gobierno foxista anunció entonces (la mañana del lunes 22 de octubre de ese año) la expropiación de cuatro mil quinientas hectáreas en una amplia zona comprendida entre Texcoco y San Salvador Atenco para construir la terminal aérea. Preparó detalles de la obra, aunque la medida provocó la protesta inmediata. Con los proyectos alternos —el gran negocio de Montiel, quien estaba en camino de formar una empresa de bienes raíces conocida como Cuatro Vientos—, al final Atenco perdería unas cuatro mil quinientas hectáreas.

Emitido en la Presidencia y triunfalmente ventilado por los políticos priistas en el gobierno del estado sobre la avenida Lerdo en Toluca, el decreto sobre la expropiación alertó a los ejidatarios, ya que era injusta, porque además sólo les pagarían siete pesos con veinte centavos por metro cuadrado de terreno. Primero se rieron por el precio ridículo y la corta visión de las autoridades. Luego se descorazonaron y acabaron abatidos porque nadie, ni un funcionario de rango menor, se les acercó para concretar planes de desarrollo, de empleo, de vivienda, ni de reubicación, cuando estaban a punto de arrasar sus tierras y sus casas. Como dicen los atenguenses: “Jodidos como estamos nos querían chingar”.

Y no andaban errados. Tomando en cuenta todos los factores, el sector inmobiliario en la zona, así como los planes oficiales de desarrollo y las proyecciones de venta de terrenos para terceros, el plan daba para pagar lo justo: entre mil doscientos y mil quinientos pesos por metro cuadrado. La reventa de terrenos sería en su momento el mayor negocio para los especuladores (protegidos por funcionarios federales, estatales y algunos municipales) y los empresarios, quienes contaban con información confidencial sobre el uso futuro de la tierra y las millonarias derramas económicas.

Todo el conjunto del aeropuerto contemplaba dieciséis mil hectá-

reas para su construcción, cinco mil en manos de ejidatarios y el resto de propiedad federal. De ellas, sólo el aeropuerto ocuparía tres mil novecientas sesenta y seis. El resto albergaría un área de protección ambiental y mitigación. En zonas aledañas se cambiaría el uso del suelo, lo cual también sería otro negocio mayor.

De haberse concretado, la disposición habría afectado el patrimonio de unas cuatro mil quinientas familias de Atenco, un pueblo de treinta y cinco mil habitantes. Casi todas se habrían visto obligadas a emigrar, pero en la pobreza, con sus siete pesos y veinte centavos por metro cuadrado en la bolsa. Se pusieron en marcha acciones de protesta, resistencia y movilizaciones para exigir la derogación inmediata. Se crisparon los ánimos. Habitantes de Tocuila, Magdalena Panoaya y Acuexcomac se sumaron a la lucha. Las posiciones se recrudecieron. Esos habitantes que sintieron amenazado su patrimonio se armaron de valor. La voracidad de Montiel dio paso a enfrentamientos. Se prolongaron las batallas callejeras durante meses.

El pequeño poblado de San Salvador Atenco, con sus macheteros y sus mujeres al lado, empezó a ser cotidiano en los medios de comunicación. La resonancia se extendió. Las protestas ejidatarias tomaron otra dimensión. La situación empeoró el jueves 11 de julio de 2002, cuando se reportó que un enfrentamiento entre ejidatarios y granaderos había cobrado su primera víctima: José Enrique Espinosa Juárez, padre de cinco hijos. Era vecino de la comunidad de Francisco I. Madero.

La realidad, el gobierno mexiquense desplegó ese día más de mil elementos de la fuerza pública estatal para impedir una protesta contra el gobernador. En el paraje Santa Catarina de Acolman, las fuerzas del orden emboscaron a un centenar de atenquenses ya en camino a Teotihuacán para manifestarse frente a Montiel. Éste terminó sin novedad su gira de trabajo. La celada policial dejó un saldo de treinta campesinos heridos, varios de gravedad, y diecinueve desaparecidos.

La golpiza no fue lo único que cegó la vida de Espinosa. En las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en Ecatepec, así como en las de la Subprocuraduría en Tlalnepantla, lo recluyeron sin atención médica durante dos días. Sus custodios, agentes de la Policía Judicial del Estado, lo mantuvieron varias horas acostado bocabajo.

Encabezadas por el procurador Navarrete, las autoridades mexiquenses pusieron en marcha una campaña de declaraciones rigurosamente incomprensibles y engañosas para explicar aquello que no necesitaba palabras y hacer creer que la golpiza había sido “leve” y que el hombre había muerto por una diabetes mellitus mal tratada, complicada por una insuficiencia respiratoria aguda, con notables alteraciones hidroelectrolíticas, propiciadas por edema cerebral, pancreatitis aguda, esteatosis hepática, daño glomerular y neumonía bilateral.

Ignorado el traumatismo craneoencefálico causado por las técnicas policiales que desencadenaron la muerte de José Enrique, las autoridades hicieron circular supuestas declaraciones de la viuda María del Socorro Merino Buendía, quien luego se encargaría de desmentirlas y aclarar que su marido se había sumado a la lucha atenuense en octubre de 2001 —cuando se emitió el decreto expropiatorio— porque su familia fue condenada desde los escritorios de los gobiernos estatal y federal a perder su única pertenencia: su vivienda. Había prometido defender con sangre el patrimonio de su familia, y lo cumplió.

Manchados con esa sangre, Fox y Montiel serían obligados a cerrar la boca cuando miles de ejidatarios despidieron a aquel luchador enterrándolo en un pequeño y expropiado panteón de la comunidad que doce años atrás lo había recibido con su familia. Pero Navarrete todavía se dio su tiempo para defender lo indefendible —a sus policías con macanas— y dijo que una pedrada había sido la causante de la muerte.

Sumada a golpeados y desaparecidos, la muerte de José Enrique se consideró “el hecho más contundente”, el que más desasosiego sembró en la Presidencia de la República, donde Xóchitl Gálvez, titular de la Oficina de la Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se alzó como una predicadora en el desierto contra los planes de Montiel, del arquitecto Ernesto Velasco León (director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares [ASA] y uno de los más entusiastas impulsores del aeropuerto) y de Pedro Cerisola y Weber (secretario federal de Comunicaciones y Transportes).

Con esa mecha encendida, Atenco terminó por levantarse contra los planes de Fox y Montiel. Obstruyeron vialidades, retuvieron a fun-

cionarios para exigir la liberación de campesinos detenidos y atrajeron los ojos de la comunidad internacional.

En agosto de 2002, el análisis “Más vale tarde que nunca, una relación mínima de las metidas de pata” alertó: las autoridades crearon una corriente de opinión para justificar la represión. Elaborado por Octavio Islas y Fernando Gutiérrez —investigadores del ITESM, campus Estado de México—, el documento representó un modelo de la comedia de horrores federales que tuvo lugar en Atenco. “Renuente a practicar una efectiva comunicación social de Estado, la Dirección General de Comunicación Social de la Presidencia de la República optó por mentir, pretendiendo validar la tesis del complot.”

Levantado el velo del negocio inmobiliario, el abuso y los errores cometidos, los académicos pusieron la vista en el montaje de “un monumental engaño oficial y mediático que pocos creyeron”. Los ejidatarios no estaban en venta, tampoco sus tierras ni sus animales. Los gobiernos podían guardarse sus siete pesos con veinte centavos, aunque luego se filtraron esas informaciones del medio millón de pesos por hectárea de temporal: los siete pesos con veinte centavos, equivalentes a setenta y dos mil pesos, más un bono complementario de cuatrocientos veintiocho mil pesos; o aquello de veinticinco pesos por metro cuadrado por las de riego, y luego otro rumor de cincuenta y tres pesos, más la división de las ganancias entre los afectados de trece ejidos, además de una bolsa de trabajo. Nunca hubo nada concreto. El gobierno quería negociar por separado, agarrarlos uno por uno “en terreno neutral”.

El lunes 22 de julio de 2002, las autoridades mexiquenses ofrecieron una muestra probada de su inclinación por “el diálogo sin cortapisas”: en el Juzgado Quinto de lo Penal se notificó la formal prisión a los ejidatarios José González González, Ignacio Yáñez Sánchez, Gil Morales Pérez, Manuel Núñez Arias, María Isabel Rojas Salas, Mauricio Pájaro Huerta y Pascual Martínez García, mientras en el Palacio Legislativo de San Lázaro el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) lanzaba una campaña para cazar a supuestos infiltrados políticos en el movimiento. Y ofreció medio millón de pesos por cabeza. Nunca encontró a ninguno.

AMBICIÓN

Si Montiel estaba convencido de que los siete pesos con veinte centavos de su “programa bandera” serían suficientes para persuadir a los ejidatarios a emigrar con sus familias, abandonar sus luchas, sus tierras, olvidarse de la historia tlahuica y buscarse otra vida, si había convencido a sus amigos empresarios de invertir, de ganar adeptos entre la clase política panista —además del secretario Cerisola y el amigo de éste, Velasco León— y ellos lo colocarían en el escaparate de la sucesión presidencial de 2006, el golpeteo metálico del machete le reveló su equivocación. Los agravios acumulados eran muchos. La dignidad no estaba en venta.

También por eso fueron inútiles los viajes montielistas al extranjero, acompañado de algunos de sus proyectistas. Luego se descubriría con ironía y estupor que el señor gobernador tenía razones sentimentales e inmobiliarias, pero ambas personales, para abandonar el país y pasearse por algunos centros financieros del mundo. Por eso, desde el principio fue un engaño eso del compromiso de inversiones en infraestructura, en empleo y en negocios adyacentes a la futura terminal aérea. Francia, España y Estados Unidos empezaron a recibir su capital privado.

Tal vez Fox estuvo informado a medias o engañado por Cerisola, sin ninguna investigación de campo sobre la opinión de las familias afectadas por la expropiación, excepto la para entonces devaluada palabra del gobierno mexiquense, que veía las cuentas bancarias repletas de dólares con Peña a la cabeza, porque cuando se puso en marcha el plan él era secretario de Administración del gobierno montielista y cuando se canceló él también dejó la dependencia. Nada era casualidad. En 1999, cuando Arturo era candidato, su recaudador de fondos para la campaña o subcoordinador financiero fue su sobrino Peña. La mancuerna funcionó bien, pero Fox se dio tiempo para reflexionar. Algo lo hizo cambiar y el proyecto aeroportuario entró en franca agonia. El jueves 1 de agosto de 2002, el presidente dejó de creer en todos y canceló el decreto expropiatorio “ante la negativa de los ejidatarios a vender sus tierras”.

Al día siguiente, un contrariado y desorientado Montiel lamentó la decisión y le echó en cara al gobierno federal la pérdida de inversiones —francesas y alemanas—, por dos mil millones de dólares. En su enojo, se fue de la lengua e hizo pública una derrama ya invertida, por la promesa del aeropuerto, cercana a cuatrocientos millones. El tiro le salió por la culata. La respuesta fue inmediata a través de Eduardo Sojo, coordinador de Políticas Públicas de la Presidencia, quien lo desmintió y, con ello, a su secretario de Administración (Peña). “El gobierno federal no tiene conocimiento de inversión alguna en el proyecto”. Y, lapidario, precisó: “No hay ningún inversionista haciendo estudios ni proyectos de prefactibilidad para realizar inversiones, de tal manera que en estos momentos el gobierno federal no ha aceptado a ningún inversionista”.

La cancelación fue una catástrofe para Montiel. Los priistas enmudecieron en el Estado de México y se les quedaron muy grabados el Frente de Pueblos para la Defensa de la Tierra, los machetes y su líder Ignacio del Valle. Con un pequeño grupo de comuneros, Del Valle acabó con el negocio. Los investigadores del Tecnológico citaron un análisis firmado por Gerardo Unzueta en *Expansión*: “Los beneficios económicos que generaría al llamado Grupo Atlacomulco la construcción de la nueva terminal aérea de la Ciudad de México fueron estimados en el orden de cien mil millones de dólares. De acuerdo con estudios técnicos que elaboró el gobierno del Estado de México, el aeropuerto de Texcoco traería una derrama económica inicial por setenta y siete mil millones de pesos, con un efecto multiplicador”. Después reflexionaron: “¿Por qué el 22 de octubre de 2001 el gobierno del cambio no fue capaz de presentar una propuesta justa y generosa, razonada en la elemental necesidad política de compensar ampliamente a los ejidatarios de San Salvador Atenco por la enajenación de su patrimonio?”

Cancelado el proyecto, el germen del odio quedó sembrado. Fox recibió ataques desde todos los frentes políticos y empresariales. Unos y otros exigían mano dura contra el grupo rebelde. Tercos, los “atencos” cobraron fuerza y ganaron fama. Global Exchange Human Rights los documentó paso a paso: “Los Sin Tierra de Brasil mandaban sus defe-

rencias en cartas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia hacía lo mismo, el agricultor francés altermundista Joseph Bové preguntaba quién era Ignacio del Valle, y el Premio Nobel José Saramago, desde las Islas Canarias, se confesaba admirador del movimiento”.

El fracaso del proyecto, la fortaleza del movimiento de un pueblo aferrado a sus costumbres o —¿por qué no?— a la búsqueda de compensaciones justas por la venta de su única pertenencia valiosa, una tierra salitrosa poco aprovechable, golpeó el rostro de políticos desacostumbrados a la oposición social y muy malacostumbrados a salirse con la suya. Puestos en evidencia y con el ánimo afectado, se refugiaron en la teoría de movimientos conspirativos nacidos en el exterior y enquistados en la lucha de los “atencos”.

Montado en la teoría del complot a fin de justificar la incapacidad del gobierno de Montiel para dialogar con los ejidatarios, y luego retomado en el análisis de las “metidas de pata”, Manuel Cadena Morales, secretario general de Gobierno, advirtió que extranjeros y otros grupos alejados de los ejidatarios “han sido identificados en algunas marchas y manifestaciones”. Habló de canadienses, españoles, franceses “y de otro origen muy ajenos a los intereses de nuestra patria”, pero el gobierno estatal no podía intervenir porque ese caso correspondía a la Secretaría de Gobernación.

Pedro Cerisola —quien ante los constantes cuestionamientos de plano optó por afiliarse al PAN—, en una conferencia que dictó en el Foro de Consulta Temático sobre Ciencia e Innovación Tecnológica, expresó: “No nos confundamos, el asunto puede juzgarse a toro pasado como un error, y seguramente no hubo perfecciones. Sin embargo, no es un problema del aeropuerto, es un problema político. Están queriendo ver qué clase de gobierno somos y cómo vamos a resolver problemas”.

En ese encuentro, realizado en Mérida, también desmintió con sus palabras cualquier otro plan para aumentar el precio de las indemnizaciones por el decreto expropiatorio. Se fijaron, dijo, conforme a la ley, pues así lo exigía un estado de derecho, y así fueron valuadas las tierras por la Comisión de Avalúos, conforme a las reglas. Por lo tanto, no se podía pagar “un centavo más”, y recordó que para construir

el aeropuerto de Denver el gobierno estadounidense pagó a dieciocho pesos la hectárea de tierras de riego.

Casi cuatro años después, el miércoles 3 de mayo de 2006, los "atencos" se enfrentaron a las policías estatal, federal y municipal por defender a floristas desalojados de un mercado texcocano. La madrugada del 4 de mayo, la policía estatal recuperó la cabecera de Atenco y encarceló en las siguientes horas a doscientas doce personas. Sin embargo, la fuerza desmedida y las acusaciones de violaciones durante el traslado al penal de Almoloya pusieron al gobierno de Peña en la mira del mundo.

Peña salió al paso y declaró que "yo asumo la responsabilidad total de San Salvador Atenco". Pese a las evidencias capturadas en cintas de video, fotografías o relatos orales, su jefe policiaco, un cuestionado Robledo Madrid, negó que hubieran violado y masacrado a los atenguenses o que, en su caso, estuvieran armados, pero las imágenes lo desmentían. Dos muertos y la memoria documentada de al menos siete violaciones sexuales terminaban por descalificar las palabras del comisionado.

Con el nombramiento del cuestionado Robledo como jefe de la policía estatal a partir del 15 de septiembre de 2005, Peña sorprendió a todo mundo en su toma de posesión y mostró el músculo de su gobierno. Considerado un purista de la extrema derecha, estaba bien documentada la mano represora de ese ex guardia marina egresado de la Escuela Naval en 1964, cuya lealtad ha estado al servicio de intereses personales. Su lenguaje belicoso era conocido, tanto como el procedimiento de responsabilidad administrativa por la aplicación indebida de recursos públicos —evidenciada en irregularidades durante la adquisición de tres aviones y nueve helicópteros cuando era titular de la Policía Federal Preventiva—; la operación implicó quince millones de dólares.

Mayor fue el asombro cuando, el jueves 2 de febrero de 2006, Peña dejó en sus manos, con poderes plenos, la titularidad de una cuestionada Agencia de Seguridad Estatal (ASE), un cuerpo policiaco sin sustento legal, que evocó de inmediato las sombras ominosas de aquel Batallón de Radiopatrullas del Estado de México (Barapem)

con el que el *Profesor* Hank y Jiménez Cantú sostuvieron sus gobiernos respectivos libres de cuestionamientos y reprimieron a líderes y movimientos sociales.

Volcado todo el apoyo a este ex titular de Seguridad Pública de Tabasco —donde tuvo bajo su mando al capo narcotraficante Alcides Ramón Magaña, *El Metro*—, primo del gobernador mafioso Mario Villanueva Madrid y ex responsable de la lucha antiterrorista, Peña le entregó sin restricciones toda la seguridad del estado, a pesar de la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) federal para ocupar cargos públicos hasta por doce años y la condena a cubrir una multa cercana a tres millones de pesos.

Los excesos y el derramamiento de sangre en Atenco tocaron a las oficinas mismas de Peña, Benítez, Abel Villicaña (el procurador) y Robledo, así como a los jueces responsables de los procesos. Sometido el Estado de México como en las peores épocas priistas, las historias contundentes del abuso —a las mujeres, penetración con dedos u objetos, y en alguno con el pene, así como el sometimiento a golpes para que practicaran sexo oral— no se investigaron a fondo. Las acusaciones resonaron en lo más hondo de la oscuridad. Se fueron deshinchando, marcando los resentimientos oficiales hacia una población rebelde. Sobres misteriosos sin remitente llegaron a las redacciones de algunos diarios para entregar un VCD, fechado el 12 de mayo de 2006, con la denuncia del “verdadero rostro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra... Ignacio del Valle Medina”, para justificar el accionar de la policía y poner en marcha una campaña a favor de la defensa del joven gobernador.

Imágenes editadas por manos anónimas mezclaron turbas enardecidas. El o los autores recopilaron grabaciones de las televisoras, hicieron trabajo con imágenes superpuestas, les metieron efectos especiales. Para evitar que se distinguiera un escenario de otro, mezclaron tomas de años anteriores. Listo el “verdadero” rostro, los “atencos” fueron criminalizados. En el video confuso y deformado de la campaña con tintes oficiales, las batallas de esa muchedumbre fueron presentadas como el germen embrionario de un movimiento insurgente para desestabilizar a Peña y, entonces, abrirse en un movimiento armado.

Documentado por organismos internacionales como Amnistía Internacional, el escándalo se contuvo en forma momentánea con la esperanza de pasar al olvido. Con imágenes que subió a Internet de una parte de la realidad de aquella madrugada del 4 de mayo, una voz femenina fuera de cuadro, o en *off*, se encargó en los días siguientes de desmentir aquellas imágenes superpuestas, a Peña, a policías de la ASE, a Robledo Madrid, así como a otros funcionarios, quienes aún tapan el sol con un dedo para afirmar que nada pasó, niegan las violaciones sexuales, las salvajes golpizas, los heridos, los dos muertos, las lágrimas y las violaciones a las garantías individuales, y sólo ven salvajes macheteros.

El video, no la voz, hizo eco de una desgracia. La noche del 3 de mayo la gente esperaba. Sabía que algo pasaría. La repetición durante horas de la golpiza al policía exacerbó odios contenidos. Había guardias en las barricadas levantadas para contener a las fuerzas policiales. Los ojos de cada atenquense estaban en vigilia. Desde Toluca había rumores sobre el envío de un contingente mayor de granaderos, apoyados con elementos élite del cuerpo antimotines entrenados para apagar violentamente movimientos sociales. A los rumores se sumaron informes sobre el apoyo de la Policía Federal Preventiva (PFP).

Afloraron recuerdos de esta última corporación porque el martes 23 de noviembre de 2004 abandonó a su suerte a los agentes Víctor Mireles Barrera, Cristóbal Bonilla Martín y Édgar Moreno Nolasco, retenidos y golpeados en forma salvaje, cerca de dos horas, por habitantes de San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac del Distrito Federal. Los cuerpos de Mireles y de su compañero Bonilla fueron depositados en una hoguera armada en la parte alta del pueblo, donde ambos terminaron de morir.

El jueves 19 de agosto de ese mismo año los agentes de la PFP dieron una nueva muestra de incapacidad para negociar y su escasísima preparación para contener muchedumbres, cuando ejidatarios mexicanos de Xatlalaco intentaron recuperar mil quinientas hectáreas en la Cantinflora y Agua Grande, tierras en disputa con habitantes de Santo Tomás Ajusco, en la delegación Tlalpan de la Ciudad de México. Los ejidatarios salieron ilesos de una refriega de veinte minutos en la zona de La Placa. Los agentes usaron balas de goma en una lucha

cuerpo a cuerpo, pero fueron obligados a pedir refuerzos e internar en el Hospital Militar al teniente René Nájera Mateos.

Los “atencos” seguro conocían las impericias y la brutalidad de la PFP, una mezcla peligrosa porque unas semanas antes —el jueves 20 de abril—, durante un operativo para desalojar instalaciones de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa), los agentes jamás supieron cómo desactivar la violencia y recurrieron a esa misma táctica para enfrentar a trabajadores en huelga. El saldo final del enfrentamiento: dos trabajadores asesinados, ejecutados con disparos de arma de fuego, y cincuenta heridos, dos de ellos de gravedad.

El 3 de mayo de 2006, los “atencos” los hicieron huir de nueva cuenta. En los enfrentamientos por el desalojo y la defensa de los floristas en Texcoco, el mando de los federales reportó cinco lesionados muy delicados, enviados al Hospital Militar. La policía estatal se anotó catorce elementos heridos, y la municipal, once. Los reveses y las imágenes de televisión alimentaron los rencores oficiales contra el movimiento indígena de macheteros. No obstante, lo que más enardeció a los mandos en el gobierno estatal fue que esos macheteros hubieran exhibido la impericia negociadora de Peña.

Los cateos fueron casa por casa. Hubo una suspensión de garantías de facto. La voz femenina inició el relato: “En un lugar de Texcoco donde por tradición vende sus productos la gente de la zona, se pretende construir un centro comercial. El día 3 de mayo ocho floristas fueron brutalmente desalojados —del mercado Belisario Domínguez— por elementos de la policía municipal y estatal. Gente de Atenco se solidarizó. Cerraron una carretera y detuvieron a ocho policías, exigieron que fueran liberados los detenidos. El gobierno no liberó a nadie. En la noche la gente liberó a los policías”.

El recuerdo caótico sobre Francisco Javier, asesinado con el disparo directo al corazón de una pistola calibre .38, y de Ollin Alexis Benhumea Hernández, universitario herido en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un elemento de la policía, ponen a prueba la memoria colectiva contra el silencio y la desmemoria oficial. Alexis falleció en el hospital. Tenía veinte años, estudiaba danza desde los nueve. En la UNAM cursaba dos carreras al mismo tiempo, mate-

máticas y economía, además de ruso. A Arnulfo Pacheco, un atencuense minusválido, que padece una enfermedad cerebral degenerativa, lo bajaron a golpes de su silla de ruedas y lo sacaron a rastras de su casa.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que elementos policiacos de la ASE fueron responsables de las muertes de Francisco Javier y de Ollin Alexis. Casi tres años después, en este 2009 se hilvanan otros hechos: a las detenidas les rompieron la ropa, las obligaron a ponerse de rodillas, las golpearon en la cara y las tocaron en sus partes íntimas. Amnistía Internacional documentó que cuando estas mujeres quisieron denunciar a sus agresores, las instituciones gubernamentales o responsables de la justicia en el Estado de México les dieron la espalda. Veintiséis fueron víctimas de tortura y violencia sexual. Algunas, además, estuvieron recluidas durante dieciocho meses.

El periodista Diego Enrique Osorno escribió: "Ella está parada. Rendida en la plaza principal de San Salvador Atenco. Levanta las manos como pidiendo paz después de tanto correr. El primer policía llega y le propina un toletazo en la cabeza. Se dobla. Aparece otro. Éste para patearle sus piernas. Ella cojea, pero no cae. Vienen cinco más. Todos a golpearla. Todos de la policía del Estado de México. Ella cae por fin, se pega y sangra. Uno de los representantes de la ley la agarra de los pies. Otro de las manos. Así la van arrastrando diez metros por la calle hasta la caja de una camioneta. Ella gime algo extraño. Ellos, su euforia. [...] Se aparece otro efectivo con voz de mando. Ándale, súbete, pinche india, ordena. Y su cuerpo es lanzado hasta caer en un montón inerte de personas que también acaban de ser capturadas. Sus dos pies quedan al aire. A patadas, un policía montado en la camioneta termina de acomodarla. Es la indígena mazahua Magdalena García Durán, quien acaba de ser detenida y está a punto de ser trasladada al penal de Almoloyita. [...] Afuera de la cárcel donde Magdalena permanecerá encerrada, cincuenta de sus compañeras se ofrecerán a ser recluidas para conseguir su liberación. Buscarán hablar con todos los 'licenciados' que van saliendo del penal, pero nada. Se encadenarán a unos barrotes. Gritarán en su lengua indígena y en español, pero sólo el silencio y el frío de la madrugada en el Valle de Toluca las escucha".

Desde las celdas de Almoloyita, las presas también alzaron la voz contra Peña en una carta que le enviaron a fines de junio de 2006: "Sabemos que insiste en su postura de asegurar que no hubo abusos psicológicos, físicos y sexuales los días 3 y 4 de mayo, que no hubo tortura ni violaciones y que no hay denuncias; con esto trata de poner en duda nuestra palabra y la de organizaciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Miguel Agustín Pro Juárez, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Comisión de la Verdad o Amnistía Internacional, incluso dudando de los expedientes del propio penal y la palabra del pueblo que se sustentan en certificados médicos, pruebas psicológicas o el Protocolo de Estambul; revisiones psicológicas que, después de un mes, dejaron secuelas en desgarres e infecciones vaginales, fotografías, videos, testimonios, denuncias ante todas estas instancias. Su palabra, le dijeron, no puede contra la nuestra porque está sustentada en pruebas médicas, psicológicas, físicas o ginecológicas".

Afuera de prisión, enviados del gobierno ponían en marcha una campaña contra los líderes del Frente de Pueblos para limpiar la imagen de Peña y sus funcionarios: "En la comunidad hay mucha gente que rechaza al grupo agresor. No todos somos violentos y aunque quizás hoy estemos sufriendo por la presencia policiaca, es mejor a vivir atemorizado por Ignacio del Valle y su gente".

Cuatro meses después del operativo, Amnistía Internacional encontró evidencias sobre "nuevos indicios de que las autoridades del Estado de México no sólo no han investigado seriamente las acusaciones de las mujeres que afirman haber sido víctimas de abusos sexuales, sino que incluso han ocultado las pruebas de tales abusos". A tres años de distancia, siete mujeres y veintiún hombres permanecen bajo custodia policial, acusados de secuestro de policías, ultraje y ataques a las vías de comunicación; una palabra más simple sería terrorismo y otra delincuencia organizada.

Si pocos lo recuerdan, Gloria Arenas y María Eugenia Gutiérrez lo tienen presente: el 6 de mayo de 2007, Ignacio del Valle fue sentenciado a sesenta y siete años y medio de prisión (junto con Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa). El 21 de agosto de 2008, a

Ignacio se le dictó una nueva sentencia de cuarenta y cinco años —lo cual lo condena a un total de ciento doce años—, así como el pago de una multa de ciento treinta mil quinientos cincuenta y ocho pesos.

En la misma fecha se dictaron sentencias de treinta y un años, diez meses y quince días, más el pago de una multa de cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos, a Juan Carlos Estrada Romero, Román Adán Ordóñez Romero, Julio César Espinoza Ramos, Pedro Reyes Flores, Óscar Hernández Pacheco, Édgar Eduardo Morales Reyes, Narciso Arellano Hernández, Jorge Alberto Ordóñez Romero, Alejandro Pílon Zacate e Inés Rodolfo Cuéllar.

Junio de 2009. Los campos de San Salvador Atenco permanecen en paz. Cada cinco minutos, un avión desciende rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México; los habitantes de este municipio ya están acostumbrados. Hace siete años lograron que Fox y Montiel suspendieran la construcción de la gigantesca terminal aérea, alterna a la capitalina. Cinco años después, un violento enfrentamiento terminó con el encarcelamiento de por vida de los líderes de aquel movimiento opositor. Nada puede hacerse para liberarlos, pero el mensaje ha sido entendido: quienes se opongan a los negocios gubernamentales serán asesinados o encarcelados.

Hoy, a tres años de la represión, el proyecto toma forma, otra vez. Sin obstáculos, operadores del ex gobernador Arturo Montiel y un grupo constructor preparan la resurrección de la nueva terminal aérea. Durante los últimos siete años el gobierno federal adquirió poco a poco parcelas, hasta completar unas nueve mil hectáreas (sobre todo del lado texcocano) que campesinos de Texcoco y Atenco consideran perdidas.

Capítulo X

Las caras ocultas de Hank

AL ECHAR UN VISTAZO por encima del largo muro de piedra que se alza en el rancho Don Catarino, refugio del profesor Carlos Hank González en Santiago Tianguistenco, de donde era originario, vienen a la mente los mitos en torno a este personaje que fue maestro del sutil arte de la manipulación. Antes y después de su muerte, pocas dudas hay de que este hombre es el más conocido y el segundo más importante asociado a la palabra Atlacomulco.

Corruptor con la mirada y de trato suave —rasgo que lo distinguiría toda su vida—, desde septiembre de 1975 y hasta su muerte fue identificado como cabeza de la organización política más longeva e influyente de México, la más negada y la más presente. El Grupo Atlacomulco es el arma invisible para atacarlo y para defenderlo. Su nombre real era Carlos Mario, pero nunca nadie se atrevió a llamarlo así y nunca nadie conoció su apellido verdadero, porque usaba uno prestado.

Una breve estancia como maestro de primaria y secundaria lo ató para siempre al municipio de los gobernadores Enrique Peña, Isidro Fabela, Salvador Sánchez Colín, los dos Alfredo del Mazo y Arturo Montiel. La sola mención del apellido Hank pone en el punto de mira el cacicazgo, el crimen organizado, el tráfico de influencias, el oportunismo, la triangulación de contratos gubernamentales, la sospecha de homicidio, la corrupción, el lavado de dinero, una espectacular fortuna forjada al amparo del poder, el abuso de autoridad, el negocio de animales exóticos o en peligro de extinción y el comercio ilegal de piezas arqueológicas.

Durante cinco décadas y hasta su muerte —ocurrida el sábado 11 de agosto de 2001 a consecuencia de un cáncer de próstata—, en su amurallado e impenetrable rancho de Tianguistenco, Hank amalgamó “apaciblemente” la esperanza y la avidez de la clase gobernante y de los tiempos por venir. Le bastaba una charla para reconstruir su imagen y seducir a interlocutores. Pocos empresarios y pocos políticos —acaso los presidentes Luis Echeverría Álvarez y Miguel de la Madrid, y el gobernador Alfredo del Mazo Vélez— lograron sustraerse a su compleja personalidad e hicieron esfuerzos (inútiles al final, porque ninguno, al menos los dos mandatarios, se atrevió a juzgarlo) para contener un poder emanado del desenfreno en el manejo del dinero público y las influencias gubernamentales.

Para bien o para mal, desde la presidencia municipal de Santiago Tianguistenco su figura llama la atención. Y todavía se muestra de manera opresiva, porque, sin haber sido nunca alcalde de su pueblo natal, desde principios de los años setenta fue declarado hijo pródigo y luego allí mismo, justo a un costado y atrás de la presidencia municipal, sobre un amplio corredor, se levantó su primera gran escultura de cuerpo entero como recordatorio de la extensión de su poder personal.

Pero aunque este hombre, nacido el 28 de agosto de 1927, hubiera sido ciento por ciento mexicano, sin una gota de sangre germana, aunque se hubiera “naturalizado” atacomulquense, o lo hubiera adoptado el cacique del pueblo Maximino Montiel Olmos, su primer ángel guardián y a quien llamó “padre amoroso y líder de pueblos”, y si desde su plaza magisterial en la dirección de la pequeña secundaria local se hubiera propulsado a la Presidencia de la República, jamás habría participado en la profecía de aquella vidente pueblerina. Eso sí, Atlacomulco atestiguó mudo el encumbramiento de ese humilde vendedor de golosinas.

En el colmo de las paradojas, cuando en 1947 estaba por nacer en Atlacomulco su primogénito Carlos, mientras el padre ejercía como maestro, la familia se negó a que su hijo naciera en ese pueblo, por la mala calidad de los servicios médicos y la pobreza sanitaria. Llegado el parto, María Guadalupe Rhon de Hank, conocida eternamente

como la maestra Lupita, fue trasladada e internada en una clínica de Toluca, donde dio a luz.

Ninguno de los Hank se establecería en el norte mexicano. Es imposible explicar por qué la familia no echó raíces en ese lugar que tanto renombre les dio y que forjaría su venturoso destino de gobierno. En silencio, un día Carlos Hank se marchó para nunca volver, ni por su madre. Su lugar de residencia sería la tierra de sus abuelos maternos, el patriarca don Catarino González Benítez y doña Francisca Tenorio González.

Si bien acumuló riqueza y fructíferas amistades a su paso por la Conasupo, la gubernatura, la jefatura del Departamento del Distrito Federal, así como por las secretarías de Turismo y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, tenía desarrollado el sentido de la oportunidad, por lo que los cimientos de su riqueza ya estaban consolidados antes del 1 de enero de 1955 cuando, a sus veintiocho años, tomó posesión como alcalde de Toluca, impuesto por el gobernador Salvador Sánchez Colín.

Avaricia y recursos públicos convirtieron la imagen de este maestro rural en la de un hombre exitoso, calculador y acomodaticio, encantador de serpientes, de cuyas abultadas cuentas bancarias se nutrieron "amigos" y se compraron "lealtades" que destacaron y ocuparon mejores espacios sociales, políticos y económicos. "Bien manejados", esos recursos le dieron el dominio absoluto de una clase política desperdigada. Con magistral sentido práctico, plasmó como muy pocos la necesidad de congruencia entre dinero, poder, unidad y control.

El Profesor representa el arquetipo de las pretensiones, la fantasía y el compromiso de los gobiernos del PRI, al lado de caciques como el potosino Gonzalo Natividad Santos Rivera, conocido por el mote de *Alazán Tostado*, o su amigo Arturo Durazo Moreno, *El Negro*, a quien aceptó como jefe único de la policía cuando gobernaba el Distrito Federal y cuyas tropelías y matanza de presuntos delincuentes sudamericanos pasó por alto durante seis años.

Se negó a escuchar los cuestionamientos sobre el "Partenón" de Durazo, edificado en Acapulco con recursos ilegales, así como sobre su fastuosa mansión del Ajusco, el indebido descuento de cuotas para

la construcción del panteón Mausoleos del Ángel —pensado para los uniformados defechos pero en el que nunca se enterró a un solo agente— o el degradante empleo de policías en labores de albañilería. Tampoco atendió aquello de la exigencia quincenal de centenarios que *El Negro* hacía a cada uno de los dieciséis jefes de área, ni el otorgamiento de grados de coronel a toda su “palomilla”, como Esteban Fernández Mantecón y Vicente Alarcón Heras (luego degradado a mayor), ni los fraudes a la academia o la sustracción de armas de cargo.

Hank omitió y desechó informes sobre la banda criminal encabezada por su jefe de policía —y los amigos de éste, con algunos familiares— en la zona de Tacubaya. En forma dócil, de conveniencia, porque él se enriquecía a su manera con sus negocios capitalinos, dio por verdad aquel señalamiento amenazador del “general” habilitado: “Yo sólo respondo a la autoridad del presidente de la República”, su amigo, don José López Portillo. A él lo defendió como un perro.

Cuando a Durazo lo hicieron “general de División honoris causa”, otro general de verdad, Félix Galván López, no quiso enfrentarse a López Portillo, ni se inconformó con la medida, pero se dio su tiempo para increpar a su nuevo “compañero” de armas y de grado. Palabras más, palabras menos, le dijo que el mandatario se había equivocado con él. Un soberbio Durazo, luciendo su generalato y su poder —con la mira puesta en una posible candidatura presidencial—, respondió:

—No, se equivocó con usted, yo sí soy general.

Hank también toleró los abusos del agente más allegado a su jefe de policía, Francisco Sahagún Baca, director de la extinta División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, un cuerpo transformado con todas las de la ley en una rentable organización criminal del Distrito Federal.

Parte de la enorme maquinaria hankista estaba integrada por amigos, discípulos o ahijados suyos llevados del Estado de México: el director de Reclusorios y Centros de Readaptación fue su confidente Humberto Benítez Treviño —actual secretario general de Gobierno de Peña—. Por esa dependencia pasó también Humberto Lira Mora. Dio cobijo al llamado niño prodigio Abraham Talavera López, a quien hizo delegado en Venustiano Carranza y luego lo ayudó para alcanzar

una diputación federal; o Evangelina Alcántara Lara, su hija adoptiva, a quien le encargó la Dirección de Protección Civil.

Curiosamente, su frase más conocida, la que lo hizo famoso, “Un político pobre es un pobre político”, debió justificar la protección a Durazo. Muy pocos recordaron o muy pocos quisieron ver hacia atrás, regresar a 1974, cuando le faltaba más de un año para concluir su mandato en la gubernatura y creó una tenebrosa corporación policíaca conocida como Batallón de Radiopatrullas del Estado de México (Barapem), un equipo paramilitar de protección personal.

En un abrir y cerrar de ojos, el Barapem dio cabida a criminales, cuyo personaje más notorio fue el asaltabancos y primer comandante Alfredo Ríos Galeana, “enemigo público número uno” del país. Atrapado por la ley divina, se convirtió al cristianismo en Estados Unidos y, por una afortunada casualidad, en 2005 lo alcanzó la ley del hombre en un suburbio de Los Ángeles.

Agrupado en ochenta y cuatro unidades motorizadas, el Barapem —cuya imagen empeoraría como cuerpo antiterrorista en el gobierno de Jorge Jiménez Cantú— se convirtió en una policía política de élite y de asalto paramilitar, banda de la delincuencia organizada que, durante años, puso en jaque a trabajadores, comerciantes y empresarios mexiquenses. En el sexenio de Jiménez Cantú (1975-1981), sus agentes fueron premiados: recibieron escuadras Magnum .357, rifles de asalto MI, modernos equipos antimotines, máscaras antigás y radios transmisores-receptores. Y lo fundamental: Hank y Jiménez Cantú le garantizaron autonomía de acción e inmunidad. A través del terror sistemático, el Barapem se erigió como garante de la seguridad de los dos gobernadores priistas.

Responsables de la guerra sucia en esas dos administraciones y con el aval de la inmunidad, los integrantes del sanguinario Barapem, además de extorsionar a obreros y empleados de gobierno, asaltaron pagadurías, bancos, camionetas de valores y empresas cuyos gerentes o propietarios se negaban a pagar cuotas de protección. Cuando la entidad se les hizo chiquita, ampliaron sus operaciones al Distrito Federal, luego a Morelos y terminaron en Hidalgo.

Con el comandante Ríos Galeana, cuyas órdenes precisas de “lle-

gar, matar y robar" todavía parecen resonar, terminaron de formarse los secuestradores Nicolás Caletri, *El Mochadedos*, Daniel Arizmendi, *El Mochaorejas*, Benito Vivaz Ursúa y Julio Ursúa. Esta columna vertebral del secuestro se diseminó por todo el centro del país. Junto con Leonardo Montiel Ruiz y José Bernabé Cortés Mendoza, *El Marino*, se les responsabilizó de por lo menos un centenar de atracos y un número similar de homicidios. Ciertamente, también liquidaban a sus cómplices heridos, "porque los muertos no saben hablar", y mataban a sus compañeros policías.

El 23 de septiembre de 1981, una semana después de que Del Mazo González juró como gobernador mexiquense, se puso en marcha un proceso para investigar a todos los elementos y funcionarios del Barapem. El 5 de octubre se hizo público el cese de catorce delegados de Tránsito, tres comandantes del batallón, seis comandantes de unidades policiacas y dieciocho funcionarios del área administrativa de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito.

Movido por una renovación moral muy achatada y obligada por el desastre revelado en su toma de posesión, herencia única de López Portillo, el presidente De la Madrid emprendió algunas acciones. El 4 de marzo de 1984, María de Jesús Medel dictó orden de aprehensión contra el prófugo "general" Durazo. El gobierno mexicano pidió ayuda a la Interpol. Lo boletínó en ciento cuarenta y cuatro países, sobre todo en Estados Unidos, Canadá y Brasil. El 29 de junio, la Agencia Federal de Investigación (FBI) lo capturó en Puerto Rico, lo trasladó a Los Ángeles, luego a una prisión en San Diego, a Tijuana y finalmente a la Ciudad de México. López Portillo y Hank, sus dos jefes y protectores, salieron con la frente en alto y las manos limpias. El primero se fue a disfrutar su Colina del Perro en Lomas de Vista Hermosa, en el Distrito Federal, y el segundo sobrevivió varios sexenios hasta terminar como uno de los hombres más acaudalados de México.

Justo en 1955, el alcalde Hank, quien desde la tesorería de Toluca (de 1952 a 1955) despuntó como un excelente hombre de negocios, invitó a su amigo Maximino Montiel Flores a formar parte de una sociedad para el transporte de combustibles. La prosperidad del petróleo los unió. Su primera pipa se las regaló el entonces director general

de Pemex, el ex senador, ex contrabandista de alcohol en la época de la prohibición y ex alcalde juarense, Antonio Jáquez Bermúdez.

Al mismo tiempo, Sánchez Colín ayudó a Hank a gestionar, a través de su amigo y ex jefe, el presidente Miguel Alemán Valdés, un permiso verbal especial, con visos de salvoconducto, para evitar el pago de derechos e impuestos aduanales, así como saltarse los engorrosos trámites hacendarios, en la importación de pipas, y se hizo de una compra —una Autocar de cien mil pesos—, que se sumó a la regalada —una Kenworth de doble salchicha usada, conocida como el “Pequeño Sheriff”—. Ambas entraron rodando sin escalas hasta los tanques de abastecimiento de gasolina del monopolio petrolero mexicano.

Garantizado el permiso hacendario con las “súplicas” presidenciales, librados los obstáculos aduanales, segura la amistad con Jáquez Bermúdez (quien entregaría el combustible en condiciones de crédito a la palabra, a precios preferenciales y antes que a los competidores), así como todas las simpatías del gobernador, además del ala siempre protectora de Isidro Fabela y de sus propias amistades, Javier Vélez Gómez (compadre de Hank), hipotecó gustoso su rancho para conseguir más recursos.

Luego se sumó a la naciente y “visionaria” sociedad el empresario Jaime Dosal. Carlos, Javier y Jaime (en ese momento Maximino decidió retirarse de la empresa, porque las pipas se utilizarían para negocios ilícitos) se hicieron de otros diez carros-tanque. En forma extraña, en esa época un misterioso superintendente de Pemex —hay quienes están convencidos de que recibió órdenes de Jáquez— le vendió a la naciente sociedad una bodega, con todo y refacciones para sus vehículos. La transacción fue de un millón de pesos en efectivo. El negocio fue redondo y tan insólito para pasar inadvertido, porque sólo las refacciones costaban más de ese millón de pesos.

Hasta 1958, cuando Jáquez Bermúdez había dejado Pemex después de doce años y había sido nombrado embajador ante los países árabes, Hank tomó algunas medidas, recurrió a los favores del nuevo director general de Pemex, Pascual Gutiérrez Roldán, nombrado por Adolfo López Mateos, y regularizó contratos para distribuir combustibles en todo el país. De esa manera se limpió su fortuna inicial.

Los pocos cuestionamientos a la naciente fortuna de Hank, ya notable en diciembre de 1958, esa peculiar forma de hacer negocios y su obsesión por salir de la pobreza se acallaron en un régimen controlado por la mano dura del mexiquense López Mateos, cuyas cartas de presentación abrieron el eterno juego priista con el asesinato del luchador social Rubén Jaramillo, con todo y su familia, a través de órdenes salidas del Ejército mexicano, pero ejecutadas puntualmente por agentes de la Policía Judicial del estado de Morelos.

Inmersos en el endurecimiento político y la cerrazón del PRI, los movimientos guerrilleros en México deben en mucho su origen a las revueltas campesinas encabezadas por Jaramillo, entre 1944 y 1946, en los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y México. Famoso por su rebeldía, este líder realizó actividades proselitistas a favor del general Miguel Henríquez Guzmán, adversario de Adolfo Ruiz Cortines en la elección de 1952, año en que la lucha jaramillista se radicalizó.

Entre octubre de 1953 y mayo de 1954, encabezó ataques contra defensas rurales en Metepec y Teteacalpa, pero su acto más trascendente fue la expropiación de terrenos comunales en El Guarín y Michipán, Morelos. La figura de Jaramillo se hizo mitológica y sus leyendas traspasaron los nombres de cada general revolucionario inserto en el partido oficial, porque entró a una lucha muy desigual. Un día, con la intención de realizar nuevas expropiaciones en la región limítrofe de Morelos y Guerrero, el líder rebelde se enfrentó a varias patrullas bien apertrechadas de la XXIV Zona Militar.

En mayo de 1963 fue detenido por agentes de la Policía Judicial de Morelos, quienes un día después lo asesinaron a sangre fría. López Mateos y el Ejército ya no lo querían vivo. Conocida la posición de las fuerzas armadas y del presidente, los judiciales solos no se habrían atrevido a someterlo a ese juicio sumarisimo, encontrarlo culpable y ajusticiarlo, además de ejecutar a su familia.

Ese movimiento puede considerarse el último con raíces revolucionarias de 1910, pues en 1914 Jaramillo se incorporó en Morelos a la guerrilla del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, y llegó a tener bajo su mando a por lo menos a setenta y cinco rebeldes. Las injusticias en ese estado y el anhelado reparto de tierras nutrieron la rebelión jaramillis-

ta. Su movimiento aparece como eslabón entre los rescoldos del zapatismo —el de Emiliano Zapata— y las modernas teorías revolucionarias mexicanas, surgidas en las décadas de 1960 y 1970.

Si la ola represiva impulsada por López Mateos se dejó de lado en forma deliberada, fue sólo porque su sucesor, Gustavo Díaz Ordaz, y el sucesor de éste, Echeverría Álvarez, sustituyeron los recuerdos con una represión aún más cruenta: el asesinato de estudiantes universitarios, la persecución, la detención, la tortura y la invención de delitos a escritores, matemáticos, poetas, filósofos, ingenieros o activistas estudiantiles, a través de la Dirección Federal de Seguridad y de grupos represores o de choque como Los Halcones.

Adolfo López Mateos mostró que México no sería un paraíso con él. Le imprimió sentido a la violencia gubernamental, hizo de la persecución política selectiva una norma de Estado. Aunque parece ya un recuerdo remoto, algunos de sus principales críticos resintieron el exceso y el atropello. Fueron proscritos por el régimen. Se encargó de hostigar y encarcelar al pintor David Alfaro Siqueiros, al periodista Filomeno Mata, al líder magisterial Othón Salazar y al líder izquierdista Arnoldo Martínez Verdugo.

Vanos fueron los esfuerzos de López Mateos. Muy enfermo, lo pudo constatar a finales de la década de 1960. El autoritarismo de su régimen, las imposiciones revolucionarias, la desigualdad social que permeaba el país y las demandas insatisfechas de participación política, entre otros factores, dieron origen al movimiento guerrillero mexicano moderno.

El gobierno lopezmateísta arraigó, como política de Estado, la persecución en contra de los ferrocarrileros, hostigó a los obreros, acalló a trabajadores de Telégrafos y, en su lenguaje belicoso, transgredió la libertad sindical para castigar, más, a los trabajadores de Pemex: les impuso como secretario general del sindicato a un personaje que formaría su propia leyenda negra, para terminar encarcelado en el régimen de Carlos Salinas de Gortari: Joaquín Hernández Galicia, *La Quina*.

El cúmulo de atropellos y críticas no hizo mella en un Hank empeñado en amasar dinero y consolidar su porvenir. La piel se le volve-

ría todavía más gruesa cuando el régimen de López Mateos usó la fuerza para someter a sus compañeros del sindicato de maestros.

Para mantener asegurado el control de los destinos propios, o por la complicidad priista, todos se hicieron de la vista gorda, silentes pasaron por alto mucho tiempo la fortuna del maestro normalista productor de chiclosos, natillas, ate de tejocote, jalea y corazones de chocolate rellenos, las golosinas y conservas infantiles Terry; del poderoso maestro de primaria y amigo verdadero de don José López Portillo.

Como legado insolente del nivel de los gobernantes mexicanos de esa generación y otras posteriores, perviven las expresiones de este hombre cautivador, quien sostenía que el dinero es un recurso para hacer política, aunque, como en su momento advirtieron analistas y periodistas de todo el país, "su conducta desmintió su frase más famosa, porque para él la política fue un recurso para hacer dinero. Política y dinero le permitieron acumular poder. Él mismo, en su desfachatada frase, expresaba los temores que debió haber padecido cuando joven. Si no hubiera tenido tanto dinero, habría sido un pobre político".

El "secreto" más complejo que devela el ingenio del *Profesor* lo retransmitieron Pedro Alisedo y Raúl Monge en noviembre de 1994, en un reportaje para *Proceso*: "A pesar de uno que otro descalabro político e inclusive de tragedias familiares, Hank González sobrepasó las cuatro décadas de presencia en la vida pública nacional gracias, sobre todo, a su enorme capacidad para ejercer el arte de la seducción. [...] Adulador por naturaleza, lo fue con mayor ahínco y sagacidad con quienes más importan para ascender en la escala de la política y del gobierno: con los presidentes de la República".

Las expresiones de Hank sólo compiten con las del potosino Santos Rivera, *El Alazán*, otro de los símbolos arraigados de la corrupción priista, quien, pistola en mano y acompañado por una gavilla de bandoleros, sembró el terror y reprimió a simpatizantes de Juan Andreu Almazán para garantizar la "victoria" del candidato presidencial Manuel Ávila Camacho, presentándose como el primer grupo organizado de "mapaches" electorales en los comicios de 1940. A finales de la dé-

cada de 1920, Adolfo López Mateos, seguidor de José Vasconcelos y estudiante de derecho, fue una de las víctimas de los esbirros del cacique potosino. Después de la golpiza, el estudiante mexiquense terminó refugiado en Guatemala. En décadas posteriores, la muerte de este ex presidente, con sus cinco aneurismas, se atribuyó a aquella golpiza ordenada en 1928 por Santos Rivera y el entonces presidente Plutarco Elías Calles.

El Alazán inmortalizó aquella máxima sombría que aún serpentea en los pasillos de las oficinas gubernamentales: "La moral es un árbol que da moras" y, como resultado directo de sus andanzas tangibles, los priistas evocan en la nostalgia sus tres "ierros" para el rival: encierro, destierro y entierro. Cómo olvidar a este callista identificado más como Gonzalo N. Santos, cuando se dio el lujo de insultar, golpear y azotar contra la pared, en público, al líder del PNR, Basilio Badillo, porque destituyó al secretario de Actas, el senador Zenón Suárez, aliado del gobernador mexiquense Filiberto Gómez Díaz.

DUDAS ETERNAS

Algunos pasajes ilustran y ofrecen todavía pequeñas pistas esclarecedoras de la espesa niebla que rodea la vida de Carlos Hank González, cuya sonrisa se convirtió en su principal arma de lucha y en escudo para ocultar su pasado.

Fue un excéntrico y se le atribuyó a penurias familiares que sufrió desde niño y hasta los veinte años de edad, así como a las interrogantes sobre su origen y la identidad de su padre real. Ni siquiera hay certeza de que haya nacido en Santiago Tianguistenco. Sin un hilo conductor, ni uno suelto con medias verdades, el foco de atención se encuentra pasado el enigma de sus primeros dos años de vida, hasta cuando, por extrañas decisiones familiares, fue relegado a vivir en un barrio de su pueblo con uno de sus tíos (Cardencio González Tenorio), cura jesuita, al que la familia se cuidó de ocultar y mantener en el anonimato.

En el cúmulo de versiones sobre la paternidad de Hank González hay una media verdad: que fue hijastro de Trinidad Mejía Ruiz, zapa-

tero remendón, e hijo de Julia González Tenorio, quien atendía una tienda de golosinas. Pero en lo enredado de esa historia, al mismo tiempo aparecieron los nombres de un inmigrante alemán (Jorge Hank Weber), un segundo y misterioso sacerdote católico (Fermín de Jesús Villaloz) y un desconocido pastor protestante. Todo en torno al nacimiento de Carlos Hank González se mantiene como un enigma.

Los Hank intentaron hacer verosímil la historia de Jorge Hank Weber, por lo mismo, se dijo primero que era militar alemán en retiro, un coronel ex combatiente de la Primera Guerra Mundial, quien llegó a México y perdió la vida en un paraje conocido como Río Hondo, cuando Carlos apenas tenía dos años. Pero no existe certeza ni en el nombre, ni en el accidente, ni en la nacionalidad y menos en lo del grado militar, porque luego en la misma familia se dio otra variante a la versión.

Antes de que *El Profesor* se encargara en la década de 1980 de echar por tierra la versión del alemán, en 1954 su madre doña Julia había puesto su granito de arena para crear más confusiones sobre la paternidad y sobre Hank Weber. Incluso, el 24 de noviembre de 1954 ella desapareció cualquier rastro de su esposo Trinidad Mejía y cambió la nacionalidad del alemán. Ese día, cuando, después de veintisiete años de nacido doña Julia decidió que su hijo Carlos debía tener un acta de nacimiento de Santiago Tianguistenco, declaró que los Hank Weber eran originarios del Distrito Federal e informó que era viuda de Hank Weber, y que el padre de éste, también de nombre Jorge y de apellido Hank, era un fabricante de radios, casado con un ama de casa conocida como Catalina Weber.

Luego surgió otra versión más sobre el origen de Jorge Hank Weber, de quien se dijo que fue traído desde Alemania por el general revolucionario Joaquín Amaro Domínguez, zacatecano obregonista ávido de aprender, que lo nombró su maestro particular de idiomas con el grado de coronel y peleó en algunas campañas. Al término de la Revolución, en algún momento Hank Weber conoció a Julita y se enamoró de ella, que para entonces tenía cerca de cuarenta años de edad, pero que se le recuerda como muy alta, muy blanca y muy atractiva, siempre reservada. Luego vino la versión de su matrimonio entre 1934 y 1935 con Trinidad Mejía. Y por último, los señalamientos, esto sí una

verdad, de que ella vivió hasta su muerte en la cabecera municipal de Atlacomulco, en la casa de Marita Vélez.

En todo caso, el misterioso orgullo alemán se mantuvo con sus disparidades como un elemento para desechar todo tipo de murmuraciones, porque para esas fechas el registro parroquial de Tianguistenco sólo muestra la llegada de cinco sacerdotes mexicanos: el vicario foráneo Jesús Barrios, cuya fecha se marcó el 29 de abril de 1920; el presbítero Jesús Valero Estrada, el 23 de agosto de 1923; el padre Francisco de Paula García, el 2 de septiembre de 1910; el padre Buenaventura Becerril, en 1917; y también en 1910, el cura humanista y liberal michoacano de Pátzcuaro —aunque algunos estudiosos e investigadores señalan que el municipio mexiquense de Villa del Carbón fue su lugar de origen— Fermín de Jesús Villaloz.

Con una estatura de entre 1.85 y 1.90 metros, fornido, de tez blanca, el médico homeópata Villaloz se presentó jovencito en la parroquia de Santiago Tianguistenco y allí permaneció algunos años. Para entonces, Julia González Tenorio frisaba los veinte años de edad. Luego, el sacerdote desapareció inexplicablemente y reapareció dos años más tarde (en octubre de 1919) como vicario de Atlacomulco, pero con el nombre acortado de Fermín Villaloz.

Nadie sabe cuándo ni por qué decidió suprimir su segundo nombre, pero sus características y fisonomía coincidían con el desaparecido cura de Santiago Tianguistenco. Ya relacionado con los atacomulquenses y ganada la confianza de su nueva feligresía, apareció la aclaración respectiva con la firma: padre Fermín de J. Villaloz, quien se alzó como uno de los más influyentes personajes del desarrollo de Atlacomulco hasta 1931. Su personalidad atrapó, pero su pasado permaneció en la bruma.

Viejos atacomulquenses como Juan Montiel Flores —autor de la biografía de Alfredo del Mazo Vélez— todavía lo recuerdan como un gran hombre religioso y humanista. Fue la época, según sus feligreses, en que en ese municipio se practicaron los ritos católicos en su máximo esplendor. Pero el carácter y la formación liberal de Villaloz ofrecen una imagen que invita a la interrogación... En algún momento, hubo sospechas de que fue un distractor aquello de que Carlos Hank

llegó a Atlacomulco a dar clases porque allí se encontraba el político más influyente y afamado de la entidad: su mentor Isidro Fabela. Esa afirmación ha prevalecido, pero es motivo de controversia, porque al parecer Carlos Hank seguía las huellas de su elusivo padre, del que Villaloz podía tener algunas claves, resguardadas y reservadas en el inexpugnable corazón de doña Julia González Tenorio.

Alejado de Tianguistenco antes de que terminara la Revolución, a Villaloz se lo tragó la tierra en 1931 con la gran elocuencia de sus misas en latín, cuando Carlos Hank vivía en Santiago y tenía apenas cuatro años de edad. De acuerdo con viejos habitantes de Atlacomulco que conocieron al cura y aún lo recuerdan, en 1951, al finalizar su sexenio, Alfredo del Mazo Vélez (quien nunca ocultó su animadversión por Hank) hizo esfuerzos por localizar a Villaloz o, al menos, encontrar sus restos y trasladarlos al panteón municipal, pero nunca logró ni una cosa ni la otra.

Villaloz ofició en Zumpango, en parroquias de la Ciudad de México, así como en Santa Cruz Acatlán y San Rafael Atlixco, pero las autoridades de la Iglesia no supieron dar razones de los restos. Cuando más se acercaron los agentes de Del Mazo Vélez, las indagaciones llevaron a una fosa común. Fermín de Jesús Villaloz estaba perdido para siempre. El gran y único amigo verdadero de ese cura, el profesor toluqueño Juan N. Reséndiz García, desapareció de Atlacomulco cuando Hank llegó como maestro de primaria, aunque a ese hombre aún se le pudo ubicar en Puebla a finales de los sesenta. Y allá murió a los ochenta y seis años.

En todo caso, el misterio sobre el origen de Carlos Hank permanece, porque en el mismo mausoleo de la familia en Santiago Tianguistenco no existe en la parte exterior ninguna alusión a Jorge Hank Weber ni al padrastro Trinidad Mejía, con quien Julia contrajo nupcias a mediados de la década de 1930. En la inscripción aparecen seis nombres en dos ramas. La primera, de los abuelos, está integrada por Catarino González, Francisca Tenorio y Julia González de Hank. En la segunda se inscribe el nombre de Carlos Hank González, seguido por los nombres de Cuauhtémoc Hank Rhon (su hijo, muerto el 4 de mayo de 1987) y el de Lupita Hank Myers.

En agosto de 2001, en una de sus columnas publicadas en el periódico *Reforma*, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa reveló que un día *El Profesor*, veinte años antes de su muerte, le confesó que sí habría podido aspirar a la Presidencia de la República, el único puesto que no pudo alcanzar, porque Jorge Hank Weber, aquel inmigrante alemán, sólo le prestó el apellido. ¿Qué intentó confesar? ¿Qué pasado atormentaba a la madre de un maestro normalista que logró casi todo cuanto deseó? ¿Quién entonces fue su padre y cuál fue el papel del cura o del pastor del que hablan los viejos atacomulquenses? En todo caso, se comió sus desasosiegos para dejar todo igual: la incertidumbre sobre la verdad.

“A punto de concluir su gobierno en el Distrito Federal hace casi veinte años, Carlos Hank González me hizo una confidencia que nunca divulgué, porque la supuse parte de una maniobra para alcanzar la única meta que no consiguió en su vida, la de ser presidente de la República. Dijo que por respeto a su madre nunca aclararía que en realidad el impedimento constitucional vigente entonces en el artículo 82 —ser hijo de extranjeros— no lo afectaba, pues Jorge Mario Hank Weber no fue su padre sanguíneo aunque le diera su nombre”, escribió el columnista en la primera de dos partes de su “Plaza Pública” dedicadas a la muerte de aquel personaje.

Hubo una anomalía aún más extraña y sorprendente: Carlos Mario Hank González fue presentado muy extemporáneamente ante el Registro Civil de Santiago Tianguistenco el 24 de noviembre de 1954. Como quedó asentado en el acta 830, ese día se registró, ante el oficial Luis Rodríguez González, al señor Carlos Mario Hank González, veintiséis años después de su nacimiento —cuya fecha reconocida es la del 28 de agosto de 1927 y que tuvo lugar en el mismo Santiago Tianguistenco—. Para entonces, y sin personalidad legal, *El Profesor* llevaba dos años como titular de la tesorería del ayuntamiento de Toluca y se aprestaba a iniciar su campaña por la alcaldía de ese municipio, el cual empezó a gobernar en 1955. En la semántica oficial, es asombroso que antes de 1954 Hank no hubiera “existido” como estudiante de primaria, de secundaria ni normalista. Tampoco “existía” cuando lo designaron tesorero de Toluca.

El día de su registro extemporáneo, su mamá tenía sesenta y dos años de edad, Hank Weber aparecía como originario de la Ciudad de México (no alemán) y los nombres de sus abuelos finados eran Jorge Hank y Catalina Weber. En esa extemporánea acta de nacimiento, Julia González también hizo a un lado a Trinidad Mejía Ruiz, su esposo segundo, el zapatero remendón. Con una rúbrica, ella “envió” otra vez, pues firmó como señora Julia G. viuda de Hank.

En *El sistema político del Estado de México; surgimiento, consolidación y cambio*, que en 2003 editó la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), el investigador Ricardo Arellano Castro aportó su grano de arena al dudoso pasado de Carlos Hank. Señaló que, sobre los orígenes, sí existió la versión del padre religioso, pero lo ubicó como pastor protestante y rescató aquella explicación del inmigrante alemán, quien habría tenido alguna participación en las batallas de la Revolución mexicana. El secreto terminó por guardárselo Hank, pero él mismo abrió la puerta a la especulación.

Para muchos, la muerte del patriarca adúlador suponía la desaparición del imperio, pero siempre se encuentra algo cuando uno mira con muchísima atención. La influencia opresiva permanece, y algunos de sus beneficiarios lo recuerdan ahora con una estatua que se alza ominosa desde el Paseo Tollocan en Toluca con un infame juego de luces apasteladas rojas y verdes, cuya fantasmagórica silueta fue bautizada por los toluqueños, el mismo día de su inauguración, como “El Monumento al Ladrón”.

Una barda de tres a cinco metros de altura, cuyo costo fue de cerca de un millón y medio de dólares, rodea la majestuosa propiedad de la familia, un rancho que ocupa unos veinte mil metros cuadrados, que colinda con un parque industrial —donde también se fabrican autopartes de coches y camiones de carga de la Mercedes-Benz— y da empleo directo e indirecto a unas quinientas personas de los alrededores.

Enclavada en una umbrosa calzada de piedra, la fortaleza se ubica en Santiago Tianguistenco, al oriente de Toluca, territorio de pobreza y evolución empresarial. Éste es el hogar Hank. El rancho, como lo llama la gente del pueblo, tiene dos accesos visibles y frente a él se ubica un parque de las mismas dimensiones, donde puede verse una pista de

go-karts y son notorios los inmensos prados donde pastan borregos y los caporales adiestran caballos de raza.

La tranquilidad rodea la mansión y majestuosa abre sus puertas al público una vez al año, durante la conmemoración luctuosa de este semidiós de los priistas. Los habitantes de este lugar satisfacen su curiosidad sobre el hombre que, a su manera, le dio fama a su pueblo con frases como: "El presupuesto es para hacer política, y lo que sobre, para obra pública".

La mansión guarda tesoros: armaduras de caballeros medievales, de conquistadores españoles, casacas, ornamentos y atavíos rescatados de la Colonia, sables, espadas de acero forjado, dagas, puñales, arcabuces y otras armas de fuego usadas para someter o aterrorizar a indios aborígenes de la Nueva España. Insinuada la lista minuciosa del pequeño museo familiar, de reojo uno nota los detalles cuidados de buen profesor: vajillas antiguas bañadas en oro, tapetes de piel de cebra, de leopardo, de león y de jaguar.

Cuando terminó el gobierno de Sánchez Colín en 1957, Gustavo Baz Prada recibió el pago a favores prestados durante la Revolución: llegó resignado a la gubernatura, pues nunca cumpliría el sueño de habitar la casa presidencial. Con todas sus consecuencias, el naciente inversionista Hank renunció a la alcaldía, dejando en su lugar al primer regidor, el también atacomulquense Ernesto Monroy Cárdenas, hermano del empresario Eduardo Monroy, propietario del Grupo La Moderna. Fue nombrado director de Gobernación estatal, dependiente del secretario general de Gobierno, Jorge Jiménez Cantú, y como oficial mayor llegó Alejandro Caballero. Este trío sería inseparable. En una década, Hank pasó de coordinador de Escuelas Primarias y Secundarias en 1952, dependiente de la Dirección de Educación Pública que encabezaba el atacomulquense Domingo Monroy Medrano, a tesorero, alcalde y transportista.

A través de Isidro Fabela, la suerte le sonrió en el segundo año de Baz Prada, cuando el 3 de noviembre de 1957 el presidente Adolfo Ruiz Cortines eligió como su sucesor a su secretario del Trabajo, Ló-

pez Mateos. El senador Alfredo del Mazo Vélez fue nombrado coordinador general de la campaña presidencial —luego brincaría a la Secretaría de Recursos Hidráulicos— y el ex alcalde toluqueño fue revestido como candidato a diputado federal para el trienio 1958-1961. En la Cámara Baja entabló relaciones fructíferas y duraderas con otros personajes: Enrique Olivares Santana, Alfonso Corona del Rosal, Juventino Castro, Leopoldo Sánchez Celis, el tamaulipeco Emilio Martínez Manatou y Alfonso Martínez Domínguez.

Como legislador federal, su partido lo designó delegado en el sureste de México. Supervisó para el PRI los estados de Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Desde entonces quedó prendado de esos paraísos turísticos. También establecería relaciones con los caciques de esas comarcas, entre ellas la tabasqueña, donde se hizo camarada de Carlos Madrazo Becerra, el gobernador, a quien conoció en la década de los cuarenta.

Con derecho a picaporte, a través de Fabela, en el despacho presidencial, Hank prosperó todavía más. Trianguló, a través del diplomático, amistad plena con Mariano López Mateos, hermano del presidente y director general de los Almacenes Nacionales de Depósito. En cuanto a la flotilla, se le garantizó la importación de pipas ensambladas en Estados Unidos, sobre todo Kenworth, y con la intermediación de Mariano mantuvo acuerdos preferenciales con Pemex.

Se cuestionó ese trato, pero su compañía Transportes Unidos S. A., tenía control de las rutas de distribución de Juárez, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Salamanca, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Yucatán. La boyante sociedad contaba con setenta unidades, cada una valuada en medio millón de pesos. Además, se hizo concesionario de la Volkswagen en Chihuahua, así como de la Kenworth en Cuauhtémoc 50, en Toluca, bajo el nombre de Motors Truck. Éstos fueron los últimos ecos de su pobreza. Los días y los años pasaron hasta que en las callejuelas oscuras de Tianguistenco empezó a levantarse su mansión imperial, rodeada de un muro de mármol, cantera y roca tallada.

Capítulo XI

Lazos de familia

EL PEQUEÑO CENTRO y la plaza que se ubican entre sus dos avenidas principales dan testimonio de dos sociedades contrastantes: una que está entusiasmada por la posibilidad de que uno de sus habitantes se lance a la candidatura presidencial, y otra que vive atada a la imperiosa y constante necesidad de allegarse recursos. El paisaje rural se desmoronó y se perdió. En Atlacomulco conviven, sin mezclarse, las viejas familias "aristocráticas", las cuales controlan la vida política, comercial y económica de la ciudad, con sus cada vez menos numerosos núcleos de campesinos y los cada vez más numerosos obreros y empleados que reciben salarios de miseria.

Atlacomulco, que durante la Colonia y el porfiriato fue un lugar de tránsito hacia las ricas vetas mineras de El Oro y Tlalpujahua, es hoy zona de paso hacia la moderna autopista a Morelia, la capital de Michoacán, y Guadalajara, la de Jalisco.

Sin gestas para contar, sin importancia cultural ni política, durante la primera mitad del siglo XX Atlacomulco fue un pueblo pequeño, de unas cuantas calles, los viejos dicen "dos y terregosas", iluminadas apenas, de donde emergen cada año las fiestas septembrinas para agradecer los favores y pedir por las bendiciones del Señor del Huerto.

Hacia finales de la década de 1920, ocurrió un hecho que rompió la tranquilidad del pueblo. Arturo Peña Arcos (*El Chino*), su cuñado Pedro del Mazo Vélez (*El Pedrín*) y Manuel Pérez Montiel, jóvenes y pendencieros, en una noche de parranda y alcohol, y acompañados por Enrique González Mercado, "enjuiciaron" al personaje más prominente del pueblo: el milagroso Señor del Huerto; lo encontraron cul-

pable, desenfundaron y le dispararon hasta agotar las municiones. La imagen sacra resultó ilesa. Los cuatro intentaron “rematar” al santo patrono con el tiro de gracia, acabar para siempre con el protector de Atlacomulco. Eso nadie lo perdonó.

Aquella misma noche, una crispada muchedumbre armada con garrotes y piedras quería lincharlos. Enardecidos, hombres y mujeres pedían allí mismo su ejecución. Ya en la madrugada, cuando las piedras volaban, los salvó la intervención del alcalde y del síndico, hermano de uno de estos “asesinos” de santos.

Otro de los patriarcas, Maximino Montiel Olmos, también intervino y acudió al entonces gobernador, su amigo y aliado, el coronel Carlos Riva Palacio. Éste se vio en la necesidad de ir al pueblo en persona para prometer justicia y calmar a la multitud que, literalmente, quería quemar en leña verde a los sacrílegos pistoleros. Al *Chino* Peña le recordaron viejos pecados, como aquél cuando su abuelo y su padre se adueñaron a la mala del rancho La Laguna.

Aunque el gobernador Riva Palacio jamás cumpliría su promesa de hacer justicia, en esos momentos logró apaciguar a los ofendidos y furibundos católicos. Ganó tiempo para los jóvenes, pero a pesar de eso, nada los libró de enfrentar a otra justicia más terrenal, irracional y expedita. Les cobraron la osadía. El pueblo entero se erigió otra vez en jurado popular. A tres de los cuatro agresores, por separado y a su tiempo, los siguieron, los cazaron y los acribillaron en nombre del “ejecutado” Señor del Huerto.

A *El Pedrín* lo ejecutaron en 1935, un mes antes de su boda con Julia Montiel Saldívar. Lo “venadearon” en una visita a Temascalcingo.

En una tarde de 1944, emboscaron al *Chino* Peña. Ese día, en la mañana, ya todos sabían que habría un muerto más. *El Chino* se había casado con Dolores del Mazo Vélez —hermana del *Pedrín*—, con ella procreó dos hijos: Arturo Peña del Mazo, actual presidente de la Fundación Cultural Isidro Fabela y a Enrique Peña del Mazo, padre de Enrique Peña Nieto.

Doce meses después, Manuel Pérez pagó su penitencia. Una mañana apareció baleado en las calles de Atlacomulco. Los asesinos lo tiraron a las afueras de su casa. Su mamá, María Montiel Rivera —fa-

miliar de Víctor Gregorio Montiel Monroy—, alcanzó a darle los santos óleos y su bendición. Tal como había sucedido con los otros dos, nadie dijo nada ni se atrevió a buscar culpables, el verdugo había sido pagado por el pueblo.

Enrique González Mercado no fue condenado por aquel jurado popular por dos razones: para que sirviera como recordatorio a futuros delincuentes y porque era hermano de un funcionario del ayuntamiento e hijo de Nicolás González Fabela, uno de los caciques de Atlacomulco a finales del siglo XIX. Además, era sobrino del revolucionario carrancista Isidro Fabela, quien lo apadrinó para ocupar cargos públicos además de darle una diputación local en 1943.

Con el tiempo se develaron las verdaderas razones de las ejecuciones: conforme se reportaron, se fue calmando la ola de robos de ganado mayor. Nadie más se atrevió, al menos no en ese momento, a juntar una banda de ladrones de ganado con los alcances de la del *Chino* Peña y del *Pedrin* del Mazo.

Desde 1942, cuando Fabela llegó a la gubernatura e integró a su grupo a los notables de Atlacomulco y a todos los hizo partícipes de la nómina estatal, ya nada fue igual. Atlacomulco perdió su aire campirano y de lonjas mercantiles. Desaparecieron sus calles empedradas y su arquitectura modesta fue arrasada. El adormilado pueblo insufló ánimos a la clase gobernante que se instaló a plenitud cuando tomó forma el que sería conocido como Grupo Atlacomulco. Los políticos serían la base de su renombre.

Las pistas que proporcionan los archivos personales representan un recurso excepcional, porque revelan que, apenas iniciado el siglo XX, los personajes prominentes de Atlacomulco decidieron operar en cuatro vertientes: la política, la económica, la eclesiástica y la empresarial, a fin de asegurar un dominio total en su trabajo de control gubernamental. Como una coincidencia, su andar también se divide en cuatro periodos: el primero, cuando buscaron regidurías y otras posiciones en aquel ayuntamiento; el segundo, a partir de 1942 con la llegada de Fabela a la gubernatura; el tercero inició con la llegada de Hank Gon-

zález a la gubernatura en 1969; y en el cuarto, Peña Nieto, como un instrumento de Arturo Montiel, Alfredo del Mazo González y el clero, a través del Opus Dei, para llegar sólidos a la sucesión presidencial de 2012.

Si bien la unidad del grupo se ve amenazada por una guerra interna entre los subgrupos del clan de los Hank —encabezado por el magnate Carlos Hank Rhon—, los damnificados del ex candidato Roberto Madrazo y los de Montiel, acosado por los fantasmas de aquella vidente con sus predicciones sobre la Presidencia de la República, cuando el tronco familiar se estructura de manera cronológica, consultados los archivos municipales, escuchada la tradición oral y los testimonios personales, revisados los reportajes sobre políticos mexiquenses y procesos electorales locales desde principios del siglo XX, la historia se encarga de armar un sólido árbol genealógico de esa sociedad que intenta, apoyada siempre en los medios de comunicación, ser la sucesora del panista Calderón.

Un recorrido breve por los personajes involucrados arroja evidencias de la rama original con Jesús Montiel, que en 1892 y 1894 llegó a la alcaldía de Atlacomulco. A su sombra se arrimaron Vicente Nieto, Nicolás González Fabela, Francisco Vélez Miranda, Fernando del Mazo, Vicente Vélez, Gabino Colín, José Colín, Domingo Flores, Rafael Nieto, Mariano Díaz, Rafael Suárez y Bernabé Martínez. Ellos fueron una raíz trunca al iniciarse el movimiento armado de 1910.

Después de 1915, los hijos de éstos regresaron de manera gradual, regaron la semilla y comenzaron el mito. Movieron sus pocas piezas como en tablero de ajedrez. No dejaron la alcaldía. Perfilaron rasgos familiares y apareció Manuel del Mazo Villasante, padre de Alfredo del Mazo Vélez y abuelo de Alfredo del Mazo González. En 1912, Buenaventura Gómez Laguna mantuvo a Del Mazo Villasante en su puesto, pero éste renunció a los tres meses de tomarlo. A partir de ese momento desapareció del escenario porque murió su protector González Fabela. Huérfano, deambuló sin futuro. Años después, Montiel Olmos lo rescató. En 1918 llegó a la alcaldía. Al mismo tiempo, se autoconcedió un permiso para abrir un negocio de vinos y abarrotes, con un préstamo que nunca liquidó.

Del Mazo Villasante dejó atrás su amarga experiencia, pero su entusiasmo se perdió de golpe. Se retiró, aunque en 1920 todavía le permitirían ostentar el cargo de juez conciliador, y en 1922, el de primer regidor. Falleció al año siguiente, a los cuarenta y siete años. Murió sin saber que su hijo Alfredo del Mazo Vélez se casaría en 1931 con Margarita González Mercado, hija de Nicolás González Fabela. Aquel año de su muerte sorprendió la noticia de que la familia Del Mazo Villasante estaba en la pobreza. Nadie se explicaba dónde había parado el dinero de las haciendas y lo que éstas habrían podido producir. Peor, las tierras heredadas por su familia quedaron en el abandono. Incluso se sabe que su viuda, María de las Mercedes Vélez Díaz, se dedicó un tiempo a la raspa del maguey y la extracción de aguamiel. En una época, la familia fue propietaria del rancho Santa Lucía en Acambay, pero éste se subastó luego del sismo de 1912.

En Atlacomulco adquirieron el rancho San Martín, pero nunca lograron hacer producir las tierras muertas. Fue pérdida total. Luego se les conoció una tienda de abarrotes con venta de vinos y licores, que quebró. Por eso, en la década de los veinte, Alfredo del Mazo Vélez terminó convertido en chofer de un vehículo de servicio público que transportaba pasajeros de la estación conocida como Flor de María al centro de Atlacomulco, y mecánico, según los días de la semana, la temporada y el número de "viajantes", con su hermano Manuel.

También por eso puede establecerse que el primer periodo de los políticos de Atlacomulco, en el que ya actuaron como clan, empezó ese año, se consolidó con la llegada a la alcaldía de Montiel Olmos en 1924, luego en 1927, así como para el bienio 1930-1931, y como primer regidor entre 1940 y 1941, cuando por ministerio de ley se ocupó en varias ocasiones como alcalde suplente e incluso maniobró para que otras veces lo hiciera el regidor segundo: José de Jesús Nieto, pariente por línea materna de Enrique Peña Nieto.

Como la mayoría de los acontecimientos históricos, la caída de un grupo o el surgimiento de otro no fue un hecho casual ni repentino. Atlacomulco cuenta una historia extraña y trágica sobre el Estado de México y sus políticos, por lo menos los del PRI en cualquiera de sus denominaciones. La intención de formar la agrupación

en esa época fue defender el poder en Atlacomulco en el contexto de la Revolución.

Sin ningún personaje sobresaliente —porque Isidro Fabela se olvidó de su pueblo una vez enrolado con Venustiano Carranza—, temían la llegada de otros revolucionarios y qué estos se hicieran del poder. Aunque no lo confesaban, sentían lastimado su amor propio o el orgullo. Empezaron a controlar sistemáticamente el ayuntamiento desde 1915. Los integrantes de la naciente camarilla eran muy religiosos, fervientes católicos, quienes decidieron, al principio, velar por los intereses de “los mal vestidos”. Luego algo les pasó. Poco a poco fecundaron y se propagaron otros tipos de ambiciones de poder.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el impulso definitivo lo daría el presidente Manuel Ávila Camacho, quien disimuló cuando los fabelistas crearon las primeras empresas Constructora Mexicana de Obras Públicas y Morelos, de la mano, la experiencia, la lealtad y la discreción del ingeniero Alfredo Becerril Colín y el secretario general de Gobierno, Alfredo del Mazo Vélez. Con dichas empresas, los fabelistas se hicieron de contratos de obra pública para caminos de terracería y carreteras, sistemas de agua potable y alcantarillado, y escuelas.

En 1999, Juan Montiel Flores retomó el tema de las dos compañías en su libro *Un laurel al mérito*, publicado por el Instituto Mexiquense de Cultura durante el gobierno de Arturo Montiel. Fabela rompería pronto su sociedad de negocios con Del Mazo y Becerril, refinaría algunas de sus técnicas para triangular contratos de operaciones, a través del provechoso tráfico de influencias, y se asociaría con un joven maestro que también en la década de 1940 escogió en una escuela primaria de Atlacomulco su plaza para empezar su carrera magisterial: Carlos Hank González. Esta sociedad sería muy fructífera hasta la muerte de Fabela, ocurrida el 12 de agosto de 1964.

OTRO COMIENZO

El segundo periodo del clan familiar, agrupación política pueblerina o Grupo Atlacomulco, como se le quiera etiquetar, empezó en 1942,

luego del asesinato en marzo de Zárate Albarrán. Ese año marcó un partaguas en el reparto del poder. El día 16 de ese mes ya estaban bien incrustado los Montiel, los Del Mazo, los Huitrón, los Colín, los Monroy, los Nieto, los Pichardo y hasta Adolfo López Mateos, como director del Instituto Científico y Literario (ICLA), aunque éste se formó en el cacicazgo de los Gómez Díaz.

López Mateos, cuyo lugar de nacimiento sigue en el misterio porque todavía hay dudas de que fue Atizapán de Zaragoza, llegó a la Presidencia de la República respaldado por una sólida carrera. Se inició en la política dentro del Grupo Toluca, en el que hizo amistad con el coronel Filiberto Gómez Díaz y con Carlos Riva Palacio. Empezó como secretario privado del primero y se casó con Eva Sámano, hija de Efrén Sámano, tesorero en el gobierno de Gómez Díaz, de quien era amigo, compadre y asociado en algunas empresas mineras de El Oro, junto con el acambayense Néstor Peña.

También estuvo involucrado con la agrupación familiar de Atlacomulco de tal modo que, años después, cuando llegó a Los Pinos impulsado por su predecesor Adolfo Ruiz Cortines, nombró secretario de Recursos Hidráulicos a Del Mazo Vélez; a Galo Oses del Mazo lo llevó como jefe de intendentes del palacio presidencial; a Hank lo hizo diputado federal y luego subgerente de Ventas de la Conasupo; y a otro atacomulquense, Roberto Barrios Castro, lo encumbró a la jefatura del Departamento de Asuntos Agrarios y de Colonización, para hacer mancuerna con Del Mazo Vélez. López Mateos insertó a otros tantos de Atlacomulco en la nómina del Departamento del Distrito Federal (DDF), a cargo de Ernesto P. Uruchurtu. A Rafael Suárez Ocañas lo nombraron jefe de colonias, y como director general del DDF impuso a su amigo Abel Huitrón y Aguado.

En 1942 Maximino Montiel fue investido como principal consejero político y le cedió todo su equipo a Fabela, pero esa sociedad se comenzó a fracturar en 1943, cuando hubo desacuerdos por el desaseo en la investigación y los resultados del juicio del asesino de Zárate Albarrán —Fernando Ortiz Rubio—, cuyo capítulo inicial concluyó en forma vergonzosa con el despido de Fidel Montiel Saldívar (literalmente lanzado de su oficina hasta con amenazas de enjuiciarlo

y encarcelarlo), segundo procurador en la borrascosa administración fabelista. También causó molestia el amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió en 1945 para el homicida.

En esa época, y como ya hemos visto antes, Del Mazo se responsabilizó de manejar el dinero público en la tesorería (luego iría a la Secretaría General de Gobierno). Federico Nieto fue designado presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados; Arturo García Torres, secretario de Gobierno —ambos para mantener bajo control a todos los grupos y subgrupos políticos o los cacicazgos formados en la entidad—; Malaquías Huitrón, oficial mayor; Mario Montiel, inspector de Tesorerías; Alfredo Becerril Colín, asesor técnico de la Junta de Planificación y Zonificación; Darío Díaz Montiel, inspector general de Policía; Isidro Monroy Medrano, jefe del Departamento de Tránsito; Leopoldo Suárez Ocaña, agente del Ministerio Público de Tlalnepantla, y el hermano de éste, Rafael, titular del Ministerio Público del distrito judicial de El Oro. Fabela aceptó a todos aquellos políticos cobijados a la sombra de Maximino.

Si hay dudas sobre el hecho de que los atlacomulquenses formaban un grupo que daba la batalla por conseguir el poder y de que Maximino fue su forjador, sobre ello arrojan luz extractos de una carta que, de puño y letra, Leopoldo Suárez Ocaña (el mismo agente del Ministerio Público fabelista) dirigió a Maximino Montiel Olmos, el 29 de diciembre de 1935: “Pasando a otro asunto, quiero aprovechar ésta para comunicarle que hoy domingo estuvo Abraham en la Cámara de Senadores, junto con Ignacio Gómez y el señor Labra. Me platicó que (¿?) tiene el propósito de poner elementos suyos y extraños a nuestro pueblo en la Tesorería y demás empleos del ayuntamiento; a este respecto yo opino que todos ustedes deben oponerse a toda costa, pues sería injusto que elementos que no han hecho ningún sacrificio por nuestro pueblo, ocuparan esos puestos, con perjuicio de ustedes que han luchado y cooperado para llevar a (¿?) al puesto que ocupa. Ojalá pues, que no permitan que por ningún concepto ocupen esos puestos elementos extraños, ya que por derecho les corresponden a ustedes. Yo por mi parte voy a hablar con Labra [Wenceslao Labra], para que él le hable a (¿?) con el objeto de

que desista de estos propósitos". La carta pertenece al archivo de Jorge Toribio.

Al final, Rafael Suárez Ocaña, hermano de Leopoldo, llegó como secretario del ayuntamiento para el bienio 1936-1938, y Montiel Olmos fue colocado como juez de paz. Los apellidos se repitieron en todos los puestos del cuerpo edilicio: Montiel, Becerril, Martínez Colín y Javier Vélez Mercado como presidente municipal. En la siguiente administración, Rafael fue impuesto como nuevo alcalde de Atlacomulco y se llevó de suplente al benefactor y estimado amigo de los Suárez: Montiel Olmos. Se aferraron a la alcaldía y en 1942 Fabela cargó con el grupo. En mayo de aquel año, pistoleros a sueldo del coronel Saturnino Osornio, el mafioso ex gobernador de Querétaro, y del diputado Juan N. García, cazaron y asesinaron en Tlalnepantla al joven agente del Ministerio Público Leopoldo Suárez Ocaña, cuando estaba por cumplir treinta y tres años. Como se recordará, Juan N. García estuvo involucrado también en el asesinato de Zárate Albarrán.

El poder del culto a Fabela se extendió a los medios o él lo hizo extenderse. Borró los espacios de la crítica y en 1943 compró (o se apropió) el semanario *El Demócrata* para cuidar los intereses grupales a través de su sobrino Gabriel Alfaro. Por sus oficinas —y a veces por sus páginas y la nómina— pasaron los atlatomulquenses Rafael Suárez Ocaña, Santiago Velasco y Mario Colín Sánchez, quien años después, acabaría asesinado frente a su casa de Cuernavaca. Aunque no se le atribuyó ninguna conexión con el homicidio, meses antes trascendió un altercado que Mario tuvo con Alfredo del Mazo González, mientras el primero despachaba como secretario de Educación.

Ocurrió el 16 de septiembre de 1982 —justo cuando cumplió su primer año en la dependencia, y ese día renunció—, pues el gobernador Del Mazo desechó una propuesta para que la hacienda San José de Barbabosa, la propiedad más valiosa de Colín, se convirtiera en el Centro Cultural Mexiquense. Fuera de control, éste abofeteó a su paisano Del Mazo.

Con una mala estrella que le impidió llegar a la gubernatura, porque la empezó a buscar desde que a mediados de la década de 1940 se convirtió en secretario particular de Alfredo del Mazo Vélez, Mario

Colín había dedicado años a diseñar y preparar el Centro Cultural Mexiquense, por lo que en aquel septiembre de 1982 Del Mazo hijo no le pudo dar peor noticia. El patriarca de la cultura mexiquense quedaría fuera del proyecto al que había dedicado su vida.

Nunca se señalaron culpables de su asesinato pero Mario Colín sabía que lo iban a matar: el 5 de marzo de 1983 llegó a despedirse de su hermano Guillermo a la quinta Las Estrellas, ubicada en San Miguel, Zitácuaro, en el estado de Michoacán. Guillermo Colín Sánchez lo registró en algunas páginas del libro *Mario Colín, ensayo bibliográfico*, de José Luis Alanís Boyso, publicado por el ayuntamiento de Atlacomulco en 1984.

La historia del día del crimen la relató brevemente Luis Fermín Cuéllar, médico de Mario y residente de Cuernavaca. El 9 de marzo de 1983 se encontraba a las puertas de su casa, en el barrio del Pilacón, cuando, como casi todos los días, vio acercarse a su amigo Mario, a quien después de cenar le gustaba caminar, eran casi las nueve de la noche. Mario, con voz calma, le alcanzó a decir:

—Fíjate que me dieron un balazo.

Y perdió el conocimiento.

En un automóvil particular lo trasladaron a la Cruz Roja y de allí a la clínica T-I del IMSS, donde fue sometido a una operación que concluyó a la una de la mañana del domingo 10 de marzo de 1983. La bala le había perforado el intestino grueso. Dos semanas duró la agonía. En una de sus mañanas lúcidas alcanzó a decirle a su secretario particular que fue atacado por dos personas, quienes viajaban en una motocicleta. No le robaron nada, su billetera y sus otras pertenencias estaban intactas. Nunca encontraron a los culpables. El 25 de marzo, Mario Colín Sánchez perdió los sueños de llegar a la gubernatura y murió.

En *El Demócrata* las páginas estaban abiertas para los miembros de la familia o los políticos de ideas afines. Para nadie más. Así oficializaban la cultura informativa de aquella época, que perdura hasta hoy. En sus respectivas administraciones, la misma escuela siguieron los gobernadores Salvador Sánchez Colín, quien privilegió la creación de *El Heraldo de Toluca* para luego ahogar a *El Demócrata*, y Carlos Hank González, que apoyó el nacimiento de los *Rumbo*, enfadado porque la

cadena de los “soles” seguía la campaña de su rival priista Enedino Ramón Macedo.

Aunque el parentesco entre los Montiel y los Peña no parece muy claro por los apellidos, en el árbol genealógico que da inicio a este libro queda claro cómo estas familias se encuentran unidas por un sólido entramado de parentescos desde el siglo XIX y la primera década del XX.

Aunque es como ponerle el cascabel al gato, al revisar el padrón de empleados del gobierno del Estado de México, disponible en Internet, puede observarse que las relaciones y los apellidos se mantienen vigentes. Enrique Peña Nieto es primo de Alfredo del Mazo Maza, el mencionado secretario de Turismo desde el 20 de mayo de 2008: el papá de Enrique, quien falleció poco antes de la toma de posesión de su hijo, se llamaba Gilberto Enrique Peña del Mazo, de la misma línea de Alfredo del Mazo Vélez, padre de Alfredo del Mazo González. Este último es padre de Del Mazo Maza. Las dos genealogías consanguíneas los unen a través de las generaciones.

Enrique Peña Nieto negó las acusaciones de nepotismo que le hicieron unos reporteros en las horas que siguieron al nombramiento de Del Mazo Maza como secretario de Turismo, pero, como se ha visto, dos líneas de sangre arrojan claridad al indiscreto tema y llevan a los bisabuelos de ambos: los hermanos Manuel y Pedro del Mazo Villante. Manuel fue padre de Alfredo del Mazo Vélez, el que, casado con Margarita González Mercado, procreó a Alfredo del Mazo González. Pedro contrajo nupcias con María Dolores Vélez Díaz, quienes dieron a luz a Dolores del Mazo Vélez. Ésta, a su vez, se casó con Arturo Peña Arcos, *El Chino*, y de esa unión nacieron los ingenieros Enrique y Arturo Peña del Mazo. Si la mezcla de apellidos fuera combustible y se le arrojara una chispa, el gobierno mexiquense estaría ahora echando fuego por todas sus oficinas y quemaría todo Atlacomulco.

El poder y el dinero público se constituyeron en una herencia. Los Montiel, los Fabela o los Del Mazo sentaron un mal precedente porque los apellidos hoy con Peña son similares o los mismos. Den-

tro de la Secretaría de Educación, en la Dirección General de Servicios Educativos Integrados, aparece el maestro en administración Juan Carlos Monroy Montiel, con el cargo de contralor interno de los SEIEM. Monroy Montiel es primo hermano de Arturo y Juan Pablo Montiel Yáñez, hijos del ex gobernador. Otro que aparece en el registro es René Gabriel Montiel Peña, delegado regional de Desarrollo Agropecuario en Atlacomulco, que a su vez tiene relación en negocios vinculados con el ganado en Acambay, de donde es alcalde Ariel Peña Colín, quienes a su vez son primo y tío del gobernador Peña.

Otro Montiel incrustado es Bernardo Monroy Montiel, director de Comercio Exterior en la Secretaría de Desarrollo Económico. Rigoberto del Mazo Garduño es jefe del Departamento de Vinculación de la Secretaría General de Gobierno en Atlacomulco. Destaca también Francisco Montiel Consuelo, director de Deporte de la UAEM durante tres cuatrienios, antes director de la Facultad de Odontología, como lo había sido su padre Jesús Montiel Navas durante el mandato de Carlos Hank González.

Ana Cecilia Peña Nieto, hermana del gobernador y sobrina de Arturo Montiel Rojas, aparecía como directora de Inversión Extranjera. Otra mujer relacionada con el grupo o la familia es la paisana Melody Huitrón Colín, de los Huitrón Bravo y pariente por línea materna del ex gobernador Salvador Sánchez Colín. Ella fue directora de la Facultad de Derecho y secretaria técnica del Consejo Estatal de Población. Perdió las elecciones a diputada local por el distrito I de Toluca, aunque siempre ha suspirado por la rectoría de la UAEM. El hermano de Melody, Joel Huitrón, fue regidor de Atlacomulco en el pasado trienio y presidente municipal por ministerio de ley en el primer semestre de 2006.

Joel Huitrón Bravo, padre de Melody y de Joel Huitrón, fue presidente municipal de Atlacomulco, diputado local por esta población y director del periódico *Génesis* de 1967 a 1969. Otro es Abel Huitrón Roldán, secretario particular del presidente municipal de Temascalcingo, municipio que colinda con Atlacomulco. En el listado de empleados hay más de la familia Huitrón. Uno de ellos es Adriana Brasilia Sánchez Huitrón, en el Consejo Estatal de la Mujer, como delegada re-

gional de Atlacomulco. Desde hace más de sesenta años, la familia Huitrón ha ocupado cargos en los diferentes niveles de gobierno.

Guadalupe Monter Flores, originaria de Atlacomulco y quien había ocupado toda su vida cargos menores en el Registro Público de la Propiedad del distrito de El Oro, se convirtió en secretaria de Educación Pública en el gobierno de Peña. Ella es sobrina de Maximino Ruiz y Flores, obispo de Chiapas y de Derbe. Y Héctor Velasco Monroy, también atlacomulquense, sobrino de Leopoldo Velasco Mercado y primo hermano de Marcela Velasco González, es uno de los diputados más influyentes en la legislatura local.

Roberto del Mazo García es subdirector de Desarrollo Regional en la Subsecretaría de Desarrollo Regional de Valle de Bravo, y Alfredo del Mazo García, subdirector de Servicios en la Secretaría del Agua y Obra Pública.

EL TÍO ALFREDO

Otro tío ocupa un lugar preponderante: el ex gobernador, ex secretario de Estado, ex diputado federal, y otros ex, Alfredo del Mazo González es presidente del Consejo Mexiquense de Infraestructura (Comin), parte de los organismos que responden en forma directa a la gubernatura de Peña. Asesora en la toma de decisiones. Al margen de la influencia directa de Arturo Montiel, como un segundo poder Del Mazo González busca por su lado allanarle a Peña Nieto el camino a Los Pinos.

Este proyecto se puso en marcha un miércoles justo después del segundo informe de gobierno, en septiembre de 2007, cuando Francisco Labastida Ochoa señaló en Toluca: "Enrique Peña Nieto puede ser un buen candidato a la Presidencia de la República en 2012". El entonces senador priista fue un poco más allá de la mera cortesía política y sacó a flote las cualidades del gobernador mexiquense: sabe conciliar, coordinar, tiene capacidad para escuchar y llegar a acuerdos. "No sólo tiene talento, sino también buenas formas políticas."

Amarrado por los intereses de la familia o su maldición, porque

no ha logrado tener un presidente de la República, Peña mantiene cerca a su tío Del Mazo con cuotas de poder definidas. Si de su parentesco con Montiel conservó la incertidumbre en la opinión pública hasta mediados de 2008, la relación con los Del Mazo es inocultable. La influencia de Alfredo del Mazo González se notó desde el principio. Ejerce una autoridad marcada en las decisiones y su equipo es dueño de algunas de las carteras prioritarias en la administración.

A lo largo de tres años y medio del gobierno de Peña, Del Mazo se ha convertido en pieza clave en la determinación de las políticas públicas, principalmente las relacionadas con la construcción de infraestructura para el desarrollo y la contratación de la obra pública a través del Comin. El enorme poder y la influencia que detenta en el Estado de México el ex gobernador no podría explicarse sin las amistades que hizo durante su estancia en la dirección del Banco Obrero, así como en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal.

Pero existe una pieza clave en el control de los grandes negocios que ejerce Del Mazo González desde su privilegiada posición como titular del Comin: su primo Mayolo del Mazo, quien durante la gubernatura de aquél fue director de Protectora e Industrializadora de Bosques (Protinbos), hoy Probosque. Conocido como el nuevo patriarca de Atlacomulco, Mayolo es propietario de las distribuidoras de tractores John Deere y de la agencia automovilística Minicar, entre otras actividades lucrativas como la hotelería y los emporios turístico-recreativos como Tepetongo y Cantalagua, además de haber sido integrante del patronato de Banrural y formar parte del consejo del ITESM, campus Toluca. Es pariente del empresario del autotransporte Jesús Alcántara Miranda y enlace de Del Mazo con los sectores empresariales e industriales.

La influencia de Del Mazo se hace sentir, además, con la designación del coordinador de Comunicación Social, David López, quien ocupó el mismo cargo durante su gobierno, así como con la de Jaime Almazán Delgado, secretario de Educación y ahora titular de la Comisión de Derechos Humanos. Y, sobre todo, con la figura del actual secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruíz Esparza, subsecretario general de Gobierno en la administración delmacista.

En Comunicaciones, a Ruiz Esparza se le considera el brazo ejecutor del ex gobernador mexiquense y en distintos foros reconoce que el sector que encabeza cuenta con el mayor presupuesto de las últimas tres décadas, cercano a veinte mil millones de pesos —incluidas inversiones estatales, federales y privadas—, el cual contrasta con el asignado por el gobierno estatal a la Secretaría de Agua y Obra pública, de dos mil quinientos cincuenta y cuatro millones.

El Estado de México es una de las entidades mejor comunicadas de la República. En su territorio se ha desarrollado una red de catorce mil doscientos cincuenta y tres kilómetros de caminos federales, estatales y municipales, donde circulan más de dos millones de vehículos diariamente. De igual forma, hay mil cuatrocientos kilómetros de vialidades primarias urbanas que comunican a sus municipios.

Con el objetivo de fortalecer su imagen entre los electores de la zona conurbada de la Ciudad de México, donde hay entre diez y doce millones de personas en edad de votar, en los primeros tres años el gobierno de Peña autorizó inversiones superiores a once mil millones de pesos. Dio luz verde al proyecto de cuatro mil doscientos veinte millones para la primera etapa del Viaducto Elevado Toreo-Tepozotlán y a los mil setecientos millones para el tren suburbano, en coordinación con el Distrito Federal. También autorizó seis autopistas concesionadas de cuota a corto y mediano plazos.

Para atraer electores michoacanos, aprobó el libramiento nororiental, conector de la autopista México-Toluca con la autopista a Atlacomulco y el camino a Maravatío. Esta obra representa una inversión de mil doscientos millones de pesos y la construye SFC Concesiones, del Grupo Inbursa. Otra obra unirá la autopista México-Toluca con la carretera de cuota México-Cuernavaca, a través de la vía Lerma-Santiago Tianguistenco-Tres Marías, con un ramal hacia Tenango del Valle. La concesión fue adjudicada a la constructora La Nacional, en conjunto con Grupo Interacciones, de los Hank. Se construirá en dos etapas: de Lerma a Tenango, dieciséis kilómetros, y otra de Santiago Tianguistenco a Tres Marías, cuarenta y ocho kilómetros. También destaca la autopista Toluca-Zitácuaro, por donde se espera que al final de la segunda etapa circulen siete mil automóviles

diarios. Su costo será de dos mil trescientos millones de pesos y tendrá un ramal hacia Valle de Bravo. La construye Acomex, del Grupo Coconal.

Uno de los proyectos más importantes es la autopista Toluca-Naucaupan, que costará unos tres mil millones de pesos. Otro es la autopista de cuota Remedios-Ecatepec, que se elevará sobre el río de los Remedios, en los límites con el Distrito Federal. ICA, del empresario Bernardo Quintana, ganó la concesión de esta obra de casi veinticinco kilómetros. Costará cinco mil doscientos millones de pesos e incluirá el entubamiento del río y un puente de tres y medio kilómetros.

Ésta es la dimensión del poder que ejerce el tío Alfredo del Mazo en la actual administración estatal y que buscará, a través del Comin, crear un círculo de hegemonía de cara a los comicios presidenciales de 2012. Bien se puede parafrasear al general chihuahuense Rodrigo M. Quevedo: "En el cielo manda Dios, pero en suelo mexiquense los Peña, los Del Mazo y los Montiel".

ENQUISTADOS

Con el paso de los años, y a través de una recapitulación de hechos, el poder en el Estado de México parece más un patrimonio familiar desde 1942. El gobierno funciona como una gran corporación manejada por los mismos apellidos. Pero en esta empresa, a la que de cuando en cuando se cuelean personajes de fuera, los parientes de ex gobernadores también encuentran su sitio en la administración de Peña, como es el caso de Ignacio Pichardo Lechuga, hijo de Ignacio Pichardo Pagaza y antiguo propietario del extinto diario *Liberación*. Hoy es coordinador regional de Valle de Bravo.

Jorge Jiménez Campos, hijo del doctor Jorge Jiménez Cantú, es coordinador general de la Comisión Coordinadora para la Recuperación Ecológica de la Cuenca del Río Lerma, cargo que su padre le heredó al morir. Jiménez Cantú coordinó el programa de campaña de Hank en 1969, fue secretario de Gobierno con Gustavo Baz Prada, y gobernador desde 1975 hasta 1981. Gustavo Barrera Graff llegó al go-

bierno en 1963 con Juan Fernández Albarrán, fue su secretario de Gobierno y en 1981 presidente del Tribunal Superior de Justicia. Mención aparte merecen los Barrera de Laura Barrera Fortoul, secretaria de Turismo con Montiel y actual titular del DIF.

Funcionarios como el secretario de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, llevan más de tres décadas en puestos públicos que heredan y transfieren junto con poderes y dinero. Estos grupos imponen candidatos, proponen, nombran funcionarios y manejan el presupuesto público con la total aprobación del resto de los poderes, el Legislativo y el Judicial. La mayoría de ellos tienen una cosa en común: fueron impulsados por Carlos Hank González o por protegidos del clan. Los intereses compartidos saltan a la vista, pero también tienen relaciones de sangre con el resto de las familias.

En las filas de Hank, Benítez Treviño saltó a puestos públicos. Trabajó en Auris, en la creación de núcleos urbanos y nuevos municipios, como Cuautitlán Izcalli. Fue director de Reclusorios del Distrito Federal en 1976, durante la regencia de Hank; fue asesor de la Contraloría en 1983 y luego director del Registro Patrimonial de la Contraloría federal; en 1988, director general de Administración en la Secretaría de Turismo; procurador de Justicia con Ignacio Pichardo en el estado. Benítez también se vio involucrado en la muerte de Luis Donaldo Colosio, pues se le menciona como uno de los grandes conspiradores en el magnicidio, junto con la cúpula del Grupo Atlacomulco. Benítez fue titular de la PGR y tuvo la encomienda de investigar el asesinato del candidato priista, así como el de Francisco Ruiz Massieu. Reapareció en suelo mexiquense con Montiel y éste se lo impuso a Peña como secretario de Gobierno. Asimismo, estuvo presente en el "atencazo".

El mismo Montiel Rojas tiene su historia. Estuvo en la campaña de Hank en 1969; en el gabinete de Jiménez Cantú en 1975; fue presidente estatal del PRI, con Ignacio Pichardo; hizo campaña para dirigir al PRI estatal en 1991 y a la vez fue diputado federal por Toluca; fue secretario de Desarrollo Económico; subsecretario de Acción Electoral del PRI nacional en 1994; director general de Protección Civil en 1995. Por su parte, Gregorio Montiel Monroy, su padre, tuvo

una pequeña carrera política. Fue alcalde de Atlacomulco por ministerio de ley, en los últimos meses del gobernador Juan Fernández Albarán y el primer año de Carlos Hank; volvió como primer regidor en 1979, apoyado por el secretario particular de Juan Monroy Pérez, entonces titular de la Secretaría General de Gobierno: Arturo Montiel.

Monroy Pérez salió de la Conasupo para apoyar la campaña de Hank para la gubernatura, fue diputado local en 1969 y alcalde de Naucalpan, y secretario general de Gobierno con Jiménez Cantú en 1975. Su hermano Hermilo Monroy fue alcalde de Atlacomulco en dos periodos y diputado federal. Juan hizo negocios en cocinas Quetzal con Montiel; con casas y edificios de lujo; construyó Los Cedros, Las Flores y Plaza Las Américas en Metepec y Toluca; fue presidente estatal del PRI en 1989. Fue socio de los grupos Gigante y Cinemas Ramírez. Construyó un desarrollo ecológico en Villa Guerrero y los residenciales Bosques de San Juan, Plaza San Juan y la Torre Ejecutiva Metepec.

Otros con cargos heredados son los de la familia Jacob. Enrique Jacob Soriano apareció en la campaña de Hank en 1969, y fue nombrado ese año director de Gobernación; fue director de Relaciones Públicas del Distrito Federal en 1976, así como diputado y alcalde de Naucalpan; es padre de Enrique Jacob Rocha, quien apareció en 1987, en el sexenio de Mario Ramón Beteta, como secretario particular del gobernador, y llegó a la Secretaría de Desarrollo Social con Montiel en 1999. Dueña de empresas e inmuebles en Naucalpan y Tlalnepan-tla, la familia tiene influencia en el gobierno, pero aunque el hijo buscó la gubernatura para el 2005, perdió con Peña.

Evangelina Alcántara, oriunda de Atlacomulco, estuvo en la campaña de Hank; fue directora del extinto Instituto de Protección a la Infancia del Estado de México, y de Protección Civil del Distrito Federal en 1976. Es madre de Evangelina Lara Alcántara, quien se desempeñó con Montiel como directora de los penales de la entidad y con Peña inició en la Subsecretaría de Educación Pública; ambas son parientes del empresario y político Jesús Alcántara, zar desde mediados de la década de 1950 del autotransporte de pasajeros en el centro del país. También destaca José Manzur, subsecretario de Gobierno. Su

padre, José Manzur Quiroga, *Pepe*, fue coordinador en el noroeste del estado en la campaña de su compadre Hank en 1969. Éste le otorgó la concesión de grúas para remolcar vehículos por accidente o infracción, lo que lo convirtió en el zar del arrastre.

Ariel Peña Colín, tío de Enrique Peña, se inició como alcalde de Acambay para el trienio 2006-2009. El triunfo se lo había arrebatado el panismo, pero desde la gubernatura se hizo todo lo necesario para que él gobernara el municipio. La composición del paisaje circundante de las redes familiares es exuberante y variado: Laura Barrera, ex secretaria de Turismo y actual titular del DIF, en sustitución de Mónica Pretelini, es hija de Heberto Barrera Velázquez, ex líder estatal del PRI, sobrino del extinto líder obrero Fidel Velázquez Sánchez. Gustavo Vázquez, hijo del ex dirigente del tricolor mexiquense Jaime Vázquez, ocupa la Coordinación de Proyectos Especiales de la Secretaría del Agua y Obra Pública.

La familia dominante del Estado de México, con peso en buena parte del país, no surgió hace diez años ni cincuenta. Tiene un siglo ocupando y heredando diferentes cargos, inmiscuida en traiciones y alianzas, en corruptelas, empeñada en eternizarse en la entidad más rica del país y más influyente políticamente. Los apellidos de algunos funcionarios y empresarios ya aparecían a finales del siglo XIX, en el convulsionado México prerrevolucionario.

Esos apellidos conforman la aristocracia que desde hace seis décadas condimenta los presupuestos y las nóminas del gobierno estatal, las diputaciones, los escaños en el Senado, las regidurías, las presidencias municipales y, de cuando en cuando, alguna oficina de cualquier Secretaría de Estado. Como señala el periodista Rogelio Hernández Rodríguez en trescientas cuarenta páginas de su tesis doctoral *Amistades, compromisos y lealtades: líderes y grupos políticos del Estado de México 1942-1993*, se trata de una élite política que “cimenta la creencia en una dinastía hereditaria”, “convirtió en principio político básico la lealtad” e “hizo de la unidad el principio fundamental de su defensa frente a la élite nacional”.

Capítulo XII

La vida después de Mónica

CON UN ROSTRO CUIDADO para la televisión, obra maestra de la mercadotecnia, la persistente imagen de Enrique Peña Nieto en la pantalla ha empezado a reeditar en las encuestas de opinión, las cuales lo ubican a la cabeza de sus posibles rivales priistas Beatriz Paredes Rangel, Manlio Fabio Beltrones, Enrique Jackson Ramírez, Emilio Gamboa Patrón o Eduardo Bours. Y, aunado a esa reiterada estrategia de promoción en los medios, el gobernador mexiquense se ve como una realidad presidencial desde febrero de 2007, cuando el Foro Económico de Davos, Suiza, lo incluyó en la lista de líderes mundiales juveniles, distinción similar a la del presidente Felipe Calderón.

Los priistas mexiquenses se llenaron de esperanzas luego de esa nominación. Sin embargo, en los primeros días de febrero de aquel año, el gobernador mexiquense negó cualquier augurio futurista para la carrera presidencial de 2012: "No, de ninguna manera; más bien representa una designación muy honrosa, comprometedora. [...] Exigirá trabajar con mayor compromiso y responsabilidad con los mexiquenses". Fue la primera señal firme de que el sexto gobernador atacomulquense iba por buen camino. Fue el día de su legitimación real, avalada por una pequeñísima comunidad internacional. En ese momento tenía cuarenta años de edad.

Convertido en los primeros meses de cada año en la capital de la globalización, el opulento escenario suizo lo ratificó en enero de 2008 como líder mundial juvenil. Se presentó ante veintisiete jefes de Estado, al menos ciento trece ministros, mil trescientos directivos de gran-

des empresas y trescientos cuarenta representantes de la sociedad civil. Todos conocieron en persona al gobernante mexiquense. Esa presentación le dio un valor agregado, cuyo verdadero significado se notará en los siguientes años.

Arropado en su atractivo físico, pelo cuidado y bien peinado, una disimulada risa juvenil y una seguridad reforzada, en ese enero de 2008 el gobierno del Estado de México destinó poco más de seiscientos mil pesos para una comitiva de cinco días, encabezada por los secretarios de Finanzas, Luis Videgaray Caso; Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza; Desarrollo Urbano y Vivienda, Marcela Velasco; Turismo, Laura Barrera, y Desarrollo Económico, Enrique Jacob Rocha, que atestiguaría la entronización definitiva de Peña como el único y real *Golden Boy*.

El periodista José Gil Olmos escribió en septiembre de 2008: "Montado en una campaña mediática de costos multimillonarios, el gobernador del Estado de México ofrece una imagen moderna e im-poluta, colocándose entre los principales aspirantes a la nominación presidencial del PRI. [...] Peña Nieto cuenta con el apoyo de sus padrinos y recurre a las tradicionales componendas y mañas priistas. [...] Además, es impulsado por el Grupo Atacomulco y por personajes como [el ex presidente] Carlos Salinas de Gortari y [la líder magisterial] Elba Esther Gordillo Morales, quien lo considera como uno de sus favoritos para 2012 e incluso trabaja en ese proyecto".

Además de la halagadora realidad, ese enero de 2008 fue de resultados espectaculares porque, después de su presentación ante los hombres más poderosos del mundo, empezó a ser visto como el nuevo y joven jerarca de todos los priistas del Estado de México, líder de la vieja clase hegemónica de Atacomulco. Su porvenir político no puede separarse de Arturo Montiel, por los intereses que los han unido por décadas y que ahora se atribuyen al sector de la construcción, pero, con todos los resortes del poder en mano, Peña contará con el glamour de la clase política mexiquense, aun a costa de su antecesor.

Montiel no tenía una personalidad arrolladora, pero se manejó con indudable astucia y eficacia en asuntos personales y políticos. Puso en marcha un método muy acomodado a sus intereses. Estaba sobra-

do de ambiciones. Desde su llegada a la gubernatura en septiembre de 1999, su agenda pareció concentrarse en tres objetivos fundamentales: consolidar su bienestar material, borrar el avance del PAN y preparar a su sucesor. A éste lo escondió para luego encumbrarlo. Desde que su paisano Isidro Fabela impuso en 1945 a Alfredo del Mazo Vélez, ningún mexiquense había tenido tal poder y ninguno había podido usarlo en toda su expresión, excepto por su descarrilada campaña por la candidatura presidencial.

Mediante una costosa publicidad en televisión y la aparición en algunas revistas del corazón y otras del *jetset*, a Enrique Peña Nieto le construyeron una imagen comercial vendible, lo hicieron *celebrity* y así lo han proyectado para proseguir el camino trunco de Fabela, Del Mazo Vélez, Sánchez Colín, Del Mazo González y Montiel: cumplir con la profecía y darle a su Atlacomulco un presidente de la República.

Al lado de esos apellidos y de sus estilos de gobernar, destaca una herencia familiar aún más directa y que desde principios del siglo XX fue moldeándose y buscando hacerse más cotidiana: la de la familia Peña. Durante su gobierno de 1969 a 1975, Carlos Hank González respaldó a los caciques Peña de Acambay, un municipio colindante con Atlacomulco. Hank impuso y protegió a Roque Peña Arcos, alcalde para el trienio 1970-1973. Apenas en el trienio anterior, 1967-1970, su pariente de sangre Rafael Peña y Peña había dejado la presidencia municipal. El hermano de Roque, Alberto Peña Arcos, había sido alcalde de 1952 a 1954.

Si hoy Enrique se dirige al palacio presidencial, es porque nació en Atlacomulco, sólo su familia materna (Nieto) es originaria de este lugar. De Acambay llegaron los Peña. Insertados en la sociedad atacomulquense, los apellidos se fusionaron: su padre fue Enrique Peña del Mazo, y su abuelo materno, Enrique Nieto Montiel. A Enrique le tocó la fortuna de tener ocultos, sin proponérselo, sus orígenes montielistas llegado el tiempo de su imposición en la gubernatura y de sortear acusaciones por abusos y corrupción contra su antecesor Arturo Montiel.

Sin tanta estridencia, no muy lejos de Atlacomulco, los Peña prosperaban. La historia de "Despeñadero", significado prehispánico de

Acambay, carece de grandes personajes, a no ser por dos: en 1938 el médico Maximiliano Ruiz Castañeda desarrolló una vacuna contra el tifus exantemático, aplicada en la Segunda Guerra Mundial. En 1948 obtuvo el Premio Nacional en Ciencias. Como merecido tributo a sus investigaciones en el sector salud, ocupó un escaño en el Senado de 1958 a 1964, cortesía del presidente López Mateos. El otro personaje fue Ernestina Garfias, que durante los primeros años del siglo XX se convirtió en la soprano más destacada de México y una de las consentidas en el mundo. Se presentó en Nueva York y en París.

En la historia de Acambay se desliza el nombre de Febronio Peña, presidente municipal en 1918 y 1920; sin embargo, siempre vivió más preocupado por consolidar el desarrollo de sus ranchos. También destacan Bernardo Peña Arcos, periodista, fundador y editor de *Tezón* o *Acambay Gráfico*, y cronista municipal; el ferrocarrilero Samuel Peña, ideólogo de la Liga Acambayense; Néstor Peña, empresario minero, socio de generales y coroneles revolucionarios.

El más recordado es el impulsivo Severiano Peña, alcalde por ministerio de ley en 1914, 1916, 1921 y 1923, y en 1925 por elección, pero no llegó a ocupar la alcaldía en este último periodo porque en ese año murió asesinado por rencillas políticas y ejidales. Los Peña dieron otros presidentes municipales: Salvador Peña, en 1929; Alberto Peña Arcos, en 1952; Rafael Peña y Peña, en 1955 y 1967, ambos periodos por voto del pueblo, y Roque Peña Arcos, en 1970.

Entre los españoles llegados a Despeñadero después de la Conquista destacan los apellidos Peña, Arcos, Alcántara, Castañeda y, al último, los Del Mazo. Los Peña terminaron por emparentar con los Montiel durante el siglo XX —son los casos de Rafael y Maximino Montiel Flores, hijos de Maximino Montiel Olmos, quienes se casaron con las primas hermanas Blanca Peña y María Elena Peña, descendientes de Néstor Peña—; los Del Mazo lo hicieron con los González y los Vélez de Atlacomulco, así como con los Peña.

Pese a su fortaleza municipal, hasta hoy nadie se explica la desaparición de los Peña de la vida pública, su reclusión y la salida de algunos para asentarse en Atlacomulco. No resurgieron sino hasta la llegada de Enrique a la gubernatura. Lo mismo pasó con el apellido Nieto,

de participación mínima en la vida atacomulquense. Los viejos recuerdan a Rafael Nieto, integrante de la Junta Patriótica en 1877, 1883 y 1892; Guadalupe Nieto, regidor tercero en 1879 y quinto en 1882, o Vicente Nieto, cuarto regidor en 1886, juez conciliador en 1890, tercer regidor en 1892, integrante de la Junta Patriótica en 1894, tercer regidor en 1895 y en 1896, su regreso a la Junta Patriótica en 1900, 1901 y 1902 o su tercera regiduría en 1896; Francisco Nieto, en la Junta Patriótica de 1902, y Marcelino Nieto, también en la Junta Patriótica de 1920 y 1921.

Hay muy pocas referencias de este último como regidor en 1925 o de su paso por la Junta de Mejoras Materiales en 1930. Hubo otros Nieto, como Enrique Nieto Montiel, abuelo del actual gobernador, segundo regidor en 1942 y primero en 1952, de donde pasó a la alcaldía por ministerio de ley, cuando su cuñado Salvador Sánchez Colín despachaba como gobernador. Sin embargo, su gobierno terminó en forma inesperada, acusado de desvío de fondos.

Con las puertas abiertas desde que aceptó la candidatura en enero de 2005, Enrique Peña Nieto ha sido protagonista de innumerables anécdotas relacionadas con su apariencia física. Candidato todavía, en junio de 2005 lo presentaron como “el político más guapo del momento”. Aunque sólo el tiempo permitirá conocer si lo apuesto le será útil a la hora de negociar la candidatura en 2012, antes de mostrar su preparación política y administrativa para gobernar una entidad de dieciocho millones de habitantes, la revista *Caras* lució las otras cualidades del joven atacomulquense: “Estaba molesto por algún asunto de trabajo, pero así de serio se veía más guapo todavía”. Por su lado, Peña habló sobre su piropo favorito: “Enrique, mi amor, que seas gobernador”.

Tentador fue el encanto e imposible sustraerse a las páginas de sociedad. Le gustara o no, llegó como un *playboy*. Con el “¡Peña, aunque tenga dueña!” y “¡Papacito, te doy mi voto pero dame un hijo!”, el tímido ex diputado local sacó de su álbum familiar recuerdos en fotografías de la niñez: la de su primera comunión a los siete años de edad, al lado de sus padres y el señor cura, así como la de su piñata a los dos

años. Terminó por lucir la del idilio de su boda por la Iglesia con Mónica Pretelini Sáenz en febrero de 1994.

Los misterios en la relación temprana del binomio Montiel-Peña son muchos, pero el encuentro de ambos fue providencial y algunas celebraciones rutinarias y en apariencia irrelevantes se convirtieron en decisiones de trascendencia política y actos de gobierno. En aquel año, Montiel ya estaba transformado en el guía del joven Enrique. Del brazo de su esposa Paula, le sirvió como testigo en la boda civil con Mónica. Años más tarde, la pareja sería elegida para apadrinar el bautizo de uno de los hijos del matrimonio Peña-Pretelini. La amistad y el parentesco quedaron sellados con el lazo del compadrazgo.

La promoción de Peña Nieto fue ilimitada, “hasta en el papel del baño, si era preciso”, diría él. El sábado 12 de febrero de 2005 en Toluca, tomó protesta como candidato con el apoyo de una inflada “marea roja” de doce mil entusiastas acarreados transportados en trescientos autobuses. Repitió la dosis el sábado 16 de abril cuando se fue a meter a Tlalnepantla, la tierra de su rival panista. Hubo semanas en las que en la enriquemanía se contaron más de cincuenta camiones diarios para transportar a los acarreados.

Disfrutando de una renovada sensación de reposo, su equipo, ensamblado por Arturo Montiel, acató las disposiciones de presentarlo como factor cohesionador en un PRI disperso entre las dudas sembradas desde suelo mexiquense sobre su líder nacional, el tabasqueño Roberto Madrazo Pintado, la “debilitada” seducción azul de un panismo golpeado en forma sistemática por la gubernatura y el irreconocible pero persistente avance amarillo perredista de la mano de Andrés Manuel López Obrador.

Había que mostrar éxito en la campaña. No importaba rellenar mítines para que el apoyo fuera completo. Arturo hizo todo lo posible por incrustar en la televisión una gallarda y varonil figura de su sobriño, llena de atributos y cualidades. Lo impulsó y lució en programas de variedades y entretenimiento, pero lo acercó un poco más, hasta quemarlo casi, a la imagen chabacana de Galilea Montijo y la or-

dinaria de Tere, la secretaria. Lo convirtió en un guapo en la extensión de la palabra. Y la televisión atestiguó la efervescencia inusitada que provocó su nuevo personaje.

Cuando se descubrió su inseguridad para improvisar y las crónicas de los diarios exhibieron esa debilidad como una incapacidad, el maquillaje se encargó de vencer la timidez endureciéndole las inexpresivas líneas de expresión; desde luego, también contó con la tranquilidad de los discursos escritos. Eso redituó en una amplia popularidad televisiva. Su equipo estampó su nombre en playeras rojas, calcomanías para automóviles, cuadernos, llaveros, dulces, plumas, sombreros, globos, parabuses, anuncios espectaculares y en casi catorce mil bardas de ciento veinticinco municipios.

Esto último no fue un asunto menor: tan sólo en la precampaña se asignaron recursos para pintar un millón y medio de metros cuadrados en bardas. La misma cantidad de metros serían repintados para la campaña formal, con especial énfasis en treinta y cuatro municipios prioritarios por la presencia de la oposición o por su riqueza material, cuyos votos había que atraer. Entre ellos se encontraban Huixquilucan, La Paz, Lerma, Valle de Chalco, Toluca, Ciudad Nezahualcóyotl, Naucalpan, Ixtapaluca y Metepec. Aquélla fue la escuela de Montiel. Una calca de su precampaña y de su campaña.

Como toda la publicidad impresa —espectaculares, lonas, gorras o encendedores, así como el programa de credencialización—, la pintura de bardas estaba en manos de Arturo Montiel Yáñez, junto con Jorge García Robles y Moisés Vázquez Castillo, quienes delegaron funciones operativas a las empresas Rótulos Niche, con sede en Toluca y propiedad de Víctor y Fernando Mancilla; Supra Visual, Empresa de Propaganda y Publicidad, de los hermanos Rosario y Benjamín Monroy Díaz, también en Toluca; Roberto Ortiz y José Muñoz también recibieron contratos. Y para la campaña de credencialización del 29 de enero al 30 de marzo de 2005 se destinaron recursos por al menos seis millones de pesos, a través de la empresa Telemark, a fin de identificar a un mínimo de dos millones de electores.

“El PRI dentro de sus recursos propios tiene la capacidad para hacer este contrato, que se realizó en noviembre”, dijo a la prensa en fe-

brero de 2005 Jorge Torres, secretario de Organización estatal priista. Y el diario *Reforma* lo recordó el jueves 3 de febrero: “El 28 de enero, empleados de la Secretaría de Educación estatal fueron citados en la Plaza España de Toluca —a un costado del Palacio de Gobierno— para tramitar su credencial en una unidad móvil del PRI, y afiliarse al partido a sugerencia de sus jefes”.

Como si el tiempo se hubiera detenido y nada hubiera cambiado, fue una campaña al estilo del viejo PRI, con todo y la entrega de despensas, materiales de construcción, los sueños cargados de promesas y sus voces de pregonero. Por sus limitados avances, también llevaron la imagen de Peña a los partidos de fútbol. Inofensivo y suave de trato, se dejó querer por esta ola roja priista. Del grupo Rebelde se tomó la música para la página de Internet, aunque él dio como su favorita *Yo no te pido la luna*, de Daniela Romo. Y recordó la última vez que lloró: cuando su padre cayó enfermo. Don Enrique Peña del Mazo quería a su hijo fuera del juego sucesorio gubernamental y algunas veces la externó con sus amistades cercanas. Nunca se sintió cómodo con Enrique hijo en esos círculos ni en esas alturas.

Arturo Montiel siempre se preocupó por cuidar a su sobrino Enrique. Cuando en los noventa a Enrique lo rechazaron como dirigente juvenil en el PRI estatal, Montiel lo hizo su asistente. Con tiento y cuidado, Enrique encajó en el gusto de Arturo. Mostrando un claro sentido de paternidad partidista, Arturo guió esos primeros pasos desoyendo voces que los caricaturizaron o los hicieron blanco del humor ácido, porque “uno aprendió los gestos del otro y al otro le dio por vestir y adoptar los ademanes y las manías del otro”, señaló Miguel Ángel Alvarado, uno de los periodistas locales que más ha escrito desde 1999 sobre el ascenso de Peña.

Hacia 1993, a Peña Nieto se le veía a la sombra de Montiel, compartiendo secretos con él, cuando —quizá incubando un proyecto personal en forma inconsciente—, Arturo influyó para que lo nombraran tesorero del Comité de Financiamiento del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en 1993, durante la campaña de Chuayffet. En ese nuevo gobierno, que empezó el 16 de septiembre de 1993, Montiel llegó por primera vez al gabinete. Lo designaron titular de la Secreta-

ría de Desarrollo Económico, y hasta allá lo acompañó su sobrino como secretario particular. Posteriormente, cuando Montiel se fue con Lira como subsecretario de Acción Electoral, se cuidó de blindar a Enrique y mantenerlo en la nómina del Estado de México. La protección a Peña Nieto no fue casualidad.

LA MEJOR COLABORADORA

En marzo y abril, y todavía en mayo, Mónica Pretelini estaba convencida de la necesidad de promover la campaña de su marido. El cuadro familiar lucía sereno. Expuso sus cálculos sobre las seguidoras a la candidatura de Peña y le puso números redondos de cinco mil promotoras en los ciento veinticinco municipios de la entidad. Con la imagen impecable del candidato guapo, así como la importancia focalizada en la televisión, Mónica quería ayudar a darles a las concentraciones políticas el toque de *showman* y hacer de las arengas políticas de su marido un eterno concierto al estilo de Luis Miguel. El llamado al voto por su marido recibió un caudal de respuestas femeninas.

Pero no resistió tanto. Aglutinadora y promotora del club de admiradoras, Mónica se fue apagando en las giras y antes del final aparecía distante, cansada y melancólica cuando en los acarreos creció el ensordecedor “¡Enrique, mi amor, serás gobernador!” De pronto daba la impresión de que no encontraba la fórmula para cambiar situaciones que la incomodaban como la aparición de las estrellas del elenco de Televisa. Le robaron a Enrique, y algunos asombrados reporteros aún tienen fresco aquel día en que le recordó a su marido que ella no era Paula.

Si hizo alusión a los conflictos de sus compadres Arturo y Paula por el engaño, divorcio y el matrimonio Arturo-Maude, Mónica se la guardó y se la llevó. Si fue alguna otra alusión, igual se la llevó. También quedaron en el aire algunos señalamientos sobre advertencias familiares de no casarse con Enrique. La información se filtró a la prensa y eso fue un descuido extrañísimo en una entidad donde las noticias se maquillan hasta el punto final.

Aunque Mónica fue el alma inicial de la campaña, para algunos resultó inexplicable que la ola roja la fue haciendo huraña; y se presentaron situaciones incómodas con el “¡Enrique, bombón, te quiero en mi colchón!” En algunos mítines escuchó con molestia el “¡Enrique, mangazo, contigo me embarazo!” Nadie dijo una palabra sobre el estado anímico o las depresiones de Mónica mientras se halagaba y encumbraba a Enrique. Su esposo apareció un día con el pelo engominado, con otra personalidad, más estudiada y ampulosa. Lo convirtieron en un vendedor publicitario con el “¡Te lo firmo y te lo cumplo!”

El día de la toma de posesión lucía cambiada. Se alzaron rumores sobre una posible separación y se recordó la solidez económica de los Pretelini Sáenz. Él también era otro, más duro y más confiado en el futuro. Como nuevo producto en el mercado, se allegó de una corte de cronistas. Además de los millonarios contratos publicitarios, el encarcelamiento y persecución de líderes sociales, la represión en San Salvador Atenco, el despido de maestros disidentes y su cercanía incurable a la industria del espectáculo, en la legislatura se aprobó una ley para darle el control de los procesos comiciales a través del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y reposicionar a un maltrecho PRI que, ya con Enrique Peña en la gubernatura, perdió todo. El control del PRI le permitirá negociar con Manlio Fabio y Beatriz Paredes y, si éstos ceden, hacerse de la candidatura presidencial. La meta no es 2009. El peligro es llegar debilitado y sin amarres a 2012.

Mónica se apagó más al protestar como presidenta del DIF. Haber donado su salario para la beneficencia fue un detalle admirado, porque estaban presentes los más de ciento veinte mil pesos mensuales que cobraba su antecesora Maude. Su desencanto fue palpable porque descubrió cómo desde la gubernatura empezaban a desmantelarse la mayoría de los programas de la niñez mexiquense y de los adultos mayores del DIF para transferirlos a la Secretaría de Desarrollo Social, controlada por Ernesto Némer Álvarez, esposo, como se dijo antes, de una prima del gobernador. Sin recursos, ella sería una figura decorativa.

Sintió su puesto como un castigo que la condenaba a representar el papel sumiso de la esposa del gobernador. Aún hay quienes recuer-

dan una reunión celebrada con la mayoría de las presidentas de los ciento veinticinco comités municipales del DIF y las palabras de la señora Pretelini: "No dejen que les quiten recursos, no permitan el dismantelamiento de los programas de apoyo, porque así no se puede ayudar". Fue allí donde también le metieron de nueva cuenta o un poquito más, los nombres de Galilea Montijo y de Maritza Díaz. Fuera verdad o no lo de las supuestas relaciones extramaritales, el caso había estallado.

Peña también tuvo un arranque difícil por la exposición pública y documentada del compadrazgo, el nepotismo y el reparto de cuotas grupales en su gabinete, las demandas judiciales contra su antecesor y su negativa inicial para abrir los contratos de publicidad, pero eso sólo fue el preludeo de una tragedia mayor.

Lo que estaba por ocurrir ni siquiera se igualaba a los chismes sobre la supuesta relación con la Montijo y con la hacedora de imágenes Jessica de la Madrid, ni los fastidiosos rumores de sobremesa de un oculto hijo con una ex empleada de la Secretaría de Finanzas, ni su supuesta cercanía romántica con una mujer de la Procuraduría General de la República, con la productora regiomontana Rebecca Solano, con la actriz Patricia Manterola o con Nora Soto Campa González. Angélica Rivera vendría mucho después.

El jueves 11 de enero los priistas mexiquenses despertaron con sobresalto. Muy temprano en la mañana se involucró a Peña en un fatal accidente aéreo, reportado supuestamente entrada la noche del miércoles, en el helicóptero de la gubernatura, cuando regresaba de una gira de trabajo. Se decía que había perdido la vida. Sumido el estado en la confusión y pegados los priistas a la radio, hacia las diez de la mañana del jueves la versión cambió. Se habló de la muerte fulminante de Mónica y Enrique.

Los rumores fueron incontrolables por la falta de información y porque médicos indiscretos hicieron comentarios sobre un traslado de Mónica, durante las primeras horas de la madrugada del jueves, a la Cruz Roja, cuyas instalaciones se encuentran a tres cuerdas de la Casa de Gobierno y donde no la recibieron porque ya iba muerta. Pero en esa institución nadie conocía el nombre de la rechazada. Y luego al

Centro Médico de Toluca, que en realidad está en Metepec, a donde había llegado muerta, y luego a un hospital del ISSEMyM.

Pasadas las diez y media intentó aclararse la confusión. Se supo a través de portavoces que la presidenta del DIF estatal y primera dama mexiquense estaba grave, internada en el hospital ABC de Santa Fe, en la Ciudad de México, por complicaciones de una crisis epiléptica. Hacia las once había sido trasladada a terapia intensiva. Y a la una de la tarde se confirmó: atendida por un grupo de médicos encabezados por el neurólogo Paul Shkurovich Bialik, Mónica presentaba muerte cerebral. Al filo de las tres y media de la tarde se rompió el silencio para oficializar el fallecimiento.

Atribuida su muerte al brote de la epilepsia tónica generalizada que le ocasionó un derrame cerebral y un paro respiratorio, la noticia cimbró a la clase política estatal. La ola expansiva le dio otros contornos a la tragedia porque a través de esta defunción, con tintes de un negado suicidio, el electorado de todo el país se conmovió de la figura frágil del joven y apesadumbrado político viudo con sus tres hijos huérfanos. Habían estado juntos casi catorce años.

Fue auténtico el sentimiento generalizado de compasión solidaria y se hizo mayor porque, al morir, Mónica todavía era joven. Tenía cuarenta y cuatro años. Nacida el 29 de noviembre de 1962, vivió casi siempre en la zona residencial Lomas de Tecamachalco, en el municipio más panista del Estado de México, Naucalpan. Mónica y Enrique se conocieron en julio de 1993 mientras comían en El Mesón del Caballo Bayo. Hubo un flechazo.

Él empezaba a foguearse trabajando para el exigente gobernador Chuayffet. Ella era presidenta de la Asociación de Colonos de Tecamachalco. Aquel año sellaron su destino de la manera más simple, en una comunión plena de futuro, y ella fue su mejor colaboradora. Finalmente decidieron casarse el 12 de febrero de 1994 en la iglesia de Santa Teresita, en Lomas de Chapultepec. Ella era una mujer atractiva, de barba partida, simpática, de carácter recio, exigente y mandona, de ojos pequeños, muy expresivos, y frente amplia. Era independiente. Él tenía veintiocho años, pero representaba menos. Parecía adolescente y todavía no se engominaba el pelo. Ella tenía autoridad.

Se instalaron en una casita en Toluca, muy cerca de la XXII Zona Militar, del ingeniero Enrique Peña del Mazo. Fueron años de felicidad, tenían todo en común. Más tarde se mudaron al fraccionamiento residencial La Asunción, uno de los más exclusivos de Metepec.

Aunque la televisión hizo una cobertura discreta de las exequias, los centenares de esquelas publicadas en los diarios durante los tres días posteriores reflejaron la impresión por el duelo. Hubo quienes consideraron que muchas de ellas se insertaron para hacerse presentes a los ojos del gobernador con fines políticos, pero otras tantas apelaron a la pena real. Se hicieron familiares las imágenes de Paulina, Alejandro y Nicole, los tres hijos de la pareja, de doce, diez y seis años de edad, respectivamente. La popularidad del gobernador se afianzó en su figura doliente.

La desventura sedujo a un país lleno de esperanzas y necesitado de personajes. En medio de corrupción, matanzas del narcotráfico, secuestros, asaltos y pobreza, en este país la muerte de aquella mujer, al margen de las extrañas circunstancias, levantó una reacción de solidaridad. Como una caja de resonancia, las noticias sobre la decisión familiar de respetar la voluntad de la difunta Mónica de donar sus órganos para salvar o mejorar la calidad de vida de personas en lista de espera fueron un bálsamo para los atribulados mexicanos.

Aun a riesgo de parecer prosaicas, en el mismo dolor brotaron sospechas y dudas por lo inusual de una muerte atribuida a la epilepsia. Eso dio lugar a una ola de otros rumores que desvanecieron la imagen de una pareja perfecta y feliz. Y apenas empezaba a comentarse sobre las honras fúnebres en un mausoleo familiar de Toluca o Atlacomulco, cuando se filtró la revelación de una desacostumbrada ceremonia de cremación de los restos de Mónica.

También se desconocían los orígenes de la excepcional enfermedad, el llamado gran mal, del que nunca nadie habló y que aquejaba a Mónica desde 2005. Proliferaron asombradas versiones sobre su estado físico y emocional. Hubo quienes advirtieron que llevaba una vida normal y que no presentaba signos de la enfermedad mortal. Incluso, se destacó que nunca nadie se enteró de la existencia de medicamentos ni de tratamientos especializados. En una nota enviada a *Milenio* sobre

la muerte de Mónica, la reportera toluqueña Claudia Hidalgo escribió: “Con frecuencia cancelaba a última hora su asistencia a los actos públicos por problemas de salud, pero siempre se le vio con buen semblante”. “Lo que sí se conocía al interior del gabinete estatal es que entre la señora y el gobernador había algunos conflictos que presuntamente se complicaron al ampliarse las relaciones de Peña con algunas estrellas de Televisa”, escribió Elvia Andrade en un amplio análisis para *Reportajes Metropolitanos*.

Según colaboradores de la esposa del gobernador mexiquense, precisó Andrade: “Su finada esposa llevaba una vida normal y no mostraba signos de la enfermedad que, se asegura, le provocó la muerte. Nunca nos enteramos que haya tomado medicamentos o que estuviera en tratamiento neurológico. No seguía ninguna dieta especial. [...] Incluso tenía una intensa vida social, comía de todo y eventualmente consumía bebidas alcohólicas. [...] El pueblo tendrá la respuesta a su incógnita, y los adversarios políticos del atacomulquense una arma muy poderosa para destruirlo”.

A sus cuarenta y cuatro años, todavía en diciembre, su aspecto en público distaba de ser el de una mujer frágil, asustada y enferma. Y porque, en todo caso, desde hace muchísimo tiempo la epilepsia dejó de ser mortal. Las estadísticas muestran que es rarísimo el deceso de un epiléptico si éste tiene buena atención médica, a menos que sea negligente en su cuidado. Las dosis de medicamento pueden reducirse en forma paulatina y, a la larga, las crisis pueden controlarse.

Verdad o no, salieron a la superficie el enfado de ella en la campaña, la frialdad de las últimas semanas, la crisis depresiva y una sobredosis de barbitúricos que obligó al gobernador, en diciembre de 2007, a declarar a la revista *Quién*: “Mónica no se suicidó”.

En esa entrevista, publicada el 21 de diciembre, confirmó versiones surgidas la mañana de aquel jueves en Toluca: su esposa murió la noche del mismo miércoles o durante las primeras horas de la madrugada del jueves en la capital del estado, y no al mediodía del jueves en la Ciudad de México. Palabras más, palabras menos, le dijo al reportero Alberto Tavira Álvarez que en el Centro Médico en Metepec intentaron reanimarla y reactivar sus signos vitales, aunque ya iba con muerte cerebral.

Si debe o no ventilarse en público el tema del deceso de su esposa, él mismo se ha encargado de llevarlo a la prensa y mantener el impulso. Aprovechó las páginas de *Quién* para hablar de una conspiración de aquellos periodistas que plantearon interrogantes en la extraña muerte de su esposa: “Cuando estás en la política, cualquier tema que pueda ser aprovechado por tus adversarios para golpearte, lastimarte o desgastarte se va a utilizar. Lamentablemente, ésas son las reglas de la política”. Para él, las dudas sembradas sobre el caso fueron una barbaridad ofensiva y lastimosa. “Después del fallecimiento de mi mujer, comenzaron a decir mentira y media.”

El jueves 19 de diciembre de 2008, a través de la Coordinación General de Comunicación Social, se emitió una aclaración oficial para desmentir que el gobernador haya pensado contraer matrimonio con la actriz Angélica Rivera. En su número del 3 de octubre de 2008 *Quién* le dio de nueva cuenta la nota principal para confirmar el vínculo sentimental “de cuatro meses” con su nueva “dueña”, la actriz Angélica Rivera Hurtado. “El hombre que da la última palabra en territorio mexiquense palomeó el nombre y, a principios de abril de 2008, Angélica Rivera estaba llegando a la Oficina de Representación que tiene el gobierno del Estado de México en la calle Explanada, en las Lomas de Chapultepec. [...] El gobernador, entonces de cuarenta y un años, y *la Gaviota*, de treinta y siete, nunca se habían visto personalmente. La cita era, en primer lugar, para conocerse y, en segundo, para que él explicara a la que fuera El Rostro de *El Herald* en 1987 la campaña de publicidad que ella iba a realizar, con el objetivo de que entendiera y se comprometiera de lleno con el proyecto del verdadero *góber precioso*”.

Al día siguiente del fallecimiento, otra versión atizó las contradicciones de las últimas horas. En su columna “En privado”, publicada el viernes 12 de enero en *Milenio Diario*, Joaquín López Dóriga —quizá el periodista más escuchado e influyente en el gobierno mexiquense— reconstruyó algunas de las escenas: “Un poco después de la medianoche, a las 0:50 ya del jueves, Enrique Peña llamó por teléfono [a su esposa Mónica Pretelini] para decirle que ya iba de regreso. Estaba por Santa Fe, volaría en helicóptero y en veinticinco minutos estaría con ella en

casa. [...] Así fue. Llegó, entró a su cuarto sin encender la luz, le susurró al oído que le hiciera un lugar en la cama y no le respondió. [...] Le insistió y nada. [...] Alarmado encendió la luz y la vio muerta. Intentó respiración artificial al tiempo que pedían las urgencias médicas. [...] Inconsciente, llegó a un hospital de Toluca, desde donde, a las tres de la mañana, la trasladó al ABC de Santa Fe, en el que era atendida por su médico, el neurólogo Paul Shkurovich Bialik, quien a las once de la mañana diagnosticó la muerte cerebral provocada por un paro cardio-respiratorio a las dos de la mañana, a causa de un evento convulsivo, mal del que venía atendiendo a Mónica desde hace dos años”.

Sin embargo, el doctor Shkurovich dijo en enero de 2007 a José Gil Olmos y Ricardo Ravelo, reporteros de *Proceso*, que al filo de las once de la mañana del jueves la paciente se agravó y fue internada en el área de terapia intensiva. Luego se le colocaron varios catéteres para regular algunas funciones. “Poco después el médico logró restablecer su respiración por medio de un ventilador y, tras una pausa, Pretelini fue sometida a un encefalograma y en ese momento, según Shkurovich, se determinó su muerte cerebral por falta de oxigenación, lo que técnicamente se conoce como encefalopatía anóxica —daños al tallo cerebral por falta de oxígeno— y se tradujo en la verdadera causa de su fallecimiento.” Mónica obró el milagro de morir dos veces.

FANTASMAS EN VERACRUZ

Las cuidadosamente ocultas y enredadas circunstancias que rodearon la enfermedad, la medicación y los tratamientos de Mónica proporcionaron los ingredientes necesarios de un caso que rebasó los límites de la curiosidad por los asuntos del sector público y el funcionario de mayor peso en la entidad. Si los problemas de la pareja se pudieron ocultar y el alejamiento en campaña quedó inscrito en el ámbito familiar, las interrogantes sobre el fallecimiento ejercieron una poderosa atracción.

¿Qué pasó aquella noche? Eso sólo lo sabe Enrique Peña. ¿Por qué la cremación? También él tiene la respuesta.

La muerte de Mónica arremolinó todas las aguas de la política mexicana. El infortunio íntimo y personal lo plasmaron los dos periodistas de *Proceso*: el alcance político del caso Pretelini se pudo medir con el número de esquelas que aparecieron en nueve periódicos nacionales. “Tan sólo el viernes 12 aparecieron publicadas cuatrocientas sesenta y nueve de condolencia y pésame. El sábado siguieron apareciendo por decenas. Un número que no alcanzó en su muerte Carlos Hank González, el legendario profesor y guía político del Grupo Atlacomulco, pues sólo setenta y cuatro esquelas recordaron su fallecimiento. [...] Principal figura en este escenario, Peña Nieto rebasó en condolencias incluso a Juan Sánchez Navarro, dueño del Grupo Modelo y el líder moral por décadas de la clase empresarial mexicana: sólo aparecieron cincuenta y seis.”

Las versiones familiares concuerdan en que un ataque epiléptico fue el origen de su muerte y desmienten que la esposa del gobernador tomara pastillas para dormir o antidepresivos. Sin embargo, Claudia, su hermana, declaró a una revista que Mónica no tenía epilepsia, aunque sí una especie de crisis nerviosa, pues estaba sometida a una gran tensión por su trabajo en el DIF. Desmintió cualquier infidelidad de Peña Nieto y defendió su integridad moral.

Al margen de las conjeturas, se supo que, desde al menos ocho meses antes de las convulsiones fatales, Mónica era atendida por el doctor Shkurovich, pero en Toluca se habló de un trastorno surgido en 2005. Si es exacta la versión, la campaña política supuso un gran sacrificio, aun si hubiera aprendido, como la experiencia lo ha demostrado en el caso de otros epilépticos, a controlar las crisis y canalizarlas. Si desde ese 2005 apareció en forma repentina el gran mal, se lo ocultaron al público y a los funcionarios cercanos a Peña. Y el equipo de colaboradores de Mónica supo guardar un silencio sepulcral durante dos años, aunque estaba en peligro la vida de su jefa.

Entonces, fue arriesgado involucrarla en la campaña, conociendo la enfermedad, porque provocar un ataque epiléptico es sencillo. Basta un pequeño susto para alterar el sistema nervioso central, por ejemplo, lo que desarrollaría un aura y el posterior ataque. Se ha documentado ampliamente que también tiene relación con los estadios

del sueño, sobre todo las fases profundas en el inicio de los ataques. A los médicos les queda claro que el REM “es una fase anticonvulsiva, pero el resto del sueño no. Y por eso muchas crisis se presentan de noche”.

Y allí surgieron otras dudas y nuevas interrogantes. Si se conocía la enfermedad y sus riesgos, ¿por qué no hubo nadie para atenderla en ese instante concreto del inicio de la crisis aquella noche del miércoles, con los recursos materiales y humanos a disposición de la gubernatura? Poquísimas evidencias públicas quedaron sobre ese problema personal de la primera dama; física y anímicamente, Mónica parecía una mujer saludable y con muestras de entereza.

Pero hay otro acontecimiento que parece sumarse a las interrogantes que aún continúan abiertas. El jueves 10 de mayo de 2007, en un ilógico asalto en las calles de Veracruz, asesinaron a cuatro escoltas de los hijos del gobernador mexiquense, todos elementos de élite y de confianza comisionados por la Agencia de Seguridad Estatal (ASE).

En el atentado, también lleno de contradicciones, murieron los agentes Roberto Delgado Nabor, Erick Rey López Sosa, Guillermo Ortega Serrano y Fermín Esquivel Almazán (de veinticuatro, treinta y siete, treinta y cuatro, y treinta y cinco años de edad, respectivamente). Hubo intentos de crearles imágenes de soberbios, abusivos y ostentosos.

La historia empezó para la familia Peña Pretelini por la noche, después de una cena en el tradicional café La Parroquia del malecón. Aquella era la primera celebración de las madres sin Mónica. Según los informes oficiales, pasadas las diez y media, los comensales abandonaron el restaurante. Paulina, Alejandro y Nicole, los hijos del gobernador, subieron a una camioneta Suburban negra acompañados por su tía Claudia Pretelini Sáenz y otros dos adultos. Atrás, en una Durango gris plata, los escoltaban los cuatro agentes, encabezados por el experimentado Esquivel Almazán, armados con las reglamentarias armas cortas y, como apoyo, rifles de asalto R-15. Fuera de Delgado Nabor, ninguno carecía de experiencia.

Minutos más tarde, al veinte para las once, cuando se dirigían al hotel Galerías Plaza sobre el bulevar costero Manuel Ávila Camacho y

apenas cruzando la esquina con Simón Bolívar, frente a la Plaza de la Soberanía, el corazón de la zona turística del puerto, otras cuatro camionetas (hubo quienes vieron dos Mitsubishi) se unieron a la comitiva oficial mexiquense. En lo que pareció una acción agresiva y violenta, una de las nuevas compañías intentó rebasar por la derecha a la Durango para colocarse atrás de la Suburban de la cuñada y los hijos de Peña, pero lo impidió una maniobra efectiva de los guardaespaldas.

En otro rapidísimo movimiento, una de las Mitsubishi emparejó a la Durango y, ahora por el lado izquierdo, volanteó y golpeó al vehículo mexiquense, que terminó por impactarse contra la banqueta. Pero (y es necesario hacer un alto), con dos acciones violentas, con la encomienda de cuidar a los hijos del gobernador Peña, ninguno de los cuatro escoltas supuso que eran víctimas de una agresión. Ninguno sospechó. ¿Acaso pensaron que jugaban a los autos chocones o que los conductores de las otras camionetas jugaban a los cerrones o pretendían practicar arrancones?

En forma sorprendente, todavía uno de ellos se dio su tiempo para tomar el celular, marcar, comunicarse con Claudia Pretelini y pedirle:

—Siga usted al hotel, señora, tenemos un incidente, en seguida los alcanzamos.

Más asombroso resultó que los cuatro agentes responsables de vigilar por la seguridad de la familia del gobernador mexiquense hayan tomado la decisión de detenerse para arreglar lo del incidente con los conductores de las Mitsubishi. La Suburban se adelantó "a toda velocidad" y se perdió calles adelante, hasta llegar al Hotel Galerías Plaza, donde se hospedaban los Peña Pretelini.

Todavía dos de los escoltas mexiquenses tuvieron tiempo de bajar de la Durango, mostrar sus credenciales, identificarse como policías y descubrir, en ese momento, que algo andaba mal. Recibieron una lluvia de disparos. Entre las calles Simón Bolívar y Valencia, sobre el bulevar, fueron recogidos más de doscientos casquillos percutidos. Los dos guardaespaldas que se quedaron arriba de la Durango, en el asiento posterior, tampoco notaron ninguna irregularidad en el percance. Y tampoco tuvieron tiempo de sacar sus armas.

Los guardaespaldas cayeron muertos al instante, a unos metros de

su propio vehículo. Los otros dos murieron dentro de la camioneta. Inútiles fueron las escuadras y los rifles de asalto R-15. "Fue una agresión sorpresiva y violenta, y cuando la cuñada del gobernador escucha los disparos, la camioneta iba adelante, imprime mayor velocidad para huir y llegar hasta el hotel", comentaría casi de inmediato Humberto Benítez, secretario general de Gobierno del Estado de México. Sin ninguna prueba, se apresuró a declarar que los agentes murieron en una confusión de narcotraficantes.

Muertos los cuatro escoltas, los asesinos abordaron sus camionetas y se perdieron en la zona turística del puerto. Minutos después llegó la policía veracruzana al lugar de la masacre e identificó a los muertos. Eran agentes al servicio de los hijos de Peña. Un comunicado emitido durante los primeros minutos del 11 de mayo dio cuenta del hecho, omitiendo la identidad de las víctimas. Sin embargo, la información de Veracruz no coincidió en algunos detalles.

En su boletín, la procuraduría veracruzana, que tampoco tenía ninguna prueba, atribuyó la muerte de los policías mexiquenses a una confusión de las luchas de poder entre bandas del crimen organizado y descartó cualquier atentado contra los hijos de Peña, porque éstos "ya se encontraban hospedados en su hotel" al momento del ataque. Luego surgió la otra versión: los custodios de los hijos de Peña viajaban solos y no escoltaban a nadie.

En ese ambiente enrarecido, el procurador de Justicia veracruzano, Emeterio López Márquez, informó de inmediato que el caso había sido atraído por la PGR, aunque ésta lo negó. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada sólo pidió una copia certificada de la averiguación previa.

Antes que los veracruzanos, el gobierno mexiquense deslindó las razones del "incidente". No fue intento de secuestro, dijo un pálido gobernador; tampoco fue acción de los narcos, informaba apresurado el secretario de Gobierno, quien con ningún elemento se atrevió a decir que una banda había confundido a los escoltas con un grupo rival y había disparado. No dijo qué banda ni por qué los escoltas parecían miembros de una organización delictiva.

Un día después, en el Valle de Chalco, Peña descartó que el homi-

cidio de los escoltas asignados a sus hijos fuese un ataque dirigido a su persona o a su familia. Con base en las primeras investigaciones, señaló que el tiroteo (pero nunca hubo un tiroteo, sino una matanza) había sido una confusión de grupos relacionados con el narcotráfico, quienes habrían visto en los guardaespaldas a los rivales de una banda organizada.

“No hay la más mínima sospecha de que se trató de un ataque personal; realmente las primeras investigaciones y conclusiones a las que llegan las autoridades son que, presumiblemente, se trató de una confusión de grupos de sicarios. Dejaré que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes.” En parte tenía razón. Por la forma, al parecer los guardaespaldas conocían a sus agresores. Tal vez por eso no intentaron defenderse.

Los cuatro agentes fueron sepultados en panteones de Zinacantan y Toluca. A los familiares les entregaron trescientos sesenta mil pesos por los seguros de vida y una compensación. Se les ofreció apoyo y se les pidió la discreción requerida del caso. Todos callaron. Muy pocos repararon en que Fermín Esquivel era de las pocas personas que conocían detalles de la vida matrimonial de Enrique Peña y Mónica Pretelini, porque su comisión oficial con la pareja no había comenzado el día de su asesinato; llevaba varios años trabajando como escolta de la familia.

La imagen de Esquivel se fue difuminando hasta desaparecer, y el asesinato terminó por perderse en una maraña burocrática judicial a partir del lunes 20 de mayo de 2008, cuando un comando de encapuchados irrumpió en un domicilio sobre la avenida 16 de Septiembre en Luvianos —un pequeño municipio al sur del estado, sumido en la pobreza y controlado por el imperio de *El Chapo* Guzmán— y ejecutó al maestro Ranferi González Peña, un supervisor escolar de zona de cuarenta y cinco años de edad, considerado hasta ese momento cabecilla de los asesinos a sueldo de La Familia, una de las dos organizaciones que controlan el crimen organizado en el Estado de México.

El homicidio fue perpetrado con al menos una decena de descargas de armas de fuego de alto poder, los asesinos encapuchados —quienes vestían uniformes negros con las siglas de la Agencia Federal de In-

vestigaciones (AFI) y de la de Seguridad Estatal (ASE)— abordaron dos camionetas que los esperaban y huyeron. Y cuando la familia de la víctima aún no salía del estupor, regresaron, levantaron el cadáver y lo metieron en uno de los vehículos. Luego enfilaron por una de las calles en dirección a una casa de materiales, donde secuestraron al arquitecto Ranferi González Rodríguez, hijo de González Peña.

Aunque sólo se habló de dos camionetas, vecinos de la familia Ranferi recuerdan que, a las ocho y diez de la mañana, por la I6 de septiembre apareció un convoy, instaló un retén en dos esquinas sobre la cabecera municipal y, en un par de minutos, unos cinco sicarios descendieron de dos camionetas con vidrios polarizados, irrumpieron en el domicilio de los Ranferi y asesinaron al maestro, frente a su madre y dos de sus hermanas, de nueve y diez años de edad.

En las calles de Luvianos nadie habla. Se respira el miedo, pero todavía se recuerda que, en los días previos a la ejecución y al secuestro, allegados al maestro Ranferi —hermano de Alberto González Peña, *El Coronel*, presunto lugarteniente de una célula de Los Zetas en la zona— abrieron la boca y alardearon sobre algunas propiedades “liberadas” luego de una incursión al puerto de Veracruz para silenciar a un grupo de agentes del Estado de México.

Hay algo estremecedor en los recuerdos. Han pasado dos años del revuelo. En las calles de Toluca y Naucalpan la vida es previsible, siempre fría y siempre igual. Como pasó con los Del Mazo, Chuayffet y Montiel, el estado respira anticipados aires presidenciales. Atrás han quedado resquicios de incertidumbre y, fuera de los círculos gubernamentales, muy pocos recuerdan a doña Mónica. Queda un albergue con su nombre y con capacidad para atender a doscientos cincuenta niños. Fue inaugurado un mes después de su muerte y su costo promedio veinticuatro millones de pesos.

Aunque el caso atrajo una poderosa atención general, la propia voracidad de la información en un país en el que pasa de todo hace la vida marchar por inercia. Peña es un foco de atención; con mucha regularidad, en entrevistas y toda clase de espacios pagados, atiende

compromisos políticos y empresariales, y activa iniciativas para controlar procesos electorales. Gracias a la publicidad pagada, su imagen se prodiga profusamente, a veces hasta la exageración, y le han ido forjando la personalidad avasalladora de un hombre cuyo tiempo libre se reparte entre su residencia en Ixtapan de la Sal, sus tres hijos y ahora Angélica Rivera, *la Gaviota*.

Mónica, la primera dama, encontró la paz. Hace mucho inició el olvido popular, pero su historia sigue manchada de interrogantes.

Bibliografía

- Aguilar Solís, José Ángel, Salvador Sánchez Colín, *un hombre en la historia*, México, Gobierno del Estado de México, 1992.
- Amendolla, Luis, *La revolución comienza a los cuarenta*, México (sin casa editora ni año).
- Arana Pozos, José Ramón, *Legislaturas y legisladores del Estado de México*, México, Instituto de Estudios Legislativos, 2002.
- Arellano Castro, Ricardo, *El sistema político del Estado de México: surgimiento, consolidación y cambio*, México, UAEM, 2003.
- Arreola Ayala, Álvaro, *La sucesión en la gubernatura del Estado de México*, México, El Colegio Mexiquense, 1997.
- Atacomulco, inventarios generales de los archivos municipal y parroquial*, México, Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, 1980.
- Cabrera Jesús, Yhmoff, *Municipio de San Felipe del Progreso a través del tiempo*, México, Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, 1979.
- Castellanos Colín, Vicente, *López Mateos y Hank a través de mi memoria*, México, Ágora, 2005.
- Chopin Cortés, Ángel, *Gobernadores del Estado de México nacidos en otras entidades*, México, Ágora, 2002.
- , *Veinticinco Gobernadores nacidos en el Estado de México*, México, Instituto de Estudios Legislativos, 2004.
- Colín, Mario, *Maximino Ruiz y Flores*, México, Testimonios de Atacomulco, 1972.
- , *Retablos del Señor del Huerto que se venera en Atacomulco*, México, Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, 1981.
- Corral Castañeda, Antonio, *30 Atacomulquenses distinguidos. Reseñas Biográficas*, México, Ágora, 2004.
- , Antonio, *Atacomulco. Historia de su gobierno municipal. Ayuntamiento de 1824 a 2006*, México, Ayuntamiento de Atacomulco 2003-2006, Ágora, 2006.
- Cruz Zapata, Raúl, C. A. Madrazo, México, Diana, 1988.
- Del Mazo Vélez, Alfredo, *Síntesis de una vida luminosa. Juan Montiel Flores*, México, Ayuntamiento de Atacomulco, 2002.
- Delgado Guerrero, Jesús, *Historia del PAN en el Estado de México. La pasión de seguir continuando*, México, Talleres Soluciones Gráficas, 2005.
- Díaz Navarro, Jorge, *Estado de México: feudalismo político*, inédito, 2005.
- Esparza Santibáñez, Xavier I., *Isidro Fabela. Monografía*, México, Instituto Mexiquense de Cultura, 1999.
- Fabela, Isidro, *¡Pueblecito mío!*, Toluca, México, Cuadernos del Estado de México, 1958.
- García Campos, Enrique, Eduardo Pallares y Germán Fernández del Castillo, *El gobierno de Isidro Fabela es anticonstitucional*, México, 1943.
- García G., Rodolfo, *Páginas dispersas*, México, Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, 1982.
- Garrido, Luis Javier, *El Partido de la Revolución institucionalizada, la formación del nuevo Estado en México (1928-1945)*, México, SEP, 1986.
- Hernández Rodríguez, Rogelio, *Amistades, compromisos y lealtades: líderes y grupos políticos en el Estado de México 1942-1993*, México, El Colegio de México, 1998.
- Herrera, Joaquín, *Hank*, México, Parmon, 1997.
- Jarquín Ortega, Ma. Teresa, *Isidro Fabela, pensa-*

- miento político y humanista (1882-1964), México, Instituto Mexiquense de Cultura y El Colegio Mexiquense, 1996.
- , y Carlos Herrejón Peredo, *Breve historia del Estado de México*, México, Lecturas de la Mochila, El Colegio Mexiquense, 2007.
- López Pérez, Manuel, *Mi paso por el Estado de México*, México, Cuadernos del Estado de México, 1974.
- López Portillo, José, *Mis tiempos*, México, Fernández Editores, 1988.
- Lugo Plata, Eliseo, *PRI 70 años de historia en el Estado de México*, México, IEEM, 2002.
- Martínez, José, *Enseñanzas del profesor: indagación de Carlos Hank González*, México, Océano, 1999.
- Mondragón Martínez, José Alfredo, *El Oro. Monografía*, México, Instituto Mexiquense de Cultura, 1999.
- Montiel Flores, Juan, *Un laurel al mérito*, México, Ayuntamiento de Atlacomulco e Instituto Mexiquense de Cultura, 1999.
- , *Alfredo del Mazo Vélaz, síntesis de una vida luminosa*, México, Instituto Mexiquense de Cultura Ayuntamiento de Atlacomulco, 2002.
- Musacchio, Humberto, y Luis Fernando Granados (coordinadores), *Diccionario Enciclopédico del Estado de México*, México, Hoja Casa Editorial, 28 de junio de 1999.
- Pichardo Pagaza, Ignacio, *Triunfos y traiciones*, México, Océano, 2001.
- Rosenzweig, Fernando, Rosaura Hernández, María Teresa Jarquín y Manuel Miño Grijalva, *Breve historia del Estado de México*, México, El Colegio Mexiquense, 1987.
- Ruanova Zárate, Felipe, *Hank, el sello de la impunidad*, México, Posada, 1995.
- Sánchez Arteche, Alfonso, Miguel Ángel Sánchez Arteche y Rodolfo Sánchez Arteche, *El plumaje del mosco*, México, UAEM, 2001.
- Sánchez García, Alfonso, *El círculo rojinegro*, México, UAEM, 1984.
- , *Ocaso y final del círculo rojinegro*, México, UAEM, 1991.
- Sentíes E., Yolanda, *Charlas con Octavio Sentíes Gómez*, México, UAEM, 2000.
- Serrano Pérez, Édgar A., *Acambay. Monografía municipal*, México, Instituto Mexiquense de Cultura, 1999.
- Toluca de ayer*, tomo II, México, Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, 1972.
- Toribio, Jorge, *Arturo Montiel Rojas, aportación familiar y personal a la vida del Estado de México*, México, La Tinta del Alcastraz, 1999.
- , *Grupo Atlacomulco: Revelaciones, 1915-2006*, México, Ágora, 2006.
- Valverde y Téllez, Emeterio, *Bio-bibliografía eclesíástica del Estado de México*, México, Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, 1976.
- Velásquez Morales, Isaac Luis, *Tiangüistenco. Monografía*, México, Instituto Mexiquense de Cultura, 1999.

ARCHIVOS

- Archivo del Registro Civil, Santiago Tianguistenco, año 1954.
- Archivo histórico municipal de Atlacomulco, años 1875-1990.

HEMEROGRAFÍA

- ATA* (Atlacomulco).
- El Demócrata* (Toluca).
- El Sol de Toluca* (Toluca).
- Alfa-El Nuevo Cambio* (Toluca)
- Nuestro Tiempo* (Toluca)
- El Universal* (D.F.)
- Excelsior* (D.F.)
- El Financiero* (D.F.)
- Reforma* (D.F. y sección Estado).
- La Jornada* (D.F.)
- Proceso* (D.F.)
- Siempre!* (D.F.)
- Líderes* (D.F.)
- Quién* (D.F.)
- TVNotas* (D.F.)

Agradecimientos

Este libro no habría sido posible sin la participación activa de *Nuestro Tiempo Toluca*; de Selene Hernández y Miguel Alvarado, quienes facilitaron sin ninguna restricción sus archivos periodísticos, nos cobijaron con su amistad y prestaron las palabras del semanario cuando fue necesario. Alfredo Romero, por su camaradería, los recorridos por cada uno de los municipios de la zona conurbada y sus observaciones. Fundamental fue Jorge Díaz Navarro, por sus charlas sobre la situación política y por el préstamo de su libro inédito *Feudalismo político en el Estado de México*, en su versión no corregida. Ángel Chopín Cortés, por el acceso sin reservas a su información almacenada y ordenada sobre el Estado de México. Jesús Delgado Guerrero, por su *Historia del PAN en el Estado de México: La pasión de seguir continuando*; Héctor Sumano, por la autorización para publicar la *La Hoja Murmurante*. Juan Montiel Flores y las palabras de su larga amistad con Alfredo del Mazo Vélez y Carlos Hank González, además de los pasajes de la biografía sobre Del Mazo Vélez. Macario Lozano, por las pláticas sobre sus experiencias en tres décadas como comunicador en Toluca.

La historia oculta de la familia que durante seis décadas ha controlado el estado más importante del país

La radiante imagen de Enrique Peña Nieto se exhibe sin cesar por todos los medios posibles y las encuestas de opinión lo señalan como la carta más fuerte para enarbolar la candidatura presidencial del PRI en 2012.

La trayectoria de Peña Nieto es también la de una gran familia: los apellidos Peña, Montiel, Nieto, Del Mazo, Fabela, González, Vélez, Sánchez y Colín, han dado al Estado de México seis gobernadores, todos ellos unidos por sólidos lazos familiares y de poder. “Se han valido de la corrupción, compra de lealtades, imposiciones y otras maniobras similares para conservar y heredar el mando de generación en generación, a pesar de algunos intervalos.”

Como actual gobernador del Estado de México, Peña Nieto se ha convertido en la cabeza visible del Grupo Atlacomulco; su ascenso fue labrado escrupulosamente y está lejos de ser una obra del azar o una maniobra caprichosa de su antecesor Arturo Montiel. *Negocios de familia* desentraña la verdad detrás de la carismática figura de Peña Nieto y el entramado político para alcanzar la Presidencia de la República.

-
- *Su cercana relación con el Opus Dei y el ala dura de la Iglesia católica.*
 - *Los cuantiosos gastos de campaña y cuidado de imagen.*
 - *La existencia de una catadora que prueba sus alimentos antes que él.*
 - *Las extrañas circunstancias de la muerte de Mónica Pretelini y el posterior asesinato de sus guardaespaldas.*
 - *Su presunta intervención para que Arturo Montiel eludiera las acusaciones por enriquecimiento ilícito.*

